

Franz Flores Castro

**El esplendor inútil
Potosí ante el Estado boliviano**

© 2022 FLACSO Ecuador
Septiembre de 2022
Primera reimpresión: Sucre, abril de 2023

Cuidado de la edición: Editorial FLACSO Ecuador

ISBN: 978-9978-67-616-5 (impreso)
ISBN: 978-9978-67-619-6 (pdf)
<https://doi.org/10.46546/2022-33atrio>

FLACSO Ecuador
La Pradera E7-174 y Diego de Almagro, Quito-Ecuador
Telf.: (593-2) 294 6800 Fax: (593-2) 294 6803
www.flacso.edu.ec

Fotografía de portada: Jess Kraft / Shutterstock

Flores Castro, Franz

El esplendor inútil. Potosí ante el estado boliviano / Franz Flores Castro.
Quito : FLACSO Ecuador, 2022

xv, 196 páginas : tablas. - (Serie Atrio)

Bibliografía: p. 184-195

ISBN: 9789978676165 (impreso)
ISBN: 9789978676196 (pdf)
<https://doi.org/10.46546/2022-33atrio>

POLÍTICA Y GOBIERNO ; MINERÍA ; NACIONALISMO ;
CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES ; POTOSÍ ; BOLIVIA
320 - CDD



En la serie Atrio se publican obras arbitradas.

En los últimos 20 años, Potosí ha perdido cinco diputaciones y hoy se pretende escamotear una sexta diputación. No hay departamento que haya dado tanto al país y recibido semejante trato. Colegas: si somos una familia, si la bolivianidad es una familia, no puede ser que uno de los hermanos siempre pierda; esta lógica está mal, yo apelo a la conciencia ciudadana. Tenemos que ser capaces de cambiar esta matriz perversa que solo privilegia al eje central.

—Discurso del senador Eduardo Maldonado,
octubre de 2013

Índice de contenidos

Siglas y acrónimos	x
Agradecimientos	xiii
Introducción	1
Capítulo 1	
Un marco para estudiar las periferias pasivas	9
El problema de la nación	10
Estado y nación en América Latina	11
Actores con poder	13
Estructura de clivajes	15
El concepto de centro-periferia	17
Periferias activa y pasiva	19
Capítulo 2	
Relaciones centro-periferia en el	
Estado nacionalista (1952-1985)	24
Nacionalismo y regionalismo en el discurso del MNR	29
Las plantas de fundición de minerales	
y la opción imposible del desarrollo potosino	31
La centralización y el saqueo de los recursos	
de los departamentos mineros	33
Los gobiernos militares y los departamentos mineros	38
Santa Cruz, la periferia activa que apareció en 1952	40
Esplendor y pobreza, las claves de la identidad potosina	42

Potosí en 1952.	49
Postergación de Potosí y el nacimiento de instituciones cívicas. . . .	52
Banzer, la apertura política y la aparición de Comcipo.	60
Comcipo en la transición a la democracia	67
Capítulo 3	
Relaciones centro-periferia en el	
Estado neoliberal (1985-2006)	76
El neoliberalismo y el ingreso de la minería privada en Potosí	78
La participación popular como nuevo escenario	
de la relación centro-periferia.	81
Potosí y sus luchas regionales.	83
La lucha contra el cierre de las minas y la marcha por la vida.	85
Karachipampa: la lucha por un elefante blanco	87
La lucha por el cerro Rico de Potosí.	94
Potosí y las transnacionales:	
cuando la región defiende la nación.	99
El sistema político subnacional y los efectos	
de la Ley de Participación Popular.	112
La aparición de un importante grupo de poder:	
los cooperativistas mineros.	118
La minería transnacional y su ingreso a Potosí	125
Los cooperativistas mineros, un nuevo poder	
que no lidera las luchas potosinas.	127
Capítulo 4	
Relación centro-periferia en el	
Estado plurinacional (2009-2015)	134
El programa Evo Cumple, mecanismo de llegada a las periferias . . .	141
La Asamblea Constituyente y el debilitamiento	
del proyecto autonómico departamental e indígena.	142
La resistencia de las periferias activas	146
La anulación de liderazgos locales	149

La debilidad del Estado frente a los empresarios mineros potosinos	152
Potosí antes de la llegada del MAS al poder	156
Potosí y la reconfiguración política nacional	161
Comcipo en el gobierno del MAS (2006-2015)	163
La reconfiguración política en Potosí	166
El profundo cambio en la dirección de Comcipo y las huelgas de 2010 y 2015	168
El rol del actor principal para constituir una periferia pasiva	177
Conclusiones	179
Referencias.	184
Sobre el autor.	196

Índice de tablas

Tabla I.1. Exportaciones mineras, regalías y transferencias del Estado al departamento de Potosí, 2006-2011 (millones de USD)	2
Tabla 2.1. Producción de la minería privada y estatal, 1963-1968 (en miles de toneladas métricas)	39
Tabla 2.2. Producción de estaño de la Comibol, 1952-1958	51
Tabla 2.3 Regalías pagadas a las corporaciones regionales de desarrollo de Santa Cruz y Potosí, 1974-1978 (USD)	61
Tabla 3.1. Elecciones municipales en Potosí, 1987	113
Tabla 3.2. Elecciones municipales en Potosí, 1993	114
Tabla 3.3. Elecciones municipales en Potosí, 1995	116
Tabla 3.4. Porcentaje de producción de minerales de los cooperativistas con respecto al total nacional, 1978-1993	119
Tabla 4.1. Evolución de la renta petrolera del Estado boliviano, 2005-2012 (millones de USD)	137
Tabla 4.2. Elecciones generales de 2009 y composición de la ALP 2010-2015	149
Tabla 4.3. Votación en las elecciones nacionales en el departamento de Potosí, 1997 y 2002 (en porcentaje)	157
Tabla 4.4. Filiación de los diputados electos del MAS en el departamento de Potosí, 2006-2009	162

Siglas y acrónimos

AC	Asamblea Constituyente
ADN	Acción Democrática Nacionalista
AP	Alianza Patriótica
APRA	Alianza Popular Revolucionaria Americana
AS	Alianza Social
Bamin	Banco Minero
BCS	Bloque Cívico del Sur
Cademin	Cámara de Minería
CEPB	Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
Cidob	Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano
Ciresu	Consejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni
CM	Cooperativistas mineros
CNS	Caja Nacional de Salud
COB	Central Obrera Boliviana
Cocideprochichas	Comité Cívico de Desarrollo y Progreso de los Chichas
COD	Central Obrera Departamental
Codeprosur	Comité Cívico de Desarrollo de las Provincias del Sur
Comcipo	Comité Cívico Potosinista
Comco	Compañía Minera Concepción
Comibol	Corporación Minera de Bolivia

Comiso	Cooperativa Minera Sumaj Orcko
Comsur	Compañía Minera del Sur
Conamaq	Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu
Condepa	Conciencia de Patria
Conif	Confederación de Instituciones Femeninas
Cordecruz	Corporación de Desarrollo de Santa Cruz
Cordepo	Corporación de Desarrollo de Potosí
CPEP	Constitución Política del Estado Plurinacional
CSUTCB	Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
DHB	Diccionario Histórico de Bolivia
EBRE	Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos
Emkar	Empresa Minera Autónoma de Karachipampa
Emmsa	Empresa Minera Manquiri Sociedad Anónima
EMUCP	Empresa Minera Unificada del Cerro de Potosí
Emusa	Empresa Minera Unificada Sociedad Anónima
ENFE	Empresa Nacional de Ferrocarriles
ENTEL	Empresa Nacional de Telecomunicaciones
Fedecomín	Federación Departamental de Cooperativas Mineras
Fedjuve	Federación de Juntas Vecinales
Fencomín	Federación Nacional de Cooperativas Mineras
FEPP	Federación de Empresarios Privados de Potosí
Fomin	Fondo Minero de Inversión
FPU	Frente Popular Unido
FSTMB	Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
FUCP	Federación de Campesinos
FUL	Federación Universitaria Local
FUTCP	Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de Potosí
ICM	Impuesto Complementario a la Minería
IDH	Impuesto Directo a los Hidrocarburos
IPC	Índice de Precios al Consumidor
IU	Izquierda Unida
LMAD	Ley Marco de Autonomías y Descentralización

LPP	Ley de Participación Popular
MAS	Movimiento al Socialismo
MBL	Movimiento Bolivia Libre
MIR	Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MNR	Movimiento Nacionalista Revolucionario
MNRI	Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda
MOP	Movimiento Originario Popular
PCB	Partido Comunista de Bolivia
PDC	Partido Demócrata Cristiano
PEA	Población Económicamente Activa
PIR	Partido de la Izquierda Revolucionaria
Plahipo	Planta Hidrometalúrgica Potosí
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POR	Partido Obrero Revolucionario
PRI	Partido Revolucionario Institucional
PS	Partido Socialista
PS-1	Partido Socialista 1
TIPNIS	Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécuré
UCS	Unidad Cívica Solidaria
Udape	Unidad de Análisis de Política Económica
UDP	Unidad Democrática y Popular
YPFB	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Agradecimientos

En agosto de 1977 sentí por primera vez la fuerza de una protesta social. En ese entonces se vivían los últimos estertores de la dictadura de Hugo Banzer, iniciada en 1971, que había relegado a Potosí más que a ninguna otra región del país. Por tal motivo, la convocatoria del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) para que la ciudadanía asistiera a una marcha para reclamar al gobierno por una planta de fundición de zinc, tuvo todas las características de una revuelta. La asistencia, por cierto, rebasó todo cálculo previo.

Para un estudiante del colegio ILADE esta protesta resultaba inentendible y hasta contradictoria, pues en las aulas se nos hablaba de la opulencia del cerro Rico de Potosí, de cómo había dinamizado la economía de España en la Colonia, de su importancia para la economía boliviana... Sin embargo, también se podía percibir la pobreza en la que se debatía la ciudad, sin industrias, sin empleo, sin modernidad. Potosí era inmensamente rico, pero, a la vez, trágicamente pobre.

Desde entonces, los temas del desarrollo potosino y, específicamente, las luchas de sus habitantes por mejores días no me abandonaron. En mis años de estudiante de la carrera de Economía en la Universidad Tomás Frías, en Potosí, pasaba largas horas en el Archivo Histórico de la Casa de Moneda revisando periódicos, tomando innumerables notas y sacando fotocopias sobre lo que se podría denominar, quizá con exceso, la historia del regionalismo potosino. Empero, sin los elementos teóricos adecuados, tenía una sumatoria de hechos, un amontonamiento de

datos que podían configurar un relato de las acciones colectivas regionales, pero que no ayudaban a explicar la paradoja de que Potosí fuera una región rica y pobre a la vez.

El tiempo hizo que estas preocupaciones disminuyeran. Como estudiante de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón-Centro de Estudios Superiores Universitarios (UMSS-CESU), mi actividad académica se siguió desarrollando en los repositorios documentales, esta vez en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Sucre. En aquel entonces, mis esfuerzos se encaminaron hacia el estudio de los partidos políticos en clave histórica. El producto fue mi tesis sobre el discurso del Partido Liberal boliviano (1884-1920); durante su desarrollo, conté con la dirección académica y la amistad del profesor Luis H. Antezana.

El tema de Potosí volvió a emerger en una región alejada de Bolivia, en la maravillosa Quito, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Ecuador), donde realicé mis estudios doctorales. Gracias a la paciente y profesional labor del profesor Felipe Burbano de Lara, mi director de tesis, pude dar un cauce teórico y metodológico a los datos que tenía sobre la región. Estos se relacionaban con el concepto de centro-periferia propuesto por Stein Rokkan y Derek Urwin en 1982. Estos politólogos sostenían que, para entender la distribución territorial del poder, había que tomar en cuenta la capacidad de regiones periféricas para resistir las presiones dominantes del centro estatal. La clave era que aquellos territorios con fuerte identidad local, con actores poderosos y recursos apetecidos por el Estado, tenían mayor capacidad para resistir sus pulsiones centralizadoras.

En Bolivia, el ejemplo más claro era el departamento de Santa Cruz. Esta región de fuerte identidad y con abundante riqueza petrolífera había logrado arrancarle al Estado central un 11 % de regalías, recursos que fueron la base para su desarrollo. Dos libros daban cuenta de ello: *La rebelión de las periferias*, de Felipe Burbano de Lara, y *La danza hostil*, de Alberto Vergara; estos autores estudiaron la formación del clivaje territorial y cómo se manifestó en la primera década del siglo XXI.

Empero, algo en ese marco teórico no se aplicaba del todo para mi caso de estudio. Potosí, al igual que su par cruceña, tenía una identidad fuerte, acogía a uno de los actores más poderosos de Bolivia, el

proletariado minero, y poseía unos recursos sin los cuales el Estado, literalmente, no podía vivir. Sin embargo, no pudo resistirse al dominio del centro, que desde la creación de la República succiona y aprovecha tales recursos sin cesar; es más, los trasvasa a Santa Cruz. Por ello pensé que, para entender la paradoja de la infinita riqueza y la miseria paralela, había que pensar a Potosí no como una periferia activa, sino como una periferia pasiva, es decir, como una región que, pese a tener todas las condiciones para resistir el centralismo, no puede desarrollar un clivaje centro-periferia. Las páginas que siguen dan cuenta del esfuerzo por dar respaldo empírico a esta noción y desentrañar la incógnita.

Quiero agradecer a la FLACSO por haberme acogido y a la Universidad San Francisco Xavier de Sucre por haber posibilitado mis estudios. A mi familia en Sucre y a mi hijo Joaquín, por apoyarme tanto; a mis hermanos y hermana; a mis entrevistados, por su tiempo e información; a los personeros de los repositorios archivísticos, tanto de la Casa de Moneda en Potosí como del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia en Sucre, por facilitar mi acceso a las fuentes y, finalmente, al equipo de Editorial FLACSO por su dedicación y profesionalismo.

Introducción

En agosto de 2010, Potosí fue el escenario de una huelga que duró 19 días. Esta movilización, de profundo contenido regionalista, incluía un bloqueo de los accesos a la ciudad; más de 1500 personas se mantuvieron en ayuno voluntario. De pronto, un departamento que desde las elecciones generales de 2002 había militado en respaldo al Movimiento al Socialismo (MAS) en su camino al poder, se volcaba contra él en demanda de mejores condiciones de vida y desarrollo. A la postre, la movilización no consiguió nada del poder central, salvo las consabidas promesas que se diluyeron con el tiempo.

Este conflicto estalló en el departamento que más generaba divisas mineras para el erario nacional. La relevancia de la actividad económica de Potosí no se relaciona con el producto interno bruto (PIB) ni con el empleo, sino con la generación de recursos para la importación (Morales y Evia 1995, 4). En 2010 la minería representó el 26,7 % del total de exportaciones de Bolivia y la potosina fue la que más aportó, con el 85 % del total. De hecho, Potosí cerró sus ventas internacionales en 2010 por encima de los USD 1774 millones, lo que significa una contribución de más de un cuarto del total exportado por el país (Ferrufino, Eróstegui y Gavincha 2011, 57).

En un contexto de mejora de los precios de las materias primas en el mercado exterior desde 2006, Potosí, con su producción minera, se encontraba entre los tres departamentos de mayor importancia exportadora de Bolivia, junto a Tarija y Santa Cruz, ambos productores de gas licuado de petróleo (GLP) y oleaginosas. Sin embargo, esta relevancia

económica no se tradujo en mayores ingresos para el departamento ni en mejores condiciones para el bienestar de su población, como se puede ver en la tabla I.1. Esta es una de las claves para entender la radicalidad del movimiento potosino.

Según la tabla I.1, entre 2006 y 2011 Potosí alcanzó cifras récord de exportación y recibió en promedio, por ley, el 5 % de regalías sobre el total exportado. Se puede notar que en el ciclo de precios altos de las materias primas estos recursos pasaron de USD 24,9 millones en 2006 a USD 129,9 millones en 2012, un crecimiento de más del 500 %. Desde la puesta en vigencia de la Ley de Minería y Metalurgia (n.o 535) de 2014, el 85 % de tales regalías va a las gobernaciones y un 15 % a las alcaldías, como una compensación a la explotación de los recursos minerales y metales no renovables.

No obstante, una lectura más atenta refleja que estos ingresos no son resultado de una mayor producción, sino de un cambio en los precios de los minerales. Es decir que el mayor ingreso se debe a factores exógenos como el precio y no a otros factores como mayor productividad. Esta correlación alta genera una peligrosa vulnerabilidad de la economía potosina frente a factores externos (Rodríguez et al. 2022). Este es el resultado de la falta de diversificación del aparato productivo potosino.

Tabla I.1. Potosí: exportaciones mineras, regalías recibidas por minería y transferencias totales del Estado, 2006-2011 (millones de USD)

Año	Exportaciones	Regalías		Transferencias
		Monto	% de exportaciones	
2006	558	24,9	4,5	133,0
2007	814	39,5	4,8	158,0
2008	1356	64,4	4,7	189,0
2009	1403	62,8	4,5	172,0
2010	1783	91,9	5,2	221,0
2011	2452	129,9	5,3	292,7

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia (2016); Fundación Milenio (2012).

Allí, la minería representó el 41,5 % del PIB departamental en 2010, muy lejos de las actividades relacionadas con el turismo, que apenas llega al 1,9 % (Ferrufino, Eróstegui y Gavincha 2011, 43-44), rama en la cual Potosí cifra sus esperanzas de progreso.

La última columna de la tabla I.1 muestra el total de transferencias del gobierno central e incluye las regalías. Son cifras relevantes, pero una mirada al destino de estos recursos muestra que la política nacional no prioriza la diversificación productiva del departamento. Por ejemplo, del total de USD 172 millones que recibió el departamento en 2009, solo se destinaron USD 428 572 al rubro de industria y turismo, apenas el 0,3 % del total (Ferrufino, Eróstegui y Gavincha 2011, 60).

Es más, *el crecimiento de la minería potosina no está impulsado por el esfuerzo estatal*. En 2009 el gobierno destinó USD 9,3 millones para la minería a Potosí, cuando el valor asignado a este rubro a nivel nacional fue USD 47,7 millones. Como señalan Ferrufino, Eróstegui y Gavincha (2011, 61), “el capital estatal no es el factor que impulsa la minería en Potosí, más al contrario, la actividad privada, mediante contribuciones y cánones de arrendamiento contribuye a la empresa estatal minera”.

Esta situación se debe a varios factores: Potosí no tiene ninguna salvaguarda real sobre sus recursos naturales; no puede decidir acerca del destino de la renta minera que genera; no tiene la posibilidad de gravar con impuestos a las empresas mineras; no tiene capacidad para controlar el daño al medio ambiente y patrimonio que produce la actividad extractiva; carece de potestad sobre las concesiones mineras y los cánones de arrendamiento; tampoco tiene autoridad para controlar el ingreso de empresas extranjeras a su territorio ni puede intervenir sobre las duras condiciones laborales.

Como la mayoría de las oficinas del Ministerio de Minería y de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) se encuentran en la ciudad de La Paz, lo relativo a minería se decide prácticamente sin consultar con el departamento de Potosí. El centro estatal succiona los recursos mineros potosinos y los asigna a sus objetivos de política pública.

La falta de control sobre sus recursos ha ocasionado que Potosí retroceda en temas como defensa del medio ambiente y conservación del patrimonio histórico. El río Pilcomayo (que nace en la cuenca del Plata y recorre Argentina, Paraguay y Bolivia) está contaminado por el trabajo

de los ingenios mineros. Asimismo, se conoce que las transnacionales mineras dañan las reservas naturales de agua de varios municipios rurales y pagan precios irrisorios por su uso.

Lo paradójico es que, históricamente, en Potosí nunca ha tenido éxito un cambio estructural que implique un proyecto regional. La apuesta de desarrollo ha consistido en sumarse a la construcción del Estado nacionalista que nació en 1952, en defenderlo cuando fue atacado por el proyecto neoliberal en 1985 y, finalmente, en buscar integrarse al Estado plurinacional que despuntó en 2009. Potosí siempre se ha pensado como nación, nunca como región.

Todo esto ha delineado una *periferia pasiva*, es decir, una región incapaz de cambiar las relaciones de poder entre el centro y la periferia, y así proponer un nuevo modelo de integración al centro que la favorezca.

Con estos antecedentes, en este libro propongo estudiar las dinámicas de dominación del centro sobre la periferia y la configuración de periferias pasivas, desde el Estado nacionalista hasta el Estado plurinacional, teniendo como caso de estudio al departamento de Potosí entre 1952 y 2013. Analizo un espacio que posee una identidad regional fuerte y recursos naturales vitales para el funcionamiento económico del Estado, pero que es incapaz de politizar la identidad territorial y constituir un clivaje territorial, aunque presenta acciones colectivas de características regionalistas con explosiones de conflicto episódicas.¹ La región no puede construir instituciones, discursos ni proyectos con base en una referencia territorial desde donde reivindicar sus intereses regionales y cambiar las relaciones de poder centro-periferia.

Se puede decir que Potosí tiene todos los recursos para constituirse en una periferia activa; sin embargo, esto no sucede. No solo basta con tener recursos, actores poderosos e identidad, también es importante el tipo de relación que los actores locales despliegan con los del centro y la forma como la identidad local disputa la nacional.

Postulo que esto no ocurre solo en Potosí, sino también en varios países de América Latina. Por ejemplo, la explotación petrolífera de la

¹ Si bien Potosí es un activo protagonista en la construcción del proyecto nacional, esto, a la postre, termina por bloquear toda posibilidad de elaboración de una referencia territorial en la política local.

Amazonía ecuatoriana constituye casi el 50 % del presupuesto del Estado, pero la región presenta los niveles de pobreza más altos del país (López et al. 2013, 4; Espinoza 1998, 29). Esto también ocurre en las regiones mineras auríferas de Perú, las más ricas de América Latina, donde los indicadores de pobreza son cada vez más graves (Blanca 2010, 11). Una situación similar se presenta en la región colombiana de Buenaventura. Sus puertos aportan al Estado alrededor de cinco billones de pesos colombianos en impuestos al año (USD 125 912 867) y mueven el 49 % del comercio exterior colombiano; no obstante, el municipio enfrenta escasez de agua, elevado desempleo, altos niveles de pobreza y carencia en torno a necesidades básicas.²

Los estudios sobre regiones y regionalismos en Bolivia solo se han enfocado en regiones capaces de resistir la lógica centralizadora del Estado: las periferias activas (Roca 1999; Peña y Jordán 2006; Sivak 2007; Soruco, Plata y Medeiros 2008; Burbano de Lara 2014; Vergara 2015). El tema regional, como preocupación académica, ha estado ligado a coyunturas históricas en las que se ha puesto en tensión la lógica centralista del Estado boliviano. En la década de los ochenta, en un contexto de demanda de descentralización administrativa, se estudió tanto la fisonomía del regionalismo como el poder de las regiones para construir la democracia (Roca 1999; Calderón y Laserna 1983; Laserna 1987). En la década de los noventa, con el influjo de la Ley de Participación Popular (1994), se hicieron varios estudios localizados en el ámbito municipal, a través del análisis de impacto en la política y el desarrollo (Ayo 1999, 2011; Gray Molina 1997). En la primera década del siglo XXI, los aportes giraron en torno a las características, alcances y causas del pedido de autonomías departamentales, a tono con la demanda de Santa Cruz (Zegada 2007; Vergara 2015; Burbano de Lara 2014).

En suma, esta literatura ha prestado poca atención a las regiones que no han sido capaces de hacer frente al dominio del centro. De hecho, no se han estudiado las periferias –que denomino pasivas– integradas a la nación, pero que no han dejado de ser marginales; que están articuladas económicamente al Estado, pero que no dejan atrás la

² *La República*, “Sociedad Portuaria Buenaventura mueve 49 % del comercio exterior”, 4 de mayo de 2016. <https://bit.ly/2SZaPIIm>

pobreza; que alimentan con sus recursos las arcas estatales, pero que no pueden ingresar en sus proyectos de modernización; que comparten y respaldan las posturas de los gobiernos nacionalistas, pero tienen escasa relevancia en la política nacional, y que tienen episodios de protesta colectiva regional, pero carecen de instituciones regionalistas sólidas.

Las periferias pasivas son regiones de desarrollo comparativamente menor donde las condiciones de pobreza podrían suscitar una política de referencia territorial; sin embargo, paradójicamente, esto no sucede. ¿Cuáles son los factores que hacen que determinadas regiones no articulen políticamente el territorio y no tengan influencia en la política nacional? ¿Qué condiciones de dominio del centro y de la periferia se presentan para que no se constituyan regionalismos?

Sostengo que, para entender la formación de una periferia pasiva, se debe hacer un recorrido histórico que permita ver tanto las variaciones como las permanencias en la relación centro-periferia. Por ello, este libro parte del año 1952 –fecha emblemática en tanto es el primer intento de formar un Estado nación en Bolivia–, pasa por el Estado neoliberal y termina analizando dicha relación en el contexto de un Estado plurinacional.

En el primer capítulo presento el marco teórico. Parto de la noción de Estado. Subrayo que su formación, desde un punto de vista territorial, implica su expansión desde un centro hacia una periferia. En esta operación se suprimen burocracias, ordenamientos legales y mecanismos autónomos de aplicación de la ley, lo que resta poder político y capacidad de autonomía a la periferia territorial, que se ve forzada a seguir los lineamientos del centro.

Más adelante repaso el concepto de nación como elemento legitimador de políticas estatales y que ha sido de relevante en la disputa política en América Latina. Posteriormente, repaso los conceptos de centro y periferia trabajados por Rokkan y Urwin (1982) como un modelo de análisis que sirve para pensar la distribución territorial del poder, sus cambios y permanencias a lo largo del tiempo. Empero, problematizo la idea de que esta relación en América Latina derive en un nuevo diseño institucional. En realidad, deriva en un arreglo informal entre los grupos con poder tanto del centro como de la periferia. Por último, explico la noción de periferia pasiva tanto como su contraparte, la periferia activa.

El segundo capítulo se refiere a las relaciones centro-periferia en el Estado que nace en 1952 y que nacionaliza la explotación de los recursos naturales mineros, universaliza el acceso a la tierra y otorga capacidad de voto a indios y mujeres. Este periodo interesa porque contiene un proyecto de Estado que apuesta por el centralismo, pero que, en realidad, pacta con los poderes regionales territoriales y sindicales. Para Potosí, este modelo significó la succión estatal de sus recursos mineros, cuyos réditos fueron destinados a financiar proyectos de desarrollo ubicados en otros departamentos, en especial en Santa Cruz. Más adelante analizo cómo la crisis económica genera una tensión en este esquema de relación centro-periferia. Se produce un cambio de régimen político que suprime del juego político al actor más importante de Potosí, el sindicato minero. Posteriormente veo cómo, en la transición democrática (1977-1982), los actores de izquierda utilizan el Comcipo para sus intereses sectoriales, lo mismo que en el gobierno de Siles Zuazo (1982-1985).

El tercer capítulo se centra en el periodo 1985-2006, cuando se implementó el modelo neoliberal. Se verá cómo el Estado hace esfuerzos por institucionalizarse, trata de cambiar los sistemas de mediación política con los partidos políticos y busca descentralizar el poder territorial por la vía municipal. Sin embargo, también continúa retrocediendo ante los grupos de poder regionales tanto de Santa Cruz como de Potosí. En el caso de este segundo departamento, se verá cómo los sindicatos mineros, todavía con gran capacidad de influencia política pese al despido masivo de sus afiliados, utilizan el discurso regionalista para plantar cara al modelo neoliberal que los marginaba. A través de un análisis de las movilizaciones regionales se revela que los actores sindicales (todavía poderosos a pesar de su escaso número) utilizan y manipulan el discurso territorial y cívico, en el marco de una tradición nacionalista, para enfrentarse al modelo neoliberal. Por último, analizo la emergencia de las cooperativas mineras como actores con poder, y los dilemas y desafíos que plantean para la región potosina.

Finalmente, en el cuarto capítulo, estudio las relaciones entre el centro y la periferia en el Estado plurinacional. La presencia del MAS en el poder significó un profundo cambio en la relación centro-periferia, pues el Estado margina a actores regionales y los sustituye por los sindicatos campesinos y movimientos urbanos. En el caso potosino, aparecen

nuevos actores con poder como los sindicatos campesinos y los cooperativistas mineros. Paralelamente, el gobierno trató de anular los poderes regionales que no comulgaban con su proyecto político, con base en un debilitamiento de la propuesta autonómica y una persecución judicial a los líderes de oposición regionales. Analizo cómo se despliega un fuerte centralismo sobre la periferia potosina, debilitando sus instituciones territoriales, anulando los liderazgos regionales que se habían incubado en el anterior periodo y postergando su desarrollo. Finalmente me centro en cómo este trato del gobierno a la región potosina genera un enorme malestar que deriva en huelgas largas y radicales que, de todos modos, no logran nada del gobierno del MAS.

Se puede decir que, en estos años, Potosí se consolida como periferia pasiva al carecer de injerencia sobre sus recursos naturales, no tener un actor con poder que respalde la construcción de instituciones territoriales, presentar liderazgos territoriales completamente anulados y mantener una oposición por parte de sus principales empresarios a las instituciones regionalistas, pues afectan sus intereses económicos. Empero, hay un dato que permite pensar en la posibilidad de la aparición de un clivaje territorial, aunque todavía débil: en 2010 asumieron la dirección del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) actores distintos al sindicalismo minero y alentaron fuertes movilizaciones contra el gobierno en las que demandaban desarrollo y atención estatal.

Capítulo 1

Un marco para estudiar las periferias pasivas

El Estado aspira a ser un conjunto de instituciones burocráticas, leyes e identidad colectiva que se despliega sobre un determinado territorio que reclama como suyo. En su devenir histórico, busca ampliar su poder territorial, establecer dominio sobre él. Para ello expropia a las élites locales de su dominio sobre los medios de coerción, administración y legalidad para pasarlo a una burocracia asalariada y jerárquicamente subordinada a su poder central, que busca afirmar una voluntad uniforme en el conjunto de la comunidad. Tal expropiación se realiza mediante la negociación, el acuerdo o la imposición (O'Donnell 2004, 16-17). Este proceso no es pacífico, se trata de una imposición, desde el centro estatal, de pautas normativas y leyes a unos territorios que, hasta ese momento, se desenvolvían con sus propios ordenamientos legales. Charles Tilly (citado en O'Donnell 2004, 20) indica que “bajo el mapa contemporáneo de Europa yace un cementerio de Estados fallidos, los que fueron derrotados y absorbidos por los Estados existentes actualmente”.

La ampliación del dominio del Estado está llena de conflictos; con frecuencia, en los territorios subnacionales surgen resistencias a las pretensiones del poder estatal. Rokkan y Urwin (1982, 4) constatan que en la Europa moderna “ha habido una multiplicación de los esfuerzos para movilizar a las periferias, regiones e incluso las localidades en contra de los centros nacionales, y una afirmación de las minorías que reclaman su autonomía cultural y de la toma de decisiones”. Michael Mann (1997, 123) sostiene que “la política de los Estados modernos ha consistido fundamentalmente en distribuir el poder entre los distintos niveles de gobierno”.

El problema de la nación

Una característica de la expansión territorial del Estado es la imposición de una identidad territorial, un conjunto de pautas de identidad colectiva, ritos e historias, a territorios periféricos, con el fin de que sus habitantes dejen de lado sus identidades locales para abrazar una nacional. En este proceso “el Estado se convierte en la personificación de la nación, y las personas que se identifican a sí mismas primeramente como nacionales ven su propio bienestar y el del Estado como indistinguibles” (Migdal 2008, 32). Renan (2000, 57) señalaba, ya en 1882, que “la esencia de una nación es que todos los individuos tengan muchas cosas en común, y también que todos hayan olvidado muchas cosas”.

Toda nación tiende a la homogeneidad cultural. Smith (2004, 28) asegura,

la nación es una comunidad humana con nombre propio que ocupa un territorio propio y posee unos mitos comunes y una historia compartida, una cultura pública común, un sistema económico único y unos derechos y deberes que afectan a todos sus miembros.

En el extremo, este proceso ha derivado en masivas limpiezas étnicas, a tal punto que el sentido común de nacionalidad ha sido el resultado de la opresión y el asesinato (Mann 2004b, 181).

Desde esta perspectiva, la construcción de la nación tiene un lado oscuro, trágico. En su nombre, se legitima el dominio de territorios que originalmente no pertenecían al Estado y que han sido anexados de manera violenta. A cambio, la nación, allí donde se constituye, genera sentimientos comunitarios, comunidades imaginadas; provee de un sentimiento de igualdad y fraternidad entre los miembros de la comunidad política, más allá de las diferencias e injusticias que puedan existir en una sociedad (Anderson 1993, 25).

Desde otro punto de vista, el sentimiento nacional es muy importante para conservar un régimen democrático. Al repasar las contribuciones de los teóricos del nacionalismo liberal, Kymlicka y Straehle (2001, 49) señalan que las ideas de justicia social, en su sentido redistributivo, de igualdad de oportunidades y de ampliación de derechos, solo pueden

darse si las personas tienen un vínculo de identidad común y de pertenencia. Este lazo ha de generar la idea de que “los sacrificios realizados por desconocidos continúan siendo, de alguna manera, sacrificio por uno de los nuestros”. Este vínculo solo lo puede dar la idea de nación.

De todas maneras, sería un error considerar que el proceso de construcción de la nación borra por completo las identidades locales. Estas, en mayor o menor medida, han prevalecido; no existen espacios territoriales donde sus habitantes no sientan que su región es distinta en cultura y costumbres que otra. La diferencia radica en que en algunas se logra politizar su identidad, lo que genera tensiones con el Estado; en casos extremos, esto puede dar lugar a formas estatales federales o, en el límite, a movimientos secesionistas.

Antes de que apareciera el Estado, tal como lo conocemos hoy, ya había referencias al territorio, pero, con la modernidad, este elemento ha pasado a ser la forma privilegiada en que dicho Estado construye identidad colectiva. Sus “miembros tienen, por supuesto, identidades múltiples, afiliaciones y fidelidades, pero la identidad territorial es dominante y omnicompreensiva” (Parekh 2000, 95). El territorio es una materialidad que constituye sujetos, quienes, a su vez, organizan identificaciones, historias y proyectos de futuro, puesto que el Estado moderno “goza de un significado moral, político y ontológico sin precedentes” (93). Históricamente, se pueden distinguir dos grandes fuentes de tensión territorial: las distancias culturales –lingüísticas, religiosas o, en un sentido difuso, étnicas– entre las áreas centrales y periferias menos privilegiadas, y los conflictos económicos entre regiones que compiten por el control del comercio y de los recursos productivos (Rokan y Urwin 1982, 4).

Estado y nación en América Latina

Para Mann (2004b, 182), los Estados latinoamericanos, desde su nacimiento, no han podido forjar una nación si por ella se entiende a procesos de homogeneización identitaria. En algunos Estados más que en otros, los procesos de construcción de la nación chocaron con los esquemas de poder local anteriores a la existencia de la nación republicana, como las regiones y comunidades indígenas. En las primeras décadas después de

la Independencia fueron comunes las guerras civiles o interregionales, así como la idea de formar federaciones, hasta que el poder central del Estado empezó a establecer un firme control sobre el territorio, principalmente en el curso del siglo XX (Hobsbawn 2009, 314). El conflicto centro-periferia ha sido uno de los fenómenos políticos decisivos en varios países, por ejemplo, Ecuador (Maiguashca 1983, 182).

Como señala Hobsbawn (2009, 313), los Estados que emergieron de las guerras de Independencia en América Latina no eran “naciones” o “Estados nación” desde ningún punto de vista. No fueron el resultado de movimientos de liberación nacional que hayan implicado grados de integración social e identitaria de los sectores excluidos. Esto no quiere decir que las élites estatales, por lo menos hasta fines del siglo XIX, no hayan intentado construir una nación de la cual quedaban excluidos los sectores con identidad indígena. En esa imagen de nación dichos sectores constituían un freno, una rémora para el progreso (Rivera 2010; Zavaleta 2011).

En lo que respecta a las regiones andinas (Ecuador, Perú, Bolivia), “los grupos indígenas y negros seguían ‘inimaginados’ en la comunidad nacional” (Radcliffe y Westwood 1999, 20). La nación criolla no pudo generar un sentimiento de igualdad y pertenencia entre los distintos grupos sociales, de tal manera que, en la práctica, las divisiones sociales y étnicas fueron experiencias muy diferentes entre blancos, negros e indios en los nacionalismos criollos de las repúblicas nacientes en los inicios del siglo XIX (Radcliffe y Westwood 1999, 27).

Con todo, desde el punto de vista territorial, el Estado nación imaginado por las élites se implantó con fuerza en las zonas poseedoras de recursos naturales de exportación. En esa medida, la apuesta de los Estados en América Latina por incentivar la producción de materias primas configuró una particular presencia estatal en los territorios donde “las inversiones en infraestructura no apuntaban tanto a integrar los territorios en el ámbito de los Estados como a conectarlos con el mundo exterior” (Mann 2004b, 183).

Esto habría generado una integración al Estado muy desigual en términos territoriales. En 1930 surgieron corrientes que postularon incluir a los sectores subalternos en esquemas de desarrollo nacional con fuertes rasgos estatistas y antimperialistas. Esta ola fue la base para la ideología de partidos políticos como la Alianza Revolucionaria Americana (APRA)

en Perú, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en Bolivia. Estos partidos serán claves en el decurso político de sus respectivos países (Hobsbawm 2009, 317). El imaginario de nación buscaba tomar en cuenta a sectores antes excluidos hasta el punto de convertirlos casi en su esencia (de ahí la referencia recurrente al pueblo), mientras se manejaba un discurso de construir soberanía nacionalizando los recursos naturales. Este proceso tuvo tres rasgos centrales: inclusión social, cierto grado de homogeneización y defensa de la soberanía nacional.

Mazucca (2021, 1-26) sostiene que, en América Latina, los Estados nacieron débiles. Argumenta que el proceso de formación en el siglo XIX impidió construir capacidades estatales en el siglo XX. Tales capacidades fueron el resultado de acuerdos mutuamente convenientes entre los hacedores del Estado central y los potentados periféricos. Estos últimos, lejos de ser eliminados durante la formación del Estado, obtuvieron poder institucional para reforzar los baluartes locales. En otras palabras, los Estados en América Latina no lograron eliminar los poderes clientelistas locales que pueden interferir con la capacidad o voluntad del gobierno nacional para proporcionar bienes públicos de manera eficiente, en lo económico, y uniforme, en lo territorial.

Actores con poder

El paso al Estado moderno tiene el sello de la racionalidad y la formalización de instituciones, puesto que, en lo fundamental, basa su efectividad en las entidades creadas para hacerlo funcionar. Se hace necesario un Estado no solo legítimo, sino capaz de cumplir con una serie de funciones que le son propias. Se da lugar a un conjunto de instituciones y de personas especializadas en manejarlas. Weber le atribuye un rol central e imprescindible a esta burocracia en el Estado moderno, dado que aumenta la precisión y rapidez de la administración, concentra los medios de administración en una sola entidad central y, finalmente, nivelaría las diferencias económicas y sociales, dado que el reclutamiento de personal no se rige bajo criterios plutocráticos (Bendix 1970, 399-401).

La burocracia se encarga de hacer penetrar al Estado en los territorios, llevar y aplicar las normas legales, recaudar impuestos, construir infraestructura, organizar la defensa tanto interna como externa y brindar seguridad a los ciudadanos.

La corriente neweberiana ubica en el cuerpo de funcionarios del Estado una fuente de autonomía estatal; las burocracias son “potentes y autónomos actores organizativos” (Skocpol 1995, 98) que permiten generar procesos de desarrollo, cambios institucionales y, en definitiva, son “factores y estructuras institucionales configuradoras de la sociedad” (99).

Michael Mann (1997, 92) matiza esta postura al sostener que la burocracia, en realidad, aumenta la capacidad de penetración estatal, pero no necesariamente su poder autónomo. Si bien incrementa de modo notable la capacidad del Estado moderno para controlar la cotidianidad de los ciudadanos —en niveles desconocidos por los anteriores Estados— esto también implica un aumento del poder de la sociedad sobre el Estado. Aquello ocurre en la medida en que se desarrollan y se complejizan las redes de poder y las vinculaciones entre el Estado y la sociedad civil. Como señala el autor “los Estados modernos y las sociedades civiles se interpenetran demasiado estrechamente para permitir una autonomía sin poder”.

Mann (2004a, 6) plantea dos formas de poder del Estado. Por una parte, puede existir un *Estado despótico*: es altamente autónomo, sus élites pueden decidir sin negociaciones rutinarias con las organizaciones de la sociedad civil; empero, su poder no puede llegar más allá de la limitada área de influencia del gobernante.

En cambio un *Estado infraestructural* tiene menos autonomía en el sentido de que la sociedad ha logrado establecer mecanismos de control sobre el Estado, pero más capacidad para penetrar realmente la sociedad civil, y poner en ejecución logísticamente las decisiones políticas por todo el país.

De todas maneras, el Estado es uno más de los grupos con poder dentro de la sociedad; no es todopoderoso ni omnipotente y debe entablar “batallas campales” con otras figuras y grupos influyentes como los sindicatos, la Iglesia, la clientela política y las familias para imponerse.

Estado y sociedad “jalan en múltiples direcciones que llevan a patrones imprevistos de dominación” (Migdal 2011, 125).

En la construcción de un Estado existen dos posibilidades de relación entre los actores del centro con los de la periferia. La primera se da cuando la incorporación de la periferia va acompañada de la erradicación de los vínculos particularistas que unen a los potentados locales y su población cliente. La segunda ocurre cuando el Estado proporciona a las élites locales condiciones para perpetuar sus fuentes de patrocinio. En este último caso, las periferias propagan el patrimonialismo a través de la administración nacional y los gobiernos subnacionales, convirtiendo eventualmente al Estado en una máquina clientelar a gran escala (Mazucca 2021, 28).

Estructura de clivajes

Un clivaje puede definirse como una división estructural en la vida social en torno a la cual los actores construyen una identidad que organiza la competencia y la disputa política. No todas las divisiones sociales se convierten en un clivaje; para que ello ocurra, es necesario que los actores construyan discursos y organizaciones alrededor de estas divisiones. Como dice Kriesi (1998, 167),

en otras palabras, una división estructural se transforma en un clivaje si un actor político otorga coherencia y una expresión política organizada a lo que, de otro modo, serían creencias incipientes y fragmentarias, valores y experiencias de los miembros de algún grupo social.

El clivaje ha sido pensado para explicar la aparición de los partidos políticos; Rokkan procede de esta manera para los casos europeos, mientras que otros autores, como Alessandro (2009) o Torcal y Mainwaring (2009), lo hacen para el sistema de partidos chileno y argentino, respectivamente. Empero, al relacionar el clivaje con los partidos quizá tendríamos problemas con el caso boliviano, donde las pautas de representación no siempre se han dado a partir de los partidos políticos, sino desde las organizaciones de la sociedad civil (Tapia 2002; Barragán 2015). En

otros términos, la capacidad de agregación y canalización de las demandas se han dado por medio de organizaciones como los sindicatos u organizaciones corporativas de defensa del empresariado privado.

Por otro lado, la noción de clivaje centro-periferia desarrollada por Rokkan y Urwin (1982) alude a la emergencia del clivaje territorial en el momento de la formación del Estado nación, y tiene que ver con las tensiones derivadas de la existencia de un centro político que busca controlar y desactivar las resistencias culturales identitarias y legales de los territorios periféricos. Alrededor de la disputa territorial se conforman clivajes, que pueden ser entendidos como la presencia persistente y duradera en un país de un conflicto político donde colectividades de individuos organizan estrategias, organizaciones y discursos desde la referencia territorial (Vergara 2015, 25) y que, además, debe ser el eje que articula la competencia política por un tiempo relativamente largo y constante.

Esto no quiere decir que el clivaje territorial sea el único que exista: de hecho, en una sociedad se presentan, paralelamente, clivajes religiosos, de clase, de género y étnicos. En países como Bolivia “se puede hablar de una estructura de clivajes, de una diversidad de líneas de división social que organizan la interacción, la distribución, el acceso a los bienes públicos y los espacios de la vida política” (Tapia 2011, 96). Hay momentos y coyunturas en que el clivaje territorial se vuelve el eje ordenador de los demás, o tiene capacidad para integrar y subordinar los demás conflictos con el Estado a la lógica territorial.

A partir del caso de Potosí, en este libro observo el proceso por el cual ciertas regiones se constituyen en periferias pasivas, aun cuando tengan identidades territoriales y posean recursos importantes. Se trata de una región con poca capacidad para resistir las políticas del centro estatal. Cuenta con muchos recursos mineros, pero es incapaz de internalizar los excedentes producidos por su actividad minera. Tiene organizaciones fuertes, pero desarticuladas del territorio y con poca capacidad de construir un proyecto regional. Tomo como referencia al departamento de Santa Cruz, donde la relación centro-periferia ha tenido un decurso totalmente distinto al haber activado un clivaje centro-periferia.

El concepto de centro-periferia

Para Rokkan y Urwin (1982), los centros pueden ser mínimamente definidos como lugares privilegiados dentro de un territorio donde se encuentra la mayoría de los recursos administrativos, económicos, culturales y militares. Son espacios establecidos para las deliberaciones, negociaciones y decisiones, donde las personas se reúnen para realizar ceremonias rituales de afirmación de la identidad y con monumentos que la simbolicen. Esto provoca que desde el centro se controle la mayor parte de transacciones entre los titulares de recursos a través de un territorio, que se encuentre más cerca que cualquier sitio alternativo a las zonas ricas en recursos en el territorio, y que sea capaz de dominar el flujo de comunicación a través de un lenguaje estándar y un conjunto de instituciones para la consulta y la representación regular.

Las periferias, añaden Rokkan y Urwin (1982, 5), solo controlan sus propios recursos económicos y están más expuestas a las fluctuaciones de los mercados ubicados lejos de su territorio. Están aisladas del resto de las regiones, a excepción de la central; contribuyen poco al flujo total de las comunicaciones en el territorio, y poseen una cultura marginal.

Los autores distinguen dos grandes fuentes de tensión territorial entre el centro y la periferia: las distancias culturales –ya sean lingüísticas, religiosas o étnicas– entre las áreas centrales y las periferias menos privilegiadas, y los conflictos económicos entre los centros regionales que compiten por controlar el comercio y de los recursos productivos (6). Los autores establecen que la combinación de los dos factores es la base de los clivajes territoriales.

La dinámica entre centro y periferia da lugar a dos tipos de configuración de la distribución territorial del poder: la monocefálica, con un solo centro, y la policefálica, con varios. En el primer caso, estaríamos hablando de un Estado donde prima el dominio de una región o de una ciudad, y en el segundo, de una distribución menos uniforme de los rasgos del centro en términos de poderes económicos, políticos y culturales. A la primera relación le corresponde una estructura centralista; a la segunda, una federalista (Rokkan y Urwin 1982).

Una de las críticas a este esquema es su énfasis en la subordinación de la periferia al centro; Rokkan y Urwin consideran que ambos

constituyen un sistema espacial de autoridad y subordinación. Esto minimiza el aporte que la periferia puede conferirle en determinados momentos al centro en términos de control del orden público, apoyo político y provisión de servicios. Por tanto, resulta mucho más fructífero considerar la *interdependencia* entre centro y periferia, antes que suponer la permanente subordinación o marginalización de esta última (Gibson 2007, 168). Sin embargo, la interdependencia presenta muchas posibilidades: dominio del centro, resistencias de las periferias o acuerdos negociados. Todo depende de los contextos históricos. No siempre hay un dominio del centro, aunque los Estados tengan invariablemente una vocación centralizadora.

¿Por qué algunas periferias pueden activar un clivaje centro-periferia y otras no? y ¿por qué unos centros no dominan completamente el territorio? Dos condiciones son imprescindibles para activar regionalismos: un territorio demarcado como referencia o frontera que se erige en el proceso de expansión del centro, y una identidad colectiva regional que defiende sus pautas culturales, históricas y políticas distintas de las que postula el centro (Burbano de Lara 2014, 24). Cuando esta identidad es difusa o está asociada a construir la identidad nacional, resulta difícil que puedan aparecer los regionalismos. Empero, esto no es permanente; las identidades regionales pueden ser politizadas, es decir, ser factores de lucha contra el centro cuando la identidad regional se asocia a un sentimiento de opresión y agravio causado por aquel, y/o que la periferia sienta que los intereses regionales no son tomados en cuenta por el centro (25). Quienes accionan esta politización constituyen una red de instituciones locales y una identidad que ha construido y difundido un sentimiento anticentralista y un liderazgo interesado en politizar el territorio.

Si bien el territorio es condición necesaria para el regionalismo, no es suficiente; deben existir una sociedad civil y un liderazgo interesados en construirlo (Burbano de Lara 2014, 24-26). Dicho de otra manera, si el centro busca ser exitoso en su dominio territorial, tiene que ampliar efectivamente el imaginario de nación, debe controlar e integrar a las organizaciones de la sociedad civil y a sus élites locales en una lógica nacional del poder, lo que, a la postre, diluye la configuración de clivajes territoriales.

Empero, aunque en la periferia se llegue a tener ambas condiciones –liderazgo y sociedad civil–, esto puede no ser suficiente para hacer oír la voz, los reclamos de quienes la integran. En unos casos, hace falta que la periferia concentre gran cantidad de recursos económicos y demográficos, es decir, capacidad productiva, votos y potencial de movilización que, a la postre, aumenten las posibilidades de las élites periféricas de desafiar con éxito al centro político (Vergara 2015, 86-87). En otros, es necesario que las regiones pobres cobren conciencia de su situación y reclamen por mecanismos de integración al Estado y al proceso de modernización, a veces por la vía de conflictos.

Periferias activa y pasiva

La apuesta teórica de mi libro radica en pensar la relación centro-periferia no desde la perspectiva de las regiones que han construido con éxito este tipo de clivaje, sino desde la de aquellas que, a pesar de tener una identidad regional fuerte y unos recursos económicos imprescindibles para las arcas del Estado, no pueden activar un clivaje territorial.

Busco entender las dinámicas de dominación del centro estatal sobre una periferia territorial. Analizo una región donde el centro ha sido exitoso en su estrategia de dominio y se ha configurado una periferia pasiva. Ese dominio se expresa de varias formas: el Estado no toma en cuenta a esas periferias como parte de los procesos de desarrollo y modernización que emprende e impone políticas económicas que desfavorecen a estas regiones sin que ello tenga consecuencias políticas. En el largo plazo, las periferias pasivas no pueden configurar instituciones, proyectos, movilizaciones ni liderazgos regionales que tengan como referencia el territorio. Sus movilizaciones son largas pero episódicas, sus proyectos son de corto plazo, y sus liderazgos regionales solo defienden los intereses del sector al que pertenecen. A pesar de contar con abundantes recursos naturales (de cuyos ingresos dependen en gran medida las finanzas del Estado), no pueden internalizar, es decir, utilizar en beneficio propio el excedente producido en su territorio para generar desarrollo. Adicionalmente, son regiones pobres y de alta emigración, que pierden relevancia social y política en el contexto estatal.

Potosí es una región ubicada en el sur de Bolivia. En este departamento, en 2012, la incidencia de la pobreza y de la extrema pobreza¹ llegó al 67,4 y al 49,5 % respectivamente, con el nivel de desigualdad más alto del país, con un coeficiente de Gini de 0,58 (Fundación Milenio 2012, 2). Su aporte al producto interno bruto (PIB) nacional apenas llegaba al 4,8 %. Como resultado de la disminución poblacional, Potosí perdió cinco representaciones al Poder Legislativo desde 1992.

Según los datos del censo de 2012, Potosí tiene una población de 823 517 habitantes y una tasa de crecimiento poblacional de 1,34 % intercensal, cuando el crecimiento de un departamento del “eje central” como Santa Cruz es de 2,40 % y el promedio nacional es de 1,71%. La migración hacia otros países y departamentos como Santa Cruz, provocada por las condiciones de pobreza, es la causa de este bajo crecimiento de la población.

Potosí como caso de periferia pasiva

Esta situación de pobreza contrasta con la magnitud de la riqueza económica que tiene la región y su aporte a las finanzas del Estado. Existe una clara desarticulación entre lo que la región genera en divisas y las transferencias y regalías que percibe (tabla I.1). Esto señala un despojo económico por parte del centro. No existen instituciones de la sociedad civil interesadas en politizar el territorio y así convertir los recursos económicos en factores de presión política para el centro (Vergara 2015, 12-15). El Estado, los nuevos empresarios, los cooperativistas mineros y la minería mediana, en alianza con las transnacionales que surgieron con el neoliberalismo, se apropian de todos los beneficios. Las movilizaciones de protesta regionalista son esporádicas y contundentes, pero carentes de un horizonte estratégico; sus instituciones no pueden agregar los diversos intereses de la sociedad civil en torno a un proyecto regional ni, lógicamente, generar liderazgos territoriales.

¹ La pobreza es la situación económica de personas que tienen ingresos menores al valor del costo de la canasta básica de alimentos; la extrema pobreza es la situación en que las personas no disponen de los recursos que permiten satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación (INE 2008).

Esto no quiere decir que en esta región no existan movimientos sociales fuertes e influyentes en el Estado. Uno de ellos es la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, activa entre 1952 y 1985, y la Federación de Cooperativas Mineras, organismo vigente; también se puede señalar a la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, organización central para la política en el periodo previo al nacimiento del Estado plurinacional de Bolivia en 2009. Sin embargo, ninguna de estas entidades estuvo ni está interesada en construir organizaciones y dinámicas territoriales. Los mineros sindicalizados fueron actores centrales en el Estado nacionalista, al igual que los cooperativistas en los Estados neoliberal y plurinacional. En esos casos, y por razones distintas, estos actores no politizaron el territorio.

Santa Cruz como caso de periferia activa

El departamento de Santa Cruz es un caso de control y contraste, porque su relación con el centro ha sido completamente distinta a la de Potosí: ha podido politizar sus diferencias identitarias, sus actores sociales están interesados en politizar el territorio y el clivaje territorial es dominante. Esta región, ubicada en el oriente de Bolivia, tiene las mejores condiciones económicas y sociales de todo el país; se la considera un pilar de la economía boliviana con un aporte al PIB nacional de 27,1 % (Fundación Milenio 2012, 1). Sus exportaciones en 2012 llegaron a USD 2120 millones; 54,9 % de esta cifra corresponde a productos como gas y petróleo (Andersen, Branisa y Canelas 2016, 267). A consecuencia de su incremento poblacional (según el último censo, para 2012 contaba con 2,94 millones de habitantes), obtuvo dos diputaciones adicionales a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

En muchos sentidos, la prosperidad de este departamento se debe a la acción del Estado. En las políticas desplegadas por el MNR, desde 1953 se apostó por la modernización agraria como lógica de la política pública nacional. Se buscó potenciar el departamento de Santa Cruz como espacio territorial ideal para lograr los objetivos de diversificación productiva. Aunque se pueden identificar señales de este proceso desde 1942, con la publicación del Plan Bohan, en 1954 se constituye en una política de Estado con el denominado Plan Inmediato de Política

Económica del Gobierno de la Revolución Nacional (Guevara 1954). A partir del Plan –con inversión de recursos producidos por la minería y de la deuda internacional–, se procede a potenciar la economía cruceña, que alcanza un desarrollo notable hasta llegar a ser la “locomotora” de la economía boliviana. Es un proceso que se ha mantenido a lo largo del tiempo, tanto en regímenes militares como democráticos; tanto con gobernantes “cambas”, como Hugo Banzer, como con gobernantes “collas”, como Gonzalo Sánchez de Lozada.²

Lo interesante del caso cruceño es que la penetración económica del centro no fue acompañada por otras de tipo político o cultural. Durante la década de los cincuenta del siglo XX, todo intento de control político de la periferia fue respondido con la activación de movimientos de carácter territorial que hicieron de Santa Cruz una región de alta inestabilidad (Whitehead 1973, 25). Desde antes de la revolución de 1952, este departamento ya tenía establecida una relación de tensión con el centro. Uno de los acontecimientos más importantes en este sentido fue la publicación de un memorándum en 1904, en donde claramente se culpó al Estado de ahogar la producción cruceña y se definió “la necesidad de un movimiento cívico alrededor de lo regional para defender los intereses del departamento” (Burbano de Lara 2014, 48).

El motor de estos procesos de resistencia regionalista fue el Comité Pro Santa Cruz. Esta organización, nacida en 1951, aglutinó a la mayoría de las organizaciones sociales del departamento, constituyéndose en la institución con mayor capacidad de representación, por encima de los partidos políticos. En 1957 logró que los recursos hidrocarburíferos producidos en su territorio reingresaran a la economía cruceña en calidad de regalías. Además lograron dominar las instituciones locales de desarrollo como la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz y, desde ahí, desplegaron políticas de mejoramiento urbano.

La intención del Estado en 1952 era integrar a Santa Cruz al territorio boliviano. Para ello pactó con los grupos de poder locales, a quienes se les ratificó la propiedad de sus latifundios y a otros se les dotó de

2 “Camba y colla son términos geográficos y culturales aplicados a las personas provenientes del Oriente (camba) y del Occidente (colla, habitante del Collasuyo o del Collao, señorío aymara preincaico ubicado a orillas del lago Titicaca) de Bolivia” (Peña y Boschetti 2008, 154).

tierras consideradas de reserva fiscal. Apareció un grupo de “protegidos que no pudo constituirse ni sobrevivir sino al amparo del Estado” (Lavaud 1998, 282). Estos actores se favorecieron de los programas de crédito del Banco Agrícola

A fines de los años sesenta estos actores se habían diversificado a áreas como el comercio, el comercio de importación, la construcción, la industria y servicios. En ese entonces, ellos seguían con preocupación el desempeño de los gobiernos de izquierda de Alfredo Ovando (1969-1970) y de Juan José Torres (1970-1971). Respaldaron el régimen dictatorial de Hugo Banzer que consolidó la práctica de facilitar financiamiento estatal a la naciente burguesía cruceña. Como resultado, a fines de los años setenta Santa Cruz “se ha transformado en una metrópoli industrial y, sobre todo, comercial y financiera” (Lavaud, 1998, 276).

Posteriormente, durante la crisis de Estado de 2000 a 2008, el Comité Pro Santa Cruz realizó un conjunto de acciones colectivas para bloquear los cambios en la configuración política que se gestaba en el occidente del país. Los grupos de poder cruceños veían con preocupación la posibilidad de ser desplazados del esquema del poder estatal o de no ser ellos la base de la relación entre el Estado y la periferia cruceña. El caballo de batalla del regionalismo cruceño fue la demanda de autonomías, lo que se planteó en un contexto de crisis estatal que generó una polarización política y que puso al país al borde de una guerra civil. En 2009 se resolvió esta crisis de claras connotaciones territoriales. Pero pese a que tanto las instituciones cívicas como los liderazgos locales de los grupos de poder cruceños han sufrido persecución, anulación y cooptación, han mantenido su capacidad de presión sobre el Estado. En 2019 activaron una serie de protestas que terminaron con el gobierno de Evo Morales.

Capítulo 2

Relaciones centro-periferia en el Estado nacionalista (1952-1985)

Para la historia nacional, 1952 es el año en el cual la política da un giro de 180 grados, con un cambio de élites y el inicio de un proyecto nacionalista de Estado que incluye a los sectores populares. Nuevos actores de clase media toman el poder estatal; las minas de estaño, fundamentales para la economía, pasan a dominio del Estado; se procede a una reforma agraria que redistribuye las tierras a campesinos y se instaura el voto universal, eliminando las restricciones a la participación democrática de mujeres e indios.

Paralelamente, se presenta una profunda reconfiguración en el rol y la importancia de cada departamento en la economía nacional. Santa Cruz surge como polo de desarrollo económico con base en cuantiosos recursos del Estado provenientes de la minería, mientras que departamentos mineros como Potosí se debilitan económica y productivamente. A este último se le asigna un rol de proveedor de divisas y recursos para el proyecto modernizador y capitalista del MNR.

El 9 de abril de 1952, la ciudad de La Paz fue el escenario de una breve revuelta en la cual fabriles, carabineros y mineros, bajo el liderazgo del MNR, combatieron contra las tropas del Ejército y las vencieron. Tres días después se designó provisionalmente a Hernán Siles Suazo como presidente de la República (Cajías 2015, 22-23).¹

¹ El MNR es un partido político central en la historia de Bolivia; su origen se remonta a los grupos que nacieron luego de la Guerra del Chaco. Augusto Céspedes, Carlos Montenegro, Víctor Paz Estenssoro y otros lo fundaron en 1941. Desde finales de la década de los cuarenta del siglo XX,

Como resultado de la revolución, el Ejército fue casi completamente destruido, “los oficiales huyen o se esconden y los soldados desertan siendo reemplazados por las milicias populares que los superaron en número con gran margen y que, además, tenían como una de sus divisas la total abolición del ejército” (Dunkerley 1987, 78). Para 1954, estas milicias llegaron a estar constituidas por 15 regimientos, ocho de mineros, cinco de ferroviarios y tres de fabriles, que sumaban cerca de 70 000 hombres frente a unas fuerzas armadas reducidas a 8000 (Lavaud 1998).

A partir de una ideología nacionalista, los miembros del MNR identificaron al Estado como eje de los cambios sociales y económicos y artífice de la construcción nacional (Lavaud 1998, 29). Para este partido, el Estado debía ser un árbitro entre los intereses de la sociedad y los de la propiedad privada; un actor que fomentara el corporativismo sobre la base de una sindicalización obligatoria y controlada por él (Malloy 1970, 67).

A mediados del siglo XX, Bolivia era una sociedad predominantemente rural con una población articulada débilmente a la economía nacional: los campesinos, el 70 % de la población económicamente activa (PEA) del país, solo aportaban con el 30 % al PIB nacional y menos del 3 % al valor total de las exportaciones (Burke 1973, 20). El campesinado desarrollaba una agricultura de subsistencia, que no lograba abastecer al mercado interno y, peor aún, llegar al externo. En consecuencia, el país tenía que importar alimentos, para lo cual recurría a las divisas generadas por la minería. “Esto es tan cierto –decía un documento en 1942– que casi la mitad de todas las importaciones de Bolivia se componen de productos agrícolas” (Bohan 1942, 9).

La incapacidad estatal para lograr una integración territorial y social se volvió más evidente durante los gobiernos posteriores a la Guerra del Chaco (1930-1933). Tanto la población como los soldados que volvieron del campo de batalla pusieron en duda la orientación nacional de la élite

fue el partido más poderoso; sus representantes llegaron al gobierno por vía de una insurrección en abril de 1952, hasta que fueron derrocados en 1964. Posteriormente, sus miembros fueron parte del gobierno militar de Hugo Banzer, lo que provocó una división interna. A lo largo de su historia, el partido se dividió varias veces; a finales de la década de los setenta surgió el MNR de Izquierda (MNRI), liderado por Hernán Siles, quien gobernó con la Unidad Democrática y Popular desde 1982 hasta 1985. Finalmente, la fracción liderada por Víctor Paz Estenssoro con el MNR Histórico (MNRH) llegó al poder en 1985 e impuso medidas de corte neoliberal que lo alejaron definitivamente de la matriz nacionalista de 1952 (Barnadas 2002, 298).

gobernante; la unidad ideológica del discurso oligárquico-liberal entró en crisis (Mayorga Ugarte 1985, 58).

En este contexto, la genialidad de quienes conformaban el MNR fue darse cuenta del agotamiento del proyecto de Estado planteado por los partidos de ese momento (Liberal, Conservador, Republicano) y, en consecuencia, desplegar una estrategia para convertirse en el partido que liderase el cambio y procediera a construir un nuevo Estado. Un largo trabajo con los sindicatos mineros —a los cuales, además, se defendió desde el Parlamento— junto con la oposición a los gobiernos del *ancien régime* y el triunfo en las elecciones de 1951, le dio al MNR tal popularidad y legitimidad que cuando explotó la revolución en abril de 1952, “cualesquiera hayan sido las expectativas de la clase obrera paceña para el Viernes Santo de 1952, una cosa quedó absolutamente clara: esta respaldaba plenamente el ascenso del MNR al poder” (Dunkerley 1987, 67).

Ya posesionados, los representantes del MNR emprendieron tres reformas: la nacionalización de las minas confiscando las propiedades de los denominados “barones del estaño”, como Simón Patiño, Mauricio Hirschfeld y Avelino Aramayo, ubicadas en Oruro, Potosí y La Paz, que pasaron a manos de la recién creada Corporación Minera de Bolivia (Comibol); la Ley de Reforma Agraria, que entregó tierra a campesinos, y el voto universal, que incluyó a indios y a mujeres.

Si bien estas medidas resultaron relevantes e históricas (incrementaron la popularidad y la legitimidad del MNR en el gobierno), para el ala nacionalista y de derecha del partido (Malloy 1989) solo fueron la base para lograr el objetivo de establecer una economía de mercado, diversificarla y salir de la monoproducción minera. Al hacer una reminiscencia de los cambios en 1952, Víctor Paz Estenssoro (1956, 12, cursivas del autor) señala:

Ante todo, era indispensable liquidar el viejo orden para poner los comienzos de una nueva sociedad. Por eso nacionalizamos las minas y realizamos la reforma agraria. Esas dos medidas básicas *crearon las condiciones* para desarrollar y diversificar nuestra economía, el tercero de los fundamentos angulares de la independencia económica de Bolivia, tendiente a superar la monoproducción y a aumentar el volumen de la riqueza nacional.

Paz Estenssoro no tenía dudas respecto de la orientación capitalista de la revolución y lo dejó bien claro en su primer discurso presidencial.

No somos un gobierno anticapitalista, precisamente por la seriedad de nuestra labor, que no es demagógica. Queremos realizar un avance de las clases mayoritarias. Bolivia es un país extremadamente rico, pero necesita capital; exigiremos a los capitales que inviertan en la explotación de nuestras riquezas nuevas condiciones, concederemos retribuciones a los capitales que se inviertan dentro de lo que es justo (Calderón 1982, 42).

Malloy (1989, 361) tiene razón al señalar que “reformista o revolucionaria, la meta principal de la cúpula nacionalista pragmática del MNR fue económica antes que política o social. Los cambios sociales fueron para ellos instrumentos para lograr el objetivo de reorganizar la economía”. Empero, el trasfondo de este objetivo era integrar la región cruceña al Estado, pues –en repetidas ocasiones– esta región había mostrado malestar, desacato a la autoridad estatal y señales a favor del separatismo. Bolivia era un Estado que no tenía una implantación igual a lo largo de su territorio. Si bien el MNR buscó corregir este déficit, sus líderes conocían que eso podría ser visto como políticas favorables a un determinado departamento. Su estrategia fue presentarlo como un proyecto técnico más que político, un proyecto de Estado que se ciñera estrictamente a las cifras, a los datos estadísticos.

Estos objetivos se plasmaron nítidamente en el Plan Inmediato de Política Económica del Ministerio de Planificación (1954), a cargo de Walter Guevara Arce. Este programa, que en realidad seguía los lineamientos del Plan Bohan (elaborado por consultores estadounidenses en 1944), proponía diversificar la economía, fomentar la agroindustria, apoyar la migración interna y externa, y sustituir importaciones de alimentos (Guevara 1954, 3).

Según este Plan, la dependencia económica de Bolivia de la venta de minerales –que representaba un 95 % del total de exportaciones– era intolerable. Según el documento, en el periodo 1948-1951, de USD 115 millones de exportaciones, USD 111 millones correspondían al rubro de los minerales. Este desbalance aún se mantenía en 1953, cuando las exportaciones del país eran de USD 113 millones, de los cuales USD 109,8 millones correspondían a estos productos, es decir, el 97 % del total (Guevara 1954, 4).

Adicionalmente, muchas de las divisas generadas por el trabajo minero se destinaban a la compra de productos en el exterior (azúcar, carne y harina) que se podían producir en el país. Para 1953, este gasto alcanzaba USD 24 millones, y se preveía que para 1955 llegase a USD 33 millones, lo que implicaba desembolsar el 25 % de las divisas.

Desde una perspectiva demográfica, según el Plan, Bolivia era un territorio poblado de una manera desigual, con mayor densidad poblacional en departamentos como La Paz, Cochabamba o Potosí, y con una muy baja en Santa Cruz, Beni y Pando.

Para enfrentar estos desequilibrios productivos y poblacionales, se estableció una estrategia de fomento a la actividad agropecuaria. Esta política fue enfocada, sobre todo, en el departamento de Santa Cruz, “cuyas productivas tierras podrían abastecer el mercado interno de alimentos”, junto con políticas de migración interna para proveer de trabajadores a las zonas despobladas y convertir a los campesinos del Altiplano y los valles de las regiones altas de Bolivia en “proveedores de productos antes que en consumidores” (Guevara 1954, 13).

Tales objetivos no podían lograrse solamente liberando a las fuerzas del mercado. No existía un núcleo de empresarios capaces de llevar estos proyectos a cabo, pues hasta ese momento Bolivia no había podido desarrollar una burguesía nacional poderosa capaz de liderar los cambios. En este escenario, le correspondía al Estado tomar el timón para fomentar, impulsar y desarrollar una economía capitalista.

Las relaciones capitalistas de producción se habían establecido, sobre todo, alrededor de la minería vinculada con mercados extranjeros; en cambio, en sectores como la agricultura o la manufactura, el desarrollo era incipiente. De hecho, en varias zonas del Altiplano, la gran masa de campesinos producía solo para el autosustento y, en las regiones del oriente, sus actividades eran incipientes.

Naturalmente, este proyecto necesitaba de recursos económicos para llevarse a cabo. Estos provinieron principalmente de la producción minera que, desde la reforma rentística de 1872, eran las principales fuentes de recursos con las que contaba el país (Barragán 2009, 105). Esto implicó un proceso de succión de los recursos generados en regiones mineras como Potosí.

Nacionalismo y regionalismo en el discurso del MNR

El nacionalismo como necesidad y objetivo estatal fue el argumento que utilizaron los gobiernos del MNR para anular el poder territorial subnacional.

Cabe señalar que el discurso de nación del Nacionalismo Revolucionario no implicaba un cambio en la simbología de lo que, hasta ese momento, representaba a la nación –bandera, héroes, historia y celebraciones cívicas–, sino más bien una rearticulación, reorganización y enriquecimiento de todos estos elementos, para crear una narrativa de nación que permitiera legitimar el proyecto capitalista del nuevo Estado de 1952.

Según el discurso del MNR, Bolivia no podía darse el lujo de desconcentrar territorialmente el poder, porque era un país desmembrado, con vastos espacios no integrados al territorio nacional, con riquezas minerales de plata y estaño que no beneficiaban al país y con una inmensa parte de la población que vivía al margen del Estado.

De acuerdo con esta perspectiva, desde el nacimiento de la República, en 1825, los diversos gobiernos habían tenido una visión antinacional. Se preocupaban por la porción de territorio donde afincaban sus intereses (minas y haciendas, básicamente), que se había desarrollado en desmedro de otros territorios y poblaciones. Walter Guevara (1952, 9), quizá el más importante ideólogo del MNR, expresó,

Acaso nuestras desventuras se originaron en que las minas de estaño no hubieran estado distribuidas a todo lo largo y ancho del territorio nacional, porque de haber sido así, el afán de extraer estaño es indudable que habría llevado por lo menos las vías de comunicación a todos los extremos de nuestro país. Pero como las minas estaban concentradas en la cordillera y el altiplano, solo se hicieron ferrocarriles y caminos en esta región del país, abandonando al resto, que era precisamente la parte más extensa y de más valor para el porvenir.

Según esta postura, los minerales solo habían servido para hacer ricas a muy pocas personas, que llevaban sus ganancias a otro país y no servían para el desarrollo nacional. Al respecto, Paz Estenssoro (1956, 4)

afirmó, “el carácter semicolonial de nuestra economía nace de un hecho trágico: exportamos casi exclusivamente minerales y la mayor parte de esas exportaciones de riquezas que no se reponía, fugaba al exterior, en un desangramiento constante”. El Estado estaba presente solo en una parte del territorio para satisfacer los intereses extranjeros en la minería.

Para superar este estado, se hacía necesario, como postulaba el intelectual Carlos Montenegro (1943), pensar como nación y no como facción. Se tenía que desechar todo tipo de *particularismos regionalistas* para pensar en el país como un todo concatenado y relacionado, que primero permitiera construir a la nación y después, a cada una de sus partes. Guevara Arce (1946, 3) seguía esta línea y señalaba que “no hay solución para los problemas locales (de cada departamento), sino en función y como parte integrante en los problemas nacionales”.

En el caso potosino, esta postura antirregionalista era más contundente: el MNR afirmaba que las minas le pertenecían a toda la nación, y que sus recursos, ya en poder del Estado, debían servir para el desarrollo nacional, para alimentar *con su savia* —como solía repetir Paz Estenssoro— al desarrollo y la prosperidad, para que Bolivia dejara de ser una semicolonía del imperialismo.

Esta postura era compartida por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Esta organización se fundó en 1944 y, a pesar de contar, en ese año, con un número bajo de afiliados, tenía una importancia política central, pues la minería generaba el 95 % de las divisas del país. Su trascendencia también se reflejaba en su centralidad en el sindicalismo boliviano, aglutinado en torno a la Central Obrera Boliviana (COB): contaba con 60 delegados de un total de 310, y el secretario ejecutivo de la FSTMB, por sus estatutos, ocupaba el mismo cargo en la COB. Juan Lechín (1952, 20), líder permanente e indiscutible de los mineros, en el acto de posesión de la comisión de nacionalización de las minas, dijo,

gracias a la medida de nacionalización de las minas grandes, cuyo estudio se inicia en este acto, el gobierno popular podrá recuperar para el país y para su progreso material las riquezas que “la rosca” enajenó en servicio de menguados intereses imperialistas. Bolivia podrá así financiar sus grandes obras de progreso material y cultural que devuelvan a nuestro pueblo el sitio que le corresponde en el continente.

De acuerdo con este razonamiento, sin un Estado centralista no podría haber nación, puesto que este garantizaba la unidad; solo él podía mirar más allá de la coyuntura y de los inevitables intereses particulares de cada uno de los sectores o regiones en Bolivia.

Esto fue fatal para el desarrollo de Potosí por dos razones. En primer lugar, deslegitimaba todo tipo de reclamo que pusiera en duda el uso nacional de los recursos naturales que se producían en su territorio. En segundo lugar, convertía a la palabra *regionalismo* en anatema, en algo despreciable, algo que solo se podía haber dado en el pasado y que había que rechazar y denunciar. Tanto el gobierno como el sindicalismo minero manejaban este discurso. En esa medida, Potosí nunca podría pensarse como región, sino como nación.

Las plantas de fundición de minerales y la opción imposible del desarrollo potosino

Para compensar su proyecto agrarista, que claramente beneficiaba a Santa Cruz, el MNR jugó con la idea de diversificar la minería; proyectó instalar plantas de fundición de minerales, lo que obviamente beneficiaba a los departamentos mineros. Gracias a las fundidoras, el país dejaría de exportar minerales en bruto, carentes de valor agregado, y comenzaría a producir lingotes de estaño, plata o zinc, cuyo precio y valor en el mercado internacional no solo reportarían más beneficios, sino que no estarían sujetos a las variaciones de precios de los minerales que tanto daño causaban a la economía del país. Adicionalmente, se generarían ingresos y empleos en las zonas productoras de minerales.

Este objetivo contaba con el apoyo de importantes intelectuales de la izquierda del MNR. Uno de sus mejores exponentes, Sergio Almaráz Paz (1985, 67), justificaba la creación de las fundidoras porque “la minería, al haber sido mantenida exclusivamente en la fase extractiva, detuvo todo el desarrollo ulterior y, naturalmente, el tecnológico. Nos quedamos mineros”. Por su parte, René Zavaleta (1963, 12) señalaba,

así, un razonamiento revolucionario tiene que considerar como primera prioridad, la instalación de hornos de fundición de estaño en tanto

que un punto de vista reformista se reducirá a proyectos laterales como la producción de arroz o el fomento de la vid anteponiéndolos a las cuestiones centrales.

Pero estos intelectuales estaban solos; su prédica no llegaba a un Estado cuyos recursos alcanzaban únicamente para desarrollar la periferia cruceña. El gobierno trató de mostrar lo contrario. En su informe presidencial de 1952, Paz Estenssoro (1953, 9) señaló que “para Bolivia, país minero por excelencia, es fundamental mejorar los sistemas de tratamiento de sus minerales, elevando los porcentajes de recuperación para alcanzar, después, otra etapa superior: la fundición”.

Así, las fundiciones se ofrecían como los instrumentos más idóneos para alcanzar la independencia económica.

Cuando se pueda fundir nuestros minerales en el país, disminuirá la dependencia de la economía boliviana respecto del extranjero, tanto porque dejaremos de cubrir con divisas los gastos de fundición, fletes falsos y otras erogaciones, cuanto porque, disponiendo ya de metal fundido, podremos comerciar libremente con otros países y no solo con aquellos que posean fundiciones (Paz Estenssoro 1956, 85).

El Plan de Política Económica de 1954 señalaba la importancia de la fundición y afirmando que esta significaría un ahorro de USD ocho millones para las arcas del Estado. Sin embargo, estos proyectos en realidad nunca se dieron y la edificación de fundidoras se postergó de manera permanente: el Plan de 1954 señaló escuetamente que “su construcción podría financiarse por capitales privados con la garantía de los ahorros en los gastos de operación” (Guevara 1954, 36).

En el primer gobierno de Paz Estenssoro (1952-1956) solo hubo avances en la realización de estudios. Se contrató a la firma alemana Krupp Lurgi para que analizara los procedimientos más adecuados para implantar las fundidoras, dadas “las características de nuestros minerales y las condiciones de clima de la zona minera” (Paz Estenssoro 1956, 28). Empero, el gobierno no tomaba en cuenta estos informes: la política económica se centraría en el desarrollo agropecuario y petrolero a través del fomento de la actividad privada. Poco o nada interesaba fomentar los hornos de

fundición, más aún cuando este proyecto chocaba con los intereses económicos de las plantas fundidoras de EE. UU., país que era el principal apoyo económico y financiero para el gobierno (Cajías 2015, 84).

Entre 1953 y 1964, Bolivia recibió USD 368 millones en ayuda de la potencia del norte, es decir, casi 35 millones anuales. En dólares de 2007 esto representa más de dos billones (o 187 millones anuales) de dólares, la mayor suma en términos per cápita entregada a cualquier nación latinoamericana (Field 2014, 30).

Para 1956, los resultados eran desalentadores: las fundiciones en Bolivia habían alcanzado niveles operativos mínimos: eran casi artesanales y ninguna procesaba industrialmente estaño, el mineral estrella del país. La firma Metabol, en Oruro, operaba una fundidora de plomo, plata y cobre; los hermanos Bernal, en Tupiza-Potosí, trabajaban en una fundición de plomo. En Cochabamba, se instaló una fundición de hierro con la firma Asin, con capacidad para 450 toneladas mensuales. En La Paz, la firma Hornet trabajaba con cobre, con capacidad para 50 toneladas mensuales (Paz Estenssoro 1956, 85).

El departamento de Potosí, que concentraba más del 50 % de la producción estanífera de Bolivia, fue el más perjudicado. Durante las siguientes décadas, sus minerales continuarían exportándose en bruto, carentes de todo valor agregado, lo cual reducía a cero sus posibilidades de desarrollo e industrialización.

La centralización y el saqueo de los recursos de los departamentos mineros

Para lograr el objetivo de desarrollar el capitalismo e integrar a la periferia cruceña al Estado a través del impulso del oficialismo, el MNR necesitaba un flujo de recursos en divisas que le permitiera fomentar la producción agrícola. Para ello, era preciso centralizar los recursos provenientes de la minería, cuya importancia era de tal magnitud que hacía imposible que se pensara prescindir de ellos a corto y mediano plazo. Entre 1952 y 1964 el promedio de participación de la minería en las exportaciones no bajó del 90 % y su participación en el PIB

de Bolivia fue del 15,5 % en 1952, 17,7 % en 1953 y 13 % en 1957 (Zondag 1968).

Si bien las políticas de diversificación del gobierno tenían como finalidad promover la producción de alimentos e hidrocarburífera, todavía no podían dar resultados inmediatos. El sector agropecuario aún no lograba generar los ahorros en divisas que se pretendía con el autoabastecimiento alimentario, y el petróleo todavía era una actividad comparativamente pequeña como para sustituir a los minerales en la generación de divisas (Morales y Evia 1995).

¿Cómo operó esta succión de recursos mineros potosinos? El Estado concentró casi la totalidad de la producción minera del país; producto de la nacionalización, 1622 minas ubicadas en 75 247 hectáreas pasaron a propiedad de la Comibol –creada el 2 de octubre de 1952–. Esta se hizo cargo de las tareas de explotación, exploración y comercialización de la producción de estaño, plata, wólfram, zinc y cobre, con un capital de USD 34,5 millones y una fuerza laboral que llegaba a los 29 000 trabajadores.²

Un factor decisivo en el proceso de despojo de los recursos de las regiones mineras fue la emisión del decreto de 2 de junio de 1952, que estableció el monopolio estatal sobre la exportación de minerales y designó al Banco Minero (Bamin) como única entidad autorizada para venderlos al exterior. Esto obligaba a todos los productores a entregar los minerales al banco “contra pago de su precio en moneda nacional y al tipo de cambio oficial de compra vigente el día de la operación” (Espinoza 2010, 113). El Bamin recibía montos en dólares por la venta de minerales y pagaba a los productores nacionales –entre ellos la Comibol– en moneda nacional.

No es difícil imaginar que, en un país aquejado por permanentes devaluaciones, el monto en moneda nacional que recibía la Comibol como pago por sus minerales era, en términos de capacidad adquisitiva, muy inferior a la cantidad en dólares. Como señala Morales,³ en

² Para 1952, la Comibol llegó a administrar las siguientes minas: Bolívar, Bolsa Negra, Caracoles, Catavi, Chorolque, Colquechaca, Colquiri, Huanuni, Japo, Kami, Matilde, Morococala, Porco, Pulacayo, Quechisla, San José, San Vicente, Tasna, Tatasi, Telamayu, Unificada y Viloco. La mayoría estaba en el Altiplano boliviano, a más de 4000 metros sobre el nivel del mar (Espinoza 2010, 124-125).

³ Juan Antonio Morales (exdirector ejecutivo del Banco Central de Bolivia), en conversación con el autor, septiembre de 2015.

realidad era una especie de impuesto indirecto a la minería: la Comibol tenía que ceder parte de sus utilidades a las arcas del Estado en unos niveles tan altos que dejaba a la empresa sin capital para encarar tareas de exploración y mejoras productivas. Esto afectó de manera dramática a Potosí, puesto que “de habersele permitido a la Corporación vender dólares al precio de mercado paralelo, hubiera rendido utilidades de 103,8 millones de bolivianos en lugar de las pérdidas de 10,2 millones de bolivianos” (Dunkerley 1987, 92).

Adicionalmente, la administración de la Comibol estaba fuertemente concentrada en el gobierno central, sin que las regiones productoras como Potosí tuvieran capacidad de representación y decisión en las políticas de la empresa. Según el decreto de 2 de octubre de 1952, la Comibol tendría un directorio formado por siete miembros nombrados por el Poder Ejecutivo mediante resolución suprema, dos de los cuales serían elegidos de una terna propuesta por la FSTMB (Honorable Cámara de Diputados 1952).

En este sentido, todos los gobiernos utilizaron directamente los recursos de la Comibol sin consultar con las regiones productoras. Una buena parte se destinó a financiar proyectos en otros rubros y departamentos, pero muy poco para su propio desarrollo. En 1956, la Comibol contribuyó con USD 30 millones a la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) y con USD 10 millones a la empresa estatal de petróleo Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). De acuerdo con la empresa norteamericana Ford, Bacon and Davis (que durante el gobierno de Siles realizó un amplio estudio sobre la minería en Bolivia en 1957), la Comibol apenas necesitaba de USD 2,25 millones para corregir sus propias dificultades estructurales, y así mejorar su capacidad productiva y salir de su crisis (Dunkerley 1987, 92-93).

Además, la Comibol se constituyó en fuente de empleo para los acólitos del gobierno de turno, lo que disminuyó su productividad y restó su capacidad económica. En los primeros años del gobierno del MNR, el número de trabajadores en las minas aumentó de 28 973 en 1952 a 36 558 en 1956 (Lavaud 1998, 46) y el sector público alcanzó tal magnitud que, en los años posteriores a 1952, llegó a representar un 35 % del PIB (Zondag 1968, 103).

Para resaltar el uso político de los cargos en la Comibol, es necesario puntualizar que los nuevos puestos, en su gran mayoría, estaban ubicados

fuera de las minas, en tareas burocráticas ubicadas en La Paz, donde se configuró una casta de funcionarios tan gigantesca como ineficiente. En 1967, cerca de la tercera parte de los 22 250 empleados de la Comibol desempeñaban tareas de escritorio. De los 14 700 trabajadores nominales solo 7600 trabajaban en la roca (Dunkerley 1987, 92). Este es un rasgo del nuevo Estado de 1952, cuyo dominio y estabilidad dependía de una lógica clientelar que necesitaba los recursos de la Comibol para mantenerse.

Esta situación llevó a la Comibol a un proceso de creciente empobrecimiento y, a finales de los sesenta, al borde del colapso. Según el investigador Melvin Burke (1987, 10), las inversiones brutas de la Comibol entre 1952 y 1956 no superaron los USD 8,5 millones, mientras que el volumen de ventas brutas de la empresa, en ese mismo periodo, fue de USD 164 millones. La Comibol utilizaba muy poco de sus propios recursos para realizar tareas de exploración y descubrimiento de nuevas vetas. “Aunque no existe una estimación de la cantidad que Comibol gasta en la localización de nuevas reservas de mineral, es claro que esta empresa no utilizó ni el 5 % de sus ingresos brutos en exploración, un nivel considerado por los expertos como el mínimo necesario” (Burke 1987, 11).

Diez años después de la revolución nacionalista, el panorama era de crisis: la Comibol había bajado su producción de 25 245 toneladas métricas finas (TMF) en 1952 a 12 879 TMF en 1960 (Espinoza 2010, 155), un descenso del 50 %. La situación se volvía todavía más dramática debido a la disminución de las cotizaciones de minerales en el mercado mundial. El gobierno no solo centralizaba los recursos mineros y los utilizaba para sus objetivos de política pública, dejando de lado a los departamentos productores, sino que lo hacía de una manera tan irresponsable, tan poco previsor, que terminaba por dañar la propia fuente de riqueza minera y ponía en riesgo el proyecto diversificador que tanto esfuerzo costaba.

A primera vista, resulta incomprensible que el gobierno confabulara contra la Comibol, descapitalizándola, burocratizándola y afectando de manera irremediable la fuente más importante de sus recursos económicos. Sin embargo, todo se comprende mejor al analizar varias políticas económicas implementadas por el MNR, que buscaban menoscabar la fuerza política del sindicato minero (Burke 1973, 179). Como señala Malloy

(1989, 380), en referencia al Plan Eder de estabilización económica de 1957, este hacía recaer sobre los hombros de los mineros el peso de las medidas económicas a través de despidos y congelamiento de salarios. “Era una estrategia económica que conllevaba una táctica política cuya meta fue la eliminación de la COB como fuerza política decisiva”.

Como producto de este irresponsable manejo, para fines de la década de los cincuenta del siglo XX, la Comibol era una empresa permanentemente deficitaria. Para paliar la crisis, en 1960 se puso en marcha el Plan Triangular –con el apoyo combinado de Estados Unidos, el Banco Interamericano de Desarrollo y Alemania Federal–, que despidió a trabajadores de las empresas mineras, fomentó la minería privada mediana y el ingreso de capitales extranjeros para explotar recursos. Sin embargo, los resultados fueron desalentadores: si bien se destinaron unos USD 36 millones para comprar maquinaria, esto no ayudó a la producción porque se continuaba trabajando en vetas agotadas que aumentaban los costos de producción. De hecho, el Plan Triangular solo destinó USD 5 millones para la exploración que, según los expertos, era una cantidad insuficiente para una empresa del tamaño de la Comibol (Burke 1987).

Contra toda evidencia, según el discurso oficial la responsabilidad de la crisis recaía sobre los trabajadores mineros. En 1957, se contrató a la firma Ford, Bacon and Davis para que realizara un estudio de la situación de la minería en Bolivia. Una de las conclusiones a las que llegó fue que la raíz de los problemas de la Comibol no era de índole administrativa, sino de orden humano: el elevado costo de los obreros, los servicios sociales que se les había otorgado y la falta de disciplina laboral (Malloy 1989, 379). Esto devino en un formidable mecanismo de legitimación de las políticas antiobreras de los sucesivos gobiernos; el discurso oficial no dejaría de repetir que el origen de los problemas en la minería y, por ende, de la economía nacional era que en las bocaminas había gente floja, indisciplinada y carente de visión nacional.

Los efectos de la debacle de la Comibol sobre el desarrollo de los departamentos mineros fueron dramáticos. Entre los censos de 1950 y 1976, la población de Potosí apenas había crecido en 148 000 personas, cuando en Santa Cruz había aumentado en 466 000. Los potosinos, aquejados por la falta de perspectivas económicas y de empleo en su propio territorio, optaron por migrar a otros departamentos o países.

Los gobiernos militares y los departamentos mineros

Con el arribo al gobierno del general René Barrientos, en noviembre de 1964, empezó un ciclo de desnacionalización de los recursos naturales que fue fatal para las regiones mineras. Estas quedaron sin capacidad de reacción puesto que se proscribió al sindicato minero, su principal actor. Barrientos representaba el agotamiento de la capacidad económica del Estado para satisfacer a todos los actores con poder. Entre mantener su alianza con los mineros o seguir apoyando a los grupos de poder cruceños, optó por lo segundo.

En este gobierno se disminuyeron abruptamente los salarios en un 40 %, se prohibieron las huelgas, se desconocieron las direcciones sindicales y se envió al Ejército para que ocupara las minas; estas acciones fueron resistidas por los mineros a un costo altísimo. En 1964, como resultado de un enfrentamiento con los mineros de Siglo XX-Catavi, hubo 82 muertos, 200 heridos, 139 exilados y 400 despedidos. Tres años después, en 1967, en la Noche de San Juan, se ordenó un nuevo ataque a Siglo XX-Catavi, con el resultado de 26 muertos y 80 heridos.

En mayo de 1965 se aprobó el Código de Minería, que redujo el área de seguridad de la Comibol de diez a cinco km, lo que permitió que zonas mineras controladas por la empresa estatal pudieran ser transferidas al capital privado; adicionalmente, se rebajaron las regalías mineras y se permitió la libre exportación, anulando así el monopolio del Bamin en la comercialización de minerales.

En este contexto, la producción de las empresas privadas medianas se elevó, mientras que la de Comibol decayó (tabla 2.1).

Este repunte de la minería privada boliviana tiene estrecha relación con la inversión extranjera. Entre 1964 y 1969, de los USD 34,9 millones de inversión en la minería privada, USD 34,4 millones provienen del capital extranjero, un 98 % del total.

En 1967 se llegó a un acuerdo entre la Comibol y dos empresas mineras estadounidenses: la Mining and Processing Corporation adquirió plenos derechos para explotar las colas y desmontes de la mina Catavi, ubicada en el departamento de Potosí, con un valor que alcanzaba a los USD 3500 millones, y la empresa Philip Brothers obtuvo la concesión de la mina Matilde, cuyas reservas de zinc, plomo, plata y cadmio estaban valoradas en USD 200 millones (Dunkerley 1987, 165).

Tabla 2.1. Producción de la minería privada y estatal, 1963-1968
(en miles de toneladas métricas)⁴

Año	Minería mediana privada	Comibol
1963	27,0	26,0
1964	35,0	28,0
1965	35,0	27,0
1966	43,0	33,0
1967	47,0	32,0
1968	48,3	34,5

Fuente: Burke (1978).

Nota: En el cuadro se contempla la producción de estaño, plomo, antimonio, wolframio, cobre y zinc.

Empero, todas estas inversiones y repunte de la minería privada no generaron beneficios en términos de industrialización y empleo en regiones mineras como Potosí. El pago por impuestos mineros fue tardío y exiguo, mientras que las utilidades de las mineras llegaron a los USD 320 millones. A la vez, la cantidad de mano de obra empleada subió muy poco: de 4910 trabajadores en 1964 a 5819 en 1969 (García Linera 2014, 72).

Por otro lado, a pesar de que la minería mediana trajo consigo notables mejoras tecnológicas y mayor productividad, no se creó una industria local ni diversificación económica. Estas empresas formaron grupos empresariales que invirtieron en otros rubros y departamentos. Por ejemplo, el Consorcio Corporación Minera del Sur (Comsur), de propiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada, que explotaba minas potosinas como Río Potosí, Porco, Ocuri, Caballo Blanco y Huari Huari, invirtió sus capitales en el Banco de Cochabamba, en empresas de servicios como INSA y en agroindustriales como Agrinorsa, Agronor y SAAB. De la misma forma, la Empresa Minera Unificada Sociedad Anónima (Emusa) invirtió en el Banco Hipotecario y el Banco Industrial, en empresas agroindustriales como Sofocam, La Loma y en Seguros Unión (García Linera 2014, 76).

⁴ Cabe aclarar que las toneladas métricas (sin el adjetivo *finas*) se refieren al mineral tal como se extrae de la mina, sin haber pasado por el proceso de purificación en un ingenio minero.

En suma, durante los gobiernos militares se estimuló la expansión de la minería mediana en las regiones explotables al otorgar una serie de facilidades, lo que produjo un momento de auge. Sin embargo, a diferencia de Santa Cruz, donde el arribo de inversión extranjera coadyuvó al fortalecimiento económico de la región, el empresariado minero asentado en Potosí, como ya vimos, prefirió destinar sus excedentes a otros sectores y regiones como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Para 1976, solo el 13 % de la PEA de Bolivia se encontraba en Potosí, lo que tendió a empeorar, puesto que este porcentaje bajó a 10,33 % en 1992 y a 7,89 % en 2001 (INESAD 2017).

Santa Cruz, la periferia activa que apareció en 1952

En Santa Cruz no surgió nada similar al sindicato minero; de hecho, apenas 62 personas trabajaban en minas. Existía una clase obrera, concentrada en el rubro de ferrocarriles, con 848 personas, y en la construcción, con 1176 trabajadores. El grueso de la PEA se dedicaba, sobre todo, a la agricultura y a la ganadería, con 62 600 personas, que representaban el 69 % del total (Dirección General de Estadísticas y Censos 1955).

El rubro de la agricultura estaba ampliamente dominado por “una oligarquía local de carácter rural, que se había apropiado de la mayoría de las tierras” (Lavaud 1998, 278) y, en virtud de ese poder, ejercían los principales cargos tanto en las agencias locales del Estado como en la administración pública, la policía y la justicia. El poder de este grupo siguió intacto luego de la revolución, puesto que la reforma agraria no llegó al espacio rural cruceño, donde existían pocos brazos para la agricultura y, por tanto, poca presión social por la redistribución de la tierra.

Sin un aliado lo suficientemente poderoso en el departamento y a pesar de la gran cantidad de recursos que destinaba a su desarrollo e industria, el gobierno no pudo articular el espacio político cruceño a su alrededor. Todos los intentos de control por parte de la periferia cruceña suscitaron resistencia local con derivaciones violentas. Como señalan los estudiosos de este periodo, “durante los años cincuenta, en Santa Cruz se vivió una prolongada crisis de autoridad” (Whitehead 1973, 7); el departamento era “un campo de batalla entre las facciones locales más

radicales del MNR, los grupos de poder local y la violenta oposición al gobierno revolucionario por parte de grupos ultraderechistas” (Burbano de Lara 2014, 83). Esta inestabilidad tuvo su cabal reflejo en la cantidad de prefectos (21) entre 1952 y 1956 (Whitehead 1973, 7).

En Santa Cruz aparecieron “poderes regionales que generaron que el Estado central controlara su territorio solo de manera indirecta, pues debía negociar con estos poderes intermediarios para poder gobernar” (Vergara 2015, 111). Estos poderes locales concebían el cambio político de la revolución en términos de una integración regional de oriente y occidente, que colocaba en el debate las relaciones entre región, Estado y nación (Burbano de Lara 2014, 83).

Los grupos de poder local –buena parte de ellos agrupados en torno a la conservadora Falange Socialista Boliviana (FSB)– se atrincheraron en torno al Comité Pro Intereses de Santa Cruz, fundado el 30 de octubre de 1951, que logró articular a una diversidad de organizaciones de la sociedad civil para enfrentar al MNR. Para el gobierno no fue nada fácil imponer su proyecto centralista en la periferia cruceña. Santa Cruz planteó un proyecto político que combinaba identidad local con defensa de espacios de autogobierno y no estaba dispuesta a retroceder en la administración de las instituciones locales (Prefectura, comandancia de la región militar y dirección del Comité de Obras Públicas), pero sobre todo, en aquellas que tenían que ver con su desarrollo local.

Los recursos por regalías de explotación hidrocarburífera sirvieron como base para cambios positivos en la economía y perspectivas del desarrollo cruceño: para 1949 el 78 % de los ingresos departamentales de Santa Cruz eran producto del cobro de impuestos a la actividad petrolífera; en 1955, las regalías llegaron a representar un 96 % del total de ingresos departamentales. Esto fortaleció a la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz (Cordecruz) como mecanismo técnico de asignación de recursos y ejecución de obras. El departamento cruceño, a través de Cordecruz “fue capaz de darse a sí mismo (desarrollo) con trabajos públicos y servicios esenciales que había demandado por mucho tiempo, viviendo un periodo de excepcional prosperidad” (Roca, citado en Burbano de Lara 2014, 199).

La base del discurso cruceño es un memorándum de 1904, donde se interpretaba como abandono gubernamental la débil implantación

territorial del Estado en Santa Cruz. Los autores de este documento estaban agrupados en torno a la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos de Santa Cruz. Según ellos, el nuevo centro administrativo ubicado en La Paz, luego de la guerra federal de 1899,⁵ olvidaba y daba la espalda a su departamento. Según el memorándum, el “centro administrativo andino” había abandonado a la región cruceña confabulando contra sus intereses y “otorgando franquicias aduaneras a productos de Perú y Chile, en desmedro de la producción oriental, que había abastecido los mercados mineros desde la época colonial con azúcar, arroz, cuero y cebo” (Sandoval 2003, 227).

Esplendor y pobreza, las claves de la identidad potosina

Antes de analizar cómo la periferia potosina respondió a las políticas de los gobiernos, conviene repasar las fuentes de las que se nutre la identidad regional potosina. Veremos cómo la historia potosina está llena de referencias a su opulencia y esplendor, pero también a su pobreza y marginación. Son aspectos que se recrean en los colegios, en las conversaciones diarias, en las composiciones musicales, en las celebraciones patrias. En conjunto, generan un sentimiento de agravio con respecto al accionar del Estado, al tiempo que se exagera el relato sobre las riquezas naturales potosinas. Más adelante en este libro, al abordar el tema de las movilizaciones y protestas de Comcipo, se verá que la identidad potosina es el elemento que cohesiona y moviliza.

Durante la Colonia, a las faldas del famoso cerro Rico, se estableció la ciudad de Potosí, la cual acogió a una diversidad de personajes que, atraídos por sus vetas, hicieron de ella una de las más populosas del mundo y un centro dinamizador de la economía regional y global. En 1547, a 18 meses de su fundación, esta urbe ya contaba con 14 000 habitantes, alcanzando los 150 000 en 1611, para llegar, finalmente, a 165 000 en 1625 (Mendieta 1988). Esta cifra, extraordinaria para la

⁵ En 1899 estalló una guerra federal entre Sucre y La Paz. El bando paceño, que estuvo constituido por el partido liberal, aseguraba que luchaba por implantar en el país un modelo federal. No obstante, se trató de una pugna por la capitalía, por la sede de gobierno, que hasta ese momento estaba en la ciudad de Sucre. Desde 1900, los poderes Ejecutivo y Judicial pasaron a estar definitivamente en la ciudad de La Paz (Condarco 1965).

época, ubicó a Potosí entre las cinco ciudades más pobladas del mundo; de hecho, llegó a ser la urbe más populosa de América y, a nivel mundial, la tercera más importante después de París y Estambul, cuyas poblaciones llegaban a 325 000 y 650 000 habitantes, respectivamente (PNUD 2015, 59).

Un historiador de la época, Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela (1975), la describe, alrededor de 1705, como una urbe donde conviven la opulencia, la religiosidad y el arte. A comienzos del siglo XVII, Potosí tenía 36 iglesias espléndidamente ornamentadas, otras tantas casas de juego y 14 escuelas de baile. Había salones de bailes, teatros y tabladros para las fiestas que lucían riquísimos tapices, cortinajes, blasones y obras de orfebrería. La “Villa Imperial fue habitada por una sociedad tan rica y desordenada como el mundo apenas había visto antes” (Hanke 1959, 10).

En las casas de los mineros más ricos, circulaban todo tipo de perfumes, joyas, porcelanas y objetos suntuosos, y se dice que hasta las herraduras de los caballos eran de plata (Mendieta 1988). A finales del siglo XVIII, la urbe potosina contaba con varias iglesias lujosamente adornadas: Santa Bárbara, San Lorenzo, Concepción, San Cristóbal, San Francisco el Chico, Copacabana, Santiago, San Benito, San Juan, San Bernardo, San Sebastián y San Martín. Los dos edificios monumentales fueron la Casa de la Moneda y la Catedral (Varela 2000, 135).

En 1553, la Corona española concedió a la ciudad de Potosí el título de Villa Imperial de Potosí y un escudo donde se podía leer: “Soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro, de los montes soy el rey y envidia soy de los reyes”.

Muy pronto, la fama de la riqueza potosina se extendió por el mundo: Miguel de Cervantes, en su famoso libro *Don Quijote de la Mancha*, escribió un pasaje donde el conocido hidalgo dice a su escudero Sancho: “Si yo te hubiera de pagar, Sancho –responde don Quijote– conforme merece la grandeza y calidad deste remedio, el tesoro de Venecia, las minas de Potosí fueran poco para pagarte” (Cervantes, citado en Botta 2016, 45). Por su parte, el matemático y cartógrafo jesuita Mateo Ricci incluyó a Potosí en su mapamundi chino con el nombre de *Pei-tu-shi* (Varela 2000, 134).

Todo esto no era casual: la producción de plata potosina tuvo mucha importancia para la Corona española y para formar una economía

global a partir del siglo XVI; el mineral llegó a conectar Potosí con las economías europea y china (Zagalsky 2017, 12). Entre 1556 y 1600, la producción llegó a su punto máximo: representó el 45,9 % de toda la plata extraída en la Audiencia de Charcas y el 42 % de la producción mundial. Luego bajó a 35,9 % entre 1601 y 1700, para descender aún más, al 11,7 %, entre 1701 y 1880 (Arce 2003, 72).

Naturalmente, el destino de la ciudad siempre estuvo ligado a la minería. Los momentos de auge y depresión de la actividad minera coincidieron con las bonanzas y crisis de Potosí. En 1825, fecha en que Bolivia declaró su independencia política de España, la minería potosina pasaba por una de sus peores crisis. “Si en 1793 había 40 ingenios y varios centenares de minas en explotación, para 1825 solo seguían funcionando 15 ingenios y unas 50 minas. Veinte años después, en 1846, se calculaban unas 10 000 minas abandonadas” (Klein 2008, 122). Entre las causantes de la debacle estaban: la menor ley de los minerales, la destrucción de las maquinarias mineras en la guerra de la Independencia, la inundación de socavones, la escasez de capitales y el irregular y alto precio del mercurio (Mitre 1981, 22).

Esto tuvo un impacto negativo en la población. Joseph Pentland (1975, 58) señala que “en 1827 (la población potosina) apenas llegaba a 9000 personas, una considerable caída, ya que es bien sabido que, hacia fines del siglo XVIII, Potosí contaba con cerca de 75 000 y en un periodo más remoto llegaba a las 100 000 almas”.

A mediados del siglo XIX, ya en la República, la crisis minera fue superada. Los mejores precios de la plata, el ingreso de capitales extranjeros, el uso de la maquinaria a vapor, la reducción de los costos del mercurio y la construcción de ferrocarriles causaron que la minería tuviera un repunte. “Bolivia pasó a ser uno de los mayores productores del mundo de plata refinada” (Klein 2008, 145). En este contexto, “nuevamente el departamento de Potosí se constituyó en el centro vital del renacimiento argentífero de la segunda mitad del siglo [...] con minas como Pulacayo, Colquechaca, Guadalupe, Real Socavón y Aullagas” (Mitre 1981, 21), aunque en menor escala en el cerro de Potosí. Esta bonanza tuvo como actores principales a empresarios mineros como Aniceto Arce, Gregorio Pacheco y Avelino Aramayo. En 1856, Arce compró la empresa minera Huanchaca, que explotaba las minas

de Porco de Potosí; en los mismos años, Aramayo adquirió la compañía minera Real Socavón de Potosí, y en 1855, Pacheco se hizo de la mina de Guadalupe en la provincia Chichas de Potosí (Klein 2008, 145).

A finales del siglo XIX, la plata dejó de ser el principal mineral exportable y fue sustituida por el estaño; nuevamente, Potosí fue el lugar clave durante este auge. Como las minas de estaño se encontraban en los mismos sitios que las de plata, los empresarios pudieron aprovechar estos enclaves y la red de comunicación ferrocarrilera construida en décadas previas. Simón I. Patiño, el más grande productor de estaño, compró sus primeras acciones de una mina en Oruro, en el cantón Uncía, en la frontera con Potosí. Para 1905, su mina, La Salvadora, era la más grande de Bolivia; para 1924 controlaba el 50 % de la producción de estaño y empleaba a 10 000 obreros (Klein 2008, 178). En 1924, Mauricio Hochschild formó la Compañía Minera Unificada del Cerro y explotó la ingente cantidad de desmontes acumulados durante los cuatro siglos de explotación de plata (Barragán 2017, 32).

La otra cara de la minería potosina es la de la explotación, la muerte y el dolor. Quienes se encargaban de la gigantesca explotación argentífera eran nativos que cumplían con “la mita”, que era la obligación que tenían los indios de trabajar por un tiempo en las minas de la Corona. Se calcula que el contingente anual de mitayos rondó las 13 400 personas, que eran sometidas a bajas remuneraciones, castigos y desarraigo (Zagalsky 2017). “La deslumbrante plata que chorreaba de sus minas estaba frecuentemente teñida de sangre. Generosa para unos, perversa para otros [...], la opulencia de la ciudad se levantaba sobre la miseria de los hombres que trabajaban en los socavones” (Francovich 1980, 75).

En 1565, Luis Capoche (1959, 159), en su “Relación General de la Villa Imperial de Potosí”, describía el panorama desolador del trabajo de los indios:

Ordinariamente [a los indios] los bajan muertos y otros quebradas las cabezas y piernas, y en los ingenios cada día se hieren. Y solo el trabajar de noche y en tierra tan fría y asistir al mortero, que es lo que más trabajo por el polvo que reciben en los ojos y la boca, basta para hacerles mucho daño. Y así está el hospital lleno de indios heridos, y mueren cada año más de cincuenta que esta fiera bestia se traga vivos.

La crueldad y explotación a los indios era agravada por un sistema judicial que no atendía sus reclamos, que “se perdían entre la maraña de vínculos, tensiones y conflictos que existían entre los propios oficiales y entre los miembros de la élite” (Zagalsky 2017, 32).

Toda esta historia que se configura en torno al cerro Rico –cuya riqueza fue acrecentada por quienes se acercaron a narrar la historia de la ciudad– ha producido un imaginario que es clave para entender la identidad potosina. Por ejemplo, para Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela (citado en Francovich 1980, 74) el cerro es “poderoso, siempre máximo, riquísimo e inacabable [...]. Alegría de los mortales, imán de voluntades, base de todos los tesoros, monstruo de riqueza, cuerpo de tierra y alma de plata, único milagro de la naturaleza, perfecta y permanente maravilla del mundo”.⁶

Por su parte, León Pinelo (citado en Francovich 1980, 72) llegó a afirmar que el paraíso había estado en el centro de América del Sur, ya que “con la plata extraída del cerro podría haberse construido un puente de plata entre Potosí y Madrid con 2070 leguas de extensión y 14 varas de ancho y cuatro dedos de espesor”.

Es natural que tanto Arzáns como Pinelo hayan descrito la riqueza de la zona en esos términos, porque ellos formaron parte o fueron testigos de la magnificencia de Potosí cuando estaba en su momento de esplendor, o este recién había pasado, y recibieron los testimonios de quienes vivieron el periodo de bonanza potosina, que parecía infinito.

Lo interesante es que estas versiones han permanecido en el imaginario colectivo hasta configurar la identidad potosina, al punto que han moldeado el modo de pensar la historia de amplias capas de la población y, por medio de diferentes mecanismos, se reactualizan hasta hoy. Dice Francovich (1980, 60): “El cerro que tiene un lugar en la geografía del planeta y que sigue produciendo minerales como otros cerros, fue convertido por el mito en un objeto de adoración y de pavor, cuyo embrujo continúa sintiéndose en nuestros días”.

Armando Alba ([1943] 2001, 20) publicó en 1943 el libro *Imagen de Potosí y de su Casa Real de Moneda*, donde no ahorró calificativos para

⁶ Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela (1676-1736) dedicó 30 años de su vida a la escritura de la *Historia de la Villa Imperial de Potosí*. A pesar de la importancia literaria de la obra, recién se publicó completa en 1975 gracias al trabajo de los historiadores Lewis Hanke y Gunnar Mendoza.

destacar la riqueza potosina y de su cerro, pero también denunció el costo en vidas humanas que implicó su explotación.

El cerro Rico se entregó en prodigalidad inigualable a quienes huro-neaban en su entraña cual si fuese un arca nutrida del mayor caudal de la tierra. Hombres de toda catadura ascendían desde los cuatro puntos cardinales hasta el lugar, precediendo a las innumerables caravanas de indios mitayos, que por tres siglos fueron trágica *theoría* de servidumbre y muerte. La montaña en trueque de su argento exigía el holocausto de muchas vidas humanas para hacer más patética la oquedad de los socavones. El cerro voraz, sin embargo, dio vida perdurable y opulenta a la ciudad fabulosa, que los reyes agradecidos blasonaban con los timbres de imperial y fidelísima.

Alba también señaló que la riqueza potosina resultaba inútil, pues solo servía para que otros se hicieran ricos, pero nunca para la propia ciudad. Esta idea fue utilizada por José Enrique Viaña ([1948] 2016, 141) en su novela histórica –ambientada en los siglos XVII y XVIII, en la Colonia– *Cuando vibraba la entraña de plata*. En este relato, uno de los personajes, al discurrir sobre la situación de pobreza por la que pasaba la ciudad de Potosí, dice a su interlocutor:

¿No veis que solo vascos y sus parciales han derecho de labrar ingenios?
¿Que solo ellos poseen azogues e que nunca piensan en asentarse en la villa e solo buscan llenar sus arcas e partirse a España o a otras tierras más benignas? ¿No veis que solo los que acá nacieron e miraron de niños estas breñas e hicieron sus juegos e sus batallas en las calles y plazas aman de veras esta Villa e desean acrecentarla?

Por otro lado, el huayño “Potosino soy”, compuesto en 1938 por Humberto Iporre, se convirtió rápidamente en el segundo himno de los habitantes de la ciudad. Su letra recoge la identidad potosina.

Potosino soy de la rica tierra,
Potosino soy de la tierra buena,
Donde el indio toca su quena,
Donde el indio toca su quena.

Yo canto esta canción, a la noble cuna,
Del bravo sin igual, Alonso de Ibáñez,
Y a la tierra de los vicuñas,
Y a la tierra de los vicuñas.

Tierra mía y generosa, tierra mía y generosa,
A ti, suelo querido y olvidado,
Yo te nombro y te canto, yo te nombro y te canto,
Por Bolivia, patria hermosa.

Llama la atención que la idea de saqueo de las riquezas potosinas también sea compartida por otros escritores fuera de Bolivia. Eduardo Galeano (2004, 51), en su popular libro *Las venas abiertas de América Latina*, dice:

En nuestros días, Potosí es una pobre ciudad de la pobre Bolivia: “La ciudad que más ha dado al mundo y la que menos tiene”, como me dijo una vieja señora potosina, envuelta en un kilométrico chal de lana de alpaca, cuando conversamos ante el patio andaluz de su casa de dos siglos. Esta ciudad condenada a la nostalgia, atormentada por la miseria y el frío, es todavía una herida abierta del sistema colonial en América: una acusación. El mundo tendría que empezar por pedirle disculpas.

Todo esto ha configurado la identidad del potosino, que gira alrededor de la idea de haber sido el corazón de la vida económica de Europa, de tener en su ciudad un portento de montaña, hogar de los yacimientos de minerales más grandes del mundo, pero no recibir nada a cambio; haber sido el motor que ayudó al mercantilismo europeo solo para llegar a ser una ciudad pobre y abandonada. Esta mentalidad e identidad, convertida en agravio, nutre la identidad potosina y, como veremos, le da sentido y fuerza a sus movilizaciones.

El centro histórico de Potosí es la prueba más palpable de la situación contradictoria de este departamento: está lleno de edificios que ostentan la opulencia de la ciudad colonial, pero su deterioro o ausencia de conservación evidencian su pobreza y marginación. Es este imaginario el que dota de contenido discursivo a la identidad potosina: esta urbe lo ha dado todo al Estado central, y lo sigue haciendo, pero no recibe nada a cambio, o no en la magnitud de lo que entrega.

Un aspecto central, y hasta cierto punto natural, a considerar es que esta identidad se conecta con la ideología nacionalista. Toda la narrativa desarrollada en torno a la explotación del cerro de Potosí se maneja como el mayor ejemplo del saqueo de las riquezas bolivianas por el extranjero. Tanto el regionalismo potosino como el nacionalismo boliviano se fundamentan en la misma idea: los de fuera vienen a Potosí y a Bolivia a explotar sus riquezas naturales, sin dejar nada a cambio, solo desolación y pobreza. De esta manera, la historia de la Villa Imperial es también la historia del petróleo, de la madera o de la goma, el ejemplo vivo y palpable del saqueo del país.

En consecuencia, cuando se dio la revolución de 1952, la identidad regionalista potosina, en lugar de contradecir la identidad emitida desde el centro estatal, terminó por ensamblarse a ella, impidiendo que su identidad regional se politizara, lo que alejó la posibilidad de emergencia de un clivaje territorial.

Potosí en 1952

Unos años antes de 1952, Potosí era uno de los departamentos más importantes de Bolivia, aunque con poca industrialización. Contaba con 534 399 personas, lo que la convertía en la segunda ciudad más poblada de todo el país (La Paz tenía 948 446 habitantes; Cochabamba, 490 475 y Santa Cruz, 286 145). En las zonas urbanas de Potosí vivían 124 284 personas, mientras en La Paz esta cifra ascendía a 406 711 y en Santa Cruz, a 105 600 (Dirección General de Estadísticas y Censos 1955).

La escasa industrialización provocaba que un 80 % de la PEA de Potosí trabajara en actividades agrícolas (220 963 personas), y apenas 7,6 % del total se dedicara a la actividad minera; el resto se ocupaba en la fabricación de prendas de vestir (0,81 %), la construcción (0,74 %), el comercio (1,6 %) y los ferrocarriles (0,57 %) (Dirección General de Estadísticas y Censos 1955).

Como la minería era la actividad más importante del departamento, casi todas las demás se vinculaban con ella. En la ciudad funcionaban tres entidades financieras y crediticias: el Banco Central, el Banco Minero y el Banco Nacional de Bolivia (de propiedad del magnate minero Simón

Patiño), además de tres compañías financieras y dos cajas de préstamo. Existían tres instituciones que agrupaban al sector empresarial: la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria y el Comité de Importaciones.

La ciudad contaba con centros de salud como el Hospital Daniel Bracamonte y el Hospital Sanatorio de la Corporación Minera Unificada del Cerro de Potosí. En la urbe funcionaban los consulados de España, Francia, Gran Bretaña y Perú, y tenía dos clubes sociales: el Club Internacional y el Club Potosí.

A finales de los años cuarenta, la ciudad contaba con 23 centros educativos de primaria y secundaria, y había 22 conjuntos artísticos, entre los que se destacan el conjunto Arte y Trabajo, con 70 ejecutantes de música de cuerdas, y el conjunto Koyllur (Saracho 1947).

Antes de la reforma agraria, a una distancia entre 50 y 100 km de la ciudad, se encontraban varias haciendas: Siporo, La Lava, Otavi, Toropalca, Vitichi, Tumusla, Samasa, Don Diego, Manquiri, Miraflores, Mondragón, Cayara, Totorá, Turuchipa y Tuctapari; y, al Sur, en el territorio de los chichas, la hacienda de Chajrawasi. Estos lugares producían alimento para la urbe y eran espacios (por su clima y su menor altitud) para el descanso de los habitantes de Potosí (Mendieta 1988, 87).

Si bien la identidad minera de Potosí arrancó con el descubrimiento de las vetas del cerro Rico, estas no son las únicas del departamento. Al norte se encuentran varias de similar relevancia: Catavi, ubicada en la provincia de Bustillos, y la Empresa Unificada del Cerro de Potosí y Pulacayo, en la provincia de Antonio Quijarro (Espinoza 2010).

Para comprender mejor la importancia de las minas potosinas, la tabla 2.2 muestra su producción durante el periodo 1952-1959. Como se puede constatar, en conjunto, aportan más de la mitad de la producción minera de Bolivia, en buena parte gracias a las empresas Catavi, Unificada del cerro de Potosí y Tasna.

Un repaso sociológico sobre lo que sucedía en el departamento destacaría a los siguientes actores. Por una parte estaban los sindicatos mineros, que agrupaban más o menos a 12 000 trabajadores. Ellos eran parte del MNR y gozaban de gran legitimidad y de presencia ante el régimen; uno de sus máximos dirigentes, Juan Lechín, fue ministro de Minas. En estos sindicatos existían tres corrientes que se disputaban el liderazgo: el Partido Comunista de Bolivia (PCB), el Partido Obrero Revolucionario (POR) y el Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR).

Tabla 2.2. Producción de estaño de la Comibol, 1952-1958

Empresa	Ubicación	Pesos finos (kilos)			
		1952	1954	1956	1958
Catavi	Potosí	10 549 760	8 458 440	8 404 412	6 809 592
Ocuri	Potosí		97 717	29 015	
Huanuni	Oruro	4 118 832	4 472 885	3 466 592	2 680 108
Japo	Oruro	39 883	55 860	66 335	86 388
Colquechaca	Potosí	20 024	59 494	62 268	11 153
Viloco	La Paz	505 039	139 897	82 397	141 450
Kami*	Cochabamba	7 530	743		1 856
Unificada	Potosí	2 309 155	2 273 843	1 924 400	1 104 095
Colavi	Potosí	305 073	219 751	171 099	82 031
Colquiri	La Paz	4 178 108	4 831 961	4 495 116	3 501 826
Morococala	Oruro	238 512	169 375	198 917	233 685
San José	Oruro	1 949 773	1 853 069	1 537 070	1 040 271
Caracoles	La Paz	964 458	447 417	333 816	423 467
Tasna	Potosí	1 015 629	700 546	710 230	326 066
Oploca Santa Ana	Potosí	374 277	709 335	528 709	67 743
Chorolque	Potosí	770 849	945 739	560 659	316 800
Santa Fe	Oruro		416 345	454 601	556 737
Chorolque Telamayu	Potosí				1 208
Totales		27 346 902	25 850 417	22 996 621	17 384 476

Fuente: Bedregal (1959).

* La unidad de medida del mineral de estaño puede darse por kilos o por toneladas (mil kilos). El adjetivo finos quiere decir que es un mineral que ha pasado por el ingenio minero y es el producto que se comercializa. Agradezco al ingeniero de minas René Vacaflores P. por los datos.

También había un grupo de mineros de origen indígena, los *kajchas*, que se desenvolvían en condiciones tecnológicas y de trabajo precarias. Ellos no formaron parte de la revolución y, por tanto, tuvieron una influencia limitada sobre el gobierno, desconfiaban del poder alcanzado por los mineros sindicalizados y de la fundación de la Comibol, ya que representaban un freno a sus ambiciones en torno a los espacios mineros.⁷

Otro actor era la minería privada mediana que, con la revolución de abril, perdió su capacidad de influencia sobre el Estado, lo que se reflejó en su participación en las exportaciones mineras. La producción estañífera disminuyó en un 39,4 % entre 1950 (4386 TMF) y 1957 (2658 TMF) (Contreras 1989, 15)

Por último, se encontraban las clases medias ciudadinas que trabajaban en los ferrocarriles, la universidad, las escuelas, los bancos, los hospitales, los centros médicos y los comercios que funcionaban en la ciudad.

Postergación de Potosí y el nacimiento de instituciones cívicas

Desde el inicio del gobierno de Víctor Paz Estenssoro, la población potosina constató que su departamento estaba relegado de los proyectos de modernización económica: los recursos y obras que las autoridades proyectaban para Potosí eran magros y ninguno estaba destinado a mejorar su capacidad productiva, al margen de las minas. En los primeros años de la revolución, se planificó crear cuatro escuelas, arreglar el templo de San Lorenzo, construir un comedor para los *kajchas*, edificar un cine popular y reparar el estadio Sucre. Mientras tanto, en el departamento de Santa Cruz se planeaba construir vías camineras y un ferrocarril, dar créditos a los productores y fomentar la migración nacional e internacional. Para la población potosina, esto fue motivo de discusión y preocupación, aún más para la clase media, que veía un futuro sin esperanza.

⁷ A pesar de ello, y quizá debido a un cálculo electoral y político del MNR, los *kajchas* alcanzaron un estatuto legal y pasaron a ser denominados cooperativas mineras, lo que les permitió interactuar mejor con el Estado. En 1952 se adjudicó al sindicato de *kajchas* de la Compañía Unificada dos bocaminas del cerro Rico de Potosí por 10 años.

Potosí tuvo artistas, poetas, literatos e historiadores que hicieron loas, compusieron canciones, contaron su historia y escribieron poemas en su honor. Todas estas creaciones tenían en común una ponderación de la riqueza y la tragedia potosina: describían los infinitos recursos de las vetas del cerro de Potosí y la muerte de los indios durante su explotación. Tales historias confluían, inevitablemente, en la idea de que Potosí era inmensamente rico pero, a la vez, infinitamente pobre, porque tanto en la Colonia como en la República se habían saqueado sus caudales sin dejar nada a cambio.

Surgieron iniciativas para cambiar esta realidad. En 1955, bajo el patrocinio de la autoridad comunal y en una gran asamblea popular, como señala el periódico *Trinchera*, se planteó organizar el Comité para la Defensa de los Derechos del pueblo Potosino.⁸ Para ello se conformó un comité *ad hoc* dirigido por Armando Alba y José Enrique Viaña, con la tarea de elaborar el Plan para la Constitución del Comité Ejecutivo de la Junta. El Plan tuvo cuatro puntos: 1) necesidad de reestructurar la Junta de Acción de Potosí, fundada ese mismo año, a instancias de la Federación Universitaria Local (FUL); 2) reforma y actualización de su estatuto; 3) constitución del Comité Ejecutivo sobre bases dinámicas y revolucionarias con representación de instituciones y fuerzas vivas, y elección democrática de su presidente; 4) aprobación de una plataforma de acción inmediata.

Armando Alba fue un personaje conocido y respetado en el departamento. Entre 1929 y 1950 fue alcalde de la ciudad de Potosí, senador de la República, ministro de Educación y embajador ante los gobiernos de España y Venezuela. A lo largo de su carrera intelectual, publicó varios libros de poesía y cuento, además de haber prologado libros y nutrido con sus artículos casi una decena de periódicos. Si algo se destaca en Alba es su infatigable contribución a la historia de Potosí, que se reflejó tanto en sus trabajos historiográficos sobre la Villa Imperial, como en la construcción y revalorización del Museo de la Casa Nacional de Moneda de Potosí (Barnadas 2002, 81).

José Enrique Viaña fue un personaje del mundo literario y periodístico potosino. Formó parte del famoso cenáculo literario Gesta Bárbara y

⁸ *Trinchera*, "Potosí se levanta para la defensa de sus derechos", 28 de agosto de 1955.

fue director de seis periódicos; poseía dotes poéticas y conocimiento de historia medieval. En 1948, Viaña publicó una novela titulada *Cuando vibraba la montaña de plata*, que tuvo muy buena acogida en el país y en el exterior (Barnadas 2002, 1135).

Con estos antecedentes, es lógico que tanto Alba como Viaña mostraran especial interés en crear una institución que se encargara de defender los derechos del departamento. Para estos historiadores, era imprescindible formar una entidad que fuera la portavoz de las demandas de la región, a la que consideraban injustamente tratada por el poder central, pues estaba claro que Potosí había aportado más que ningún otro al erario nacional con la riqueza de su cerro.

No se tiene mayores datos de este Comité; al parecer, no logró consolidarse como una organización cívica que funcionara en el largo plazo y fuera un mecanismo para canalizar las demandas de los potosinos. Era una entidad impulsada por intereses políticos, primero, y regionales, después; se trataba de un instrumento para aumentar el poder de los sindicatos mineros, pero no necesariamente para defender los intereses de Potosí. El periódico *Trinchera*, que siguió con entusiasmo los pasos de este Comité, señalaba que,

se hace imprescindible una definición categórica en cuanto a la posición en que uno se encuentra (en relación con la Junta). Por un lado está el imperialismo, junto a su aliada secular: la feudal burguesía y sus respectivos lacayos en forma de partidos políticos. Por el otro, los explotados y su vanguardia revolucionaria.⁹

Para 1956, las demandas regionales eran captación y servicio de agua potable, alumbrado y energía eléctrica, pavimentación y alcantarillado, participación en los impuestos de la minería, creación de una agencia del Banco Agrícola e incorporación de Potosí en los planes de diversificación económica.¹⁰

Para una ciudad que tenía cerca de 60 000 habitantes, satisfacer estas necesidades era vital. Las carencias que los potosinos padecían

⁹ *Trinchera*, "Hay que definir posiciones", 16 de agosto de 1955.

¹⁰ *En Marcha*, "Potosí hará escuchar su voz al Gobierno de la Revolución Nacional", 15 de julio de 1956.

provocaban un crecimiento urbano sin planificación, mientras una gran cantidad de población permanecía sin acceso a servicios básicos y en el desempleo (Santamaría 1973, 114).

Por este motivo, en el periódico *En Marcha* se expresaba la esperanza de que los nuevos parlamentarios harían escuchar

la voz de todo un pueblo que, en la medida de su *generosa y desinteresada contribución al erario nacional*, exige que se le atienda en la solución de sus problemas de vital importancia, sin que *en ningún momento sus peticiones tengan que ser interpretadas como expresiones de regionalismo* (cursivas del autor).¹¹

Las demandas regionales siempre se justificaban a partir de la constatación de un agravio histórico de parte del Estado. Se apuntalaba la idea de que Potosí recibía poco en relación con lo que había entregado al poder central. Un artículo titulado “Potosí debe merecer más atención del gobierno de la revolución nacional” señala:

A través de distintas épocas y de diversos regímenes políticos, casi como una verdad axiomática, se ha dado el caso paradójico de que el departamento de Potosí, no obstante ser el que más contribuye en forma más efectiva a los ingresos del erario nacional con la explotación de los minerales de su rico subsuelo, ha sido relegado siempre a un segundo plano.¹²

El logro de estas demandas no se daría a partir del fortalecimiento del regionalismo, que era anatema, sino desde la construcción de una nación que esta vez sí tomara en cuenta a las regiones relegadas. El mismo artículo indica más adelante:

hasta ayer nomás se vivía en frecuente pugna entre las distintas regiones que conforman la nación boliviana con agotamiento estéril de energías [...]; *felizmente en esta época en que ha sido posible superar el antagonismo regional existente en un pasado no lejano* [...] corresponde al gobierno

¹¹ *En Marcha*, “Potosí hará escuchar su voz al Gobierno de la Revolución Nacional”, 15 de julio de 1956 (cursivas del autor).

¹² *En Marcha*, “Potosí debe merecer más atención del Gobierno de la Revolución Nacional”, 3 de julio de 1956.

de la revolución nacional incorporar a los planes de diversificación económica que se encuentran en plena realización, sin perder de vista que geográficamente cuenta con todas las condiciones para ir sustituyendo sistemáticamente la minería por la agricultura [...]; de ahí por qué consideramos que la principal labor de nuestra brigada parlamentaria sea la de exigir en forma intransigente la realización de obras reproductivas en el departamento (cursivas del autor).¹³

La demanda de incorporación en los planes de diversificación económica se relacionaba con el hecho de que Potosí no solo tenía ricos socavones mineros ubicados a alturas cercanas a los 4000 metros sobre el nivel del mar, sino también extensos terrenos en sus valles y Altiplano. En estas tierras era factible producir trigo, maíz, vinos, frutas, criar alpacas y llamas, que bien podían abastecer o ayudar a proveer al mercado interno de alimentos.

En 1956, el presidente Hernán Siles, en medio de una fuerte crisis económica, aplicó el Plan Eder de estabilización monetaria, que afectó gravemente al sector obrero con el congelamiento de salarios y despidos. Siles buscó debilitar la COB al impulsar una organización obrera paralela.

En Potosí, el activo núcleo obrero —donde figuraban lechinistas, comunistas y emeneristas de izquierda— no se quedó de brazos cruzados. El 10 de noviembre de 1956, fecha de la efeméride departamental, se creó el Comité de Defensa de los Intereses de Potosí (Codeipo) con Humberto Ramírez, del Control Obrero, como presidente, el abogado Oscar Bonifaz como vicepresidente y el dirigente del Partido Comunista Simón Reyes como representante de la Central Obrera Departamental.

Esta entidad hizo un planteamiento frente al propósito del Supremo Gobierno de reorganizar la Empresa Minera Unificada del Cerro de Potosí (EMUCP), pues aquello implicaba reducir personal considerado “excedente”. En contrapunto, la primera Conferencia Cívica de los Intereses de Potosí tenía que oponerse terminantemente a esta medida, mientras demandaba la creación de fuentes permanentes de trabajo en el distrito que tendrían interés nacional y que debían ser implantadas dentro del radio de influencia de la capital, “alma mater” de la nacionalidad. Propusieron

¹³ *En Marcha*, “Potosí debe merecer más atención del Gobierno de la Revolución Nacional”, 3 de julio de 1956.

crear un laboratorio experimental de investigación metalúrgica, instalar hornos de fundición para los minerales para hacer realidad la industrialización minera del país y aprobar un proyecto de ley para el fomento triguero, que debía iniciar en el departamento de Potosí, principal productor de trigo. Plantearon edificar cabañas zootécnicas para caprinos y ovinos, además de continuar y ampliar obras camineras.¹⁴

El periódico *Democracia Popular* precisó que Codeipo era la “suma de organizaciones sindicales y populares de modo que están representadas todas las clases y capas sociales interesadas en la realización de postulados progresistas”. No obstante, dejó en claro que el Comité debía estar “dirigido y sustentado por la clase obrera, minera en particular, de decisiva importancia en esta organización popular [...], y mientras permanezca la clase obrera como base y dirección, Codeipo será un organismo auténticamente popular”.¹⁵

Codeipo no logró ni uno solo de sus objetivos. Al contrario, los despidos, la ausencia de recursos para capitalizar la Comibol y la falta de apoyo para crear plantas fundidoras se volvieron una constante. Sin embargo, el Comité sí resultó muy efectivo en cuestionar a los ministros del gobierno de Siles. El 10 de noviembre de 1958, Codeipo convocó a una conferencia para escuchar el informe de los ministros de gobierno Walter Guevara y Fermín Poppe (diputado por Potosí) en el cine Omiste. En este lugar, la oposición, alentada por el Comité, interrumpió permanentemente a los ministros con silbidos y protestas, a tal punto que tuvieron que salir de la reunión.¹⁶ Dos años después, bajo los auspicios de Codeipo, se realizó una marcha en la que varios oradores protestaron por el olvido hacia Potosí que, en 400 años de vida, había dado todo por Bolivia sin recibir nada.¹⁷

¿Por qué el sindicato minero y los partidos de izquierda promovían la creación de organizaciones cívicas? Deseaban aprovechar la capacidad de interpelación territorial para dotarse de apoyo político. Los sindicatos mineros, al circunscribir sus demandas a una lucha por fuentes de trabajo o por mejoras en sus condiciones laborales, podían ser

¹⁴ *Democracia Popular*, “Conclusiones de la conferencia cívica”, 23 de noviembre de 1958.

¹⁵ *Democracia Popular*, “Unidad organizada del pueblo potosino”, 23 de noviembre de 1958.

¹⁶ *Democracia Popular*, “Pueblo de Potosí rechifla a dos ministros”, 23 de noviembre de 1958.

¹⁷ *Libertad*, “Crónicas del 10 de noviembre de 1960”, noviembre de 1960.

acusados fácilmente de ser “sectoristas”, de pensar solo en sus intereses y no en los de todo el país. Colocar las demandas obreras como reivindicaciones potosinistas les daba fuerza y coadyuvaba a la legitimidad del movimiento. Los mineros presentaban sus reclamos como parte de una demanda más general, que incluía a todo el pueblo de Potosí, no solo a los sindicatos.

Durante el periodo del MNR en el poder (1952-1964) la periferia potosina no pudo estructurar esquemas de resistencia territorial a las políticas de ese partido. Debido a esto, en la década de los cincuenta el gobierno succionó los recursos de las minas potosinas, logró que las ganancias de la Comibol capitalizaran otros sectores de la economía como la agroindustria y el petróleo, y no ejecutó acciones efectivas relacionadas con la construcción de fundidoras. En 1960, la Unión Soviética envió a sus representantes diplomáticos con el fin de ratificar una oferta de crédito para instalar una planta de fundición. En octubre del mismo año, Kruschev abordó al representante boliviano ante la ONU y le ofreció créditos para que Bolivia construyera una planta de fundición. En diciembre, Brezhnev escribió al presidente Víctor Paz Estenssoro para confirmar esta oferta. Por su parte, el gobierno checo ofreció términos favorables para construir una fundidora de antimonio (Dunkerley 1987, 182).

En el periodo del Estado nacionalista (1952-1964), la región se debilitó económicamente, no pudo reinvertir sus recursos mineros en su propio desarrollo y no incrementó su poder territorial, al aceptar pasivamente las pulsiones centralizadoras del gobierno del MNR. Todo esto a pesar de contar con un actor determinante como el sindicato minero y una identidad territorial fuerte, factores centrales para desarrollar un clivaje territorial.

Los mineros eran el poder en la periferia y para ellos no fue prioridad el desarrollo del departamento, sino el asegurarse de que los flujos de recursos para sueldos y privilegios se mantuvieran. Por ejemplo, el Estado subvencionaba las pulperías, una especie de supermercados donde los precios estaban congelados, lo que se convertía en “un salario indirecto y sustancial” (Paredes 2014,164). Si la carne en el mercado costaba 800 bolivianos por kilo, en una pulpería costaba 24. En las pulperías se ofrecían productos de primera necesidad como carne, pan, arroz, pero también perfumes de lujo, ropa de marca y boletos para el cine.

En 1964, los gobiernos del MNR llegaron a su fin. En la mañana del 5 de noviembre, René Barrientos Ortuño, un militar formado bajo los preceptos de los *marines* estadounidenses, dio un golpe de Estado al tercer gobierno de Víctor Paz Estenssoro.

Esto no implicó un cambio en el esquema de “desarrollo autoritario” iniciado por Paz, sino su ahondamiento (Field 2016). Barrientos cortó de manera abrupta la relación que establecía el Estado con los sindicatos mineros; redujo el personal “excedentario” de la Comibol, congeló salarios e impulsó el ingreso de capitales extranjeros destinados a hidrocarburos y minería.

En Potosí, todos los canales de expresión fueron anulados. En septiembre de 1965, la radio Sumaj Orcko fue trasladada a la ciudad de La Paz y la Cooperativa Mineras Kajchas Libres fue intervenida por el Ministerio de Trabajo.¹⁸ Esta arremetida autoritaria alcanzó también a la universidad, cuyos rectores fueron cambiados por personajes que apoyaban al régimen.

Potosí se quedó sin la posibilidad de hacer oír su voz puesto que no existía partido político, institución territorial, grupo empresarial o universitario que canalizara sus demandas. Sin embargo, la identidad potosina se reforzó. Se volvió, con un aire nostálgico, al mito del cerro Rico. Una publicación señalaba:

Decir Potosí es hablar de Madrid, Sevilla, Castilla, Valladolid, de los Virreyes de Lima, de Charcas y de toda la epopeya del coloniaje [...]; por eso el potosino lleva el orgullo de haber formado una Nación, cual es la de Bolivia, porque sus entrañas inagotables de su Cerro alimentan a la nacionalidad toda. Nuestra posición no es de vanidad, es de seriedad y de comprensión, porque nuestra nobleza la compartimos con los hermanos del Sud, del Norte, del Este y del Oeste, con el mismo cariño, razón para sentirnos orgullosos. Este girón de la patria cósmica, enhiesta, con la mirada azul y profunda, tiene el alma de un Linares, la honradez de un Frías y la valentía de un Cornelio Saavedra, figuras señeras que han formado el alma potosina al servicio de la Patria y de la humanidad.¹⁹

¹⁸ *Crítica, la voz del Sumaj Orcko*, “Transmisores de Radio Sumaj Orcko trasladaron a La Paz”, 12 de septiembre de 1965.

¹⁹ *La voz del gráfico*, “Potosí es indivisible”, 10 de noviembre de 1962.

En septiembre de 1969 asumió el gobierno Alfredo Ovando Candia, quien trató de restituir las relaciones del Estado con los sindicatos mineros. En este contexto, el 17 de octubre de 1969, se creó la Unión Cívica Potosinista en defensa de los intereses de Potosí como iniciativa de la Universidad Tomás Frías. Su directiva estaba compuesta por miembros de la clase media urbana como Armando Alba, que ya había impulsado un comité cívico en 1954; Abelardo Villalpando, rector de la universidad; el empresario Roberto Buitrago; el abogado Antonio Rocha; Raúl Salazar; Jorge Gutiérrez; Luis Campos y Ernesto Poppe.²⁰

Los integrantes de esta Unión indicaron que no los movía más que el cariño hacia su tierra, pues estaban conscientes de que la situación del país no permitía organizar un movimiento que pudiera levantar sospechas por ser “político”. Hicieron un llamado a la unidad, puesto que se creía que el potosino era apático, pesimista, individualista y poco proclive a la unión y al progreso. Esta Unión apuntó a comprometer al gobierno para que creara una planta de fundición de zinc, pero su existencia fue efímera.

Un año después, en el gobierno de Juan José Torres, la región, liderada por Codeipo, organizó un movimiento que derivó en el secuestro del ministro de Urbanismo y Vivienda en las instalaciones de la Federación Universitaria Local. Ante ello, el gobierno se comprometió a dotar de recursos para construir una escuela, aprobar un decreto para instalar teléfonos, realizar un estudio de prefactibilidad para proveer energía eléctrica a la Villa Imperial y transferir recursos económicos a la cuenta de Comité de Desarrollo por pagos de regalías mineras que el gobierno no había hecho por varios meses.²¹

Banzer, la apertura política y la aparición de Comcipo

Para la región potosina el gobierno de Banzer solo significó pobreza y marginalidad. El estaño y el zinc representaban el 75 % de las divisas de Bolivia, que habían aumentado debido al alza en su cotización

²⁰ *La Época*, “Comité Cívico e industrialización del zinc”, 10 de noviembre de 1969.

²¹ *El Sur*, “Ministro de Urbanismo y Vivienda estuvo de rehén”, 3 de abril de 1971.

internacional; sin embargo, entre 1974 y 1978 el departamento solo recibió, en promedio, un 11 % de transferencias del total nacional por regalías, mientras que, para Santa Cruz, esta cifra llegaba al 61,32 %. La tabla 2.3 muestra esta desproporción.

Tabla 2.3 Regalías pagadas a las corporaciones regionales de desarrollo de Santa Cruz y Potosí, 1974-1978 (dólares)

Corp. regionales	1974	1975	1976	1977	1978
Santa Cruz	17 226.690	18 374735	20 811 550	22 329 000	28 884300
Potosí	2 393 820	4 503555	2 436 680	4 373310	6 850025

Fuente: Roca (1999, 223).

Esta disparidad tiene que ver con aspectos históricos. Como señala Barragán (2009, 21), “desde 1872 se estableció que todas las exportaciones se consideraran recursos ‘nacionales’ y en función de este criterio toda la producción minera fue considerada nacional”. Esto cambió en 1960, cuando la Ley del 5 de noviembre de 1960 señaló que “del total del ingreso que percibe el Estado por concepto de regalías sobre la producción minera, se asigna el 6 % como ingreso de carácter departamental a favor de los distritos productores, porcentaje que se considerará como ingreso ordinario departamental”

Esta Ley fue modificada siete años más tarde por la Ley 326 del 10 de febrero de 1967 durante el gobierno de René Barrientos. Entonces se subió este porcentaje al 12 % pero los desembolsos de estos recursos debían ser aprobados por un Consejo Nacional de Desarrollo y Estabilización.

Esto no ocurrió con las regalías hidrocarbúricas. En 1938, también por ley de la República, se determinó que el 11 % del valor de la producción hidrocarbúrica fuera a los departamentos donde están los yacimientos productores (Miranda 2005, 26). Estos recursos fueron vitales para el desarrollo de Santa Cruz que recibió USD tres millones entre 1959 y 1964, y USD 400 millones entre 1960 y 1986 (PNUD 2004 en Barragán 2009, 48). El uso de estos recursos no estaba sujeto a la aprobación de ninguna entidad nacional previo su desembolso.

La regalía es un monto que resulta de la diferencia entre el precio del mercado y un costo de producción imputado, que toma como referencia a la empresa que tiene los más altos costos y los yacimientos de menor calidad. Una baja en los precios al nivel o por debajo del costo deviene en una baja de tributación que afecta a los departamentos productores.

Paralelamente, el gran sueño potosino de dejar de depender del estaño para emprender proyectos de diversificación productiva se desvanecía: entre 1970 y 1975, el Banco Agrícola apenas desembolsó 0,69 % de sus recursos para Potosí, mientras que se destinó el 69,64 % para Santa Cruz (Dunkerley 1987, 317-321). El gobierno de Banzer profundizó una de las peores lacras del autoritarismo: el nombramiento de las autoridades locales desde el Poder Ejecutivo (como se decía popularmente, “a dedo”). Muchas de estas eran figuras militares, con poco o ningún conocimiento de administración pública o proyectos de desarrollo local y muy proclives a la corrupción.²² Para entonces, el ingreso de las regalías mineras había ascendido a casi USD siete millones, pero no había relación entre esa cifra y los proyectos que se ejecutaban. Potosí estaba recibiendo recursos, pero estos no se convertían en obras ni proyectos. Además, era imposible articular algún reclamo contra el centralismo del gobierno de Banzer, puesto que los partidos políticos y los sindicatos estaban proscritos de la política.

El régimen militar veía con cierta simpatía la creación de comités cívicos. Con la certidumbre de que estos estaban dirigidos por élites locales, contaban con ellos para frenar la movilización popular (Lavaud 1998). Esta apertura política, aunque era pequeña, fue aprovechada por un grupo de mujeres potosinas. El 4 de agosto de 1975 se fundó el Comité Cívico Femenino de Potosí, conformado por Yolanda G. de Zilveti, Esperanza de Poppe y Lucy de Pérez de Alcalá. Ellas formaban parte de asociaciones culturales, clubes del libro y clubes sociales donde se recreaban distintos aspectos de la historia, el arte y la literatura propios de Potosí, y donde inevitablemente se discutía el destino colectivo del departamento. Cobijadas por el discurso del espíritu potosinista para unir a todos, estas mujeres plantearon al gobierno una serie de demandas largamente postergadas, como la construcción de una planta

²² Manuel Decormis (expresidente de Comcipo), en conversación con el autor, octubre de 2016.

de fundición de zinc, la vinculación caminera, la edificación de centros de salud y la construcción de un aeropuerto.²³

Como la fundidora de Vinto, ubicada en el departamento vecino de Oruro ya procesaba estaño, la demanda potosina se concentró en el zinc, que por esos años tenía muy buenas cotizaciones en el mercado internacional. La cotización de este metal en 1970 era de USD 0,14 la libra fina; en 1975 ese valor llegó a los USD 0,37.

El Comité Cívico Femenino sirvió como referente para que otros actores se sumaran a la iniciativa: en julio de 1976 se conformó el Comité Cívico de Profesionales Jóvenes, con Manuel Decormis (economista y docente universitario) a la cabeza. Estos esfuerzos finalmente desembocaron en la constitución, ya definitiva, del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) el 2 de agosto de 1976. Su primer directorio estuvo conformado por profesionales y miembros de la clase media del departamento. Su presidente fue el abogado y profesor universitario Antonio Rocha, seguido por el ingeniero Raúl Salazar, exrector de la Universidad Tomás Frías de Potosí, Yolanda Zilveti como representante de las mujeres, y Antonio Ramos y Luis Zilveti de la empresa privada.

Las demandas de Comcipo fueron una planta de fundición de zinc, la urbanización de Tarapaya (un balneario de aguas termales a 25 km de Potosí), una fábrica de cemento, un nuevo estadio departamental, una casa de la cultura, el camino Potosí-Uyuni y Potosí-Villazón, canalización de aguas del río San Juan y el aprovechamiento de los recursos naturales.²⁴ Como se puede apreciar, la agenda regional ya no se centraba exclusivamente en construir fundidoras. El Comité fue posesionado por el reconocido artista Ricardo Bohórquez en la Casa de la Moneda, símbolo de la identidad potosina.²⁵

Unos días después, en gran reunión de instituciones, la institución cívica convocó a una marcha denominada “de la potosinidad” para el 13 de agosto de 1976, que logró reunir a unas 56 000 personas. Los asistentes, en sus gritos y cánticos, demandaban la construcción de la fundidora de zinc, amenazando “Potosí federal” (una demanda territorial fuerte, sin

²³ *El Siglo*, “Se organizó Comité Cívico Femenino Pro Intereses de Potosí”, 11 de agosto de 1975.

²⁴ *El Siglo*, “Comité Cívico: posesión hoy”, 2 de agosto de 1976.

²⁵ *El Siglo*, “Pueblos unidos son pueblos fuertes”, 30 de agosto de 1976.

embargo, apenas fue un relámpago). La masiva asistencia –casi la mitad de la población citadina– generó grandes esperanzas entre los ciudadanos; al fin los potosinos tenían una entidad que defendiera los intereses del departamento y evitara el atraso y la marginación. El periódico local *El Siglo*, en su primera página, colocó una foto de la multitudinaria marcha con la leyenda “Potosí despertó”.²⁶

Sin embargo, la marcha de Comcipo se convirtió en una oportunidad de oro para que los actores de sindicatos y partidos de izquierda, rompiendo la censura, tomaran la palabra durante la manifestación, hicieran conocer su condena al gobierno militar y demandaran el fin de la clausura política. Esto encendió todas las alarmas del gobierno que, días después, expidió un comunicado en el cual denunció que,

elementos activistas de conocida filiación política hubieran arrebatado los micrófonos radiales a miembros de la directiva (cívica) para lanzar proclamas subversivas que no hacen otra cosa que perjudicar los intereses del departamento. Asimismo, aprovechando la cadena radial “Alonso de Ibáñez”²⁷ estos mismos elementos que han sido plenamente identificados (hombres y mujeres) vertieron expresiones tendientes a exaltar ánimos de la población, como es de conocimiento de la opinión pública, derivando posteriormente en una manifestación a la que se infiltraron estos extremistas llevando a cabo ataques a la propiedad privada, rompiendo letreros luminosos, ornatos públicos e inclusive atentando contra la dignidad de los propios miembros del comité cívico. Por tanto, se recuerda que Potosí es zona militar, la misma que establece claramente la prohibición para efectuar reuniones, manifestaciones etc., de tal manera que se reserva su derecho de decretar Estado de sitio parcial en Potosí.²⁸

A pesar de la amenaza, el entusiasmo por fortalecer el Comité Cívico se mantuvo y extendió más allá de la ciudad. Se creó el directorio del Comité de Desarrollo de las Provincias del Sur (Codeprosud), el Comité Cívico de Desarrollo y Progreso de los Chichas (Cocideprochichas) y

²⁶ *El Siglo*, “Potosí despertó: más de 56 000 personas en la marcha del zinc”, 16 de agosto de 1976.

²⁷ Alonso de Ibáñez fue un héroe de la resistencia al dominio español. En 1617 lideró una rebelión que le costó la vida.

²⁸ *El Siglo*, “Estado de sitio podría ser decretado en Potosí”, 23 de agosto de 1976.

el Comité Cívico de la Provincia Frías. En La Paz, se fundó el Comité Cívico Potosinista de la Ciudad de La Paz.

Fortalecido, Comcipo exigió la reorganización total de la Corporación de Desarrollo de Potosí (Cordepo); se planteó que las autoridades fueran elegidas con base en una terna propuesta por el Comité Cívico y que estuviera “compuesta por personas de alto sentido de responsabilidad, pleno conocimiento de los problemas potosinos y, sobre todo, acendrado cariño a esta tierra”.²⁹

Meses después, la presión rindió sus frutos. En octubre, el presidente Banzer, después de reunirse con una delegación de Comcipo, anunció la construcción de la planta electrolítica de zinc, la planta de fundición de Karachipampa, una fundición de antimonio en Tupiza, la construcción del camino Potosí-Uyuni, y la aceleración de la construcción de la Ruta de los Libertadores. También se aceptó que el nuevo presidente del Comité de Desarrollo fuera potosino.³⁰

Estos anuncios generaron la satisfacción de la población potosina, que protagonizó una marcha de regocijo para el día siguiente. No era para menos: luego de décadas de postergación, el anuncio presidencial —que además señalaba que “Potosí es un gigante dormido que tiene que despertar”³¹— parecía augurar mejores días para el departamento. El periódico local narraba de esta manera la decisión presidencial:

Concluida la jornada habitual de ayer, alrededor de las 19 horas se supo oficialmente, mediante telegrama del propio presidente, que la fundición de zinc será instalada en nuestro distrito. Desde aquel momento empezó una nueva etapa para Potosí. Sonaron campanas. Se bailaba en las calles y desde los balcones de la Prefectura el coronel Luis Rojas Cerruto, como primera autoridad, ante el alborozo inenarrable, hizo conocer la buena nueva.³²

Sin embargo, este anuncio no hizo que la población olvidara la corrupción e ineficiencia en Cordepo. Manuel Decormis, por entonces presidente de Comcipo, denunció un negociado en la compra de tractores en 1974. Esto

²⁹ *El Siglo*, “Comité Cívico pide reestructuración de Cordepo”, 16 de agosto de agosto 1976.

³⁰ *El Siglo*, “Se hace justicia, fundición de zinc en Potosí”, 7 de octubre de 1976.

³¹ *El Siglo*, “Se celebró con alborozo anuncio de fundición de zinc”, 7 de octubre de 1976.

³² *El Siglo*, “Se celebró con alborozo anuncio de fundición de zinc”, 7 de octubre de 1976.

provocó una respuesta grosera de parte del expresidente de Cordepo, tanto hacia la institución cívica como a su presidente, al punto que se decidió realizar una asamblea de Comcipo como desagravio.³³

En julio de 1977 se realizaron elecciones para renovar la directiva de la entidad cívica. Lucio Rollano, representante de la Cámara de Minería, fue elegido presidente; estuvo acompañado por representantes de varios colegios de profesionales, del Sindicato de Choferes, del Comité de Bases de Mineros, de la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomín) y de la Confederación de Instituciones Femeninas (Conif).³⁴

A diferencia de la anterior directiva, caracterizada por fuertes tensiones con los titulares de la Prefectura y Cordepo, la de Lucio Rollano fue conciliadora. Cuando fue posesionado por el prefecto del departamento, en su discurso inaugural, marcó una línea clara de subordinación al oficialismo, anunciando que “nuestra conducta ante las autoridades será de respeto, porque nada sacaremos si se impone la torpeza y el criterio incomprensible y mal intencionado”.³⁵

Sin embargo, la corrupción de los militares en puestos clave del aparato estatal era tan evidente que, aun cuando la nueva directiva del ente cívico hizo todos los esfuerzos para no generar tensiones con los funcionarios gubernamentales, no pudo lograrlo. En octubre se conoció que el Ministerio de Finanzas había cancelado tres millones de pesos bolivianos a la empresa Integral Limitada, por un trabajo defectuoso al colocar cañerías en la ciudad. Este pago, cuyos fondos habían provenido de las regalías mineras, fue censurado en una tensa asamblea de Comcipo, donde se resolvió pedir la devolución de los fondos a Cordepo. Ante el silencio gubernamental, el 7 de octubre Comcipo decretó un paro de 24 horas con cierre de todas las vías de acceso a la ciudad, la no circulación del transporte público y la suspensión de todas las actividades públicas y privadas.³⁶

Entretanto, Banzer convocaba a elecciones presidenciales para julio de 1978, pero sin una postura que garantizara las libertades y la participación política. El militar solo descartó ser candidato a la

³³ *El Siglo*, “Asamblea de desagravio habrá el jueves 24”, 21 de febrero de 1977.

³⁴ *El Siglo*, “Comité Cívico, Cámara de Minería ocupa presidencia”, 16 de julio de 1977.

³⁵ *El Siglo*, “Unidad y trabajo buscará Comcipo”, 29 de julio de 1977.

³⁶ *El Siglo*, “Comité Cívico decretó paro de 24 horas”, 7 de octubre de 1977.

presidencia, pero no levantó ninguna de las restricciones políticas para permitir una campaña política que él mismo había declarado abierta (Dunkerley 1987, 336).

Se continuaba manteniendo en el exilio a personajes relevantes de la política de ese momento como Juan Lechín, secretario ejecutivo de la COB; Marcelo Quiroga, líder del Partido Socialista, y el expresidente Hernán Siles Zuazo, figura que podría representar una amplia coalición de partidos de izquierda.

Las reacciones no se hicieron esperar. En diciembre, esposas de mineros exiliados iniciaron una huelga de hambre en la ciudad de La Paz, que pronto se expandió a varias urbes del país. En Potosí, en enero de 1978, un grupo de 50 universitarios tomó el templo de Santa Mónica y exigió el retorno de los exiliados y garantías democráticas. Esta acción fue reforzada por un grupo de extrabajadores mineros que se unieron al piquete de huelguistas e iniciaron un paro de labores de 24 horas en las minas del cerro Rico de Potosí.³⁷

Este conjunto de presiones, junto con el agotamiento del proyecto político de Banzer, finalmente dio frutos: el gobierno anunció una amnistía total e irrestricta, lo que cambió por completo el panorama político.

Comcipo en la transición a la democracia

La apertura democrática anunciada por Banzer dinamizó la política con la emergencia de nuevos actores, quienes iniciaron la búsqueda de un proyecto para el momento democrático que se avecinaba. En el fondo, todos, viejos y nuevos políticos, ansiaban espacios de acomodo en la nueva configuración política. Las agrupaciones y partidos salieron a la luz e iniciaron una vertiginosa campaña para recuperar a su electorado, formular políticas para la nueva era democrática y ajustar cuentas con el pasado (Dunkerley 1987, 340).

En este contexto, el Bloque Cívico del Sur (BCS) adquirió renovada vitalidad; este agrupaba a los comités cívicos de Tarija, Chuquisaca y

³⁷ *El Siglo*, "En Santa Mónica, más de 50 universitarios en huelga de hambre", 7 de enero de 1978.

Potosí. La intención de los “cívicos del sur” era convertir a las entidades cívicas en una suerte de mediadoras entre la sociedad civil y el Estado al margen de los partidos políticos y los sindicatos. Una parte del documento “Manifiesto del BCS” señalaba, en tono de amenaza, que

si los (futuros) parlamentarios no responden a la confianza de nuestros pueblos, si no encarán con capacidad, valentía y responsabilidad los problemas distritales y nacionales y si se pierden en discusiones bizantinas e intrascendentes, llamaremos al *Parlamento Cívico*, dentro de un nuevo estilo de participación del Pueblo (cursivas del autor).³⁸

Aunque los cívicos nunca llegaron a ese extremo (fundar el Parlamento Cívico), sí cumplieron su autoasignado rol de vigías de los actos y conducta de los políticos. En un momento de transición hacia la democracia, con una crisis de gobernabilidad y con un sistema de partidos todavía en gestación, los miembros de los comités cívicos se sentían con la potestad de censurar y aun bloquear las decisiones gubernamentales, comprometer a las autoridades electas a cumplir sus promesas y denunciarlas públicamente cuando su conducta no coincidía con la trazada por los cívicos.

En este marco, se suscitó una disputa por la dirección y orientación política de Comcipo. En un momento en que los militares salían del espacio político regional, los partidos estaban en plena fase de reorganización y la amenaza de golpe de Estado era latente, los actores sindicales y de izquierda percibieron que Comcipo ofrecía un espacio efectivo para presionar a los gobiernos y conseguir ventajas, por lo cual tomaron su dirección. La nueva directiva estuvo conformada por Luis Sanabria, como nuevo presidente de Comcipo, que representaba al magisterio y los choferes, y Paulino Palma, de la COD, como vicepresidente. Les seguían Jorge Quiroga; Gastón Caviedes, de la Cámara de Minería (Cademin); Juan Gutiérrez, de la Fedecomín, y Gonzalo Calderón, de la Federación de la Prensa.³⁹

Aquí vale la pena un paréntesis: el hecho de que Comcipo hubiera recibido influencia por parte de la Central Obrera Departamental (COD) y las fuerzas de izquierda, se relaciona con tres aspectos. En primer lugar, la institución cívica, según sus estatutos, estaba compuesta

³⁸ *El Siglo*, “Manifiesto del Bloque Cívico del Sur”, 19 de abril de 1978 (cursivas del autor).

³⁹ *El Siglo*, “Luis Sanabria, nuevo Presidente de Comcipo”, 31 de octubre de 1978.

por un conjunto de instituciones de diferente naturaleza y número de miembros que, de una u otra manera, estaban ligadas a la COD, como la Federación de Juntas Vecinales, la Federación de Choferes, la Federación de Trabajadores Gremiales y la Universidad Tomás Frías. En segundo lugar, Comcipo tenía una naturaleza asamblearia: las decisiones, de carácter vinculante, eran tomadas en una reunión de instituciones donde, normalmente, las corrientes sindicales, dada su mayoría, imponían sus criterios e intereses. En tercer lugar, las reivindicaciones potosinas tenían mucha relación con la minería, lo que facilitaba que el sindicalismo pudiera, discursivamente, vincular sus intereses políticos con los de toda la región.

La debilidad del gobierno de Juan Pereda —que llegó al poder en 1978 mediante un golpe de Estado— permitió que los representantes de Comcipo mostraran su poder y lograran satisfacer las necesidades de empleo de sus grupos afines. Por ejemplo, cuando se supo que Walter Zuleta, militante del MNR, había sido nombrado nuevo presidente de Cordepo, los miembros de Comcipo y afines al Partido Comunista de Bolivia (PCB) recurrieron a la huelga de hambre y a la paralización de actividades hasta imponer el cambio de Zuleta por Gil Villegas Michel, profesional y militante del PCB que gozaba de la simpatía y aprobación de la directiva de la institución cívica.⁴⁰ Lo que estaba en juego no era poco: para 1977, Cordepo había recibido USD 4 373 310 y en 1978 esa suma se había elevado a USD 6 850 025 (Roca 1999, 223). Aproximadamente la mitad de esos recursos estaban destinados a salarios.

Por medio de presiones, Comcipo obligó a Juan Pereda a inaugurar “simbólicamente” una planta de fundición de plomo y plata en la zona de Karachipampa que, se preveía, necesitaba una inversión de USD 152 millones.⁴¹ Posteriormente, el gobierno del coronel David Padilla inició las obras de la planta. Finalmente, Comcipo impulsó movilizaciones para respaldar iniciativas de dudosa factibilidad como la compra de un avión para la Línea Aérea Imperial (LAI), financiada con recursos de Cordepo.

⁴⁰ *El Siglo*, “Paro de 24 horas se cumple en Potosí”, 29 de agosto de 1978.

⁴¹ *El Siglo*, “El proyecto metalúrgico de Karachipampa consolidará la nacionalización de las minas”, 14 de noviembre de 1978.

En la misma línea, en el corto gobierno de Lidia Gueiler (1979-1980), un consejo consultivo de Comcipo llegó a desconocer el nombramiento de Víctor López Alcalá como nuevo prefecto, y planteó una terna compuesta por personajes de filiación izquierdista y cercanos a la entidad cívica como Luis Sanabria, Gonzalo Valda y Mario Hurtado.⁴²

Comcipo en el gobierno de Hernán Siles

En la tarde del 6 agosto de 1982, Hernán Siles Suazo y Jaime Paz Zamora juraron como presidente y vicepresidente de la República. Estaban al frente de una coalición denominada Unidad Democrática y Popular (UDP), que agrupaba a partidos como el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB). Tenían dos desafíos: solucionar la agobiante crisis económica y hacerlo dentro de los marcos de las reglas de la democracia representativa que daba sus primeros pasos.

Los datos del periodo son lo suficientemente contundentes para reflejar el grado de deterioro de la economía y, por supuesto, de la ineffectividad de las medidas destinadas a paliarla. Si se toman los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), los precios aumentaron más de 650 veces entre 1984 y 1985; la tasa de crecimiento del PIB fue negativa en todo el periodo: de -3,9 en 1982 a -1,7 en 1985; por último, la tasa de desempleo subió de 10 % en 1982 a 18 % en 1985. Esto generó un descenso general del nivel de vida que afectó, sobre todo, a la población más pobre, justamente aquella que el gobierno de Siles había prometido atender.

A Siles le tocó desenvolverse en un contexto de alta complejidad en el que gobierno carecía de poder suficiente para articular los proyectos y actores políticos. Para los sectores radicales de izquierda, el gobierno de la UDP era solo el resultado de una acumulación de fuerzas, una suerte de primavera democrática, para después avanzar en la construcción del socialismo; para los sectores sindicalizados, nucleados en torno a la COB, el régimen constituía la posibilidad de ampliar sus conquistas laborales, que habían sido acalladas y postergadas por los regímenes militares

⁴² *El Siglo*, "Prefecto del departamento fue desconocido por Comcipo", 30 de noviembre de 1979.

(Lazarte 1993, 22); para la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), el nuevo gobierno representaba la posibilidad de avanzar hacia el establecimiento de una democracia liberal, implantar una economía de mercado y frenar el avance de la izquierda y de la “anarquía sindical” (Mansilla 1994, 82).

En estas condiciones, el gobierno no pudo establecer acuerdos duraderos con ninguno de los actores. Los miembros de la COB, luego de breves periodos de paz social, retornaron a la protesta con paros, huelgas y marchas en los que pedían aumento de salarios y mejora de condiciones sociales. Tampoco logró llegar a consensos con la CEPB, cuyos representantes se mostraban suspicaces ante la presencia del PCB en el gobierno y alarmados por la incapacidad de Siles para lograr el orden social y político dentro de los marcos constitucionales.

El cuadro de debilidad gubernamental se completaba con la falta de respaldo al Poder Ejecutivo en el Legislativo: la UDP tenía 47 diputados de un total de 130 y 10 senadores de 27. Para Siles era imposible desplegar un programa coherente de medidas políticas y económicas y nunca gozó de una coalición partidaria mayoritaria en el Poder Legislativo que respaldara a su gobierno.

Todo esto llevó a una crisis de gobernabilidad, donde ninguno de los actores de ese momento –el gobierno, la COB, la CEPB y las Fuerzas Armadas– pudo imponer su visión a los demás. La relación de fuerzas era “estática, de continua neutralización y veto recíproco, que generaba una incapacidad hegemónica” (Mayorga 1991, 88). El sistema político, las instituciones estatales y la cultura política de los actores involucrados se convirtieron en obstáculos para procesar aquello que permitía la propia democracia, “un espacio de manifestación de conflictos de intereses, de contradicciones, de luchas regionales, de problemas nacionales que en el pasado reciente estaban relativamente sumergidos” (Calderón y Dos Santos 1987, 107).

Paralelamente, se eligió una nueva directiva de la Comcipo, que estuvo conformada de la siguiente manera: Mario Hurtado, del Colegio de Abogados, como presidente; Antonio Pardo, de las Cooperativas Mineras, como vicepresidente; Walter Cortez, del Sindicato Minero de La Palca, como segundo vicepresidente; Augusto Sandi, del Sindicato de Metalurgistas, como secretario general; Wilhem Pierola, del Sindicato

de Cordepo, como secretario de asuntos regionales; Miguel Chalar, del Sindicato de Karachipampa, como secretario de asuntos locales; Luis Oporto, del Magisterio Rural, como secretario de asuntos provinciales; Ernesto Castro, del Colegio Médico Departamental, como secretario de organización; y Guisela Derpic, de la Asociación Cristiana Femenina, como secretaria de actas.⁴³

A pocos días de instalado el nuevo Poder Legislativo, Comcipo convocó a diputados y senadores a un cabildo abierto para ratificar su compromiso de cumplir con sus promesas y con la agenda del comité cívico. De manera irónica, la invitación señalaba que Comcipo “pagará alojamiento para los diputados y senadores que no tuvieran domicilio en la ciudad”.⁴⁴ Comcipo exigió la ratificación de Gil Villegas como presidente de Cordepo y rechazó los nombramientos del alcalde y del prefecto por parte del presidente. En octubre de 1983 se posesionó a Jaime Herrera como nuevo alcalde de la ciudad de Potosí y a Eddy Fernández como prefecto.⁴⁵

A la crisis por hiperinflación y carestía de alimentos, se sumaron los desastres naturales. A mediados de 1983 se reportó que, por la sequía, en Nor Lípez habían muerto 23 000 ovejas, 13 000 llamas y 2500 asnos (toda una tragedia dada la extrema pobreza de la zona). En la ciudad se suspendieron las labores escolares mientras crecían la angustia y desesperación. Las familias, sin agua en sus domicilios, tuvieron que formar largas colas para recibir el líquido vital tanto de pozos que funcionaban desde épocas de la Colonia, como de cisternas que llegaban, vía ferrocarril, desde Argentina.⁴⁶

Las autoridades nombradas por el gobierno fueron permanentemente cuestionadas por Comcipo al punto de que su destitución mediante toma de instituciones se volvió cotidiana. Entre octubre de 1982 y agosto de 1985, Comcipo se hizo cargo de 28 acciones colectivas que reflejaron el orden de prioridades de su directiva: nueve de ellas buscaban cambio y designación de nuevas autoridades; siete, la solución de

⁴³ *El Siglo*, “Comcipo tiene nuevo directorio”, 30 de noviembre de 1982.

⁴⁴ *El Siglo*, “Senadores y diputados conminados a visitar su tierra”, 13 de octubre de 1982.

⁴⁵ *El Siglo*, “Gobierno designó nuevo alcalde municipal”, 14 de octubre de 1983.

⁴⁶ *El Siglo*, “Cronología de una angustia en Potosí. 100 días de crisis de agua”, 15 de junio de 1983.

los efectos de la sequía y la falta de agua; y una, el pago oportuno de las regalías mineras, a pesar de que era imprescindible para el desarrollo del departamento (Íñiguez 2008, 54).

Entre tanto, la identidad potosina basada en la “explotación sin retribución” no dejó de ser recreada (Íñiguez 2008). Un editorial del periódico local afirmaba: “Potosí es una entenada que da divisas a la nación a través de sus minerales, pero los gobiernos no tienen la consideración y el respeto de ofrecerle un trato justo y menos ayudarle a rehacer su destino”.⁴⁷

En febrero de 1984 se renovó la directiva de Comcipo. Ganó una facción encabezada por el abogado Carlos Derpic como presidente y Manuel Hernández, de la Empresa Minera Unificada del Cerro de Potosí (EMUCP) como vicepresidente, seguidos de Pedro Santalla del Sindicato de Karachipampa, Ernesto Castro del Colegio Médico y Hugo Baptista del Colegio de Agrónomos. Una directiva sindicalista y de izquierda.⁴⁸

En el acto de posesión, el nuevo presidente de la entidad cívica destacó lo que, a su juicio, eran las causas para la pobreza y la marginación del departamento,

las clases dominantes de nuestro país, empezando por la oligarquía de la plata, siguiendo con la rosca feudal burguesa [...]; también los gobernantes, el Estado que prefiere destinar recursos a otros departamento y relegan al nuestro al lugar de furgón de cola, los que fueron autoridades sin saber las necesidades y los que vienen a nuestra ciudad mientras pueden hacer dinero que posteriormente invierten en otros departamentos, los parlamentarios y los que se establecen en la ciudad de La Paz y desde ahí dan ayuda a control remoto.⁴⁹

Se trataba de un diagnóstico marxista para la situación de Potosí que, notablemente, recreaba la idea tan extendida en el imaginario de que el departamento no recibía recursos acordes a lo que generaba, que todos

⁴⁷ *El Siglo*, “Potosí, el entenado de todos los gobiernos”, 10 de noviembre de 1982.

⁴⁸ *El Siglo*, “Ganó Frente de Unidad Potosinista”, 3 de febrero de 1984.

⁴⁹ *El Siglo*, “Afirmó nuevo presidente de Comité Cívico: Hay que preguntarse quién o quiénes son los culpables del atraso de Potosí”, 6 de febrero de 1984.

solo estaban allí para enriquecerse y luego olvidarse de esta ciudad o, en el mejor de los casos, ayudar desde lejos, a “control remoto”.

En suma, a lo largo del periodo de 1980 a 1985, Comcipo tuvo una notable influencia sobre las decisiones gubernamentales, imponiendo o apoyando la construcción de Karachipampa, la compra de un avión para la LAI y presionando sobre la designación de las personas que se harían cargo de instituciones como la Prefectura, la Alcaldía y Cordepo.

Esta utilización de Comcipo para presionar y beneficiar a la postre a los grupos de poder local generó un sentimiento de desánimo en la ciudadanía potosina. Un editorial del periódico *El Siglo* expresaba en tono pesimista que “hay sectarismo y división entre las instituciones [...]; el comité cívico ha perdido vigor, seriedad y las críticas dejan entrever que la política y el partidismo han dividido primeramente a sus propios dirigentes y luego le han quitado prestigio y apoyo entre la población”.⁵⁰ La entidad cívica se manejó así durante largos años, lo que tendría efectos en su legitimidad y pondría en duda su carácter apolítico.

Conclusiones

En 1952 inició una nueva relación centro-periferia que marcaría las décadas siguientes. El principal cambio tuvo que ver con la construcción de un nuevo Estado que buscaba integrar territorialmente a departamentos del oriente de Bolivia, como Santa Cruz. Para lograrlo debió pactar con los actores con poder de cada región. En el caso potosino, el actor más relevante era el sindicato minero, con el cual se acordó mantener los puestos de trabajo, el valor del salario y la subvención a las pulperías. En el caso cruceño, hubo un pacto con las élites agroindustriales a las cuales se prometió no aplicar ningún proceso de reforma agraria a la vez que se le dotó de recursos para su actividad económica. Estos pactos lograron el equilibrio político territorial del Estado boliviano por un tiempo. Este esquema fue financiado con los recursos de la Comibol.

Sin embargo, ya fuera por la caída del precio del estaño, por la ausencia de inversión en nuevos yacimientos o por la creciente burocratización

⁵⁰ *El Siglo*, “Al comenzar un nuevo año”, 3 de enero de 1985.

de la estatal minera, este esquema de relación llegó a su fin en 1964 con el golpe de Estado de René Barrientos. El Estado rompió su pacto con los actores mineros y los suprimió del juego político, despidiendo trabajadores, reprimiendo a sus organizaciones sindicales y buscando atraer la inversión extranjera a la minería. Esto ahondó la marginación de Potosí que no pudo articular demandas de diversificación económica y mejoras en condiciones de desarrollo. Se fundaron varias organizaciones de referencias territorial como los comités cívicos, pero sin fuerza alguna.

En Santa Cruz las cosas fueron distintas. El pacto con sus grupos de poder, iniciado en 1952, se mantuvo y generó un empresariado poderoso ampliamente beneficiado de las dictaduras, a las cuales respaldó abiertamente. El gobierno de Banzer convirtió a Santa Cruz en la región de mayor desarrollo y capacidad industrial de Bolivia, articulándola en un eje económico que incluyó a los departamentos de Cochabamba y La Paz.

Cuando en 1982 se inició el proceso de transición a un régimen democrático, la relación del centro con la periferia potosina volvió a estructurarse en torno al actor con poder, los mineros sindicalizados. Comcipo se revitalizó, operativizada por el sindicato minero y los partidos de izquierda. Si bien estos últimos levantaron las banderas de la lucha regional una y otra vez, lo hicieron para mantener sus privilegios o para satisfacer a sus clientelas políticas. Con el beneplácito de Comcipo se construyó la planta de fundición de plomo y plata de Karachipampa, y se creó la Línea Aérea Imperial (LAI). Ambas fueron palpables fracasos empresariales, pero se tornaron en importantes fuentes de empleo para los grupos de poder alineados a la izquierda.

Capítulo 3

Relaciones centro-periferia en el Estado neoliberal (1985-2006)

El gobierno de Hernán Siles, acosado por la hiperinflación y la ausencia de gobernabilidad, adelantó el fin de su mandato y convocó a elecciones para el domingo 14 de julio de 1985. Estos comicios proclamaron como ganador a Acción Democrática Nacionalista (ADN), el partido del general Banzer, con el 28,5 % de los votos, seguido del MNR, con el 26,4 %, y el MIR, con el 8,8 %.

Los partidos favorables al rol de la empresa privada en la economía habían tomado la posta. Si se toman como referencia las elecciones de 1980 (las primeras desde el retorno a la democracia), para 1985, ADN subió su votación en 14 puntos y el MNR, en 8,7 %. Las corrientes de izquierda pagaron los costos del desgaste del gobierno de la Unidad Democrática Popular (UDP): el Frente Popular Unido (FPU) apenas alcanzó un 2,2 % de los votos (Romero 1998, 30).

Empero, como ninguno de los candidatos logró un apoyo del 50 % más uno de los votos –requisito imprescindible para ser electo como presidente de manera directa–, se dejó la decisión en manos del Parlamento. Los tres partidos con mayor representación en el Poder Legislativo (ADN, MNR y MIR) llegaron a un consenso histórico mediante el cual se designó a Paz Estenssoro, nuevo presidente de la República y a Luis Ossio, vicepresidente.

Con este respaldo, en agosto de 1985, Paz Estenssoro anunció un paquete de medidas económicas y políticas destinadas a frenar la hiperinflación y a poner en marcha un nuevo modelo económico y político

neoliberal. Para entonces, la hiperinflación llegaba al 1500 % mensual y Bolivia se sumergía en una anomia política y social caracterizada por paros y huelgas. Esta fue la base para legitimar las medidas de *shock* delineadas en el Decreto Supremo 21 060.

Los resultados de aplicar este programa fueron rápidos y efectivos: la inflación bajó de 25 000 % anual a un dígito dos años después; el PIB, que solo había reportado caídas entre 1978 y 1985 creció, modestamente, en un 2,7 % en 1987, y 3 % en 1989. El déficit del presupuesto nacional, que representaba más de 25 % del PIB en 1984, cayó al 3 % en 1988. Las exportaciones de USD 500 millones en 1985 subieron a USD 821 millones en 1988.

Paralelamente, comenzó un proceso de desestatización de la economía que implicaba desplazar “la dinámica de funcionamiento económico desde el Estado hacia las fuerzas del mercado” (Burbano de Lara 2014, 174). A la vez, inició una institucionalización de la dinámica política a través del cambio del eje de mediación y representación política de los sindicatos a los partidos políticos. Finalmente, desde 1994, se promovieron cambios en la relación centro-periferia; el Estado redefinió su presencia en los espacios locales para alcanzar una mayor eficiencia en la gestión administrativa y mejorar la distribución de los recursos mediante la Ley de Participación Popular (Burbano de Lara 2014, 196).

El modelo neoliberal contenía dos programas: uno de estabilización y otro de reforma estructural. El primero consistía en una unificación cambiaria sostenida por políticas fiscales y monetarias muy estrictas, y por medidas de alivio de la carga de la deuda externa. El segundo buscaba liberalizar los precios con la supresión de los controles internos, abrir ampliamente la economía al comercio exterior y a los movimientos internacionales de capital y flexibilizar el mercado de trabajo (Morales 2012).

En el plano político, la apuesta era sustituir a los anteriores interlocutores y reemplazarlos por partidos políticos como la única instancia de mediación entre el Estado y la sociedad. Esto implicaba eliminar o debilitar organizaciones como la COB (Torrico 2006, 243). Los principales actores del sistema de partidos políticos fueron el MNR, el MIR y ADN, que presentaban candidaturas a cargos electivos tanto a nivel nacional como subnacional.

El neoliberalismo y el ingreso de la minería privada en Potosí

Las políticas neoliberales produjeron un cambio profundo en la vida económica y política de los departamentos mineros. Numerosas familias quedaron sin ingresos, las empresas y negocios de la ciudad cerraron y la migración era constante.¹ En Oruro y Potosí, departamentos mineros por excelencia, este proceso potenció las minerías mediana y cooperativa. A lo largo de las siguientes décadas, estos dos sectores ocuparían los espacios mineros antes explotados y controlados por la estatal Comibol.

El gobierno retiró a 23 000 trabajadores de la Comibol; suprimió la tuición de esta empresa sobre las áreas mineras de Reserva Fiscal; suspendió la obligación de las mineras a entregar su producción a las fundiciones estatales, y estableció la libertad de comercialización y de exportación. Por último, realizó una reforma tributaria que liberó a los empresarios mineros de todo pago impositivo, salvo el de las regalías (Devisscher 2008, 3). La idea era mostrar un país con grandes potencialidades mineras, una política macroeconómica favorable al desarrollo del sector y una legislación liberal, especialmente en los aspectos tributarios (Morales y Evia 1995, 2).

Con el masivo despido de los trabajadores mineros, se intentó neutralizar a uno de los más poderosos actores sociales. Aunque el cierre de la Comibol estaba justificado por un extenso discurso tecnocrático que aludía a la necesidad de equilibrio fiscal, de eficiencia en la producción y de racionalidad en la administración, estaba claro que se buscaba una apertura a la empresa minera mediana. Esta abarcaba a aquellas empresas privadas que tenían operaciones mayores a las 500 toneladas de mineral por día, altos volúmenes de inversión, en especial extranjera, y operaban con tecnología moderna y baja demanda de fuerza de trabajo (Devisscher 2008).

Dos empresas concentraron las inversiones en este sector: Compañía Minera del Sur (Comsur), de propiedad de los hermanos Antonio y Gonzalo Sánchez de Lozada, y Empresa Minera Unificada Sociedad Anónima (Emusa), de Mario Mercado Vaca Guzmán. Estas empresas

¹ Guido Romay (experiodista del periódico *El Siglo*), en conversación con el autor, agosto de 2017.

concentraban un 80,8 % del total del valor bruto de producción de este sector (Contreras 1989, 64). Para 1994 existían 11 empresas registradas en la Asociación Nacional de Mineros Medianos, de las cuales seis estaban ubicadas en Potosí, dos en Oruro, una en La Paz y una en Santa Cruz. Estos empresarios mineros eran, a su vez, importantes dirigentes de partidos políticos: Gonzalo Sánchez de Lozada pertenecía al MNR y Mario Mercado Vaca Guzmán era un alto dirigente del ADN y ocupó el cargo de alcalde de la ciudad de La Paz, su ciudad natal. En 1985 fue elegido senador por el departamento de Potosí.

Cuatro políticas públicas se ejecutaron para fomentar la empresa minera privada. En primer lugar, desde septiembre de 1985 se suprimió el dominio que tenía la Comibol sobre el 80 % de las áreas mineralizadas y se ofreció a la empresa privada la posibilidad de acceder a áreas con gran potencial minero que, además, ya disponían de estudios geológicos y mineros realizados por la propia Comibol (Morales y Evia 1995, 17). En segundo lugar, se pasó de un sistema de pago de regalías a un pago por impuesto a las utilidades.² En tercer lugar, se dictaminó la libre comercialización de todos los minerales, con lo que se suprimió la obligación de las empresas de entregar su producción a las fundiciones estatales, en especial a la de Vinto (ubicada en Oruro), por lo que pudieron exportar libremente sus concentrados. Finalmente, se amplió la posibilidad de que la Comibol celebrara contratos con privados a través de la modalidad *joint venture*, sistema que amplía las garantías para las inversiones extranjeras.³

Los efectos de estas políticas sobre la inversión privada fueron notables. En 1986 este sector invirtió USD 3,4 millones; en 1991 esta cifra

² Con el pago por regalías, los minerales metálicos tributan sobre las utilidades *presuntas* definidas como la cotización oficial menos los costos de operación minera y los gastos de realización, con un gravamen entre 20 y 53 %, dependiendo del mineral. En cambio, el sistema de impuestos por utilidades implica el pago por parte de la empresa de un 30 % a las utilidades netas de una gestión y de un impuesto complementario, equivalente a la diferencia entre el impuesto a las utilidades y el 2,5 % de las ventas netas (Morales y Evia 1995, 19).

³ Por una parte, en la Constitución se establecía que el suelo y el subsuelo del territorio eran de dominio del Estado; por otra, garantizaba la inversión internacional con la condición de que la empresa, dentro de los 50 km de las fronteras, no adquiriera ni poseyera directa o indirectamente ninguna propiedad minera. Esta normativa constituía un desincentivo a la minería privada, puesto que ningún empresario realizaría inversiones que valorizaran un yacimiento “sobre el que no poseerá sino un derecho que viene de un contrato que tiene una duración limitada” (Morales y Evia 1995, 18).

subió a USD 67,7 millones para llegar, en 1992, a USD 125 millones. La inversión minera representó casi un 40 % del total de la inversión privada y un 2 % del PIB, en su mejor año. Este notable incremento en las inversiones de la minería mediana en 1992, se explica, en buena medida, por la actividad de la empresa Comsur, asentada en los yacimientos potosinos de Porco y del cerro Rico en la modalidad de *joint venture*.⁴ El departamento que recibió las mayores inversiones fue Potosí. Se destacaron las labores de las empresas Auspac (oro), Comsur (zinc, plata y plomo), Comco (plata) y Emucp (antimonio). En el caso de Oruro, se destacó el trabajo de la empresa Inti Raymi (oro), subsidiaria de Emusa.

Sin embargo, el efecto de la minería mediana sobre la economía nunca fue alto. Su contribución al PIB nacional a principios de los setenta llegó a la cifra récord de 15 %; en los posteriores años, no superó el 9 %. El aporte de los ingresos del Estado por concepto de impuestos fue irrelevante. En 1993, la minería mediana solo aportaba con el 0,07 % al Tesoro General de la Nación. Como señalan los expertos Juan Antonio Morales y Justo Espejo (1994, 18),

hay razones para pensar que el sistema de regalías penaliza al gobierno, más allá de lo que corresponde, cuando los precios internacionales son bajos. En el sistema de regalías, la base imponible es la utilidad presunta, que está dada por la cotización oficial menos el costo presunto y los gastos de realización por unidad, multiplicado por las cantidades exportadas. Los precios internacionales determinan la cotización oficial.

En lo que respecta a generación de empleo, la tendencia fue descendente. En 1978, la minería mediana abarcaba al 11 % del total de la fuerza laboral; para 1987, esta cifra bajó al 7 %, y en 1992, al 4,9 %. Es decir que a medida que la minería mediana tomaba el lugar de la Comibol en el área de exportaciones, disminuía su contribución al empleo. Como señala Devisscher (2008, 7): “La minería mediana, aunque más tecnificada, no contribuye significativamente a la generación de empleo en el país, ocupando apenas el 1,44 % de la PEA”. En otros términos, “la

⁴ La minería mediana trabajaba principalmente con tres metales: oro, zinc y plata. En el año 1993 representaron el 15,8 %, 10,1 % y 7,4 % del total de las exportaciones de minerales respectivamente.

minería hoy es una actividad en la que a mayores inversiones y bienes de capital coloca, menor cantidad de obreros contrata” (PNUD 2005, 123). En resumen, durante el neoliberalismo hubo un importante impulso a la inversión minera, aunque su impacto sobre la economía potosina fue irrelevante.

La participación popular como nuevo escenario de la relación centro-periferia

A comienzos de los ochenta, junto con la democracia, vino la demanda descentralizadora. Desde la perspectiva de sus impulsores, la descentralización era un paso necesario para modernizar el Estado, puesto que esta no solo se concebía como un mecanismo de fortalecimiento de los gobiernos locales, sino también de la economía de mercado. Si, en lo económico, el neoliberalismo buscaba debilitar el protagonismo estatal en la economía, dando mayor capacidad a la iniciativa individual, con la descentralización se deseaba activar las potencialidades locales como actores del desarrollo. Esto implicaba plantear un cambio en la distribución territorial del poder en torno a la elección de las autoridades, las competencias y los recursos.

Empero, el proyecto de descentralización, tal como lo pensaron sus impulsores, no contaba con apoyo político: luego de estudios y largas reuniones, cuando ingresó al Congreso para su aprobación, fue rechazado por la bancada del MNR durante la gestión de Jaime Paz Zamora.

En abril de 1994, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) promulgó la Ley de Participación Popular (LPP), que marcó un “giro radical al debate sobre la reforma del Estado en Bolivia al proponer una descentralización municipal antes que departamental” (Burbano de Lara 2014, 202). Esta norma planteaba una nueva manera de territorialización que reconocía niveles de gobiernos municipales y provinciales, aunque no departamentales; así, la relación centro-periferia se empezó a forjar entre los municipios y el Estado y no entre este y los nueve departamentos (203).

El reconocimiento económico acompañó al político: el reparto de los recursos fiscales se empezó a dar a partir del número de habitantes de cada municipio. Antes, solo los municipios de capital de departamento

recibían recursos económicos; con la nueva ley, se tomó en cuenta a 311 municipios, que por primera vez recibieron una transferencia del 20 % del rendimiento combinado de renta y aduana. Esto permitió que se ejecutara alrededor del 40 % de la inversión pública nacional, que incluyó más de dos tercios de la inversión social en educación, salud y saneamiento básico (Gray Molina 1997, 22). Aquello marcó un radical contrapunto con lo que pasaba antes de la LPP, cuando

la coparticipación tributaria en el área rural solo alcanzaba el 8 % del total de recursos, mientras que el 80 % se destinaba a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y el 11 % al resto de las capitales de departamento. Para 1995, los municipios habían administrado algo más de USD 200 millones, equivalentes a más de un tercio de la inversión pública nacional y más de dos tercios de la inversión social nacional. Las “obras” de la Participación Popular ya eran visibles en áreas urbanas y rurales y despertaron el interés tanto de organizaciones territoriales de base como de los partidos políticos nacionales (Gray Molina, Pérez y Yáñez 1999, 15).

Esta súbita disponibilidad de recursos tuvo notables efectos en la política subnacional. El cargo de alcalde, antes un espacio de disputa solo en la capital de cada departamento, pasó a serlo también en los municipios más alejados. Con la LPP la sociedad local se movilizó en la búsqueda de desarrollo y de canales de participación; se modificó la lógica de los partidos, que tuvieron que empezar a cambiar sus prácticas en los municipios; y se fomentaron los liderazgos y movimientos ciudadanos, que terminaron por reconfigurar el mapa político del país: emergió una clase política local, con intereses propios, por fuera de los partidos. En 1995 se realizaron comicios municipales: 464 indígenas campesinos fueron elegidos concejales de un total de 1624 concejalías; ocuparon asientos en 200 municipios y tuvieron mayoría absoluta en 72 de ellos (Gray Molina, Pérez y Yáñez 1999, 15; Avilés 2010, 108).

Durante los primeros años de implementación de la LPP, la dirigencia cívica, la COB y la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) se opusieron a ella, quizás porque sus dirigentes adivinaban el debilitamiento de estas instituciones como canales de mediación política. El reconocimiento de la personería jurídica a organizaciones territoriales de base se interpretó como un intento deliberado de

desmovilización del sistema sindical obrero y campesino: la dirigencia de la CSUTCB llamó a boicotear la inscripción de comunidades campesinas e indígenas. Adicionalmente, la amenaza de “privatizar” los servicios de educación y salud alimentó el escepticismo de las organizaciones sindicales (Gray Molina, Pérez y Yáñez 1999, 13). Para la COB se trataba de una “ley maldita” porque dividía a los sectores populares, entregaba los municipios a la lógica del mercado y aumentaba los mecanismos de control del Estado (Cortez 2001, 104).

Un estudioso del proceso señalaba que “en los centros mineros la participación popular fue recibida con salvas de dinamita; las organizaciones que resistieron las andanadas de los golpes de Estado y han escrito muchas páginas de la historia nacional, no quieren competidores en su redil” (Archondo 1997, 43). Los miembros de organizaciones nacionales, como la COB, o departamentales, como los comités cívicos, sentían que su fuerza y capacidad de aglutinamiento había sido afectada. Como resume Blanes (1999, 5), la LPP puso “punto final al periodo de protagonismo de los movimientos sindicales que el mismo Estado propició con la nacionalización de las minas, así como de los movimientos sociales regionales”.

Potosí y sus luchas regionales

El neoliberalismo marcó un cambio profundo en la economía y política del departamento de Potosí. El aparato productivo minero sufrió una transformación considerable por el proceso desestatizador desplegado por el gobierno del MNR. El espacio minero fue ocupado paulatinamente por la minería privada mediana y cooperativista que, en algunos casos, en alianza con el capital transnacional, se encargó de yacimientos que antes habían sido responsabilidad de la Comibol.

Como producto del despido de trabajadores de la Comibol, el sindicato minero se debilitó numérica y políticamente. Para 1987 solo 3500 personas trabajaban en la entidad estatal y los sindicatos eran vistos por la ciudadanía como culpables de la crisis económica y del caos político, cuando no de la hiperinflación vivida durante la gestión previa de la UDP.

Con estos antecedentes, las elecciones presidenciales de junio de 1985 mostraron la profundidad del cambio. En el departamento de Potosí, que históricamente había respaldado a las corrientes de izquierda, triunfó ADN, partido del exdictador Hugo Banzer Suárez, seguido del MNR y MIR. Las fuerzas de izquierda y defensoras del estatismo, como Izquierda Unida (IU), obtuvieron muy baja votación.

Las elecciones nacionales se dieron conjuntamente con las municipales, en las cuales la preferencia hacia los partidos de derecha se ratificó. En la ciudad de Potosí venció la ADN, seguida del MNR y del MIR, que obtuvieron la mayoría de las concejalías y dejaron a la IU con un solo concejal. Aunque el vencedor en las elecciones fue la ADN, las alianzas que se tejieron dentro del Concejo terminaron por designar a Daniel Acebey del MNR como alcalde municipal, junto a Luis Ossio Sanjinez y Cristina Aitken de Soux como presidente y vicepresidenta del Concejo Municipal.⁵

Con Víctor Paz Estenssoro en la presidencia, el MNR copó los espacios político-institucionales del departamento sin que se hubiera producido el más mínimo atisbo de oposición, como ocurrió en el pasado inmediato, cuando la COD o Comcipo tenían que dar su visto bueno a las nuevas autoridades. Se nombró a Armando Urioste prefecto y a Jhonny Prada Uribe presidente de Cordepo, dos personajes, por tradición y perfil tecnocrático, completamente distintos de sus predecesores.

En 1985 las fuerzas sindicales y de izquierda sufrieron una merma considerable en su capacidad política. Sin embargo, tal debilidad no significó inacción, ni la capitulación implicó derrota. Estos actores buscaron espacios para oponerse al gobierno y encontraron en Comcipo una institución clave que les permitió contrarrestar el modelo económico en nombre de una lucha regional.

¿Cómo ocurrió todo esto? ¿Cómo fue posible que se desplegaran acciones colectivas que defendieran al Estado nacionalista agitando las banderas del regionalismo? ¿Cómo la región pudo respaldar militante-mente las movilizaciones aunque nunca, o casi nunca, tuvieran éxito?

Para abordar estas preguntas, a continuación se analizan cuatro acciones: la defensa de la minería estatal, la puesta en funcionamiento de la

⁵ *El Siglo*, "Daniel Acebey se posesiona hoy como alcalde municipal", 20 de septiembre 1985.

planta de fundición de plomo y plata de Karachipampa, la defensa del cerro Rico de Potosí y la oposición a la explotación del litio del salar de Uyuni. Estas demuestran cómo la memoria colectiva potosina, anclada en la imagen de riqueza y opulencia del pasado frente a su pobreza actual; el nacionalismo, expresado como control estatal de los recursos naturales, y la identidad territorial se imbrican de una manera sorprendente y son la base para organizar largas movilizaciones regionales dirigidas por las fuerzas sindicales y de izquierda para oponerse a la expansión territorial del modelo neoliberal. Esto, en definitiva, explica la imposibilidad de que aparezca un clivaje centro-periferia y delinea los rasgos de lo que llamo una periferia pasiva. Es decir que, a pesar de que existan factores como identidad, actores con poder y recursos apetecidos por el centro político, Potosí no puede desarrollar un esquema de resistencia territorial al centro porque su actor más importante opera con base en la ideología nacionalista.

Finalmente, se analizan los efectos de dos hechos que afectaron las relaciones del Estado con las regiones: por una parte, se estudia la aplicación de la LPP en el departamento de Potosí y, por otra, la aparición de un nuevo actor con poder, los cooperativistas mineros, cuyos intereses empresariales estuvieron en permanente tensión con los del departamento.

La lucha contra el cierre de las minas y la marcha por la vida

El 29 de agosto de 1985, el presidente Víctor Paz Estenssoro anunció el despido de trabajadores mineros de la Comibol, bajo el argumento de que las minas estaban agotadas y eran la causa del déficit fiscal.⁶ En realidad, se trataba de una medida política que buscaba desactivar a un actor central, que había adquirido capacidad de veto de las políticas estatales (Mayorga 1991, 19-56). Se buscaba debilitar a la COB y a su expresión regional, la COD potosina.⁷ Este desfavorable contexto estimuló a que los actores sindicales y de izquierda reforzaran su dominio sobre Comcipo, en busca

⁶ Importantes minas como Siglo XX, Matilde, Corocoro y otras se habían paralizado y se preveía que otras correrían la misma suerte. El precio de la libra fina de estaño se había desplomado hasta USD 2, cuando el costo de producción se acercaba a los USD 8.

⁷ *La Razón*, “La última movilización minera del siglo XX, 28 años después”, 28 de agosto de 2014. <https://bit.ly/3h3wZkH>

de una mayor y determinante presencia en su directiva. De este modo, Dhery Prieto, abogado y docente universitario, fue forzado a renunciar a la presidencia de la entidad cívica, para ser reemplazado por un dirigente minero. Como testimonia Prieto, los dirigentes sindicales y partidos de izquierda, como el PCB y el Partido Obrero Revolucionario (POR), estaban “muy dolidos” por la política antisindical que desplegaba el gobierno y querían ejecutar acciones directas, de fuerza, tomar las instituciones, “romper con todo”, ideas con las que él no coincidía.⁸

Con la nueva política económica ya en ejecución, los directivos de Comcipo, “por instrucción de la COB”, buscaron convertirlo en un mecanismo mediador entre el gobierno y la FSTMB, para evitar el cierre de las minas, pues ello afectaría a toda la región.⁹ Pero este objetivo no se logró cumplir ya que como, señala Luis Fernández Fagalde, expresidente de Comcipo, “la respuesta de parte del gobierno siempre era la misma, la explicación técnica de que Comibol era insostenible desde el punto de vista financiero y no quedaba otra alternativa que su cierre”.¹⁰ Finalmente, la directiva de la COB organizó una huelga general que duró 15 días sin tener efecto político alguno; además, llegó a su fin abruptamente por un estado de sitio que suspendió las garantías políticas y constitucionales. Varios dirigentes sindicales y cívicos fueron apresados y confinados.

Un año después, en agosto de 1986, en el XXI Congreso de la FSTMB, realizado en la ciudad de Oruro, se organizó una caminata hasta la ciudad de La Paz denominada “Marcha por la vida”, que buscaba detener el despido de los trabajadores de la Comibol. Un manifiesto publicado “desde la clandestinidad” por dirigentes de Comcipo muestra su grado de compromiso con las demandas mineras:

Comcipo no aceptará diálogo desleal ni dilatorio, que como base de la negociación el gobierno deje en suspenso cualquier intento de cierre inmediato de las minas, la formación de cooperativas con mineros relocalizados y el ofrecimiento de 1000 millones para trabajadores que deseen acogerse al retiro voluntario. La delegación de Comcipo irá a la negociación en forma coordinada con su similar de Oruro y la FSTMB.¹¹

⁸ Dhery Prieto (expresidente de Comcipo), en conversación con el autor, agosto de 2016.

⁹ Carlos Derpic (expresidente de Comcipo), en conversación con el autor, agosto de 2016.

¹⁰ Luis Fernández Fagalde (expresidente de Comcipo), en conversación con el autor, agosto de 2016.

¹¹ *El Siglo*, “Comcipo no aceptará diálogo desleal ni dilatorio”, 13 de agosto de 1986.

Sin embargo, estas acciones no lograron evitar que el gobierno cerrara las minas. Una vez que el Ejército detuvo la marcha en la localidad de Kalamarca, a 60 km de la ciudad de La Paz, los mineros retornaron a sus lugares de origen y aceptaron dejar sus trabajos a cambio de una compensación económica ofrecida por el gobierno que consistía en un pago en efectivo de USD 1000 por año trabajado.

Karachipampa: la lucha por un elefante blanco

La empresa de fundición de plomo y plata de Karachipampa se concibió en 1975, en el gobierno de Hugo Banzer, como parte de su programa de industrialización. Con base en los estudios técnicos del consorcio belga-alemán Klockner INA-Sidech-Machim, se fijó la localización de la planta en la zona de Karachipampa, a 10 km de la ciudad. Posteriormente, y por presiones de Comcipo, Juan Pereda firmó el decreto para instalarla. En el gobierno del general David Padilla Arancibia (1978-1979), se autorizó instalar el complejo metalúrgico a un costo proyectado de USD 123 millones, y se adjudicó el proyecto a la empresa alemana Klockner.

El proyecto fue concluido y entregado en enero de 1983; sin embargo, hasta la fecha de publicación de este libro (2022), no ha entrado en funcionamiento en las condiciones para las que fue diseñado. La planta, con una capacidad de tratamiento de 5131 toneladas de mineral, necesita de una cantidad de concentrados de plomo y plata que el país nunca pudo producir. En el caso del plomo, Karachipampa necesitaba de 24 216 TMF anuales de concentrado; la sumatoria de todo lo que produjo el país entre 1980 y 1989 apenas llegó a 11 210 TMF, cantidad absolutamente insuficiente para que la planta operara en condiciones rentables (Espinoza 2010, 304-307).

Estos errores de dimensionamiento y factibilidad del proyecto revelan que Karachipampa fue fuente de corrupción durante los gobiernos militares y de empleo para los grupos de poder local. La planta no podía funcionar por la provisión insuficiente de materias primas, el reducido tamaño para competir en los mercados internacionales (donde se trabajaba con economías de escala) y su tecnología obsoleta y contaminante

(Strauss, citado en Espinoza 2010, 307).¹² Sin embargo, en esta factoría que no funcionaba trabajaban más de un millar de personas repartidas en las diferentes fases de producción. Para los potosinos la puesta en funcionamiento de Karachipampa representaba una esperanza para salir de la crisis minera y vislumbrar horizontes de desarrollo; era la cristalización de un viejo anhelo. Un editorial del periódico local afirmaba: “Karachipampa, a pesar de todas las dificultades que tuvo y aún tiene, tiene importantes proyecciones para nuestra tierra”.¹³

Para las fuerzas aglutinadas en torno a la COD, que habían tomado la dirección de Comcipo, Karachipampa representaba una gran oportunidad para desacreditar y generar inestabilidad al gobierno del MNR, colocándolo en el brete de tener que responder a un asunto técnicamente irresoluble y políticamente explosivo. Además, buscaban evitar el despido de la enorme masa de trabajadores de la fundición aunque, en realidad, ellos no hicieran nada.

En los últimos días de octubre de 1985, a pocos días de la efeméride cívica departamental del 10 de noviembre, una comisión formada por el prefecto Armando Urioste, el alcalde Daniel Acebey y el presidente de Comcipo viajó a la ciudad de La Paz para entrevistarse con el presidente. Se solicitaron USD 10 millones como capital de arranque para el funcionamiento de Karachipampa.¹⁴ Al no obtener respuestas, a fines de enero de 1986, los dirigentes de la COD y Comcipo convocaron a una marcha para denunciar la desatención por parte de los poderes del Estado y pedir el inicio de las operaciones en Karachipampa. Esta movilización fue respaldada por la Fedecomín, cuyos representantes, esperanzados en ser proveedores de concentrados para la fundidora, expedieron un manifiesto que posicionaba a Karachipampa como único medio para la diversificación productiva:

frente a los atentados y postergación de Potosí, apoyamos que se ponga en funcionamiento Karachipampa. Hasta cuándo vamos a seguir siendo

¹² Dunkerley señala que a los militares encargados de ejecutar el proyecto los llamaban despectivamente *karachipampitas*, para denotar que su vida y fortuna eran producto de su relación con la construcción de la fundidora.

¹³ *El Siglo*, “Potosí y la minería”, 8 de enero de 1986.

¹⁴ *El Siglo*, “Autoridades potosinas se entrevistan hoy con el presidente de la república”, 28 de octubre de 1985.

la vaca lechera, si ya estamos exánimes que solo porque Dios es grande no morimos de hambre colectiva [...] hagamos que Cordepo inicie un plan de diversificación económica promoviendo la industrialización, haciendo funcionar de una vez por todas la fundición de Karachipampa.¹⁵

En ese marco y con una población que unánimemente exigía el funcionamiento de Karachipampa, los parlamentarios potosinos, junto con Comcipo, conformaron una comisión que viajó a la capital a efectos de reunirse con el presidente; allí lograron que Paz Estenssoro se comprometiera a hacer funcionar la planta en el plazo de cuatro meses, en junio de 1986.¹⁶ Esto fue un éxito para Comcipo: sus representantes habían logrado sumar a los parlamentarios potosinos a su movilización, conseguido el respaldo de la opinión pública potosina y, por último, habían obligado a que el gobierno se comprometiera en algo que —ellos lo sabían— era imposible de cumplir.

Paz Estenssoro, sea porque desconocía la complejidad del tema o porque necesitaba de una maniobra política que postergase el conflicto, dejó descolocados a sus ministros, que tenían un plan completamente opuesto. Para la tecnocracia liderada por el ministro de Planificación, Gonzalo Sánchez de Lozada, ninguna demanda podía procesarse dentro de los moldes de la política anterior, es decir, tomando en cuenta las presiones regionales o sociales, sino solo mediante criterios técnicos y de rentabilidad económica. Para él y los demás ministros, todas las demandas debían canalizarse a través de partidos políticos, no mediante sindicatos ni instituciones cívicas.

Un mes después, los ministros del gabinete económico viajaron a la ciudad de Potosí para asistir a una reunión convocada por Comcipo con la intención de “dar una solución real y definitiva al problema”. Sánchez de Lozada llegó tarde al encuentro y, ante las recriminaciones, tuvo la intención de irse. La respuesta del gobierno fue clara y totalmente contraria al compromiso inicial de Paz Estenssoro. Se señaló que “la puesta en marcha de la planta se producirá apenas se solucionen los problemas de la materia prima, la garantía técnica de los proveedores de tecnología,

¹⁵ *El Siglo*, “Manifiesto”, 31 de enero de 1986.

¹⁶ *El Siglo*, “Karachipampa arranca en junio”, 28 de febrero de 1986.

una administración eficiente y un capital adecuado de operaciones”. Esto implicaba una rotunda negativa al plan de iniciar las operaciones de la planta, ya que, por ejemplo, se sabía que la materia prima y el financiamiento eran imposibles de conseguir. Con su característica ironía, el ministro Sánchez de Lozada agregó que “pese a que la concepción del proyecto Karachipampa representó un escandaloso negociado, a la fecha se convierte en la única solución para la minería boliviana cuando se halla acosada por la crisis del estaño”.¹⁷ Los argumentos expuestos por los ministros no lograron convencer a los miembros de Comcipo, quienes al finalizar la reunión resolvieron censurarlos y pedir la renuncia del prefecto de Potosí.¹⁸

Para dejar claro que el gobierno no tenía la más mínima intención de regresar sobre sus pasos, en días posteriores se entregaron cartas de despido a 400 trabajadores de Karachipampa (solo una parte de la planta laboral de una factoría sin funcionamiento). Como si esto fuera poco, se intentó trasladar los concentrados de plomo y plata de la planta, valuados en varios millones de dólares, a otro centro minero. La institución cívica intervino mediante un bloqueo en las puertas de la fundición, y logró que las volquetas no salieran de Potosí.¹⁹ En ese momento, la presidencia de Comcipo estaba a cargo del abogado Luis Fernández Fagalde, de militancia izquierdista, junto a los dirigentes mineros Jacinto Velásquez y Alberto Choque, de la Empresa Minera Unificada del Cerro de Potosí (EMUCP).

El 4 de julio de 1986 los dirigentes de Comcipo organizaron una marcha de más de 30 000 personas. Con esta presión, el presidente Paz Estenssoro tuvo que volverse a sentar en la mesa de negociaciones con los representantes de la región y se tomó la decisión de encargar un estudio a la consultora alemana Stolberg para que analizara las formas de poner en marcha la empresa.²⁰ El ministro de minería Jaime Villalobos adelantó que la planta se pondría en funcionamiento para el año venidero y la dirigencia de Comcipo dejó de insistir en la demanda. No se procedió

¹⁷ *El Siglo*, “Gabinete económico analizó problemas regionales”, 10 de marzo de 1986.

¹⁸ Carlos Aranibar (expresidente de Comcipo), en conversación con el autor, septiembre de 2016.

¹⁹ *El Siglo*, “Comcipo evitó desmantelamiento de Karachipampa”, 11 de junio de 1986.

²⁰ *El Siglo*, “Disconformidad en Comcipo y COD por entrevista con presidente Paz Estenssoro”, 23 de julio de 1986.

al temido despido de trabajadores; Comcipo se hallaba enfrascada en un conflicto mucho mayor: el despido de trabajadores de la Comibol y el apoyo a la “Marcha por la vida”, que se mencionó en el acápite anterior.

El tema se retomó el 10 de noviembre de 1987, cuando los dirigentes de Comcipo convocaron a una marcha de la “dignidad potosinista, contra el trato injusto del gobierno central al pueblo potosino”. Esta acción arruinó los festejos de la efeméride departamental e impidió que se realizaran desfiles y conmemoraciones en los cuales, normalmente, el gobierno tiene un papel destacado, puesto que, a través de la Prefectura, los organiza y participa de ellos.²¹ Durante los primeros meses de 1988, el gobierno no tuvo intenciones de poner la planta en funcionamiento. Treinta y dos trabajadores fueron despedidos y el ministro Villalobos aseguró: “Karachipampa es un elefante blanco y uno de los malos negocios que efectuó el Estado boliviano”. El senador oficialista Mario Mercado afirmó que Karachipampa había sido sobredimensionada, no se podrían garantizar operaciones estables y existía un notable sobreprecio en el proyecto.²²

Así se deslegitimaba la demanda potosina con tres argumentos muy difíciles de rebatir: Karachipampa era un proyecto nacido durante gobiernos dictatoriales con el fin de alimentar la rapacidad de militares corruptos; era una planta sobredimensionada, pues no había suficientes minerales y carbón para alimentar la fundición; tenía una tecnología obsoleta y contaminante que ya había dejado de ser usada en los países donde la planta fue diseñada.

Un elemento adicional clave –pero que no se mencionaba– era que el funcionamiento de Karachipampa no podría estar a cargo del Estado, pues esto contradecía la lógica del modelo económico y el pensamiento neoliberal en boga en ese momento. Aunque la planta hubiese sido funcional desde perspectivas técnicas y económicas, no habría podido impulsarse desde el Estado como querían los cívicos, sino con inversión privada, como proponían los neoliberales. En suma, la demanda potosina no podía estar en una peor situación: no solo era técnicamente inviable, sino que estaba en contra de la lógica política y económica imperante.

²¹ *El Siglo*, “Marcha de la dignidad potosina se verifica hoy”, 10 de noviembre de 1987.

²² *El Siglo*, “Informe revelador sobre Karachipampa”, 24 de febrero de 1988.

Este panorama, del todo negativo para los cívicos potosinos, cambió sorpresivamente con la publicación y discusión del libro *Proyecciones de la producción, consumo y precios de minerales de plomo y plata*, de Jebner Zambrana Román. En este trabajo, cuya repercusión trascendió los círculos académicos, el autor, docente de la carrera de Ingeniería Minera de la Universidad Tomás Frías, demostró, con base en proyecciones históricas de producción y consumo de minerales, que Karachipampa no tenía problemas de abastecimiento de materia prima y que había suficiente para provisionarla durante las siguientes décadas. El autor decía “que en su trabajo se hacen todas las argumentaciones técnico-económicas sobre la planta demostrándose de manera irrefutable su funcionamiento”.²³

Estas conclusiones fueron respaldadas por Roberto Emilio Valda, un empresario minero que defendía la viabilidad de Karachipampa y que, una y otra vez, desafiaba a los ministros a debatir sobre el tema. Este tipo de argumentaciones gozaron de recepción y credibilidad entre la ciudadanía, porque apuntalaban el mito de que el cerro Rico y, por consiguiente, todas las minas, eran inagotables y fuentes de recursos casi infinitas: “existe una sublimación de la riqueza del cerro de Potosí que le confirió las dimensiones de lo sobrenatural” (Francovich 1980, 67).

Según esta lógica, si las minas potosinas habían podido, desde la Colonia, alimentar las arcas de la Corona española y, desde inicios de la República ser la fuente de recursos del Estado boliviano, ¿por qué entonces sus abundantes minerales no podían financiar su propia planta de fundición? ¿Por qué, en medio de una crisis económica y cuando Potosí al fin había logrado tener una fundidora que procesara *sus* minerales, el gobierno con-fabulaba contra este propósito? ¿Por qué cuando Potosí tenía una planta de fundición y podía dar valor agregado a sus minerales y exportarlos en lingotes el gobierno se negaba a dar inicio a este proyecto?

Como era previsible, los argumentos de Zambrana y Valda avivaron el conflicto. Para los cívicos y la ciudadanía, los estudios de estos profesionales dejaban sin argumentos a la postura gubernamental, que defendía la imposibilidad del funcionamiento de la planta. En marzo de 1988, Comcipo declaró estado de emergencia y exigió la creación de la Empresa Metalúrgica de Karachipampa, como paso previo a la puesta

²³ *El Siglo*, “Potosí debe movilizarse en favor del complejo de Karachipampa”, 9 de marzo de 1988.

en marcha de la fundidora. Una delegación viajó a La Paz para dar a conocer la intención al presidente Paz Estenssoro; al no recibir respuesta, resolvió convocar a un paro de 48 horas. Esta movilización fue apoyada por la cadena radial y televisiva “Alonso de Ibáñez”, que se encargaba de fortalecer la identidad potosina, levantar el ánimo de la población e informar las novedades relativas al desarrollo del paro a través de los comunicados e instrucciones de Comcipo. Al finalizar el paro, Sergio Barrientos, presidente de la entidad cívica, felicitó a “todo el pueblo potosino por su disciplinada respuesta” e “invocó a mantener *el espíritu cívico de la potosinidad*, encomendando al sindicato de la prensa continuar con la cadena radial como televisiva para ampliar información y concientización sobre Karachipampa” (cursivas del autor).²⁴

Posteriormente, y ante la falta de respuesta concreta, la dirigencia de Comcipo tomó una postura radical de desafío a la autoridad. El 3 de abril, luego de una masiva marcha, el presidente de Comcipo se encargó de posesionar a los representantes regionales de la Empresa Minera Autónoma de Karachipampa (Emkar), institución inventada por la entidad cívica para gestionar el funcionamiento y la puesta en marcha de la planta. Los nuevos directivos de Emkar eran Sixto Delgado, como representante de la Cámara Departamental de Minería; Gerardo Fuentes, de las Cooperativas Mineras; y Roberto Emilio Valda, invitado por Comcipo. Como muestra de apoyo a esta acción y en medio de una efervescencia popular pocas veces vista, al finalizar el acto, la presidencia del Consejo Municipal hizo que miles de ciudadanos congregados en la plaza principal tomaran un curioso juramento de fidelidad a Potosí.²⁵ Ante la nueva e inesperada situación, el prefecto Daniel Urioste denunció la ilegalidad de estos nombramientos, que, según su criterio, “contravienen a las disposiciones que emanan de la ley y que se debe agotar el diálogo antes de tomar acciones de hecho”.²⁶

Esta situación obligó al gobierno a tomar en serio la constitución de Emkar; dejó de lado sus razonamientos tecnocráticos y posesionó al ingeniero Luis Sánchez como presidente de esta nueva entidad. Esto vigorizó las esperanzas regionales en una reactivación minera. El periódico *El Siglo*

²⁴ *El Siglo*, “Comcipo a los potosinos y a la opinión pública nacional”, 31 de marzo de 1988.

²⁵ Carlos Aranibar (expresidente de Comcipo), en conversación con el autor, enero de 2017.

²⁶ *El Siglo*, “Fueron posesionados representantes locales de Emkar”, 6 de abril de 1988.

lo saludó con evidente optimismo: “este primero de junio marcará un hito importante en la reactivación minero-metalúrgica y económica y quizá sea el inicio del resurgimiento de Potosí”.²⁷ Sin embargo, en realidad se trataba de otra maniobra del gobierno para postergar el conflicto y acallar la protesta. De hecho, los directivos de Emkar no hicieron mayores esfuerzos por avanzar en la puesta en marcha de Karachipampa. Más de treinta años después, la planta continúa sin funcionar. Este conflicto, al igual que los que examinaremos más adelante, revela que la periferia potosina, bajo ciertas condiciones, puede concretar acciones para enfrentarse al gobierno —como grandes movilizaciones que ponen en entredicho la autoridad del centro estatal y el orden legal—, aunque sin resultado alguno.

Como consecuencia de este fracaso, el rencor se acumuló y sería el combustible de futuras movilizaciones. El 12 de mayo se declaró día de congoja nacional; desde Comcipo se ordenó que las autoridades no atendieran la invitación de la ciudad de Sucre para recibir al papa Juan Pablo II ya que, afirmaban los cívicos, “nuestra ciudad ha sido ofendida y herida en su tradicional sentimiento cristiano por el hecho de que la jerarquía eclesiástica ha suprimido a Potosí del itinerario del Sumo Pontífice”.²⁸ El senador Mario Mercado, en una carta abierta al presidente Paz Estenssoro, expresaba el malestar de todo el departamento:

creo, señor presidente, que se está dando a Potosí un tratamiento injusto al permitir que las frustraciones se acumulen. Sus anhelos y esperanzas se postergan indefinidamente causando desaliento. No se trata solamente de la dilación de uno u otro proyecto que pueda o no tener justificación técnica y económica. Es la falta de una comprobada inquietud por el estado de atraso que se viene soportando.²⁹

La lucha por el cerro Rico de Potosí

A 4400 metros sobre el nivel del mar se yergue el cerro Rico de Potosí. Desde la fecha de su descubrimiento español, en 1545, nunca ha dejado

²⁷ *El Siglo*, “El futuro de Potosí y Karachipampa”, 7 de abril de 1988.

²⁸ *El Siglo*, “El jueves, día de congoja e indignación en Potosí”, 10 de mayo de 1988.

²⁹ *El Siglo*, “Senador Mario Mercado hace conocer reclamos potosinos ante el gobierno”, 25 de mayo de 1988.

de ser explotado y ha sido fuente de recursos económicos, a pesar de sus altibajos de rentabilidad y producción causados por la ausencia de inversiones y por la variación de los precios internacionales de los minerales.³⁰ Como efecto de la explotación de estaño y plata en el cerro, las empresas que trabajan en bocamina dejan una gran cantidad de desechos que, acumulados, forman los llamados desmontes mineros. Estos contienen una buena cantidad de minerales, sobre todo plata, que pueden ser convertidos en metal mediante un proceso de alta tecnología. En el contexto del impulso a la minería privada del gobierno del MNR, en 1988 la Compañía Minera Concepción (Comco) –subsidiaria de Comsur, propiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada– empezó a trabajar en los desmontes del cerro Rico. La empresa recogía en volquetas la escoria minera de las faldas de la montaña, la depositaba en galpones ubicados a 25 km de la ciudad para, luego de refinarla y convertirla en lingotes de plata, exportarla a través de puertos chilenos.

En torno al trabajo de Comco se tejió una serie de conjeturas sobre la magnitud de la inversión, sus utilidades y el daño que representaba a la estructura cónica del cerro. La compañía reavivó una añeja interrogante en torno a lo que dejaba la minería para el departamento, en especial las empresas de Sánchez de Lozada. Desde los años setenta, este empresario había trabajado en el río Potosí a través de dragas y, desde los ochenta, en la mina de Porco. La población jamás percibió que la empresa dejara algo en Potosí para su desarrollo.

Como la identidad potosina se fundamenta en una idea de saqueo, de que el departamento no recibe nada a cambio de lo que entrega, la exigencia de que Comco compartiera parte de sus utilidades como compensación por su trabajo en el cerro tomó cuerpo rápidamente entre la opinión pública.

En 1987, la Unesco declaró a Potosí Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, lo que ratificó y reforzó el imaginario construido en

³⁰ El experto en minas Alfredo Gutiérrez dio las siguientes cifras de la producción de minerales en el cerro: en la Colonia, desde 1550 hasta 1799, la producción de plata fue de 21 970 toneladas finas; con la cotización actual de 32,47 USD/ot el valor en el mercado sería de USD 22 935 millones. La producción de plata en el periodo 1999-2004 llegó a 3874 toneladas finas. En el periodo 1999-2008 Potosí produjo 5131 toneladas finas. Ver *Opinión*, “El Cerro Rico está herido con 138 hundimientos”, 8 de mayo de 2011. <https://bit.ly/368A9OP>

torno a la riqueza, relevancia y opulencia del pasado potosino. En este contexto, Comcipo realizó un consejo consultivo de instituciones para analizar el tema de la explotación del cerro. Al finalizar, emitió una resolución que indicaba que todas las empresas, tanto productoras como comercializadoras que trabajaban en el cerro, debían entregar una porción de sus ganancias a Potosí para construir un parque industrial. En lo referente a Comco, se señaló que la compañía debía dejar un tercio de sus utilidades –inicialmente calculadas en USD 15 000 diarios– en beneficio de la región.³¹

A pesar de que los representantes de algunos sectores se mostraban a favor de estas medidas, en realidad fue una decisión difícil de tomar, puesto que los cooperativistas mineros también trabajaban en el cerro desde tiempo atrás y, en virtud del cierre de la Comibol, ambicionaban ampliar sus concesiones y explotar los desmontes. Por tal motivo, la directiva de Comcipo no tomó las riendas del conflicto, sino que designó al Concejo Municipal para que se hiciera cargo. En julio de 1988, esta entidad, presidida por el abogado Jaime Herrera, tomó una medida sorpresiva: emitió una ordenanza municipal que determinaba la paralización de trabajos de Comco. Esta medida –que superaba las atribuciones que le otorgaba la ley al Concejo– se respaldaba en que la Unesco había declarado a Potosí Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, lo que era interpretado por los concejales como un mandato para cuidar (de ahí la idea de patrimonio) el cerro Rico.³²

En la ordenanza municipal se alertó que los trabajos de Comco “dañarán la estructura física del cerro y que las utilidades que generará esta empresa son de tal magnitud que en un año recuperará sus inversiones”, y se pidió, “como justa compensación a Potosí, exigir que parte de las utilidades que estos trabajos generen, beneficien a la región”.³³ Por primera vez se planteó la idea de establecer un impuesto local a las empresas mineras. Jaime Herrera narra el conflicto.

³¹ *El Siglo*, “Con parte de utilidades de empresas mineras y comercializadoras se propone crear parque industrial”, 18 de mayo de 1988.

³² *El Siglo*, “Concejo Municipal dispuso paralización de trabajos de Comco”, 6 de junio de 1988.

³³ *El Siglo*, “Concejo Municipal dispuso paralización de trabajos de Comco”, 6 de julio de 1988.

JAIME HERRERA. Comsur, desde hace años atrás, trabajó en las riberas del río abajo, pero llegó a tal punto su indiferencia con Potosí que ni siquiera tenía un edificio con la plata que gana y resulta que después aparece trabajando los desmontes del cerro. Entonces ahí surge una preocupación. Posteriormente, los cooperativistas se hacen dueños de los desmontes del cerro y lo venden a la Comsur, pero sin títulos. Resulta que el gerente de Comsur tenía una mamá que era superintendente de Minas y en dos días les vende a las cooperativas que a su vez lo venden a la Comsur. Ahí es cuando la gente empieza a reaccionar y hacemos un viaje al cerro y de *motu proprio* propongo al Concejo Municipal que debe intervenir. Y es la primera vez que se hace y la gente queda asombrada.³⁴

La ordenanza municipal sobre la paralización de trabajos de Comco, y su radicalidad, dejaron descolocadas a entidades que, hasta ese momento, habían apoyado las reivindicaciones potosinas. Representantes de la Cámara de Minería (Cademin) y la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomín) puntualizaron: “La ordenanza municipal no está encuadrada a ninguna disposición en vigencia, el concejo y el alcalde están equivocados, pues antes de dictar estas medidas deberían consultar a los distintos sectores potosinos, especialmente a los productores mineros”.³⁵ Ante la presión por estos intereses, la dirigencia de Comcipo tomó distancia del Concejo Municipal y de Jaime Herrera, intentando postergar el conflicto. Una resolución señaló que “la decisión del Concejo Municipal se enmarca dentro de sus atribuciones, pero esta ordenanza merecería un mayor análisis con la participación de las instituciones representativas de Potosí”.³⁶

Sorprendentemente, la acción del Concejo Municipal tuvo efectos: la gerencia de Comsur optó por el camino de la negociación.³⁷ Sin dejar de mencionar que se trataba de una ilegalidad, propuso otorgar, en calidad de donación, un millón de dólares como fondo de contrapartida

³⁴ Jaime Herrera Recacochea (expresidente del Concejo Municipal de la ciudad de Potosí), en conversación con el autor, agosto de 2016.

³⁵ *El Siglo*, “Diferentes criterios sobre decisión municipal”, 6 de julio de 1988.

³⁶ *El Siglo*, “Diferentes criterios sobre decisión municipal”, 6 de julio de 1988.

³⁷ *El Siglo*, “Óscar Bonifaz, presidente de Comsur. Estamos dispuestos al diálogo”, 6 de julio de 1988.

para proyectos de desarrollo, la transferencia de tecnología de la planta de lixiviación de Comco, la reinversión de sus utilidades en Potosí y la construcción de una escuela industrial. Pronto la presión popular obligó a Comcipo a tomar posición, y en un consejo consultivo se resolvió unánimemente rechazar la propuesta de Comsur, y más bien iniciar un proceso judicial para pedir la nulidad de las adjudicaciones de los desmontes, lo que dio fuerza al pedido. Un informe de Comcipo publicado en el periódico *El Siglo* decía:

Comsur ha nacido y se ha potenciado financiera e institucionalmente en el departamento de Potosí a través de la explotación de recursos no renovables en Porco, Ocurí, Huara Huara, Cabanías, Arofilla y otros yacimientos mineros, que pese a haberles generado enormes ganancias no ha reinvertido en Potosí ni siquiera en la construcción de un edificio propio.³⁸

Al cabo de varios meses de largas y arduas negociaciones, en que fueron clave las participaciones de Oscar Bonifaz como presidente de Comsur y de Jaime Herrera como presidente del Concejo Municipal, se llegó a un acuerdo: Comsur otorgaría USD 1,5 millones de libre disponibilidad en favor del desarrollo de Potosí; el primer aporte, de USD 200 400, serviría para el plan de ejecución de obras en el estadio San Clemente. La empresa minera también se comprometía a reinvertir la totalidad de las utilidades de su subsidiaria, Comco, en la ciudad de Potosí y a transferir su tecnología sin costo alguno a favor de la Comibol y de empresas que acreditaran capacidad técnica para ejecutar proyectos mineros parecidos.³⁹

Gracias a la movilización, a todas luces exitosa, se pudo satisfacer la demanda de la región: recibir algún tipo de retribución por la explotación de sus minerales. Jaime Herrera decía: “la culminación de las negociaciones con Comsur es un logro histórico porque servirá para que las empresas estatales y privadas participen algo de sus utilidades a Potosí”.⁴⁰ A su vez, Oscar Bonifaz señalaba: “considero que las conversaciones se

³⁸ *El Siglo*, “Informe sobre diálogo Comsur-Comco”, 27 de julio de 1988.

³⁹ *El Siglo*, “Potosí logró de Comsur USD 1,5 millones”, 14 de octubre de 1988.

⁴⁰ *El Siglo*, “Ejecutivos de instituciones: un acuerdo auspicioso para la región”, 14 de octubre de 1988.

han realizado dentro de un alto nivel de civismo y comprensión empresarial hacia los problemas potosinos”.⁴¹

El conflicto estalló un año antes de las elecciones nacionales de 1989, en las que Gonzalo Sánchez de Lozada, dueño de Camsur, se postuló a la Presidencia de la República por el MNR. Negar algún tipo de compensación a los potosinos por la explotación del cerro habría provocado que Sánchez de Lozada fuera tildado de indiferente y explotador, calificativos que este político quiso evitar a toda costa, más aún cuando "Goni" —como era conocido—, solía decir, con su acento gringo y no sin demagogia: “el futuro de Bolivia depende de Potosí y yo tengo un compromiso de tipo personal porque mi familia y mi actividad empresarial tuvieron sus orígenes en Potosí”.⁴² El candidato presidencial Jaime Paz Zamora aprovecharía el conflicto en su campaña electoral para atacar a "Goni". Él dijo en Potosí: “El 9 de abril de 1952, pese a la eliminación temporal de los barones del estaño, renace la oligarquía minera en el seno mismo del MNR, teniendo en la Camsur-Comco a su más voraz engendro”.⁴³

A pesar de la corrupción, con los recursos otorgados por la Camsur se construyeron un complejo recreacional en el balneario de aguas termales de Tarapaya (a 25 km de la ciudad) y parte del estadio olímpico San Clemente. Por esos años, la Alcaldía se encontraba en la pobreza, por lo que estas obras fueron un gran logro.

Potosí y las transnacionales: cuando la región defiende a la nación

Las elecciones presidenciales del 7 de mayo de 1989 evidenciaron el respaldo ciudadano a los partidos que impulsaban el nuevo modelo económico a la vez que el deterioro político de los partidos de izquierda: el MIR obtuvo 26,28 % de los votos; el MNR, el 24,46 %; la ADN el 23,46 %, y la IU, 15,4 %. La bancada parlamentaria potosina estaba compuesta de la siguiente manera: dos senadores por el MIR y uno por

⁴¹ *El Siglo*, “Ejecutivos de instituciones: un acuerdo auspicioso para la región”, 14 de octubre de 1988.

⁴² *El Siglo*, “El futuro de Bolivia depende de Potosí”, 10 de abril de 1989.

⁴³ *El Siglo*, “El pueblo potosino tiene una esperanza”, 1 de abril de 1989.

el MNR, cinco diputaciones por el MIR, cinco por el MNR, tres para la ADN, una para IU y una para el PS1.⁴⁴ A pesar del clima de tensión y conflicto, cuyo eje eran las fuerzas cívicas y sindicalistas contra el gobierno a propósito de Karachipampa, la mayor parte de la ciudadanía deseaba estabilidad y reformas económicas, lo que también podía interpretarse como un apoyo a la privatización de las empresas públicas y el fomento a la inversión extranjera. Como ninguno de los partidos obtuvo mayoría absoluta de votos en las elecciones presidenciales, de acuerdo con lo estipulado en la Constitución, quedó en manos del Legislativo definir quién sería el nuevo presidente, cargo que recayó en Jaime Paz Zamora, del MIR, quien, a pesar de haber quedado tercero en la votación, logró ocupar el cargo gracias a un acuerdo con la ADN. Como parte del acuerdo, se designó vicepresidente al potosino Luis Ossio Sanjinés, líder del Partido Demócrata Cristiano. Esto avivó las esperanzas en torno al desarrollo potosino y el incremento de su peso político de la región. Se decía: “al fin un hijo de la tierra del Sumaj Orcko estaba en una posición política destacable”.⁴⁵ Un editorial del periódico local afirmaba:

Potosí carece de peso en la vida nacional, su debilidad origina marginamiento permanente. Primero fue la exclusión de nuestra ciudad del itinerario de los reyes de España en visita a Bolivia, luego la oposición de la alta jerarquía eclesiástica para que nuestra villa reciba a su santidad Juan Pablo II y, por último, la separación vertical del club universitario de la liga del fútbol [...]. Potosí merece todo el respeto de los gobiernos pero las frustraciones se deben a la carencia de unidad, de espíritu de solidaridad y de una fuerza capaz de llevarnos a una verdadera pujanza [...]; entre los potosinos debemos aprender a reconocernos y valorarnos para influir luego a nivel nacional y lograr las soluciones a los problemas departamentales.⁴⁶

Era la constatación de la ausencia de un actor fuerte que presionara al gobierno. Los partidos políticos a nivel subnacional solo estaban interesados

⁴⁴ *El Siglo*, “Cómputo departamental en Potosí”, 22 de mayo de 1989.

⁴⁵ Jaime Herrera (expresidente del Concejo Municipal de la ciudad de Potosí), en conversación con el autor, agosto de 2016.

⁴⁶ *El Siglo*, “Editorial”, 27 de junio de 1989.

en repartirse los cargos y ser beneficiados de los escasos proyectos gubernamentales, así como los sindicatos se limitaban a defender los pocos espacios de trabajo que quedaban luego de aplicar el modelo neoliberal. En este contexto Comcipo continuó siendo la institución más representativa de las demandas regionales. Los partidos políticos habían debilitado su papel de canalizadores de las demandas de la población; el rol recayó sobre esta institución cívica, que obtuvo así un gran poder político. Su influencia era tal que, meses antes del verificativo electoral presidencial, todos los partidos políticos (MNR, ADN, MIR, PS1 e IU) firmaron un compromiso de trabajo *ante* Comcipo.

Pasadas las elecciones, la entidad cívica convocó a un cabildo abierto donde, públicamente, los parlamentarios se comprometieron a trabajar por el desarrollo regional. A este acto también asistió el vicepresidente Luis Ossio. Los participantes de este cabildo posicionaron a la entidad cívica como la institución encargada de recoger y canalizar las demandas de la región. A la postre, esto sería fatal para los intereses del gobierno, ya que dotaba a Comcipo de la legitimidad necesaria para emprender acciones a *nombre* de la región. En otras palabras, los partidos políticos permitieron que la entidad cívica actuara contra las políticas del gobierno escudándose en el discurso de que estaba defendiendo los intereses regionales.

En el cabildo abierto, Comcipo planteó una serie de demandas con claro lineamiento político. El documento contenía una larga lista de pedidos al gobierno: apoyo a la agricultura, vertebración caminera, electrificación rural, construcción de acueducto del río San Juan, reconstrucción del hospital Daniel Bracamonte, construcción de la segunda fase del aeropuerto, cambio del sistema de percepción de regalías mineras y funcionamiento de Karachipampa. También se abordaban asuntos como “la defensa intransigente de los recursos naturales” en el cerro Rico y el salar de Uyuni, la reversión de las utilidades obtenidas en la explotación de recursos naturales y la planificación de la actividad parlamentaria en coordinación con los cívicos.⁴⁷

⁴⁷ *El Siglo*, “Vicepresidente y parlamentarios de la nación se comprometieron a trabajar por el desarrollo regional”, 14 de agosto de 1989.

Estas demandas, sobre todo la de la “defensa intransigente de los recursos naturales” y la reversión de las utilidades, dio lugar a una diversidad de interpretaciones. No es difícil adivinar que para la izquierdista directiva de Comcipo tales peticiones implicaban la oposición al ingreso de capitales privados y extranjeros a territorio potosino y la defensa del rol del Estado en la economía. Filemón Escobar, un veterano dirigente de la FSTMB y diputado por IU, señaló en su discurso que “fundamentalmente, hay que reactivar el aparato productivo del departamento que corresponde al sector estatal de la economía”.⁴⁸

Estos objetivos eran opuestos a los planteados en el perfil económico del gobierno del MIR-ADN (1989-1993). El presidente Jaime Paz Zamora, con su programa de modernización del Estado, buscó promover la privatización de las empresas públicas e impulsar la inversión extranjera (Mesa 1997, 2). En el caso del departamento de Potosí, esto significaba impulsar el proyecto de industrialización del salar de Uyuni, la más importante reserva de litio del mundo.

El salar de Uyuni es el mayor desierto de sal del mundo, con una superficie de 10 582 km². Está situado a 3650 m s. n. m. en el suroeste de Bolivia, en la provincia de Daniel Campos, dentro de la región altiplánica de la cordillera de los Andes. En Uyuni se encuentra el 70 % del litio mundial y cuenta con importantes cantidades de potasio, boro y magnesio. En la década de los noventa el litio se volvió apetecible, puesto que empezó a usarse en aparatos como teléfonos móviles, relojes, agendas electrónicas, ordenadores portátiles y reproductores de música.

En noviembre de 1989, el gobierno de Jaime Paz Zamora comunicó el interés de la empresa transnacional Lithium Corporation (Lithco) por explotar los recursos evaporíticos del salar de Uyuni. Se anunció que se había adelantado la firma de un borrador de contrato, en el que el país recibiría el 51 % de las utilidades por una inversión de USD 40 millones para explorar la zona, montar una planta de carbonato de litio y explotar los recursos. A mediados de enero de 1990 el borrador de contrato con la Lithco cobró relevancia en la agenda pública del departamento. En un seminario convocado por Comcipo se concluyó que había la necesidad

⁴⁸ *El Siglo*, “Vicepresidente y parlamentarios de la nación se comprometieron a trabajar por el desarrollo regional”, 14 de agosto de 1989.

de aprovechar los recursos del salar de Uyuni, pero que se debía exigir transparencia en los detalles del contrato y una consulta permanente con la entidad cívica. Al finalizar la reunión, el presidente de Comcipo, Faundo Gómez, señaló:

para estar convencidos de que el contrato es bueno tenemos que terminar de analizarlo en sus aspectos jurídico, técnico, económico y social; pero cualquier contrato de inversión que se firme ahora y en el futuro para explotar nuestros recursos debe necesariamente favorecer al departamento y a la nación, es decir, a los legítimos dueños de los recursos que se van a aprovechar.⁴⁹

Esta declaración, si bien parecía mostrar cierta apertura a la posibilidad de explotación, en realidad preanunciaba el conflicto: ponerse de acuerdo para que los términos del contrato fueran completamente favorables “al departamento y a la nación”, pero sin ahuyentar la inversión extranjera. Como veremos, tal equilibrio era sumamente difícil de conseguir, ya que ni el país estaba en capacidad de imponer sus condiciones a una empresa como Lithco —que controlaba el 90 % del mercado del litio—, ni se podía redactar un contrato totalmente positivo a los ojos de la dirigencia cívica y, peor aún, de los representantes de la COD, que desde un primer momento se opusieron a la firma del documento por considerarlo “leonino contra Bolivia”.⁵⁰

En las siguientes semanas, la dirigencia de Comcipo convocó a instituciones interesadas en elaborar el contrato. Durante las reuniones se discutió acerca de las potencialidades del litio y los términos del contrato; las posturas que se tomaron en relación con la riqueza que contenía el salar y las utilidades que obtendría la Lithco en ocasiones fueron realistas y en otras —la mayoría— desmesuradas. La dirigencia de la Fedecomín afirmaba, con base en un estudio, que la transnacional obtendría una utilidad bruta de USD 20 billones en 40 años de exportación de litio metálico, es decir, USD 40 millones por año, una inmensa ganancia comparada con los USD 40 millones de inversión que proyectaba realizar en diez años. Adicionalmente, afirmaba que si se exportaba solo carbonato

⁴⁹ *El Siglo*, “Este recurso debe ser aprovechado en las mejores condiciones”, 15 de enero de 1990.

⁵⁰ *El Siglo*, “Proyecto de contrato de litio es leonino contra Bolivia”, 29 de enero de 1990.

de litio se recibirían USD 3 640 000 anuales, pero con litio metálico los ingresos subirían a USD 10 millones, por lo que se propuso instalar una planta para tratar este mineral.⁵¹

Estos debates no hicieron otra cosa que reinstalar en el imaginario colectivo la idea de que, con un contrato mal elaborado, se correría el riesgo de que la historia del cerro Rico se repitiera, y que no quedaría nada para el departamento una vez que la empresa terminase de aprovechar sus riquezas. Nació el temor de que el litio solo serviría para el enriquecimiento de extranjeros y de otras regiones, pero nunca para Potosí.

La dirigencia de Comcipo exigió una licitación internacional para explotar el salar, con la intención, se dijo, de mejorar las condiciones de un contrato desfavorable para los intereses del departamento y del país. Desde la perspectiva del gobierno, esta solicitud solo retrasaba el inicio del contrato. Dado que en el mundo no existía otra empresa con la capacidad de procesamiento de litio que tenía Lithco, para los ministros de Paz Zamora, optar por una licitación internacional no solo era desaconsejable desde el punto de vista empresarial, sino impráctico.

Ante esta situación, Comcipo decidió convocar a una marcha para el 14 de febrero de 1990. La masiva participación de la ciudadanía potosina fue un espaldarazo para la postura de la entidad cívica, que se reforzó aún más cuando la brigada parlamentaria de Potosí devolvió el borrador de contrato al Consejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (Ciresu), con la observación de que la Lithco tendría el monopolio de la explotación y comercialización de los recursos. Un reportaje del periódico *El Siglo*, publicado al inicio del conflicto, señalaba:

El mundo, por no decir las grandes potencias, *se disputan* ese incalculable caudal de materia prima para mil usos que precisa la tecnología moderna. El departamento de Potosí y Bolivia toda reflexionan que *la historia con extraña obsesión se repite*. Primero fue la plata de cerro Rico la que alimentó las economías monárquicas de la vieja Europa; luego surgió el estaño –el metal del diablo–, que originó imperios económicos dentro y fuera de nuestro generoso territorio. ¿El litio será tal vez el nuevo metal del diablo en las próximas décadas?, se pregunta el hombre común.⁵²

⁵¹ *El Siglo*, “Lithco obtendría una utilidad bruta de 20 billones de dólares en 40 años”, 12 de febrero de 1990.

⁵² *El Siglo*, “Litio, ¿nuevo metal del diablo?”, 13 de febrero de 1990 (cursivas del autor).

Tal discurso siempre ha tenido gran resonancia en la población potosina; se lo ha reproducido durante décadas y, si bien no nació con la revolución nacionalista de 1952, le dio contenido y fuerza. Por tal motivo, ningún tipo de empresa privada, peor si era extranjera, gozaba de la más mínima confianza.

El 27 de abril de 1990, un consejo consultivo de Comcipo decretó huelga general e indefinida. El Concejo Municipal decidió apoyar esta medida “por ser la demanda enteramente cívica”, y también la Federación de Maestros de Potosí que, a pesar de un acuerdo sectorial suscrito con el gobierno por esos días, se sumó al paro.⁵³ Pronto, la movilización irradió hasta la ciudad de La Paz, donde un organizado y numeroso comité de residentes potosinos inició una huelga de hambre. Paralelamente, las bancadas legislativas de IU y de Condepa adelantaron su rechazo al contrato. La dirigencia del MNR se sumó a las voces de oposición; por medio de su portavoz en el congreso, Guillermo Bedregal, señaló que su bancada se inclinaba a rechazar el contrato, postura que luego fue ratificada por el jefe del MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada: “el gobierno ha manejado este asunto en una forma que se ha convertido en un fútbol político y que en vez de pronunciarse sobre si es conveniente o no discute temas formales que no tienen asidero”.⁵⁴

Para aumentar la presión, una delegación de dirigentes de Comcipo –con su presidente, Facundo Gómez, a la cabeza– viajó a la ciudad de La Paz, donde organizó un piquete de huelga de hambre. La idea era llevarlo a cabo en el Parlamento, pero como se impidió su ingreso, se optó por hacerlo en el Sindicato de la Prensa de La Paz. Después de la intervención de fuerzas policiales, los manifestantes se trasladaron al hotel Crillón.⁵⁵

Luego de ocho días de huelga, la movilización, lejos de debilitarse, se reforzó, y los manifestantes mostraron total apoyo a las decisiones de la dirigencia de Comcipo. La paralización de actividades y el bloqueo de caminos se mantuvo y se organizaron otros seis piquetes de huelga de

⁵³ *El Siglo*, “Comcipo decretó huelga general e indefinida”, 27 de abril de 1990.

⁵⁴ *Presencia*, “Si el contrato con Lithco es bueno, debe aprobarse; si no, corregirse”, 29 de abril de 1990.

⁵⁵ *El Diario*, “Potosinos en La Paz no levantarán huelga”, 29 de abril de 1990.

hambre, ubicados en la sede de la COD, en la parroquia de San Pedro y en la Universidad Tomás Frías. Un manifiesto de Comcipo decía:

A partir de 1545 se dio inicio a una época histórica marcada por el sistemático saqueo de los recursos naturales. Primero fueron los españoles en la Colonia y en la República con la plata y el estaño, que sirvieron para hacer ricos a unos cuantos empresarios dedicados a la minería en desmedro de los derechos del país y los hijos de esta tierra. En la hora actual son otras empresas como Comsur, Comco, Emusa, Bernal, Andacaba, San Juan y otras que se aprovechan de las riquezas de Potosí. *Es la historia de la explotación sin retribución*. Para colmo de males, se pretende ahora entregar el salar de Uyuni a una empresa transnacional y es que dicha entrega se quiere realizar en el interior del modelo que privilegia la inversión extranjera sin medir las consecuencias que ella supone.⁵⁶

La identidad regionalista potosina es tributaria de la idea de que el departamento, a pesar de haber dado todas sus riquezas al Estado central, solo ha recibido olvido y postergación. Esta postura, ciertamente movilizadora, puede tener varias consecuencias. Una de ellas es que se presione al Estado para que realice proyectos de desarrollo y modernidad con mayores recursos y presencia. Pero también puede decantar en una actitud regionalista-nacionalista, donde los habitantes de la región defienden los recursos naturales de la “voracidad de las transnacionales” y, por tanto, del Estado que la fomenta.

La dirigencia de Comcipo manejó el discurso de que la probable presencia de la transnacional Lithco en territorio potosino reproduciría nuevamente la lógica saqueadora de los recursos. Por lo tanto, obstaculizar el ingreso de la transnacional era defender la región, evitar a toda costa que fuera objeto de engaño y sus recursos no sirvieran al extranjero.

El conflicto se basó en esa fuerte idea regionalista y generó la adhesión militante de la población potosina, quizá como nunca había pasado antes. Los hechos de que la Lithco fuera una empresa norteamericana, que se considerara al salar como “el cerro Rico del siglo XXI”, y que el proceso de licitación por parte del gobierno se caracterizara

⁵⁶ *El Siglo*, “Manifiesto de Comcipo al país”, 4 de mayo de 1990 (cursivas del autor).

por una gestión deficiente y poco clara, generaron un cóctel explosivo que derivaría en uno de los mayores conflictos entre las autoridades del MIR-ADN y la región potosina. El gobierno quería demostrar que Bolivia tenía las condiciones adecuadas para la inversión extranjera; sin embargo, perdió terreno frente a unos actores regionales que, en rigor, continuaban pensando en los términos de la matriz ideológica nacionalista de 1952.

Ante esta situación, en mayo de 1990, el gobierno, con sus argumentos debilitados y acosado desde varios frentes políticos, ensayó una maniobra: propuso que Potosí percibiera el 100 % de los ingresos por explotación de litio, que, según sus proyecciones, alcanzaba los USD 1200 millones en 40 años de contrato. Desde la bancada parlamentaria potosina se afirmó que “ninguna región alcanzó una participación del 100 % de la explotación de sus recursos naturales. Los tiempos están cambiando, Potosí lo dio todo durante cuatro siglos y es hora de que se haga justicia”.⁵⁷ Este anuncio no fue bien recibido en otros departamentos ya que, se decía, daba pie a que otras regiones pidieran lo mismo en el futuro. Sin embargo, el diputado oficialista cruceño Carlos Dabdoud se encargó de calmar las aguas al afirmar que “destinar el 100 % de regalías a Potosí sentaría jurisprudencia para similares demandas, ya que otras regiones reclamarán igual trato, pero la figura es otra. Santa Cruz será solidaria con la región potosina”.⁵⁸

Contra todo pronóstico, esta oferta ni siquiera fue considerada en el seno de la entidad cívica, totalmente convencida de que se debía luchar contra el ingreso de la transnacional. Es más, la oferta se consideró una maniobra destinada a desvirtuar el movimiento. Un día después del anuncio gubernamental, la dirigencia de Comcipo emitió un comunicado que señalaba:

lo del 100 % de regalías es una burda maniobra política que, a más de confundir a la opinión pública, origina un espíritu de malestar en otros distritos del país; pretendiendo ocultar *el verdadero objetivo de nuestro movimiento cívico que de ninguna manera pretende enfrentar los intereses*

⁵⁷ *El Siglo*, “Potosí percibirá el 100 % de los ingresos por explotación del litio”, 27 de abril de 1990.

⁵⁸ *El Potosí*, “Destinar el 100 % de regalías a Potosí sentaría jurisprudencia para similares demandas”, 4 de mayo de 1990.

*regionales con los nacionales, sino desenmascarar el propósito que tiene el gobierno de entregar nuestro salar a la voráGINE de la Lithco.*⁵⁹

Este texto muestra, sin ambages, el objetivo real de los dirigentes de Comcipo, que no era otro que frenar el programa de fomento a la inversión extranjera impulsado por el Gobierno de Paz Zamora. Luego de ocho días de huelga, la entidad cívica, al sospechar que el presidente Paz Zamora no daría un paso atrás en su decisión de suscribir el contrato, incrementó su presión sobre el Parlamento. El 4 de mayo envió una carta a los parlamentarios potosinos en la que, en un tono imperativo y de amenaza, instruyó que rechazaran el contrato,

respondiendo así al mandato popular manifestado en las marchas multitudinarias del lunes 23 de abril y del 1 se mayo, ratificado en sendos Consejos consultivos del ente cívico. Caso contrario, declararemos a quienes apoyen la aprobación del contrato, *personas traidoras e indeseables a nuestra tierra*, determinando que los nacidos en el departamento sean expulsados, junto a toda su familia de nuestro territorio so pena de ser expulsados con ignominia *y sin responsabilidad de cuanto pueda sucederles a ellos y sus familias.*⁶⁰

Ante un conjunto de actores absolutamente radicalizados en su rechazo al contrato y sin esperanzas de obtener los dos tercios de votos necesarios para aprobar el contrato en el Congreso (pues el MNR ya había anunciado su rechazo), Paz Zamora, en un mensaje presidencial en la tarde del 6 de mayo de 1990, anunció la decisión de suspender el contrato con la Lithco y llamar a una licitación internacional: “Como en mi gobierno no existe ningún interés oculto en este asunto y es necesario restablecer un clima de paz que garantice la inversión extranjera, quiero comunicarles que, muy a pesar mío, he decidido en este caso desestimar la vía del contrato directo”.⁶¹

El anuncio de Paz Zamora fue recibido en la ciudad de Potosí con alegría y repique de campanas. Una multitud de personas y caravanas de

⁵⁹ *El Siglo*, “Manifiesto de Comcipo al país”, 4 de mayo de 1990 (cursivas del autor).

⁶⁰ *El Siglo*, “Potosí a los parlamentarios”, 4 de mayo de 1990 (cursivas del autor).

⁶¹ *Presencia*, “Explotación del litio se decidirá por licitación internacional”, 5 de mayo de 1990.

motorizados recorrieron las calles tocando bocinas y ondeando la bandera potosina. Por su parte, el comité de huelga de Comcipo convocó de inmediato a una reunión de consejo consultivo que determinó levantar la paralización, declarar día de regocijo el lunes 7 de mayo, continuar respaldando a la COD en sus medidas y declarar a Potosí como Capital de la Dignidad Nacional.⁶² La comitiva regresó a la ciudad y, acompañada por una multitud de potosinos que la acompañó desde la terminal de buses hasta la plaza central, colocó una plaqueta conmemorativa en el obelisco.⁶³

Ciresu se encargó de elaborar los términos de referencia de la licitación internacional para explotar litio de Uyuni. Este proceso presentaría dificultades ya que la gerencia de Lithco había anunciado que “no se presentaría a ninguna licitación pública”. Oscar Ballivián, representante de la transnacional, señaló: “estamos realmente sorprendidos por la decisión presidencial, el futuro mostrará que la empresa actuó de forma seria y responsable y que su propuesta era favorable para Bolivia”.⁶⁴

Este proceso, que finalizó a fines de septiembre de 1990, había tomado como base el documento presentado por la Universidad Tomás Frías de Potosí. Esto le dio legitimidad académica y mostró la apertura del gobierno ante los criterios de otras instituciones. Cinco meses después se publicó la convocatoria y cinco empresas se mostraron interesadas en explotar el salar. Después del periodo de análisis de las propuestas, la empresa ganadora de la licitación fue nuevamente la FMC Lithco. En consecuencia, Ciresu aprobó un borrador de contrato que implicaba una inversión de USD 92 millones que, en función del crecimiento del mercado, podía ser ampliado a USD 200 millones. Se tenía previsto que la fase de exploración de la costra salina del Salar más la fase de construcción y montaje tomarían dos años y, la tercera, de producción y comercialización, 35.⁶⁵ Al final, el directorio de Ciresu aprobó el contrato en la modalidad de “riesgo compartido” o *joint venture*. Altos funcionarios del gobierno celebraron el acuerdo; el ministro de Minería, Gonzalo Valda, aseguró que el contrato era importante “no solo para la

⁶² *Presencia*, “Potosí recibió el anuncio con repique de campanas”, 5 de mayo de 1990.

⁶³ *El Siglo*, “Comcipo declaró hoy día de regocijo”, 7 de mayo de 1990.

⁶⁴ *Presencia*, “Lithco sorprendida por decisión presidencial”, 5 de mayo de 1990.

⁶⁵ *El Siglo*, “Ciresu aprobaría hoy borrador de contrato con la FMC-Lithco”, 9 de agosto de 1991.

estabilidad económica, sino también para la política de reactivación del sector minero metalúrgico y un mensaje a los inversionistas del mundo de que en Bolivia existe una legislación y una conciencia de impulsar empresas de riesgo compartido”.⁶⁶ Meses después, el diputado oficialista Sergio Medinaceli, subrayaba que el litio

devolverá a Potosí su calidad de pilar de desarrollo económico nacional. Así como Potosí en antaño y a través del excedente económico de la minería permitió diversificar la economía del país para hacer inversión petrolera, agropecuaria y vías carreteras, especialmente en el Oriente, ahora la economía generada por el litio debe inducir a ampliar los sectores productivos, pero esta vez en la región.⁶⁷

Sin embargo, la visión optimista y la expectativa de los representantes del gobierno no influyeron en los miembros de Comcipo ni en los partidos de oposición, mucho menos en la COD. De hecho, el *joint venture*, la modalidad de privatización por la que apostó el gobierno, fue calificada por la dirigencia de Comcipo como inconstitucional.

A pesar de todo, en abril se suscribió el contrato con la Lithco, en el mismo salario, con el presidente Jaime Paz Zamora y los máximos ejecutivos de la transnacional. Empero, para que este contrato tuviera efecto legal era necesario ratificarlo en el Congreso, requisito solicitado por Lithco, cuya dirigencia amenazó con anular el compromiso de no cumplirse este paso. Esto tuvo que solucionarse en un congreso nacional extraordinario en el cual, en principio, los representantes del MNR se mostraron renuentes a aprobar el contrato. Empero, en agosto de 1992 se llegó a un consenso entre las bancadas de la oficialista AP y MNR para aprobarlo, pero con modificaciones sustanciales.

En el tema de los precios, se señalaba que estos se fijarían con ayuda de una fórmula matemática que garantizaría estabilidad y transparencia. Respecto a los plazos, se indicó que el contrato fenecería a los 40 años o cuando la Lithco hubiese terminado de explotar la cantidad de litio señalada en

⁶⁶ *El Siglo*, “Ministro de Minería, fue aprobado contrato *joint venture* con la FMC-Lithco”, 2 de septiembre de 1991.

⁶⁷ *El Siglo*, “Litio devolverá a Potosí su calidad de pilar de desarrollo económico nacional”, 3 de febrero de 1992.

el documento. En relación con la exclusividad, la enmienda señalaba que terminaría cuando la Lithco empezara a producir litio metálico.⁶⁸ Respecto del tema de impuestos, la modificación era sustancial y señalaba que se obligaba a la empresa a “pagar los impuestos que estén vigentes en el país y ya no el 10 % de IVA como se acordó originalmente”.⁶⁹

Este acuerdo satisfizo a los actores radicales de Comcipo y la COD, así como a los diputados del MNR (que utilizaban el tema para oponerse al gobierno), pero no a la Lithco, ya que las condiciones planteadas por el contrato eran a tal punto gravosas para la transnacional que se podía adivinar su rechazo, como efectivamente sucedió. En las siguientes semanas, la empresa anunció que ya no tenía interés en el salar de Uyuni, lo que dejó descolocados a los dirigentes cívicos, quienes quizá se dieron cuenta de que habían tensado demasiado la cuerda.

Los representantes de Comcipo decidieron enviar una nota al ministro de Minería en la que solicitaban que se extremaran esfuerzos para gestionar un nuevo plazo. En respuesta, la Lithco otorgó 30 días y sugirió mantener los términos del contrato del 14 de febrero, lo cual implicaba dejar sin efecto las modificaciones introducidas por el Parlamento Nacional al controvertido contrato. Sin embargo, la realidad era otra. En una carta al ministro de Minería y Metalurgia, Álvaro Rejas, firmada por su gerente, Paul L. Schroeder, la transnacional prácticamente abandonaba el proyecto:

nosotros revisaremos cualquier nueva acción que elimine las modificaciones incorporadas por el Congreso nacional y que provea una alternativa financieramente competitiva en comparación con nuestras otras opciones. Como consecuencia de los continuos cambios y dilaciones, hemos sido forzados a buscar alternativas adicionales en otros salares y en otros países a los que encontramos muy atractivos. Sin embargo, a pesar de nuestra voluntad de ampliar en 30 días adicionales no estamos optimistas que el salar de Uyuni sea nuestra elección para desarrollar.⁷⁰

⁶⁸ Carlos Aranibar Escarcha (expresidente de Comcipo), en conversación con el autor, enero de 2017.

⁶⁹ *El Siglo*, “Con sustanciales modificaciones se aprobó contrato con la FMC-Lithco”, 8 de julio de 1992.

⁷⁰ *El Siglo*, “Complejo industrial de los recursos evaporíticos del salar de Uyuni”, 6 de enero de 1993.

Aunque la expectativa potosina de salir de la pobreza se veía lejana y las críticas al manejo de Comcipo fueron duras, los sectores sindicales y de izquierda lograron su objetivo: detener la inversión extranjera en territorio potosino agitando el sentimiento regionalista. Al final, el desencanto se apoderó del ciudadano potosino, que no entendía cómo había apoyado una movilización que, al final, derivó en algo que no se esperaba: el fin del contrato. Un editorial de *El Siglo* decía:

Ayer se recibió una carta de la transnacional que dice que desestimó por completo el interés que había mostrado para desarrollar este preciado no metálico. Estas contradicciones permanentes que se suscitaron en torno a este tema contagiaron al propio seno del Comcipo, cuyos dirigentes, en una actitud supuestamente cívica y más bien alentados por intereses políticos sectarios, al igual que otros dirigentes de organizaciones laborales como de los mismos parlamentarios, quienes se ufanaron de tener grandes conocimientos en el tema.⁷¹

Este es un ejemplo claro de cómo una movilización regionalista poderosa y contundente no logró mejorar las condiciones de la región. Los actores sindicales organizaron una protesta y la manipularon para un fin político: trabar el modelo neoliberal.

El sistema político subnacional y los efectos de la Ley de Participación Popular

Los partidos a nivel subnacional eran ajenos a todos estos conflictos. En los primeros años de la aplicación del modelo neoliberal, esto pareció funcionar pues, a pesar de todo, el respaldo ciudadano a los partidos que habían apoyado la nueva política económica se mantenía. ADN, MIR y MNR continuaban concentrando el voto y la mayoría de las bancas en el Concejo Municipal, como se puede ver en la tabla 3.1.

Sin embargo, estos resultados eran un espejismo. No eran producto de un fortalecimiento de los partidos políticos (caracterizados por sus carencias organizativas, su desconexión con la ciudadanía y su falta de

⁷¹ *El Siglo*, "Editorial", 15 de enero de 1993.

liderazgo), sino de la inclusión en sus bancadas de figuras y personalidades que llegaban desde fuera del sistema, los llamados *outsiders*.

El triunfo del MIR en las elecciones municipales de 1987 es un buen ejemplo de esta situación. La dirigencia del partido prefirió postular a la Alcaldía a una persona conocida y popular antes que a uno de sus políticos. Gonzalo Calderón (que llegó a ser alcalde de Potosí) no era militante del MIR, sino un comunicador social que había alcanzado notoriedad por impulsar, desde su programa de radio, la festividad folclórica de Chutillos, una celebración pequeña y propia de espacios rurales que se volvió masiva. Calderón, con el amplio beneplácito de la población, logró que, durante más de ocho horas, distintas fraternidades desfilaran por la ciudad bailando danzas del acervo cultural mestizo e indígena como morenada, tinkuy, caporales, moseñada, entre otras.

En este sentido, el éxito electoral de Calderón representa el inicio de la personalización en la política, es decir, individuos que llegan desde fuera del sistema de partidos y cuya forma de interpelación discursiva es el populismo. Esto también revela el temprano desgaste de los partidos como mecanismo de mediación entre la población y el Estado en los espacios subnacionales. Dos años después, para las elecciones municipales de 1989, la Alianza Patriótica (AP), coalición de la ADN y el MIR, logró vencer con el 44,94 % de los votos y consiguió siete concejales. Esto le daba una cómoda mayoría en el Concejo Municipal. Al MNR, con un 16 % de los votos, apenas lo representaron dos concejales.

Tabla 3.1. Elecciones municipales en Potosí, 1987

Partido político	Votos	N.o de concejales
MIR	11 505	5
ADN	4924	2
MNR	4269	2
MBL	2925	1
AP	844	1
ID	654	1

Fuente: OEP (2021).

La importante votación conseguida por AP se debe, otra vez, a la popularidad de Gonzalo Calderón quien, en dos años de gestión (1987-1989) había realizado algunas obras de importancia y, sobre todo, convertido la festividad de Chutillos en una celebración folclórica nacional. Sin embargo, su liderazgo no se conectó con los problemas nacionales y como alcalde no quiso orientar ni establecer posición política en los diversos conflictos potosinos. Para Calderón –quien decía no ser político, sino un invitado del MIR–, las disputas sobre Karachipampa, el cerro de Potosí y el salario de Uyuni tenían poco que ver con su gestión, ni parecían interesarle, salvo cuando los conflictos exigían alguna postura.

Esto era un reflejo de los serios problemas dentro del sistema de partidos subnacional, que se limitaba a ser una maquinaria que se ponía en funcionamiento para cada elección, pero cuyo trabajo político en el seno de la sociedad civil era escaso. Esto derivó en la pérdida de representatividad de los partidos políticos, a los que la población veía como entidades desconectadas de la realidad o como meros instrumentos para conseguir poder y riqueza.

Las elecciones municipales de 1993 cobraron factura a los tres partidos más importantes. Gonzalo Calderón dejó de ser candidato del MIR para postularse por el MNR. El MIR y ADN abandonaron el proyecto de AP y presentaron candidaturas separadas. La novedad fue la presencia de nuevos partidos como Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Conciencia de Patria (Condepa). Se presentó una alta fragmentación en el voto, como se puede ver en la tabla 3.2.

Tabla 3.2. Elecciones municipales en Potosí, 1993

Partido político	Votos	N.o de concejales
MNR	8509	4
MIR	6269	2
ADN	1625	1
UCS	4450	1
Condepa	1552	1
Eje Pachacuti	1418	1
FSB	1010	1

Fuente: OEP (2021).

La fragmentación en la representación política derivó en inestabilidad institucional. Por norma, cuando un candidato no conseguía el 50 % de los votos más uno, la decisión sobre la elección del nuevo alcalde recaía en el Concejo Municipal; todos los concejales podían ostentar este cargo. Además, al inicio de cada gestión, el Concejo podía retirar su confianza al burgomaestre y escoger uno nuevo. En este marco, en enero de 1994 se eligió a Gonzalo Calderón, quien para el año siguiente fue sustituido por Jorge Oropeza, de UCS. Esta inestabilidad se hizo mucho más notoria porque a partir de 1994 la comuna potosina empezó a recibir mayores recursos –producto de la aplicación de la LPP–, pero que no eran utilizados en proyectos y obras para la ciudad.

Lo que terminó con la paciencia de la población fue que los concejales municipales, en una sesión reservada, a fines de 1994, resolvieron aumentar sus dietas (sueldos) en un 100 %. Aparentemente, todos aprobaron esta desición. Sin embargo, el concejal René Joaquino Cabrera, del Eje Pachakuti, denunció este hecho, generando tanto indignación como apoyo. Él aseguraba que este incremento era una “medida arbitraria de quienes consideran esa posición como un trabajo y no como un espacio de servicio”.⁷² Las juntas vecinales denunciaron este atropello y convocaron a la ciudadanía para impedir que se consolidara.⁷³ Fue un duro golpe para la imagen del Concejo Municipal. El periódico local indicó en su editorial que el aumento de sueldos era “un atentado a la democracia y un insulto al pueblo, ya que una mayoría de potosinos no tiene trabajo o tiene que llegar a extremos de salir junto a sus pequeños niños en busca de algunos centavos”.⁷⁴ Unos días después, ante la presión ejercida desde los medios de comunicación y, sobre todo, desde la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), que amenazó con intervenir el legislativo municipal, el Concejo determinó no modificar los salarios.⁷⁵

Como resultado del conflicto, Joaquino ganó popularidad. Él había nacido en el *ayllu* Chicoca Chica de la comunidad Asientos, departamento de Potosí. Junto con su familia, migró al centro minero de Telamayu, donde concluyó la secundaria, mientras trabajaba como

⁷² *El Siglo*, “Concejales incrementaron sus dietas”, 16 de noviembre de 1994.

⁷³ *El Siglo*, “Concejal denuncia incremento de 100 % en dietas”, 16 de noviembre de 1994.

⁷⁴ *El Siglo*, “Editorial, la deslealtad del legislativo comunal”, 18 de noviembre de 1994.

⁷⁵ *El Siglo*, “Concejo Municipal desestimó incremento de dietas en el 100 %”, 30 de noviembre de 1994.

lamparero en la mina Chorolque. En 1989, se trasladó a la ciudad de Potosí, donde fue albañil por un tiempo, para luego inscribirse en la carrera de Derecho de la Universidad Tomás Frías.

En diciembre de 1995 se realizaron las elecciones municipales. En ellas fue evidente tanto el desgaste de los “partidos tradicionales” (como ya se los empezaba a llamar) como el aumento de la popularidad de René Joaquino (tabla 3.3).

La Alcaldía continuó en crisis institucional, con juicios a sus autoridades y renunciadas obligadas. En septiembre de 1997, Braulio Oré renunció al cargo de alcalde y fue reemplazado por René Joaquino (la mayoría de los concejales estaban inhabilitados para ejercer el cargo por denuncias de corrupción en el uso de recursos donados por Comsur). La corta gestión de Joaquino generó mucha expectativa y respaldo de la población, que percibió un cambio en la ciudad. Cuando en enero de 1998 se intentó realizar una maniobra para cambiarlo, la presión y la huelga de hambre de las organizaciones vecinales y gremiales lo impidieron.⁷⁶ La gestión de Joaquino (con la LPP en marcha), aunque corta, le dio un sólido capital político, tanto que en las elecciones de 1999 su partido, Eje Pachakuti, logró un histórico 63,19 % de la votación, por lo que se hizo con nueve de las 11 concejalías posibles.

Tabla 3.3. Elecciones municipales en Potosí, 1995

Partido político	Votos	N.o de concejales
MNR	6375	2
MIR	7926	3
ADN	3450	1
UCS	7899	3
Condepa	999	
Eje Pachakuti	6831	2
IU	636	
MBL	600	
FRI	271	

Fuente: OEP (2021).

⁷⁶ *El Siglo*, “Concejo Municipal define ratificación del alcalde”, 19 de enero de 1998.

Con este apoyo, Joaquino logró una gran transformación en el municipio. Con el dinero de la LPP realizó varias obras: pavimentar calles, construir mercados y una terminal de buses y dotar de energía eléctrica a barrios periféricos. Logró importantes progresos urbanos que mejoraron la calidad de vida de la ciudadanía y atenuaron en algo el nivel de pobreza del municipio. Un estudio apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) arrojó un dato contundente: un 73 % de autoridades y concejales municipales de Potosí afirmaban que la vida en sus municipios había mejorado de forma sustancial (Ayo 2011).

Para las elecciones municipales de 2004, Joaquino creó su propio partido: Alianza Social (AS), que se presentaba como la cara moderada del indigenismo, proclive al acuerdo y lejos de la lógica revanchista y sectaria que, a su juicio, tenía el MAS de Evo Morales. Con base en las lógicas aymara y quechua de la complementariedad entre distintos, el programa de AS señalaba: “construimos la posición de Izquierda Democrática no confrontacional que supera las tendencias hacia el conflicto de los extremismos racistas del indigenismo revanchista y el neoliberalismo blancoide” (AS 2004, 3).

Las elecciones municipales de 2004 ratificaron la popularidad de Joaquino en la ciudad de Potosí. Su partido obtuvo diez de 11 concejales (OEP 2016). Con este favorable contexto político y con los recursos de la LPP, pudo darse el lujo de completar el tramo caminero T'ika Loma-San Antonio, como parte del proyecto de construcción del anillo de circunvalación con un costo de USD 8 millones. Con optimismo, Joaquino señalaba: “no podemos continuar mostrando unas calles y avenidas de acceso a la ciudad mal construidas, sucias y sin iluminación, ya que esas vías son la cara de nuestra ciudad”.⁷⁷

El proceso de participación popular tuvo efectos notables. Con la LPP, el presupuesto para Potosí en 1994 fue 300 veces superior al de 1993, es decir, 45,6 millones de bolivianos. Paralelamente, hubo un cambio en la distribución del poder territorial: como las transferencias de recursos eran automáticas, la Alcaldía potosina gozó de una autonomía inédita en la historia. Su autoridad titular pudo desplegar políticas públicas en sintonía con las demandas locales más que con las del gobierno nacional.

⁷⁷ *El Potosí*, “Entregaron otro tramo del anillo de circunvalación”, 5 de abril de 2005.

La aparición de un importante grupo de poder: los cooperativistas mineros

Fuera de los focos políticos y mediáticos surgía un actor con poder en la periferia potosina: los cooperativistas mineros. Ellos ocuparían el espacio minero y político dejado por la Comibol y su sindicato. Los cooperativistas mineros son un sector de la población fascinante y de enorme relevancia en el departamento de Potosí. Sus orígenes se remontan a la Colonia y se relacionan con la práctica conocida como *kajcheo*, en la cual un grupo de mineros de origen indígena, cada fin de semana, se internaba en la profundidad de las bocaminas del cerro para extraer mineral por cuenta propia (Barragán 2017).

A pesar de que el *kajcheo* era una práctica común, no era del todo reconocida por las autoridades coloniales ni completamente tolerada por los dueños de minas. Los mineros españoles se quejaban porque perdían buena parte de sus beneficios; sin embargo, no podían prescindir de los *kajchas*, pues proveían de mano de obra especializada para extraer y seleccionar mineral. Además, estos indígenas les servían para reducir los costos de explotación minera cuando los precios bajaban y ayudaban a aumentar la rentabilidad del dueño de la mina en los años de auge (Absi 2005, 18). Desde las primeras décadas de la República (1825), la práctica del *kajcheo* fue considerada anticuada e irracional, y durante el auge de la producción argentífera (1870-1899) se buscó su desaparición. Sin embargo, esto nunca se logró.

La revolución de 1952 aumentó la posibilidad de que los *kajchas* tuvieran su propio yacimiento minero y fueran reconocidos por el Estado. Se les adjudicó parajes mineros y, por decreto, se convirtió a este grupo en cooperativas mineras (CM), lo que señalaba su cambio de estatus a entidades sociales y económicas. La creación de la Comibol fue fatal para los intereses *kajchas*, ya que limitó sus proyectos de ampliar la extensión y calidad de sus concesiones mineras. Si bien el Estado los reconoció como cooperativistas, a la vez colocó un freno a sus ambiciones empresariales, ya que la política minera se definía de manera centralista; la empresa minera estatal tenía autoridad sobre un amplio espacio minero y todas las mineras estaban obligadas a vender su producción a Bamin, lo que redujo sus ganancias, puesto que el pago era en moneda nacional al tipo de cambio oficial.

Desde 1985 se dio un gran impulso a las CM. En el caso específico del cerro Rico de Potosí, la investigadora Pascale Absi (2005, 28) constató que en 2005 hubo “una triplicación del número de cooperativas, que han pasado de 8 en 1955 a más de 25 en la actualidad”. La supresión de la condición de reserva fiscal de las minas, que vino con el neoliberalismo, ofreció la posibilidad de que los cooperativistas pudieran acceder a los yacimientos de la Comibol. Entre 1986 y 1993 la participación de las cooperativas en el conjunto de la producción minera aumentó, especialmente en los casos del estaño y la plata (tabla 3.4).

Casi ocho años después de aplicar el modelo neoliberal, la participación de las CM en la explotación de estaño y plata había crecido tanto que sobrepasaba el 40 % del total. Si en 1986 se registraban aproximadamente 30 000 trabajadores cooperativistas, para 1989 esta cifra creció a 44 500, para llegar, en 1992, a 52 000, es decir, el 73 % de la fuerza laboral dedicada a la minería en todo el país. De cada diez personas trabajando en minería, siete pertenecían a las cooperativas (Morales y Evia 1995, 8).

Los cooperativistas provenían del área rural, pero también, en buena medida, eran extrabajadores de la Comibol. “Muchos de los mineros relocalizados, al no encontrar alternativas laborales en las ciudades donde habían migrado, decidieron retornar a la mina, a pesar de las cotizaciones bajísimas de los minerales en esa época, para poder sostener a sus familias” (Michard 2008, 12).

Tabla 3.4. Porcentaje de producción de minerales de los cooperativistas con respecto al total nacional, 1978-1993

Mineral	1978	1982	1986	1990	1993
Oro	44,1	87,8	61,3	70,2	36,9
Zinc	0	6,3	3,3	14,8	17,8
Estaño	10,3	11,7	28,4	53,9	59,0
Plata	0,4	9,3	21,2	18,3	42,0
Plomo	11,1	9,6	41,5	25,7	32,6

Fuente: Morales y Evia (1995).

Los cooperativistas tenían una capacidad de presión colectiva que los hacía prácticamente invencibles. Aunque la intención de los gobiernos neoliberales era fortalecer la administración y legislación minera y dar señales a los inversores de que el Estado podía poner orden y autoridad en este ámbito, las cooperativas estuvieron a contracorriente de este propósito. Si bien en determinados casos los cooperativistas recibían concesiones mineras bajo el amparo de las leyes, consiguieron la mayoría por la fuerza, ejerciendo acciones de desafío a la autoridad estatal. Se volvió normal que los cooperativistas tomaran una mina de manera violenta y la ocuparan hasta que “el gobierno les acordara el derecho a explotarla como cooperativa” (Michard 2008, 12). La apropiación por la fuerza de las minas, el bloqueo de calles y caminos, y el uso de dinamita eran medidas usuales cada vez que algún gobierno les negaba un paraje minero que deseaban explotar.

Adicionalmente, las cooperativas contrataban mano de obra de la zona donde trabajaban, lo que constituía un factor de presión adicional en favor del cooperativista. Con frecuencia, el campesino se enfrentaba a la disyuntiva de cuidar la tierra que cultivaba –su empleo era dual: minería y labores agrícolas– o prescindir de los ingresos generados por la minería. En un contexto caracterizado por la pobreza, resulta obvio que prefiriera trabajar en una empresa minera.

Ante el poder cooperativista, los sucesivos gobiernos cedieron a sus exigencias: las cooperativas recibieron nuevos yacimientos, bienes de la Comibol, asistencia técnica, financiamiento estatal, extinción de deudas con las oficinas de impuestos y de seguridad social, y presencia decisoria en el directorio de la Comibol. A cambio, el gobierno redujo el desempleo en el sector minero, minimizó la conflictividad social y logró el respaldo electoral de los cooperativistas.

Durante el periodo neoliberal, los beneficios otorgados a las CM fueron varios. En 1993 se creó el Programa de Asistencia Alimentaria y Asistencia Técnica a las CM. En 1997 se autorizó enajenar los activos de la Comibol y del ex Bamin a favor de sectores productivos cooperativistas; ese mismo año se instruyó el arrendamiento y la transferencia de bienes de la Comibol a favor de las CM. En 1999 se autorizó a la Comibol a transferir sus activos arrendados a las cooperativas. En 2001 se autorizó a la Comibol ejecutar el Programa de Asistencia Técnica en

beneficio de las CM, financiado con recursos propios de la entidad y con un costo de USD 2 millones.

En 2003 se extinguieron y redujeron las deudas de las CM con el ex Bamin y el ex Fondo Nacional de Exploración Minera con la transferencia de obras sociales de salud, educación, recreación e infraestructura caminera secundaria y de electrificación. Se modificó la estructura del directorio de la Comibol: se aumentó un director –antes eran siete– y se favoreció el ingreso de tres directores nombrados por la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin). Se autorizó al Ministerio de Hacienda la transferencia de USD 987 500 para subsidios de vivienda a Fencomin. Se creó el Fondo Minero de Inversión (Fomin) para reactivar la minería cooperativa, destinándose USD 3 millones del TGN a monetizar activos fijos de Comibol y fondos de cooperación. Se determinó condonar deudas por concepto de multas e intereses por aportes al seguro a corto plazo de las cooperativas a la Caja Nacional de Salud y se autorizó a la Comibol desembolsar a fondo perdido de 896 000 bolivianos por aportes devengados de las cooperativas.

La ausencia de control estatal sobre estos empresarios se expresa dramáticamente en el medio ambiente. La minería cooperativista –catalogada como “artesanal”, puesto que no usa maquinaria ni tecnología moderna– no tiene sistemas de drenado y acumulación de desechos. La exposición de los restos minerales a la atmósfera, al agua de lluvia, a las quebradas y a los ríos, desencadena procesos físico-químicos que generan aguas ácidas, que favorecen la disolución de metales y contaminan los recursos hídricos (Devisscher 2008). El aporte de este sector a las arcas estatales es mínimo. Para 1992 llegaba al 21,1 % del total de pagos por regalías e impuestos mineros, equivalente a la exigua suma de USD 1,7 millones (Morales y Evia 1995, 9). A pesar de ello, las cooperativas se han opuesto con tenacidad a cualquier tipo de cambio en el régimen impositivo y, por tanto, un recorte a sus ganancias.

Otro problema son las condiciones de trabajo en las cooperativas mineras. Aunque un principio fundamental del cooperativismo es el igualitarismo –que en teoría implica que se trata de una organización económica donde no hay patrones ni asalariados, sino socios–, en la práctica, el dueño de un paraje puede contratar “segundas manos” y peones, quienes trabajan en condiciones precarias. Aunque la cantidad

de peones puede variar según el tamaño de la cooperativa y el mineral que explota, esta llega a representar más de dos tercios de la fuerza de trabajo empleada en las cooperativas ubicadas, por ejemplo, en el cerro Rico de Potosí (Michard 2008, 14). Los peones que tienen un contrato con remuneración fija reciben alrededor de 120 bolivianos (USD 18) por una mita de cuatro horas, con la posibilidad de trabajar dos al día. Los que se quedan menos tiempo, insuficiente para tener un contrato, tienen una remuneración diaria de 50 a 80 bolivianos por mita, con la posibilidad de trabajar dos (Michard 2008, 14). El aporte de las cooperativas a las inversiones mineras es bajísimo. En 1990, la inversión de las cooperativas fue del 0,07 % de total; para 1992, este porcentaje bajó a 0,069 %, un millón de dólares.

Es importante señalar que los cooperativistas no son un movimiento social, porque las CM no constituyen —como lo hacían antes los mineros sindicalizados en torno a la FSTMB— canales por donde transiten las demandas de la sociedad civil, una instancia que busque ampliar derechos y libertades. La política y los partidos les interesan porque les permiten lograr ventajas para su empresa, pero no tienen intención de mejorar las condiciones de vida de los lugares, ciudades o departamentos de donde explotan los minerales. Existe una desconexión entre sus objetivos empresariales y la suerte de la región, con la que muchas veces colisionan, ya sea por los daños al medio ambiente, al patrimonio o por su escaso aporte en impuestos. Muchas veces, los intereses de las CM perjudican a los mineros medianos para favorecer a las transnacionales con las que establecen acuerdos empresariales. En el caso específico del cerro Rico, los cooperativistas han realizado acciones directas para tomar yacimientos de mineros medianos, a pesar de que ellos han firmado contratos con la Comibol en la modalidad de *joint venture*.

En enero de 1997, amparados en el discurso de defensa de las riquezas potosinas de la ambición de la empresa privada, 6000 cooperativistas tomaron los predios de la Compañía Minera Sumaj Orcko (Comiso), para exigir la disolución del contrato que esta empresa —a cargo de la mina Pailaviri— había firmado con la Comibol. El objetivo, aseguraban, era la “cooperativización” total del cerro Rico. A pesar de que el gobierno defendió que toda negociación se haría en los marcos de orden legal vigente y sin medidas de presión, cuatro meses después, en agosto de 2001, la dirigencia

de Comibol rescindió el contrato con Comiso, bajo el argumento de que la mina había sido objeto de un manejo y explotación arbitrarios.

A cambio, la estatal celebró un contrato con la Empresa Minera Manquiri Sociedad Anónima (EMMSA), de propiedad de la transnacional Coeur d'Alene y las CM. El entonces presidente de Comibol, Rafael Delgadillo, al momento de anunciar el acuerdo dijo,

si este es el modelo de organización que quieren los trabajadores en el cerro Rico, bienvenido sea. Este es el modelo que va a permitir un mejoramiento en la producción y que llevará por la ruta de la calidad de vida de todos los cooperativistas de la Villa Imperial.⁷⁸

Esto significaba un gran avance para los cooperativistas y el fracaso de la modalidad de *joint venture*, con la cual se pretendía atraer inversión extranjera a las minas bolivianas. No contentos con ello, los cooperativistas también se apropiaron de los desmontes del cerro Rico y de la escoria mineral que dejaba la actividad minera, que todavía contenía valiosos recursos. Arremetieron contra el funcionamiento de la Planta Hidrometalúrgica Potosí (Plahipo), que legalmente era propietaria de los desmontes. Era una empresa estatal creada durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993), pero que por diversas razones no llegó a funcionar plenamente.

Durante el gobierno del AP de Hugo Banzer (1997-2001), se trató de reactivar Plahipo bajo la modalidad de *joint venture*. Para ello, en los primeros meses de 1998, se publicó una licitación internacional que invitaba a las empresas a hacerse cargo de la planta. Tres empresas se presentaron a esta convocatoria: el Consorcio Empresa Minera Unificada (Emusa), la Corporación Minera del Sur (Comsur) y la Empresa Minera Manquiri Sociedad Anónima (Emmsa) de las cooperativas mineras. Luego de la calificación de propuestas, se decidió adjudicar Plahipo a Emusa, que había ofertado un canon anual de arrendamiento de USD 750 000, monto mayor a los propuestos por Comsur y Emmsa, que no superaban los USD 140 000. A pesar de este arreglo, los dirigentes de Comcipo amenazaron con tomar medidas e impedir el trabajo de la empresa si

⁷⁸ *El Potosí*, "Mina Pailaviri ya está en manos de las cooperativas", 28 de noviembre de 2001.

es que sus representantes no se comprometían a entregar recursos para la región. Se buscaba reeditar el acuerdo entre Comsur y el Concejo Municipal en 1988.⁷⁹

En este contexto, la gerencia de la empresa Don Mario, dependiente de Emusa, aceptó negociar el pago de un denominado “extralegal” de USD 1,5 millones a favor de Potosí.⁸⁰ Además, propuso crear una fundación con un capital de USD 600 000 de contraparte que, hipotéticamente, podría conseguir USD 2,4 millones de entidades extranjeras. En mayo se firmó un convenio entre la empresa Don Mario y Comcipo, en el que se acordó entregar el dinero a una fundación y USD 0,15 por tonelada producida para el fortalecimiento minero del cerro Rico. En total se estimaba que la empresa entregaría USD 900 000. La fundación tendría como finalidad atender los problemas y necesidades más urgentes de la población de Potosí y estaría conformada por la Prefectura, la Alcaldía, la Universidad Tomás Frías, Comcipo y la empresa minera Don Mario.⁸¹

Se trataba de un convenio favorable a los intereses del departamento. Empero, tuvo la oposición de tres actores: la COD, que consideraba que con este acuerdo se entregaba los recursos naturales a una transnacional; el MNR, que veladamente defendía los intereses de Comsur, de propiedad de su jefe Gonzalo Sánchez de Lozada; y, sobre todo, los cooperativistas que, desde hace años ambicionaban explotar los desmontes del cerro Rico de Potosí. Su rechazo llegó al extremo: Guillermo Condori, presidente de las cooperativas, renunció a la vicepresidencia de Comcipo arguyendo que el convenio no era favorable ni a su sector ni al departamento. A manera de advertencia, Condori señaló, “no vamos a permitir que la empresa Don Mario ingrese a explotar los recursos minerales del cerro Rico, puesto que son de propiedad de las cooperativas”.⁸²

Dos meses después, la amenaza de los cooperativistas se hizo realidad. La dirigencia de Fedecomín denunció que Plahipo estaba mal ubicada (desde una perspectiva ambiental) y constituía un grave peligro

⁷⁹ *El Siglo*, “Empresa minera Don Mario debe aportar USD 1,5 millones”, 28 de marzo de 2001.

⁸⁰ El nombre del proyecto minero Don Mario hace alusión a Mario Mercado Vaca Guzmán, uno de los grandes mineros y conocido dirigente de fútbol boliviano.

⁸¹ *El Siglo*, “Se firma convenio entre empresa minera Don Mario y Comcipo”, 9 de mayo de 2001.

⁸² *El Siglo*, “Vicepresidente de Comcipo renuncia a su cargo”, 14 de mayo de 2001.

para Potosí. Luego de varias aclaraciones, visita de autoridades a Potosí, negociaciones y presiones, sorprendentemente, el Ministerio de Desarrollo Sostenible dio la razón a Fedecomín y, a través de una resolución “inapelable”, recomendó trasladar Plahipo a otra ubicación, lo que era técnicamente imposible.

En 2002, a un mes de la posesión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, las cooperativas volvieron a la carga con su demanda de rescindir el contrato entre la Comibol y la empresa Don Mario, y recurrieron a un contundente bloqueo de caminos. Esta vez las presiones dieron resultado: los desmontes, propiedad de Plahipo, pasaron a poder de los cooperativistas para luego pasar a dominio de las transnacionales, ya que las CM subarrendaron los desmontes a la transnacional Coeur d' Alene que, con el nombre de San Bartolomé, empezó a trabajar en el cerro con una inversión de USD 60 millones.

La minería transnacional y su ingreso a Potosí

La presencia de la minería extranjera ha estado acompañada por grandes inversiones y tecnología, ha traído prosperidad local. La empresa San Cristóbal, subsidiaria de Sumitomo de Japón, está ubicada en la provincia Nor Lízpez de Potosí. Trabaja en yacimientos de zinc, plomo y plata, con una inversión de más de USD 700 millones, que incluye la construcción de la mina por USD 460 millones, una carretera asfaltada, la instalación de servicios de energía eléctrica, transporte y comercio y, por si fuera poco, el traslado de la población y de sus casas a otro lugar, porque se encontraban sobre la zona donde se emplaza la mina. San Cristóbal es la operación minera más grande en la historia de Bolivia, el sexto productor de zinc en el mundo y el cuarto productor de plata en el planeta.

Otra empresa es Sinchi Wayra, filial de la suiza Glencore. Opera más de cinco minas en las regiones de Oruro y Potosí, entre ellas Porco y Colquiri, en contrato de arrendamiento, y Bolívar, bajo contrato de riesgo compartido, con Comibol. Explota principalmente estaño, plata, plomo y zinc. ¿Cómo pudo ingresar este capital transnacional sin prácticamente ninguna oposición de Comcipo? Según algunos expertos en

el tema, como el exprefecto Sergio Medinaceli, estas empresas realizaron una labor de convencimiento dentro de las poblaciones donde estaban los yacimientos, y se acercaron a los dirigentes tanto de las cooperativas como de Comcipo.⁸³

En efecto, hasta mediados de los años ochenta, los cooperativistas del Cerro Rico se dedicaban a explotar estaño. Empero la severa crisis, junto con cambios en la demanda, hizo que los cooperativistas pasaran a trabajar complejos de zinc, plomo y plata. Dejaron la veta y se pusieron a trasladar altos volúmenes de carga mineral. Su forma de trabajo continuó siendo artesanal, con poca mecanización y sobre todo falta de financiamiento. Todo ello ha devenido en la dependencia de las empresas comercializadoras de minerales que les pagaban por adelantado.

Por una serie de presiones, para 2000, las cooperativas del cerro Rico colocaron bajo su dominio cuatro importantes zonas aledañas: Huajcachi, Santa Rita, Diablo Norte y Diablo sudeste. Estas, a su vez, se arrendaron a grandes cooperativas mineras: Reserva Fiscal, Rosario Limitada, Diez de Noviembre Limitada, Villa Imperial Limitada, Compotosí Limitada, 27 de marzo Limitada.

Las CM las subarrendaron a la empresa estadounidense Coeur d'Alene sin mayores problemas. Para que ello ocurriera, la transnacional había realizado reuniones con las CM desde 1992 en las que presentaban los beneficios que podría suponer para ellos una sociedad con la transnacional. El argumento que repetían los representantes de las empresas era que “ellos no interferirían en sus labores actuales, que lo que obtendrían de las transnacionales era una yapa” (Madrid y Camacho 2003, 65).

Esta negociación duró aproximadamente siete años. Finalmente se suscribió un acuerdo con la Cooperativa Reserva Fiscal a la que después se fueron sumando otras. En el primer trimestre de 2003 se firmó un contrato de riesgo compartido que dio lugar a la creación de la empresa Manquiri para explotación en torno al cerro Rico, en un radio de ocho kilómetros.

Luego se supo que la “yapa” que obtuvieron los cooperativistas por entregar los desmontes del cerro Rico a la transnacional llegaba a los USD 5,9 millones más un pago de un dólar por tonelada de desmontes

⁸³ Sergio Medinaceli (exprefecto de Potosí), en conversación con el autor, febrero de 2017.

que entregaban los cooperativistas cuando en el mercado su valor llegaba a los 30 centavos. A través de este contrato, Manquiri (subsidiaria de Coeur d' Alene) pudo acceder a las zonas donde se ubican los recursos minerales y pudo lograr "el respaldo de la principal fuerza de la región, los más de 6000 cooperativistas mineros, cuya capacidad de movilización ahora está al servicio del proyecto" (Madrid y Camacho 2003, 66).

Dos aspectos llaman la atención sobre este proceso. Primero, este contrato no se enmarcó en ninguna estrategia de desarrollo de la región potosina por parte del Estado y peor aún del sector minero. Segundo, estos acuerdos se hicieron a la sombra, sin la participación de ningún actor de la sociedad civil como la COD o Comcipo.

Los cooperativistas mineros, un nuevo poder que no lidera las luchas potosinas

A continuación caracterizaré a los cooperativistas para explicar, desde una perspectiva sociológica, cómo este actor con poder no puede asumir el liderazgo de las reivindicaciones regionales. Esto tiene que ver con el hecho de que los cooperativistas carecen de los atributos sociales y simbólicos para insertarse en la sociedad potosina; su condición de indios y cholos y su particular cultura lo impiden.

Un rasgo de los cooperativistas es su difusa ideología y su falta de pertenencia territorial. Ya no se trata de los obreros de la Comibol fuertemente ideologizados y con una retórica revolucionaria. Los cooperativistas se caracterizan por una suerte de pragmatismo político que les ha permitido asociarse tanto con los regímenes de facto como con los democráticos (parecería que no les interesa el tipo de gobierno que esté en el poder, siempre y cuando favorezca o, por lo menos, no afecte a sus intereses). De este modo, se puede entender cómo, muy rápidamente, se han apegado al MNR y luego a su antípoda, el MAS, adoptando la retórica de las corrientes de izquierda. Por ejemplo, en la coyuntura de la denominada Guerra del Gas, en octubre de 2003, los mineros cooperativistas llegaron a la ciudad de La Paz para exigir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Según ellos, lo hicieron para defender la democracia y para que los recursos naturales

sirvieran al pueblo y no a las transnacionales. Esta contradictoria afiliación ideológica, en cierto sentido, tiene que ver con la composición social de los cooperativistas. En realidad, se trata de capitalistas que pueden adoptar discursos de derecha o de izquierda para resguardar sus intereses empresariales.

Es probable que estas mismas condiciones determinen la relación del minero con su entorno social, con las poblaciones o ciudades donde están ubicados sus espacios de trabajo. Aquí es útil —como sugiere Burbano de Lara (2010, 109) para los casos guayaquileño y cruceño— partir de la idea de diferenciación de clase y estamento, comprendiendo que este último es la “capacidad de ciertos grupos para manejar, administrar, recrear y distribuir el prestigio y el honor social en el ámbito local, como una forma de poder que, a la vez, los cohesiona como un grupo con rasgos estamentales”. Los cooperativistas claramente carecen de prestigio y honor social reconocido por el mundo urbano. Para Absi (2005, 67),

el duro trabajo minero, base de su reconocimiento y de su prestigio dentro de la sociedad minera, es percibido por los “profesionales” de la ciudad como el estigma de su ignorancia: el minero trabaja duro porque es un bruto que no sabe hacer otra cosa [...]; la mayoría de los habitantes de Potosí ignora prácticamente todo lo que pasa en el cerro. Cuando se interesan por ello, es para evocar con condescendencia la vida miserable de los trabajadores, a los cuales les rebajan al rango de “mineritos”.

Uno de los elementos que claramente distancia a los cooperativistas de las clases media y alta en la ciudad es ser cholos, una condición identitaria cultural mestiza cargada de significantes negativos como ignorancia, alcoholismo y flojera (Arguedas 1982; Soruco 2011). En los espacios urbanos donde viven los cooperativistas, no se da su plena integración a la sociedad: ellos miran a los ciudadanos como personas que nunca han conocido lo que es un “verdadero” trabajo, y la clase media potosina nunca reconoce al minero cooperativista como parte de su identidad local. Muchas veces, los ciudadanos se refieren a los mineros que gozan de una súbita riqueza como “burros cargados de plata”, para referirse a su ignorancia, a su falta de higiene y de normas de educación, sin que importe su holgura económica. Por ejemplo, en las listas de los clubes

sociales de la ciudad de Potosí, no se encuentran conocidos empresarios cooperativistas, sino personajes ligados al comercio, a la banca, a la minería privada y a la burocracia nacional.

Los cooperativistas no hacen esfuerzos para ingresar a estos espacios, sino que han creado los suyos. Uno de ellos son las fiestas patronales y el carnaval minero. Bolivia cuenta con muchos eventos de esta naturaleza, en los cuales se establece un día de conmemoración para cada santo, que normalmente no se reduce a la ceremonia litúrgica, sino que incluye la celebración de una fiesta. En el mundo minero, santos como el Señor de Bombori, de Huayllas y el Señor de Tata Kajcha, entre otros, son representaciones católicas pero que abren espacios para la cultura y la cosmovisión indígena.

Los ritos de socialización mineros como el *pijcheo* (masticado de coca) y la *challa* de la mina (que se realiza regando alcohol y sangre de llama en las paredes de la bocamina) son costumbres que, a los ojos de una persona de la ciudad, pueden parecer salvajes y primitivas. Como señaló un miembro de la sociedad potosina, “esos mineros tienen costumbres que nosotros no alcanzamos a entender del todo; eso de matar llamas y de adorar el demonio, por ejemplo, son costumbres que yo las considero primitivas, que no las comparto”.⁸⁴

Por todo esto, en rigor, no existen redes de poder social regionales. Si bien en el mundo minero cooperativista existe una profunda estratificación social –no exenta de racismo hacia el indio–, esta estructura funciona solo en el ámbito minero y no establece vasos comunicantes con otros espacios urbanos.

A pesar de todo, sí hay espacios donde se da un encuentro, aunque fugaz, entre los diversos componentes de la sociedad potosina: el carnaval minero y la entrada de Chutillos, celebraciones en las que las personas bailan diversidad de danzas folclóricas por las calles. Son festividades que recrean la identidad potosina y muestran la riqueza de su cultura. A pesar de que este tipo de manifestaciones folclóricas son norma en casi todo el mundo altiplánico, las de Potosí tienen características únicas, pues presentan y recrean danzas de todas las provincias.

⁸⁴ Conversación con miembro de la clase alta de Potosí, enero de 2016.

A diferencia de Santa Cruz, donde manifestaciones como el carnaval son espacios donde la élite ratifica su condición, además de recrear y proyectar una identidad regional (Burbano de Lara 2014, 395), esto no ocurre en la sociedad potosina. Las manifestaciones no generan espacios de socialización y diferenciación más allá del momento de la fiesta, es decir, no constituyen movimientos culturales que puedan ser base para una futura politización alrededor de la identidad territorial.

Los cooperativistas han creado una especie de élite que goza de altos niveles de ingresos y que, de alguna manera, es el referente del mundo minero de la región. Esta élite recrea las costumbres propias del mundo cholo, como ser padrinos, o ser pasantes o prestes, lo que implica pagar por los gastos de diversas fiestas religiosas, que estas personas aprovechan para reforzar su prestigio (con facilidad, asumir este rol puede llegar a costar USD 10 000, pues hay que hacerse cargo de la semana de fiesta, el licor, la comida, el pago de los músicos de la banda y el grupo electrónico).⁸⁵

Este estatus no se vincula con el trabajo, la defensa de la moral o el cariño a la tierra; en muchos casos, únicamente refleja la suerte que tiene el minero que halló una veta que, de pronto, se volvió millonario. El cooperativista es un trabajador incansable que permanece en el interior de la mina más de las ocho horas prescritas por la ley y su vida está plagada de penurias y trabajo. Sin embargo, según su imaginario, su riqueza no se debe tanto a estos sacrificios, sino al hecho de que el Tío, un demonio de la mina, con quien estableció un pacto, le regaló un filón de mineral que cambió su vida (Absi 2005). Según esta idea, la riqueza del minero cooperativista siempre estará sujeta no tanto a su creatividad y a su empuje para los negocios, sino al cumplimiento de las demandas del Tío de la mina, una entidad infraterrenal que puede otorgar riqueza y también la puede quitar.

A los cooperativistas no les interesa establecer alianzas duraderas con instituciones de la sociedad civil ni copar los espacios de poder locales. Ellos no se esfuerzan por potenciar a Comcipo, sino que buscan controlarlo, por lo que colocan algún representante en el directorio o se ponen al frente de la institución en momentos de conflicto. Su relación con la entidad cívica es instrumental: la apoyarán cuando esto no ponga en

⁸⁵ Celestino Porco (trabajador cooperativista), en conversación con el autor, enero de 2017.

riesgo sus intereses, y la denostarán y atacarán con fiereza cuando ocurra lo contrario.

Finalmente, una de las mayores incógnitas en torno a los cooperativistas son las razones por las cuales realizan su labor. ¿Por qué, a pesar de la dureza de la vida en la mina y las malas remuneraciones, los mineros continúan horadando la montaña? ¿Por qué este trabajo continúa atrayendo a una gran cantidad de mano de obra cuando son evidentes la explotación y el recorte de derechos laborales, además de que está comprobado que estas actividades reducen la vida de las personas?

Una de las respuestas, la más común, es que en las cooperativas existe un grupo de explotadores que se aprovechan del trabajo ajeno, que medran en la necesidad de empleo de gente pobre, la mayoría de origen rural, y lo usan en su provecho para enriquecerse. Sin embargo, este asunto puede ser más complejo. En el libro titulado *Los ministros del diablo* de la antropóloga Pascale Absi, se cuenta la historia de Fortunato, un cooperativista que, en su juventud, llegó a ser uno de los mineros más acaudalados del cerro Rico de Potosí, pero que, con el pasar del tiempo, perdió/dilapidó todos sus bienes y ahora se lo puede ver trabajando como curandero y adivino. ¿Cómo llegó a tener tal riqueza? Trabajando como minero, claro está, pero también fue ayudado por un gran golpe de suerte: descubrió un rico filón de plata que le cambió la vida. Llegó a ser uno de los padrinos más codiciados de promociones de bachillerato, matrimonio, bautizo y, según señala Absi (2005, xviii), “como no sabía qué hacer con su dinero, decidió empapelar con billetes las paredes de sus casas”.

Fortunato no hubiera podido acumular tal riqueza como trabajador de la Comibol ni como asalariado de una minera privada. En ambos casos, habría recibido su salario y, quizás, una felicitación de gerencia, nada más. En ese sentido, el trabajador puede pensar en hacerse rico solo dentro de un esquema cooperativista, ya que este permite la constitución de un minero “libre”, es decir, dueño de un paraje minero, de una bocamina que explota bajo su cuenta y riesgo. En otras palabras, lo que incentiva al cooperativista para seguir trabajando es que no lo hace para un tercero, sino para sí mismo, y además existe la gran probabilidad de que aparezca un grueso filón que lo haga rico de la noche a la mañana.

Es cierto que los cooperativistas contratan mano de obra: segundas manos y peones; es probable que ellos también tengan la expectativa de ser socios cooperativistas y ser ricos algún día. Sin embargo, en cierta medida, ser solo trabajadores asalariados implica disminuir sus posibilidades de ser Fortunatos en algún momento, conseguir su propio paraje minero y descubrir una veta prodigiosa.⁸⁶

Tales expectativas no tendrían fundamento si no se considerara a la mina, al cerro Rico de Potosí, una entidad viva, una suerte de deidad que se encarga tanto de proveer riqueza como de quitarla. También se debe tomar en cuenta el pacto que el trabajador entabla con el Tío, el diablo que es el dueño del destino de los mineros, y a quien ellos hacen ofrendas: “unas hojas de coca, cigarrillos y alcohol, ocasionalmente un feto de llama” (Absi 2005, xix).

Como hemos visto, las luchas cívicas potosinas de este periodo se caracterizaron por un profundo nacionalismo y buscaron detener el modelo neoliberal, opuesto a la ideología de los dirigentes de Comcipo. En esos años también empezó a despuntar un nuevo grupo económico y político, los cooperativistas, quienes poco a poco llenaron los espacios minero y político que dejaron los dirigentes sindicales de la Comibol. Sin embargo, este nuevo actor nunca ha logrado conectar con los problemas potosinos ni liderar sus luchas cívicas; de hecho, como veremos más adelante, incluso se ha opuesto a ellas.

Asimismo, en este periodo, se evidenció el desgaste de los partidos políticos “tradicionales” debido a su ausencia de conexión con la sociedad civil, su falta de orientación política y su inclinación a la corrupción. Esto permitió consolidar el liderazgo de René Joaquino, quien manejó un discurso indigenista y de izquierda.

Conclusiones

En el modelo de Estado neoliberal se trató de desplazar a las entidades de referencia sindical y territorial —por ejemplo la COB y el Comité Pro Santa Cruz, respectivamente— como representantes políticos, a favor de

⁸⁶ Pánfilo Achu (trabajador cooperativista), en conversación con el autor, enero de 2017.

un sistema de partidos. Estos fueron privilegiados como canales de mediación entre la sociedad civil y el Estado, que también debía mostrar sus bondades en la relación con las periferias territoriales.

El modelo neoliberal para Potosí representó el cierre de las minas de la Comibol y el despido de sus trabajadores. Sin embargo, esto no implicó que tales actores desaparecieran. Al contrario, los sindicatos y viejos partidos de izquierda se parapetaron en la entidad cívica y, desde ahí, buscaron frenar el modelo neoliberal que los había marginado del poder.

Comcipo continuó siendo la institución más importante y representativa de la región potosina, en parte, porque el sistema de mediación política vía los partidos fue un rotundo fracaso. Además, la Ley de Participación Popular (1994) dio lugar a la emergencia de nuevos liderazgos alejados de los partidos políticos “tradicionales” como el MNR, MIR y ADN.

Una clave de este periodo fue que el espacio minero dejado por la Comibol fue copado por la minería cooperativa, que llegó a constituirse en el nuevo actor con poder de la región potosina. Las CM aprovecharon la debilidad del Estado para apropiarse de yacimientos y explotarlos ya sea por sí mismos o en alianza con el capital transnacional. Sin embargo, este actor poderoso no pudo articular las demandas de desarrollo de la sociedad potosina.

Capítulo 4

Relación centro-periferia en el Estado plurinacional (2009-2015)

Entre los años 2000 y 2009 se produjo una crisis de Estado que se manifestó como pérdida de la capacidad de representación de los partidos políticos (Lavaud 2007, 143; Assies y Salman 2003, 80; Calderón y Gamarra 2003, 96-97); debilidad de la autoridad estatal, combinada con un clima de movilización y protesta; crisis de la nación como factor de identidad colectiva, y deslegitimación del Estado debido a la profundización de la pobreza y la crisis económica.¹

El sistema de partidos, que giraba en torno al MIR, al MNR y a la ADN, progresivamente entró en una crisis de representatividad como efecto del clientelismo político, la concentración del poder decisorio en el Poder Ejecutivo –de orientación tecnocrática– y la consolidación del caudillismo partidario. Si bien el primer acuerdo político entre ADN y MNR para afianzar la vigencia de la democracia y de la economía de mercado fue un ejemplo de consenso a nivel de América Latina (Pachano 2006,16), en lo sucesivo degeneró en prácticas clientelares que ya no tenían que ver con acuerdos basados en un programa, sino con intereses de grupos y personas. Los datos cuantitativos para medir la democracia reflejan este desgaste: en 2004 la satisfacción con la democracia había descendido al

¹ La nueva política económica no había logrado cumplir con sus objetivos: la industria no fue modernizada, no se crearon nuevos puestos de trabajo y los indicadores sociales evidenciaron que los ingresos de la renta petrolera no se habían canalizado para combatir la pobreza y la desigualdad. Para 2005, la pobreza moderada alcanzaba al 60,6 % de la población y la pobreza extrema, al 38,2 %; el coeficiente de Gini era de 0,60 y la tasa de desempleo abierto a 2005 era del 5,45 %, frente al 4,79 % correspondiente a 2000 (Ceppi 2016, 179).

48 %, el apoyo al sistema democrático llegaba al 44,1 % y la confianza en los partidos políticos llegaba al 23,4 %, el porcentaje más bajo desde la recuperación de la democracia en 1985 (Schwarz 2006, 21-23).

Dos acciones colectivas, la Guerra del Agua, en enero de 2000, y la Guerra del Gas, en octubre de 2003, evidenciaron la emergencia de nuevos actores sociales por fuera de las instituciones reconocidas como legítimas por el Estado, la irrelevancia de los partidos políticos en el conflicto y su capacidad de irradiación más allá del espacio urbano.

En este contexto aparecieron nuevos movimientos sociales, con un discurso nacionalista e indigenista, que protagonizaron un ciclo de protestas y movilizaciones que impidieron que el Estado tomara varias medidas (por ejemplo, alza de precios del agua en 2000 o el incremento de impuestos en 2003). Incluso obligaron a que dos presidentes renunciaran de manera consecutiva: Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre de 2003, y Carlos Mesa, en junio de 2005.²

En este marco, surgió Evo Morales, un dirigente cocalero del Chapare del departamento de Cochabamba, quien había alcanzado notoriedad pública en la lucha contra la erradicación de la hoja de coca. Entre 1997-2001, en el gobierno de Hugo Banzer, y luego, entre 2001 y 2002, en el de Jorge “Tuto” Quiroga, hubo un recrudecimiento de la represión a los cocaleros como efecto de la aplicación de la política de erradicación de plantas de hoja de coca en el Chapare, con un saldo de más de 30 personas muertas, varios bloqueos de caminos y erradicación de un 70 % de sembríos de coca (Vergara 2015, 252). Esta situación se combinó con la expectativa económica que generaba la venta de esta planta y provocó que los cocaleros se organizaran mejor y de forma mucho más militante.

Morales, al frente del MAS, logró convertirse en el portavoz de los movimientos sociales. Después de un aletargamiento producto de la desactivación del sindicalismo minero con el cierre de la Comibol en 1985, reapareció con fuerza, mostrando enormes “capacidades organizativas y propositivas para gestar instancias alternativas de participación y representación” (Quiroga y Pagliarone 2014, 208). Al representar a sectores tradicionalmente desfavorecidos por las políticas, Morales logró

² Se dinamizó radicalmente la protesta social: a inicios del siglo XXI se contabilizaron casi 300 movilizaciones; en 2005 llegaron a ser 600 (Córdova, Choque y Santiesteban 2009, 81).

implementar mecanismos efectivos de canalización política del descontento “prevaliente” y liderar la oposición contra las reformas neoliberales y la corrupción. Para ello, el líder se apoyó en un discurso novedoso para el campo político: nacionalismo al estilo de 1952 combinado con indigenismo (Mayorga Ugarte 2009, 133).

El nacionalismo se cristalizó en la propuesta de nacionalización de los hidrocarburos, que “se instala como núcleo del sentido común y funge como factor de cohesión fundamental de la población” (Radhuber 2010, 194), y cuya agenda se basaba en el control estatal de los recursos naturales.

También se planteó una Asamblea Constituyente sobre la base del discurso de la plurinacionalidad, que tenía que ver con la memoria larga y la lucha de los pueblos indígenas por transformar un Estado que, se decía, no había dejado de ser colonial ni cuando Bolivia se proclamó como República (Tapia 2002; García Linera 2003). No tenía que ver con un modelo de Estado específico, sino con oponerse a la lógica con la cual se habían construido la nación y el Estado boliviano: permanente subalternización y negación de la otredad indígena. Este discurso, fundamentado en que la nación boliviana había fracasado en unificar diferentes tipos de civilización y culturas (Tapia 2002, 17), planteó “transformar los Estados naciones para corregir las desigualdades de las que se perciben como víctimas” (Cruz Rodríguez 2010, 132).

Evo Morales se presentó a las elecciones de 2002, en las que sorprendentemente logró un 20,94 % de la votación, lo que lo ubicó en segundo lugar después del candidato del MNR, que obtuvo el 22,46 %. Este apoyo dio a Morales el suficiente capital político para ser cabeza de oposición a los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Mesa, tanto en el Parlamento como en las calles.

En octubre de 2003, presionado por una creciente movilización popular conocida como la Guerra del Gas, el presidente Sánchez de Lozada renunció y dejó el cargo a su vicepresidente Carlos Mesa quien, huérfano de apoyo parlamentario y carente de base social, tampoco pudo completar el periodo de mandato de cuatro años previsto en la Constitución y renunció en junio de 2005. Mesa fue sustituido por Eduardo Rodríguez, por entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el encargo de llevar a cabo elecciones en diciembre de 2005.

Estos comicios no solo ratificaron el respaldo electoral de 2002 al MAS, sino que este aumentó: Morales logró el 64 % de los votos y consiguió 72 bancas parlamentarias de 130. Fue elegido presidente de manera directa sin mediación de pacto partidario en el Congreso, un hecho inédito en la historia de la democracia boliviana.

Sin embargo, en el Poder Legislativo, específicamente en la Cámara de Senadores –cuyos componentes son elegidos por criterios territoriales y no poblacionales– la oposición obtuvo mayoría con 14 senadores de 27. Asimismo, producto de las primeras elecciones prefectorales de 2005, una mayoría de las prefecturas (seis de nueve) permanecían en manos de partidos de la oposición: Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y La Paz; solo Chuquisaca, Potosí y Oruro eran afines al gobierno. Adicionalmente, la oposición también recurrió a la movilización en las calles con huelgas, marchas y concentraciones amparadas en el discurso de defensa de la democracia, sin efecto alguno.

Con ingresos fiscales crecientes producto de los altos precios del gas, control de la Cámara de Diputados y respaldo de los movimientos sociales, tanto campesinos como urbanos, el gobierno del MAS gozaba de alto poder político. Esto le sirvió para dominar los espacios políticos locales y anular a los opositores que desafiaban su poder en las prefecturas y alcaldías.

A mediados de 2006, el gobierno empezó a sentir el aumento de precios de los *commodities* (en especial del gas) en las arcas fiscales. Los ingresos totales que el sector hidrocarburífero aportaba al Estado como explotación, extracción y procesamiento pasaron de USD 461 millones en 2003 a más de USD 1900 millones en 2007, hasta llegar a los USD 2305 millones en 2010 (Radhuber 2010, 204). La tabla 4.1 muestra el sorprendente aumento de la renta petrolera.

Tabla 4.1. Evolución de la renta petrolera del Estado boliviano, 2005-2012 (millones de USD)

Año	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Monto	673	1474	1533	2099	2138	2235	2989	4292

Fuente: Ceppi (2016).

Estos recursos convirtieron al Estado en el más importante actor económico del país. La inversión pública, que era de USD 630 millones en 2004, subió a USD 2428 millones en 2010, durante el mandato de Morales.

El gobierno hizo obras por todo el país, los recursos se invirtieron en caminos, energía, educación y salud. En los primeros cinco años, una buena parte de las carreteras que unen las principales ciudades de Bolivia se asfaltaron y la infraestructura educativa tuvo una sustancial mejora. Esta bonanza tuvo efectos en el PIB, que había crecido a un promedio de 3 % anual entre 1985 y 2005. En 2006, al finalizar el primer año del gobierno de Morales, ascendió a 6,17 % (Weisbrot, Ray y Johnston 2010, 71), un récord entre los países latinoamericanos.

En el plano social, se crearon y mejoraron varios subsidios como los bonos Juana Azurduy, Juancito Pinto y Renta Dignidad, destinados a madres, niños y ancianos, respectivamente. La idea era atender deficiencias específicas en salud y educación y, por un “efecto derrame”, disminuir la pobreza y la falta de inclusión. Se trataba de romper la transmisión intergeneracional de las condiciones de vulnerabilidad y extender el campo de la protección social del Estado (Ceppi 2016, 183).

Desde la fecha de su creación, los recursos destinados a estos subsidios crecieron. Con el bono Juancito Pinto en un inicio se entregaron aproximadamente USD 30 a todos los estudiantes matriculados en colegios fiscales. En 2006 tuvo un presupuesto de 227,3 millones de bolivianos (USD 34,4 millones), que en 2012 ascendió a 381,9 millones de bolivianos (USD 54,42 millones). El bono Juana Azurduy para las madres en gestación en 2009 contaba con la suma de 55 millones de bolivianos (USD 7,85 millones), y para el año 2012 ascendió a 177,1 millones de bolivianos (USD 25,28 millones). Finalmente, la Renta Dignidad, que consiste en la entrega de un monto de USD 250 a las personas mayores de 60 años, en 2008 contó con un presupuesto de 1407 millones de bolivianos (USD 201 millones), cantidad que en 2012 ascendió a 1979,6 millones de bolivianos (USD 282,7 millones). El salario mínimo nacional tuvo múltiples incrementos: pasó de USD 63 en 2005 a USD 97 en 2010 (Ernst 2012, 229).

Los efectos en los indicadores sociales fueron notables. La tasa de pobreza extrema bajó de 38 % en 2005 a 32,7 % en 2008. El coeficiente

de Gini, entre 2002 y 2008, se redujo en 8 %. Paralelamente, el desempleo también tuvo descensos importantes; la Unidad de Análisis de Política Económica (Udape 2010) calculó que bajó de un 8 % en 2005 a un 7 % en 2008 y a 6,5 % en 2010.

Todo esto fortaleció el apoyo al gobierno: para 2008 la aprobación de la gestión de Morales llegó a 53 % (Corporación Latinobarómetro 2008, 91), mientras que en 2013 había alcanzado 66 % (Corporación Latinobarómetro 2013, 38), un récord.

Sin embargo, dos de las promesas de Morales, justamente aquellas que lo llevaron al poder, no se cumplieron: diversificar la economía e integrar a las comunidades indígenas como actores productivos relevantes. Después de ocho años de la nacionalización de los hidrocarburos (2006), el país continuaba dependiendo del gas; en 2013, representaba el 8 % del PIB, el 57 % de las recaudaciones tributarias, el 54 % de las exportaciones y el 33 % de la inversión interna (Del Granado 2014, 273).

El discurso del MAS proponía un modelo de desarrollo que, en consonancia con la idea del vivir bien, buscaba crecimiento económico en armonía con la naturaleza y con las diferentes cosmovisiones indígenas, integrando la economía nacional a los modos de producción que habían sido considerados atrasados o “primitivos” por la denominada “concepción colonial” de la sociedad. Sin embargo, en la práctica, ocurrió lo contrario. Los proyectos de desarrollo implicaron el control territorial de las comunidades indígenas, no se las integró a la economía y se desconoció sus derechos consagrados en la propia Constitución y los convenios internacionales, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Según una lógica que algunos analistas definen como “neextractivista”, el gobierno de Morales mantuvo a Bolivia con una economía de base estrecha, centrada en la explotación de hidrocarburos y minerales, sin perspectivas de diversificación económica y empleo.³

3 Maristella Svampa (2011, 1) define al extractivismo como “aquel patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales cada vez más escasos, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras de explotación hacia territorios antes considerados como ‘improductivos’”. Por ende, no solo contempla actividades tradicionalmente extractivas, como la minería y el petróleo, sino también otras como la industria forestal, el agronegocio y los biocombustibles, incluso proyectos de infraestructura, al servicio de dichas explotaciones.

En 2005, el PNUD realizó un estudio sobre el rol del gas en la economía boliviana. Una de sus conclusiones señala: “Creemos que el reto central de nuestro periodo histórico es pasar de una economía de *base estrecha*, anclada en el recuerdo del estaño y la promesa del gas, a una economía de *base ancha*, que diversifique sectores y multiplique actores competitivos y productivos” (PNUD 2005, 15).

La evidente contradicción entre un presidente que se proclama el primer mandatario indígena de Bolivia, adalid de la defensa de los derechos de la madre tierra, y su promoción del extractivismo, provocó un alejamiento de varios movimientos sociales que denunciaron traición al proyecto indígena. Las relaciones del gobierno con la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob)⁴ y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq),⁵ que representan a pueblos indígenas de las tierras bajas y altas respectivamente, fueron muy tensas, y finalmente terminaron (Salman 2013, 154). Como señala un experto, “después de promulgarse la Constitución en Bolivia se oyó hablar de socialismo comunitario en los discursos, aunque la administración económica sería ortodoxa y en continuidad con los parámetros establecidos en los años noventa (a pesar del mayor protagonismo del Estado)” (Schavelzon 2015, 36).

Las organizaciones indígenas originarias campesinas no aceptaron pasivamente todas las directrices emanadas desde el gobierno. En 2011, un proyecto de carretera entre Santa Cruz y Cochabamba, que buscaba atravesar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécuré (Tipnis) provocó una exitosa movilización de indígenas que caminaron por 60 días hasta llegar a La Paz. A la postre, el gobierno firmó un acuerdo con los líderes indígenas y suspendió la obra, a pesar de que tenía adelantado el financiamiento y el contrato con las empresas constructoras.

⁴ La Cidob representa a 34 pueblos indígenas de tierras bajas. Nació el 3 de octubre de 1982 como Central de Pueblos y Comunidades Indígenas del Oriente Boliviano y agrupaba a chiquitanos, ayoreos, guarayos y guaraní.

⁵ El Conamaq es una organización de las nacionalidades y pueblos indígenas de las tierras altas de Bolivia, constituida el 22 de marzo de 1997. Busca representar a los *ayllus* de aymaras, quechuas y urus de los departamentos de Potosí, Chuquisaca, La Paz y Cochabamba. Su objetivo principal es reconstituir las estructuras precoloniales de las naciones originarias, lo que incluye derechos colectivos a la tierra y a los recursos naturales, la reterritorialización, derechos amplios a la libre determinación en el marco de las autonomías indígenas y representación directa en instituciones estatales (Schilling-Vacaflor 2008, 150).

El programa Evo Cumple, mecanismo de llegada a las periferias

Con base en los recursos que recibió por la venta de hidrocarburos, el gobierno implementó un mecanismo de inversión directa (sin licitación) denominado Evo Cumple. Desde su creación en 2006 hasta 2015 erogó 11 963 millones de bolivianos en 7162 proyectos para dotación de agua por cañería, construcción de escuelas, centros de salud, canchas deportivas y sedes sindicales (Ministerio de Comunicación 2015).

Con el programa Evo Cumple se buscaba posicionar a Morales como un líder con la capacidad de desarrollar todos los lugares del país. Intentaba consolidar su popularidad en las zonas rurales y ampliarla en la capital del departamento. Luego de que un equipo de técnicos revisaba los proyectos, Morales se reunía con todos los alcaldes del departamento, daba a conocer los planes aprobados y entregaba el primer cheque para su ejecución. Posteriormente, una vez que los proyectos terminaban, el propio presidente viajaba al municipio y entregaba la obra.

Esto generaba la impresión de que Morales escuchaba las demandas de la población. El mandatario viajaba casi todos los días a un municipio del país (a veces incluso a dos que se encontraban distantes uno del otro). Se trataba de un manejo político del territorio que opacaba el liderazgo local en los municipios, en tanto los recursos invertidos eran canalizados desde el poder central.

El programa Evo Cumple permitió cristalizar la premisa de “gobernar obedeciendo al pueblo”. Morales remarcaba continuamente que los proyectos no eran definidos por él ni por los dirigentes, sino en un amplio consenso con los beneficiarios, lo que configuró una nueva manera de gobernar y de relacionarse con los territorios y con las personas, a quienes, en teoría, no se les imponía nada. Indudablemente, se trataba de un estilo de gestión que reforzaba la imagen de Morales como líder que no tomaba una decisión sin consultar las necesidades de la gente, que asumía una relación no verticalista ni autoritaria con sus bases, que estaba en todas partes y que nunca olvidaba a los sectores desfavorecidos.

Sin embargo, este mecanismo también se convirtió en un instrumento de sanción para los municipios que no comulgaban con el partido de gobierno. El caso más claro fue el del opositor René Joaquino,

alcalde de la ciudad de Potosí, quien no fue invitado a reuniones con Morales y no fue tomado en cuenta como beneficiario de los recursos del programa.

Todo esto derivó en una fuerte concentración del gobierno en la imagen de Morales, quien se convirtió en el gran artífice que llevaba el desarrollo a regiones antes olvidadas. El centro se volvió itinerante y personalizado; concentraba recursos y poder, y los repartía territorialmente. “El centro deja de ser un punto fijo para volverse móvil, itinerante, personalizado, para construirse simbólicamente como un referente nacional”.⁶

La Asamblea Constituyente y el debilitamiento del proyecto autonómico departamental e indígena

Como parte del cumplimiento de la agenda de los movimientos sociales, en abril de 2006 el gobierno convocó a elecciones constituyentes para redactar una nueva Carta Magna que marcara las líneas básicas para construir el Estado plurinacional. Desde la perspectiva de la distribución territorial del poder, el desafío para el MAS era diseñar una Constitución que garantizara su poder sobre el territorio y, a la vez, satisficiera a los movimientos sociales, en especial indígenas, para los que el cónclave era una magnífica oportunidad de lograr autodeterminación política y poder sobre tierra y territorio.

Los movimientos indígenas se pusieron en acción para elaborar una propuesta conjunta para la Asamblea Constituyente (AC). Se conformó el Pacto de Unidad, constituido por la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (FSUTCB), el Conamaq y la Cidob. El pacto prácticamente abarcaba a todas las organizaciones campesino-indígenas que habían luchado por sus derechos en el pasado y habían apoyado al MAS en su camino hacia el poder.

Empero, había divergencias acerca de las autonomías. La Conamaq proponía reconstituir el *ayllu* como base para plasmar la autodeterminación y la autonomía política según usos y costumbres (Zegada 2007, 22;

⁶ *El Universo*, “Las sabatinas son todo”, 10 de febrero de 2015, <https://bit.ly/3gS7Zhc>

Schilling-Vacaflor 2008, 154). Esto implicaba una nueva división del territorio nacional (por encima de las departamentales ya existentes) en tres macrorregiones: norte *suyu*, centro *suyu* y sur *suyu*. También se propuso que el Estado reconociera la propiedad y posesión de los indígenas sobre el territorio que ocupan, más una representación directa en el Parlamento por cada uno de tales territorios. Por si esto fuera poco, postulaban el cambio del nombre de Bolivia por el de Qullasuyo-Bolivia (Zegada 2007, 67). Por su parte, la Cidob proponía reconstituir Bolivia con base en las tierras comunitarias de origen, dotándoles de control casi absoluto sobre tierra y territorio.

Estas propuestas claramente se oponían al proyecto de Estado del MAS, puesto que implicaban una profunda reconfiguración de la distribución del poder territorial, con la aparición de “microestados” y con el establecimiento de espacios territoriales con dominio casi total sobre sus territorios. Estos planteamientos eran parte de la propuesta de Estado plurinacional que buscaba romper con uno antiguo que, se decía, había construido una institucionalidad por encima y casi en contra del diseño político “originario” de las naciones indígenas. Si había muchas naciones también debía haber muchos Estados con responsabilidad sobre la forma de elección de autoridades y con capacidad de decisión sobre su propio territorio.

Estas posturas eran muy difíciles de procesar por los gobernantes del MAS, que si bien estaban de acuerdo con el empoderamiento de los indígenas, no lo estaban con soltar las riendas del poder territorial. Para ellos, antes que redistribuir el poder, la prioridad era fortalecer el Estado y ampliar su presencia institucional a lo ancho y largo del país, siempre desde el centro, desde el Poder Ejecutivo, con Evo Morales en primera línea.

Desde enero de 2006, aunque la dirigencia del MAS continuó manejando el discurso de la plurinacionalidad, la primera alerta de que las cosas no eran favorables para las organizaciones indígenas fue el modo de elección de los constituyentes, definido en la Ley de Convocatoria a la AC. El MAS hizo que primara el criterio partidario, no el territorial; no permitió que los constituyentes se eligieran por circunscripción indígena de manera autónoma, mucho menos que se seleccionara automáticamente a un constituyente por criterio territorial indígena, sino

a través de partidos políticos. Como señala un experto en el tema, “la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente fue una estrategia de reducción de la diversidad, del pluralismo cultural y del pluralismo político, que solo entran de manera subordinada a fuerzas que no estaban interesadas en ello” (Tapia 2011, 91).

Para debilitar la propuesta autonómica del Conamaq y la Cidob, el gobierno tuvo en la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia (CSUTCB) un aliado de primer orden. Esta organización llevó la autonomía a un plano de cálculo instrumental para debilitar la propuesta autonómica departamental de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. La CSUTCB otorgó a las autonomías un rol “estratégico para contrarrestar las autonomías departamentales” (Schilling-Vacaflor 2008, 157). “En este sentido, la estrategia del partido de gobierno sería la inclusión de otros niveles autonómicos, indígena y regional, que sumados al nivel municipal, autónomo por ley desde 1999, quitaron importancia y peso político al nivel departamental” (Schavelzon 2012, 192).

Esto fue interpretado por las organizaciones indígenas y urbanas como una traición. El 4 de agosto de 2007, en pleno desarrollo de la AC, el Conamaq rompió el pacto de unidad y “decretó” el cierre del cónclave retirando la bandera Wiphala del edificio Mariscal en la ciudad de Sucre, principal escenario de debate (Schilling-Vacaflor 2008, 155). Los sectores indígenas protestaban porque veían cómo sus planteamientos de autogobierno se diluían y se ampliaba la distancia entre un gobierno indígena y un Estado plurinacional (Schavelzon 2012, 200-203).

Más adelante, luego de arduas y tensas reuniones, estas organizaciones consensuaron una propuesta de texto constitucional titulado “Por un Estado plurinacional y autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas originarias y campesinas”, que fue asumido por el MAS como propuesta oficialista (Mayorga Ugarte 2011, 96). En la sección relativa a las autonomías se plantearon tres niveles de organización político-administrativa: el primero compuesto por las autonomías territoriales indígenas originarias campesinas e interculturales urbanas; el intermedio, conformado por los departamentos, y el plurinacional, con el Estado unitario plurinacional. Esta propuesta, al otorgar la posibilidad de autonomía solo en los territorios indígenas, hacía a un lado la proposición autonómica departamental preparada por actores de oposición regional

de Santa Cruz, Beni y Pando. La justificación era que se buscaba construir la autonomía desde abajo, desde las propias organizaciones de base (Zegada 2007, 78).

La dirigencia del MAS asumió estas propuestas de forma moderada (Mayorga Ugarte 2011, 96). Las incorporó de tal manera que no afectaron al poder del centro sobre las periferias, su estatalidad sobre el territorio boliviano. En este sentido, para algunos observadores, la nueva Constitución desmontó la propuesta de un Estado “que los incluya [a los indígenas] en los procesos de toma de decisiones y de gobierno a través de sus propias formas de vida, política y autogobierno” (Tapia 2011, 94), y, en realidad, procura construir “un país unitario con poder central capaz de implementar justicia social y equidad, y no un país de fuerte descentralización” (Kwon 2015, 525).

Una vez promulgada la nueva Constitución, el debilitamiento de las autonomías indígenas fue mayor. El régimen electoral transitorio de abril de 2009 redujo a siete el número de circunscripciones especiales indígenas, cuando lo que exigía el Pacto de Unidad era 15. La Ley Marco de Autonomías y descentralización (LMAD) estableció límites para el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos indígenas, afectando directamente la conformación de las autonomías. Por último, los requisitos para convertir municipios en autonomías eran bastante complicados. Para una observadora del proceso,

los requisitos desalentaron a muchos municipios con mayoría indígena que habrían participado en el referendo, pero no lo hicieron por las dificultades para presentar las evidencias solicitadas y porque las organizaciones indígenas y campesinas articuladas en el Pacto de Unidad rechazaron las limitaciones al ejercicio de la autodeterminación que habían demandado en la Asamblea Constituyente mediante la reconstitución territorial e identitaria (Cordero 2018, 71).⁷

⁷ El Decreto Supremo 231 de 2009 indicaba lo siguiente: “Que la jurisdicción actual del municipio corresponda históricamente a la territorialidad ancestral del (los) pueblo(s) indígena(s) originario campesino(s) que actualmente lo habitan; que la existencia de estos pueblos indígenas originarios campesinos fuera precolonial; que la población indígena originaria campesina del municipio compartiera identidad cultural, idioma, tradición histórica, territorialidad, cosmovisión y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias” (citado en Cordero 2018, 71).

En suma, después de aprobada la Constitución, el MAS optó por debilitar el impulso autonómico de los pueblos y naciones indígenas, que quedó diluido en “burocracias estatales o discursos militantes nostálgicos” (Schavelzon 2015, 15).

La resistencia de las periferias activas

Entre 2000 y 2005, en el departamento de Santa Cruz se reactivó un clivaje territorial que tenía como factor movilizador a las autonomías departamentales, como “respuesta regional a un cambio profundo en la escena nacional boliviana provocado por la emergencia de un conjunto de movimientos sociales como nuevos protagonistas de la vida política” (Burbano de Lara 2014, 289).

Santa Cruz proclamaba tener identidad, historia, modo de vida y proyecto de Estado distintos a los departamentos de occidente. Sus habitantes se sentían con el derecho de optar por un propio camino político, al margen de tales departamentos. En el imaginario cruceño se instalaron mitos como el de la modernidad del estilo de desarrollo, el del enemigo externo, el del feliz mestizaje y el de la cruceñidad que, al ser adecuadamente difundidos por varias instituciones ligadas al Comité Cívico Pro Santa Cruz, provocaron que se borrarán los otros clivajes étnicos y de clase subsumiendo todo en “la supraconciencia regional” (Agirakis 2012, 66-76).

El respaldo a la propuesta de autonomía se expresó en multitudinarios cabildos realizados en la capital de Santa Cruz, que se convirtió en bastión de las fuerzas opositoras. En enero de 2005, un cabildo de 350 000 personas resolvió convocar a un referendo autonómico vinculante y llamar a elecciones de prefectos en todo el país en caso de que el gobierno nacional no lo hiciera. Posteriormente, en junio de 2006, un cabildo de medio millón de personas llamó a votar por el sí en el referendo por autonomías convocado para el 2 de julio. Finalmente, el 15 de diciembre de 2006 se organizó el Cabildo del Millón, que ratificó la autonomía y respaldó a los dos tercios como modo de votación para la aprobación de la nueva Constitución en la AC. El asunto de los dos tercios, como anota un observador del proceso (Schavezon 2015, 9), “expresaba la tensión

entre una Asamblea que se disputaba entre dos lecturas sobre cuál debería ser el curso de la misma”. El MAS, con 147 constituyentes de un total de 255, defendía que los artículos de la nueva Constitución se aprobaran por mayoría absoluta, mientras que la oposición postulaba que se lo hiciera con dos tercios, es decir, con 170 votos, para evitar el avasallamiento de la mayoría masista en la AC. Finalmente, tras siete meses de discusión y movilizaciones callejeras, los dos tercios fueron incluidos en el reglamento de debates de la Asamblea.

En este contexto, las autoridades centrales intentaron debilitar económicamente a los niveles subnacionales de gobierno que, en virtud de una ley promulgada en la presidencia de Eduardo Rodríguez (junio 2005-enero 2006), recibían más de la mitad de los recursos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). En octubre de 2007, Morales propuso una ley que recortaba en un 70 % los ingresos de las prefecturas por IDH para trasladarlos al pago de la Renta Dignidad, bajo el argumento de que este bono, que llegaba a todas las personas mayores de 65 años, ahora beneficiaría también a los mayores de 60 años, y además se aumentaría el monto a 2400 bolivianos anuales (USD 340).

A pesar de que las prefecturas organizaron una intensa resistencia y los senadores de la oposición abandonaron las sesiones, la ley se aprobó y se aplicó sin contemplaciones. Como señala un observador del proceso, “fue el revés más significativo para la oposición en el primer mandato de Morales” (Eaton 2013, 445).

En marzo de 2007, en Sucre, sede oficial de la AC, surgió una demanda con tintes regionalistas: el Comité Cívico de Chuquisaca (Codeinca) solicitó que la AC tratara el tema del retorno de los poderes Ejecutivo y Legislativo a esa ciudad (después de la guerra federal de 1889 ambos quedaron asentados en la ciudad de La Paz). Ante la negativa de la directiva de la AC por incluir este tema, en agosto y noviembre se organizó una gran cantidad de marchas, cabildos y huelgas de hambre que clausuraron el cónclave, pues grupos de personas movilizadas cercaron los edificios donde se llevaban a cabo las sesiones (Flores 2012).

En este contexto de permanente movilización, represión policial y cerco a las instalaciones de la AC, se decidió continuar con las sesiones en el Liceo Militar, a 5 km de la ciudad de Sucre. Allí la violencia alcanzó su punto más alto: hubo tres muertos y más de un centenar de

heridos, y los asambleístas se vieron obligados a dejar la ciudad. Posteriormente, en diciembre de 2007, en la ciudad de Oruro, se aprobó el nuevo texto constitucional, sin asistencia de los opositores.

A partir de ese momento, la oposición, con ayuda de varias acciones colectivas, empezó a formular su propuesta para la reforma del Estado al elaborar estatutos autonómicos, en concordancia con lo estipulado en el referendo autonómico de 2005, donde el sí ganó en los departamentos del Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Después de que los estatutos fueran aprobados por asambleas departamentales convocadas por las prefecturas, se procedió a recolectar firmas para convocar a consultas. Los referendos autonómicos se realizaron entre mayo y junio de 2008 y favorecieron ampliamente al sí: Beni 79,5 %, Pando 81,96 %, Santa Cruz 85,6 % y Tarija 78,78 % (Burbano de Lara 2014, 355).

Sin embargo, sorprendentemente, el 8 de mayo de 2008 la Cámara de Senadores convocó a un referendo revocatorio para presidente y vicepresidente de la República y prefectos de ocho departamentos, cuyos resultados cambiarían de manera definitiva la correlación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición.

Las razones para que los senadores de la oposición, dominada por Podemos, tomaran la decisión de ir al referendo revocatorio no están claras; aparentemente, se trataba de una estrategia para bloquear el referendo constituyente. También parece que fue una táctica para resguardar el liderazgo opositor de Tuto Quiroga, y reducir el protagonismo de los prefectos de la media luna: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija (Ugla 2009).

En este referendo, Morales logró un 65 % de respaldo (diez puntos porcentuales más que los que consiguió en las elecciones presidenciales de 2005), y ganó en 95 de las 112 provincias del país. A pesar de ello, la oposición organizó una serie de protestas: marchas callejeras, mítines y cabildos; sin embargo, estas acciones, en vez de conseguir el apoyo de la población, generaron desapego, puesto que brindaban verosimilitud a la acusación por parte del gobierno de separatismo y racismo de los líderes autonomistas.

La anulación de liderazgos locales

El 6 de diciembre de 2009 se llevaron a cabo elecciones nacionales. El MAS obtuvo el 64,22 % de respaldo electoral y el dominio en ambas cámaras legislativas. En la tabla 4.2 se evidencia la magnitud de este cambio.

Los resultados también fueron favorables para el partido de gobierno a nivel subnacional. En abril de 2010, en las elecciones para gobernadores, el MAS ganó en seis departamentos: La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, Chuquisaca y Pando. El partido logró recuperar la Gobernación de Chuquisaca, antes en poder de Sabina Cuellar, de la opositora Alianza Interinstitucional, y pudo vencer en Pando, un departamento otrora considerado opositor. Sin embargo, Santa Cruz, Beni y Tarija mantuvieron su afinidad con líderes antagonistas al régimen, ratificando el liderazgo de Rubén Costas, Ernesto Suárez y Mario Cossío, respectivamente.

En las alcaldías de capital de departamento sucedió algo distinto. El MAS solo ganó en las ciudades de Cochabamba y Cobija, y para hacerlo tuvo que recurrir a personajes como Edwin Castellanos (exintegrante del grupo folclórico Los Kjarkas), en Cochabamba, y Ana Lucía Reis, dos veces diputada por el MNR. Adicionalmente, las listas de candidatos se crearon en medio de fuertes discusiones internas con amagos de división.

Tabla 4.2. Elecciones generales de 2009 y composición de la ALP 2010-2015

Agrupación política	Votos	Porcentaje	Composición de la Asamblea	
			Diputados	Senadores
MAS-IPSP	2 943 209	64,22	88	26
PPN-C	1 212 795	26,46	37	10
UD	258 971	5,65	3	
AS	106 027	2,31	2	
Otras agrupaciones	97 733	1,35		
Total votos válidos	4 582 786	94,31		
Total de escaños			130	36

Fuente: Mayorga Ugarte (2011, 56).

Los alcaldes electos de oposición mostraban sólidos liderazgos respaldados por la participación popular, como Luis Revilla en La Paz, Percy Fernández en Santa Cruz de la Sierra y René Joaquino en Potosí. Los comicios revelaron las dificultades del MAS para influir en el electorado cuando el candidato no era Morales y las limitaciones de un discurso nacional que no apelaba a lo local. El MAS prometía buen vivir y Estado plurinacional, mientras algunos líderes municipales ofrecían gestión y eficiencia en la dotación de servicios públicos.

El MAS enfrenta serias dificultades para competir exitosamente en las diferentes arenas subnacionales y los partidos opositores, exitosos en el nivel subnacional; les es muy difícil –si no imposible– adquirir una dimensión nacional, o les es muy difícil mantenerse como partidos nacionales (Zuazo 2016, 15).

Ante este panorama, el MAS, con mayoría de dos tercios de bancas en la ALP y una amplia influencia sobre el Poder Judicial, procedió a anular a los líderes opositores. En 2008, contra la norma, Morales decidió mantener al fiscal general del Estado (afín al MAS), a pesar de que ya había cumplido su periodo de diez años en el cargo. Esto le permitió activar juicios contra Leopoldo López y Branco Marinkovich.

El Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura quedaron acéfalos; en la Asamblea Legislativa se aprobó una “ley corta” que dio potestad al presidente para nombrar autoridades judiciales interinas, sin consultar con el Poder Legislativo. El Congreso aprobó la Ley Marcelo Quiroga de lucha contra la corrupción y se iniciaron juicios en cascada contra todos los líderes de la oposición, como Jorge Quiroga, Rubén Costas, Juan del Granado, Ernesto Suárez, Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y Luis Revilla, que en conjunto enfrentaron al menos 110 demandas penales. Asimismo, bajo acusaciones de corrupción, nepotismo y separatismo, se activaron procesos contra prefectos como Mario Cossío, de Tarija; Ernesto Suárez, de Beni, y Rubén Costas, de Santa Cruz.

En el caso específico de las alcaldías, la ALP, a pocas semanas de conocidos los resultados de la elección municipal de 2010, promulgó la Ley Transitoria de Autonomías en la que, contra toda lógica jurídica

de presunción de inocencia, se estableció que los alcaldes podían ser suspendidos de sus cargos solo con la acusación de la Fiscalía. Jaime Barrón, alcalde electo por la ciudad de Sucre, fue suspendido de su cargo a un mes de su posesión, al igual que René Joaquino, burgomaestre de Potosí, quien fue retirado del cargo después de ser acusado de malversación de fondos.

En suma, desde 2009 inició la toma de los poderes Legislativo y Judicial por parte del MAS. Su dominio en ambas cámaras de la ALP le permitió imponer una serie de medidas que instrumentalizaron al aparato judicial para anular a los líderes regionales. En 2012, la Asociación Boliviana de Ciencia Política hizo pública una encuesta sobre la calidad de la democracia en Bolivia; ante la pregunta sobre la existencia de independencia de los poderes del Estado, un 79,6 % respondió que el Poder Ejecutivo controlaba los poderes Legislativo y Judicial (ABCP 2012, 41).

Este proceso ocurrió paralelamente al del control de instituciones de la sociedad civil. El gobierno compró medios de comunicación tanto televisivos como escritos, entre ellos ATB, PAT, Full TV, el canal Abya Yala y periódicos como *La Razón* y *Extra* (Peñaranda 2014, 14). Al mismo tiempo, potenció el canal de televisión estatal Bolivia TV, que insistentemente cubría las actividades del gobierno, en especial las entregas de obras que hacía el presidente Morales. Según el especialista Raúl Peñaranda, el expresidente aparecía cuando menos diez veces a la semana en transmisiones en directo en el canal estatal (Peñaranda 2014, 56).

La publicidad gubernamental se canalizaba a través de los medios de comunicación que le eran afines o que aceptaban sus directrices; el gobierno podía forzar el despido de un periodista que no fuera de su agrado. Así, fueron alejados de los medios donde trabajaban Amalia Pando y Andrés Gómez, de Erbol; Enrique Salazar, conductor del programa televisivo “Que no me pierda”, y John Arandia, jefe de prensa de la estación de televisión Cadena A.⁸

En conclusión, desde 2006, bajo el discurso de refundación y recuperación de la patria, se construyó un Estado de derecho politizado que amplió su alcance y su poder sobre los sectores estratégicos de la sociedad y buscó regular diversas áreas de la actividad humana, puesto

⁸ *Página Siete*, “Gobierno expulsa a periodistas”, 27 de junio de 2016.

que las leyes se aplicaban con la interferencia del Poder Ejecutivo (Conagham 2015).

Sin embargo, este poder no fue suficiente para dominar a los grupos de poder ligados a las mineras cooperativista y privada asentados en buena parte en el departamento de Potosí.

La debilidad del Estado frente a los empresarios mineros potosinos

Cuando el MAS tomó el poder, los precios de los minerales estaban al alza. En el primer semestre de 2006 se logró un superávit de USD 498 millones de dólares en la balanza comercial, cifra mayor en 172 % respecto a lo logrado en 2005 durante ese mismo periodo (UDAPE 2006, 13).

Los beneficiados de este repunte de la minería fueron los cooperativistas mineros y medianos asociados a capitales extranjeros. Los primeros habían crecido hasta llegar a conformar 510 cooperativas en todo el país, absorbiendo un 96,7 % del empleo del sector con 60 000 afiliados (Michard 2008, 8). Por su parte, los mineros medianos (empresas asociadas a capitales extranjeros que producen más de 500 toneladas por día) prosperaron hasta llegar a dominar el rubro con un 57 % del total de la producción, aunque empleando solo el 1,44 % de la población económicamente activa.⁹

En un contexto de buenos precios y grandes inversiones, la llegada al poder de Evo Morales generó incertidumbre en los empresarios mineros. El discurso estatizante y nacionalizador del exmandatario les preocupaba porque implicaba la posibilidad de que sus inversiones pasaran a dominio del Estado y, en el caso de los cooperativistas, que se reactivara la Comibol, lo que pondría en riesgo sus concesiones mineras. Sin embargo, estos temores eran infundados porque el gobierno del MAS siempre terminó cediendo a las exigencias de los mineros.

En enero de 2006 Esteban Martínez, de Fencomin, afirmó, en señal de amenaza, que al gobierno no le convenía provocar a los cooperativistas mineros porque ellos se verían obligados a responder a los atentados a su sector.

⁹ Los mineros medianos explotan yacimientos de oro, plata, zinc, plomo y estaño, principalmente.

Paralelamente, se conoció el surgimiento de un pacto de unidad para la defensa del sector productivo potosino entre la Fedecomín, la Cademin y la Federación de Empresarios Privados de Potosí (FEPP).

En marzo de 2006, parlamentarios del MAS presentaron una ley que modificaba los impuestos a la minería. Ante esto, el presidente de la Fedecomín, Filomeno Kacka, señaló que “en caso de que Evo incrementa las regalías se tendrá que enfrentar a 60 000 mineros que saldrán a las calles a hacer retroceder esta medida”.¹⁰

Luego de amenazas de conflicto, el presidente Morales, además de comprometerse a no modificar los impuestos, asignó recursos económicos a las cooperativas mineras, con la finalidad, según el gobierno, de fomentar la producción y garantizar el desarrollo de este sector. El propio Morales señaló que la Fencomín era un aliado principal del gobierno y su ministro de Minería aseguró que no se nacionalizaría la empresa minera San Cristóbal, que operaba con capitales transnacionales.¹¹

El 1 de mayo de 2006 Morales firmó el decreto de nacionalización de los hidrocarburos y anunció la recuperación de las empresas mineras para el Estado, lo que hacía suponer que pasaría algo parecido con la minería. Sin embargo, pocos días después, el gobierno aseguró que entre sus planes no estaba nacionalizar los megaproyectos mineros de Apex Silver y Coeur D’Arlene, esta última a cargo del proyecto San Bartolomé que explota los residuos minerales acumulados alrededor del cerro Rico de Potosí. El ministro de planificación y desarrollo, Carlos Villegas, indicó que “en ningún momento el gobierno señaló que entrará en un proceso de nacionalización de estas compañías”.¹²

Unos meses más tarde, surgió un conflicto en el que los cooperativistas pidieron que no se incrementara el Impuesto Complementario a la Minería (ICM); además, demandaron que el gobierno anulara la devolución de los aportes a la vivienda y detuviera el juicio que les seguía la Caja Nacional de Salud (CNS) por incumplimiento de obligaciones.

Los cooperativistas bloquearon el camino entre La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí, y tomaron como rehenes a funcionarios de la CNS.

¹⁰ *El Potosí*, “Cooperativistas lucharán para mantener regalías”, 16 de abril de 2006.

¹¹ *El Potosí*, “El gobierno aclara que San Cristóbal no se nacionaliza”, 26 de abril de 2006.

¹² *El Potosí*, “Proyectos mineros no serán nacionalizados”, 5 de mayo de 2006.

Al final, estas movilizaciones persuadieron al gobierno, que aceptó congelar el alza del ICM y retirar los juicios por deudas a la CNS. Sorpresivamente, al culminar el conflicto, el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, ratificó “el pleno compromiso y reconocimiento con el trabajo y la lucha de los cooperativistas mineros, por su aporte económico, ideológico y organizativo en defensa de la patria y los sectores sociales excluidos”.¹³

Empero, cuando todo parecía indicar que se avecinaban días de tranquilidad, puesto que los cooperativistas habían conseguido todo lo que demandaban, los primeros días de octubre estalló un enfrentamiento entre ellos y los trabajadores de la Comibol en la población de Huanuni, ubicada en el departamento de Oruro, con un saldo de 16 muertos y 61 heridos. Ambos bandos atacaron a dinamitazos mientras se disputaban el yacimiento Posokoni, uno de los más ricos en estaño, cuyas reservas estaban valuadas en USD 583 millones. Debido a esta tragedia, Evo Morales destituyó a Walter Villarroel como ministro de Minería y nombró a Guillermo Dalence, un exdirigente sindical de la Comibol. En otras palabras, el gobierno se alejó de los empresarios cooperativistas para acercarse a los mineros sindicalizados.

Ante esto, los cooperativistas rompieron su alianza con el gobierno y anunciaron el repliegue de “sus” cinco diputados, tres asambleístas y un embajador, además de amenazar con alejar a Morales del poder. El presidente de los cooperativistas potosinos, Filomeno Kacka, señalaba, “gracias al sistema cooperativista a nivel nacional, el Evo y el Álvaro están gobernando el país; sin embargo, de continuar esta clase de versiones, como nosotros les hemos subido al poder también tendremos que bajarles del gobierno”.¹⁴

A pesar de la amenaza, el gobierno intentó realizar cambios en el régimen impositivo y nacionalizar algunas empresas mineras. El presidente Morales anunció un plan para la minería en octubre de 2006, que, según se dio a conocer de manera extraoficial, implicaba nacionalizar la empresa Sinchi Wayra, de propiedad de Glencore Internacional. Alarmadas, las personas amenazaron con defender sus lugares de trabajo,

¹³ *El Potosí*, “Trabajadores mineros levantan el bloqueo”, 22 de septiembre de 2006.

¹⁴ *El Potosí*, “Cooperativistas se oponen a refundación de Comibol”, 12 de octubre de 2006.

incluso con las armas. Cuando la fecha indicada en el anuncio presidencial llegó, y luego de varias marchas multitudinarias de los cooperativistas, amenazas de huelga y bloqueos, Morales indicó que suspendía sus planes de nacionalización, con el argumento de que no había recursos económicos para hacerlo. El expresidente señaló, “este año queremos consolidar la nacionalización de los hidrocarburos; tenemos todo un paquete para la minería, pero no queremos cruzarnos”.¹⁵ Así, nuevamente el gobierno reconocía implícitamente que, a pesar de su discurso nacionalizador y de retorno del Estado, no planeaba intervenir en la minería.

A finales de 2006, el gobierno nuevamente retomó la iniciativa en el tema de los tributos mineros: el ministro Dalence anunció un alza de los impuestos para 2007 señalando que los productores deberían pagarlos en proporción a sus ganancias. El ministro proyectaba que en ese año en la actividad minera se generarían alrededor de USD 1000 millones, de los cuales, si se quitaba un 40 % como costos de operación, quedarían USD 600 millones, de los cuales el Estado solo recibiría USD 44 millones, un monto muy bajo en relación con las ganancias.

Sin embargo, el gobierno retrocedió nuevamente. La alianza entre los mineros pequeños, medianos y cooperativistas rechazó el alza de impuestos bajo el argumento de que “un aumento en la tasa impositiva minera obligaría a que varios centros dejen de operar de manera definitiva y que muchos inversionistas extranjeros prefieran ya no venir a Bolivia”.¹⁶

Al final, el gobierno aceptó dejar sin efecto el alza del ICM y anunció que se respetarían los contratos de arrendamiento de áreas de trabajo minero y que se daría paso a los trámites que se encuentran en curso. De esta manera, los mineros no solo lograron mantener sus privilegios en materia tributaria, sino que se libraron de la incertidumbre de que sus concesiones mineras (una suerte de alquiler de vetas que hace el Estado a los empresarios) quedaran sin efecto.¹⁷ Todo esto a pesar de las denuncias de la COD, cuya dirigencia afirmaba que muchas minas estaban en propiedad de particulares que no las hacían producir y pagaban precios ínfimos por

¹⁵ *El Potosí*, “La nacionalización minera se posterga indefinidamente”, 1 de noviembre de 2006.

¹⁶ *El Potosí*, “Mineros se unen para evitar el alza del ICM”, 1 de febrero de 2007.

¹⁷ *El Potosí*, “Los mineros logran que el gobierno retroceda”, 6 de febrero de 2007.

ellas: la empresa San Cristóbal tenía en su poder un total de 132 390 ha y apenas pagaba cinco bolivianos (un poco más de USD 0,50) por cada ha.

Quedaba un tema pendiente: la nacionalización de las corporaciones extranjeras que, a través de empresas medianas, operaban en Bolivia. En febrero, el gobierno decidió nacionalizar la metalúrgica de Vinto, de propiedad de la transnacional Glencore, y anunció hacer lo mismo con Sinchi Wayra, que arrendaba la mina Porco en Potosí.¹⁸

Ante este hecho, en el departamento de Potosí, los mineros de las empresas extranjeras que trabajaban en localidades como Porco, Aroifilla, Don Diego y San Lorenzo resolvieron dotarse de armas de fuego y declarar estado de emergencia y vigilia permanente en sus lugares de trabajo. Los de Porco, que se sentían más susceptibles a que su mina fuera nacionalizada por el hecho de pertenecer a Sánchez de Lozada, anunciaron que usarían explosivos.¹⁹ Sin embargo, el gobierno nunca tomó acción alguna contra esta empresa.

Como se puede ver, durante los primeros meses del gobierno se intentó controlar el espacio territorial y político minero. En todos los casos, Morales se encontró con actores que desafiaron el poder estatal y que lo obligaron a retroceder y pactar. Se enfrentó a los cooperativistas mineros, quienes, ya sea a través de acuerdos con el gobierno o por medio de presión directa, lograron impedir que el Estado hiciera cumplir la ley. Como vimos en el anterior capítulo, esto es una paradoja, pues Potosí cuenta con actores fuertes, pero sin ninguna conexión con sus objetivos de desarrollo.

Potosí antes de la llegada del MAS al poder

Los datos del censo de población y vivienda realizado en 2001 revelaron que Potosí era el departamento más golpeado por la crisis económica. La tasa de crecimiento de la población entre los censos de 1992 y 2001 era de apenas 1,1 %; la pobreza llegaba al 79,7 % del total de habitantes y un 70% de su población tenía insuficiencia educativa.

¹⁸ *El Potosí*, “Evo Morales nacionalizará Sinchi Wayra”, 10 de febrero de 2007.

¹⁹ *El Potosí*, “Mineros se arman para evitar la nacionalización”, 14 de febrero de 2007.

En el plano económico también se revelaban cifras dramáticas: la contribución del departamento al PIB apenas llegaba al 5 % y el PIB per cápita de Potosí era de USD 489, inferior al promedio nacional de USD 1002 (INE 2012). Estaba claro que, para el caso potosino, el periodo neoliberal no había logrado solucionar los problemas de marginación, desempleo y pobreza, solo los había agravado.

Desde la aparición del MAS, Potosí fue uno de sus bastiones electorales. Para las elecciones presidenciales de 2002, el MAS obtuvo un 27,02 % del electorado potosino y venció a ADN, MNR y MIR. En la tabla 4.3 se comparan los resultados de las elecciones presidenciales de 1997 con las de 2002.

Este respaldo a Evo Morales sorprendió a todos, incluso al propio MAS, que gracias a su primer lugar en la votación departamental consiguió dos curules en la Cámara de Senadores a pesar de que, curiosamente, había inscrito solo a un postulante ante la Corte Nacional Electoral. De seguro, ni sus cálculos electorales más optimistas habían presagiado un triunfo en el departamento.

Tabla 4.3. Votación en las elecciones nacionales en el departamento de Potosí, 1997 y 2002 (en porcentaje)

Partido	1997	2002
ADN	19,39	2,76
Condepa	12,13	1,14
MAS		27,02
MCC		0,84
MIP		1,14
MIR	21,86	17,85
MNR	18,53	24,32
NFR		14,52
UCS	14,53	6,95

Fuente: OEP (2021).

Una publicidad aparecida en un periódico del Archivo de la Casa de la Moneda presentaba a Sandalio Sánchez, candidato a diputado del MAS con el siguiente mensaje: “Nosotros representamos a la nueva generación de campesinos, de esos trabajadores que están marginados, de esa gente que nunca tuvo la posibilidad de contar con sus verdaderos representantes en el parlamento y, por lo tanto, no podían decidir su futuro”.

Las propuestas del MAS se centraban en temas como desocupación, lucha contra el hambre y la miseria, defensa de las aguas del Silala y el salar de Uyuni, apoyo al turismo y a la hotelería, recuperación para el Estado de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).

Este nuevo esquema político fue una oportunidad para miembros del PCB, del Movimiento Bolivia Libre (MBL), de Izquierda Unida (IU) y del Partido Socialista (PS), cuyos miembros, entusiastas, se sumaron a la propuesta de nacionalización de los recursos naturales y la AC del MAS.²⁰

Para estos actores, la crisis del sistema de partidos y la emergencia del MAS eran las señales que estaban esperando para atacar más frontalmente al neoliberalismo y cambiar la configuración política en el departamento a su favor.

Como vimos, durante los años previos, estos actores libraron sendas batallas para detener el proceso de privatización de las empresas mineras de la Comibol, poner en funcionamiento la planta de fundición de Karachipampa e impedir el ingreso de capitales extranjeros a la región. Por tanto, no les fue difícil insertarse en el proyecto del MAS con cuyo discurso se identificaban ideológicamente. Para ellos, el nuevo panorama político ofrecía una oportunidad para cambiar la correlación de fuerzas en el departamento, que durante algunos años fue favorable a los partidos de derecha.

Comcipo, con una directiva en la que se destacaban los militantes de izquierda, se sumó al ciclo de protestas que promovía el MAS. En enero de 2003, la dirigencia convocó a una movilización que llegó a reunir

²⁰ Gisela Derpic Salazar (exprefecta del departamento), en conversación con el autor, julio de 2016.

más de 7000 personas, cuya demanda principal era terminar la represión a rentistas y coccaleros. En la parte final de ese acto, René Navarro, presidente de la entidad cívica (exdirigente del PCB y, posteriormente, constituyente del MAS en 2006), señaló que el Estado boliviano debía anteponer los sagrados intereses de la patria y de los bolivianos a los de los extranjeros o foráneos, y preservar la soberanía de la hoja sagrada de coca.

A la vez, campesinos del norte de Potosí (una de las zonas más pobres del departamento) llevaron a cabo acciones como tomar la Prefectura para exigir una solución ante la sequía, y realizar una AC que, afirmaban, daría fin al Estado colonial y a la exclusión de los indios de la sociedad y del Estado bolivianos.²¹

En consonancia con el MAS, Comcipo rechazó el pedido de autonomías departamentales que tenían el respaldo de los movimientos cívicos del oriente, y acusaron a sus pares de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija de separatismo y de estar manipulados por oligarquías terratenientes. Para Comcipo y para los cívicos de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca, el asunto de las autonomías debía ser tratado en una AC y no en un referéndum autonómico. En enero de 2005, los comités cívicos afines al MAS se reunieron en La Paz para convocar a los bolivianos a la unidad, decían, frente a los intereses oligárquicos que buscaban dividir el país, y propusieron que las autonomías se decidieran en una futura constituyente.²²

Únicamente voces como la de Carlos Wille, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Potosí, se expresaron contra esta postura. Al culminar una marcha en defensa del Estado de derecho organizado por los empresarios privados, Wille señaló, “la autonomía es una gran oportunidad para Potosí, lamentablemente la dirigencia cívica y sindical y la propia mentalidad del pueblo potosino está basada dentro de la concepción estatista y donde la actividad privada no es incentivada”.²³

Eran manifestaciones aisladas y solitarias de una organización sin influencia en Comcipo, de la cual estaba alejada desde 1982, año en el que, decían, un grupo sindical y de izquierda asumió su dirección.

²¹ *El Potosí*, “Los ayllus guerreros ocupan la prefectura”, 7 de febrero de 2003.

²² *El Potosí*, “Movimiento cívico exige concretar la Constituyente”, 25 de enero de 2005.

²³ *El Potosí*, “Autonomía es una gran oportunidad para Potosí”, 16 de febrero de 2005.

En este periodo, como en el pasado, las fuerzas de izquierda a cargo de Comcipo se sirvieron de la retórica cívica para defender posturas políticas y reivindicaciones afines a sus propios intereses políticos, en este caso los mismos del MAS.

La actitud hostil hacia el gobierno no cambió con la renuncia del presidente Sánchez de Lozada y la asunción de Carlos Mesa en octubre de 2003. Luego de un breve lapso de paz social, las organizaciones sindicales, cívicas y campesinas volvieron a tomar medidas de hostigamiento, esta vez contra la gestión de la prefecta Gisela Derpic.

Comcipo apoyó la intervención física de la Prefectura, de las oficinas de Telecomunicaciones y de la Contraloría, generando un ambiente de tensión social cuyo fin era incitar la renuncia del presidente Mesa. Cualquier motivo era razón para generar conflicto. La exprefecta Derpic (2011, 81) narra uno de estos momentos:

Poco después se suscitó un nuevo conflicto en que el Comité Cívico Potosinista, conformado por una interesante coalición de militantes del viejo Partido Comunista de Bolivia, que hasta ahora agoniza en Potosí (la mayor parte de sus militantes ya estaba alineándose detrás del MAS y del MNR), cuestionó mi permanencia en el cargo. El argumento esgrimido en esta oportunidad era genial: baja ejecución presupuestaria. Los dirigentes solicitaron audiencia en mi despacho con cualquier pretexto y, una vez allí, ocuparon la antesala como medida de presión, negándose a hablar conmigo y exigiendo presencia de ministros de Estado para resolver la situación.

Es este contexto, los cooperativistas actuaron sin ningún tipo de control, incluso en temas tan graves como la contaminación. Como señala Derpic:

En una ocasión, cuando desde el gobierno se emitió un decreto que paralizaba las actividades en el cerro Rico por la contaminación que generaban, vino una movilización de tal magnitud que tuve que pedirle al gobierno que mande dos ministros y se llegó a un acuerdo. A esas alturas yo ya estaba convencida de que una de las notas del Estado boliviano es su extrema debilidad.²⁴

²⁴ Gisela Derpic Salazar (exprefecta del departamento de Potosí), en conversación con el autor, julio de 2016.

Carlos Mesa, que estaba enemistado con el liderazgo cruceño y carecía de respaldo parlamentario, optó por renunciar en junio de 2005 y fue sustituido por Eduardo Rodríguez en la Presidencia.

El MAS, junto a una amplia coalición de movimientos sociales urbanos y campesinos –entre los que estaba Comcipo–, había logrado sus propósitos de obligar a que dos presidentes elegidos de manera constitucional renunciaran y viabilizar la candidatura de Morales.

Potosí y la reconfiguración política nacional

Las elecciones de diciembre de 2005 ratificaron, con creces, el apoyo de la población potosina al partido de Morales. El MAS logró ganar en el departamento con 57,8 % de los votos, seguido de Podemos, con 25,7 %. En virtud de ese resultado, el partido obtuvo dos senadores de tres posibles y diez diputados de 12 en juego.

Sin embargo, el MAS no tenía una propuesta concreta en relación con el uso de los recursos mineros para el desarrollo potosino. Su agenda se concentraba en la lucha contra la corrupción y la nacionalización de los hidrocarburos, pero no tenía nada claro en lo que respecta al tema minero. Esto se debe a que una buena parte del apoyo político del MAS provenía de actores mineros privados a quienes les convenía el *statu quo*.

El triunfo del partido también implicó la emergencia de nuevos actores como los campesinos aglutinados en torno a la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de Potosí (FUTCP) y los mineros cooperativistas agrupados en Fedecomín. La composición de la bancada parlamentaria del MAS por Potosí muestra claramente este nuevo esquema de actores.

La Federación de Campesinos (FUCP) llegó a tener ocho diputados y los cooperativistas consiguieron tres. La base de apoyo político al MAS estaba anclada en grupos corporativos y sindicales (tabla 4.4).

Según Santos Ramírez (en ese momento, uno de los máximos dirigentes del MAS en Potosí), las cooperativas fueron la primera alianza que el partido estableció con sectores ajenos a los sindicatos campesinos.

Nuestra primera alianza fue con la Federación de Cooperativas Mineras a nivel nacional; estaba, en ese entonces, en la Confederación de Cooperativistas Mineros de Bolivia, el compañero Villarroel. Ese fue un trabajo

grande porque había disenso en el interior de las cooperativas; unos decían que estaban de acuerdo y otros decían “que sea libre, que cada quien vaya con cualquiera”. Sin embargo, firmamos un documento y ahí discutimos si el documento iba a ser una alianza, si se iba a inscribir a la Corte, de acuerdo a la ley y además a la decisión política (Zuazo 2009, 334).

Tabla 4.4. Filiación de los diputados electos del MAS en el departamento de Potosí, 2006-2009

Nombre	Organización
Severino Limachi	Cooperativas mineras
Hilarión Bustos	Cooperativas mineras
Gervacio Condori	Federación de Campesinos
Severo Pacaja	Federación de Campesinos
Froilán Condori	Federación de Campesinos
Ximena Flores	Pequeña y mediana empresa
Modesto Fernández	Federación de Campesinos
Emeliana Aiza	Federación de Campesinos
Silvestre Ojeda	Federación de Campesinos
Virgilio Matías	Federación de Campesinos
Fulgencio Mamani	Radialista ciudad de Potosí
Cesar Navarro	Cooperativas mineras
Teodora Ali	Federación de Campesinos
Santos Ramírez (senador)	Federación de Maestros

Fuente: Zuazo (2009).

El apoyo de los cooperativistas dotó al MAS del respaldo de una organización con alta capacidad de presión política en las calles y caminos. En junio de 2005, ante la renuncia de Carlos Mesa, miles de cooperativistas mineros se trasladaron a la ciudad de Sucre, para crear un clima de hostigamiento sobre el Parlamento para que ni Hormando Vaca Díez, entonces presidente de la Cámara de Senadores, ni Mario Cossío, presidente de Diputados, recibieran la Presidencia de la República y se vieran

obligados, por sucesión constitucional, a dejarlos en manos del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez. Luego de intensas movilizaciones, en las que falleció un trabajador cooperativista, se logró este objetivo.

Comcipo en el gobierno del MAS (2006-2015)

Desde que Evo Morales llegó al poder en enero de 2006, el gobierno tuvo una relación cercana con Comcipo –entidad sobre la que reforzó su control– y la COD. A fines de mayo, el Frente “Anticorrupción” ganó las elecciones para la directiva del ente cívico. Esta estaba compuesta por Alejandro Gutiérrez (presidente), representante de la COD; Humberto Morales (vicepresidente), de la Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve); Bladimir Díaz, del Barrio Satélite; Juan Carlos Colque, de la Federación de la Prensa, y Epifanio Filanco, de la Federación de Campesinos.

La propuesta de la nueva dirigencia estaba centrada en defender las riquezas del salar de Uyuni y de las aguas del río Silala (por el cual Bolivia mantiene un litigio con Chile). También interesaba elaborar un nuevo Código de Minería, elevar los impuestos al trabajo minero y controlar el daño ambiental provocado por los ingenios mineros. Comcipo, ahora dirigida por un extrabajador de la Comibol, sirvió como herramienta para atacar los intereses de los cooperativistas mineros.

Esto implicó un fuerte desgaste para la entidad. En septiembre de 2006 varias instituciones acusaron a su presidente, Alejandro Gutiérrez, de estar ligado al gobierno y no defender los genuinos intereses del departamento de Potosí. Representantes de Fedecomín, los trabajadores gremiales, la Cámara de Minería, la Federación de Empresarios Privados y la cámara hotelera indicaron que desconocían al actual directorio de Comcipo y, al mismo tiempo, exigieron su renuncia inmediata, “por la actitud traidora a los intereses del departamento y por intentar destruir la unidad cívica de Potosí”.²⁵

La cercanía de Comcipo y el nuevo gobierno era evidente. El 1 de octubre, el presidente Morales visitó la sede del ente cívico, escuchó sus principales demandas y se comprometió a continuar realizando cambios.

²⁵ *El Potosí*, “Ocho organizaciones más se repliegan del Comité Cívico”, 30 de septiembre de 2006.

En esa oportunidad los cívicos aprovecharon para hacer conocer sus añejas peticiones como la construcción de un aeropuerto internacional y más caminos.

Otras demandas presentadas a Morales claramente afectaban los intereses cooperativistas: creación de una ley especial para preservar el cerro Rico; redacción de un nuevo Código de Minería; refundación de la Comibol; reversión a dominio estatal de las concesiones mineras del sudoeste potosino; reversión de los contratos de arrendamiento de la exempresa Comsur y disposición para que el 50 % de los recursos que aportaban las cooperativas mineras por arrendamiento fueran destinadas a obras de desarrollo departamental.²⁶

Una de las peticiones más controversiales se relacionaba con la prohibición del trabajo minero en la punta del cerro Rico, lo que activó todas las alarmas de los cooperativistas, quienes de inmediato se declararon en emergencia y demandaron que se ignorara esa solicitud.

En la realidad, los cambios en el sector minero y el objetivo de estatizarlo se concretaron incluso menos que durante el neoliberalismo. El gobierno del MAS, autodefinido como antimperialista y nacionalista, no solo no controlaba la minería, sino que promovía la inversión extranjera. En noviembre de 2006, la Prefectura recibió la visita de Phillip Goldberg, embajador de los Estados Unidos, quien declaró que las inversiones de su país en Potosí superaban los USD 1000 millones. En esa ocasión, Santos Ramírez, presidente del Senado, aseguró a Goldberg que los megaproyectos mineros no serían afectados por la política gubernamental, puesto que “desde hace diez meses estamos viviendo un periodo especial; sin embargo, este proceso no puede ir separado de la inversión privada”.²⁷

Ante estos hechos, la dirigencia de Comcipo apenas emitió unas tibias declaraciones y el gobierno no tuvo mayor problema en fomentar el ingreso de capitales externos para las minas potosinas, un tema central para los cívicos. Es más, los representantes de la entidad –distráidos en un conflicto docente-estudiantil suscitado en la Universidad Tomás Frías–, solo convocaban a movilizaciones para respaldar al gobierno.

²⁶ *El Potosí*, “Pliego departamental”, 1 de octubre de 2006.

²⁷ *El Potosí*, “Estados Unidos es el mayor inversor en minería boliviana”, 7 de noviembre de 2006.

Demandas como el camino asfaltado entre Potosí y Uyuni, la construcción de un hospital de tercer nivel, un aeropuerto y una fábrica de cemento fueron permanentemente postergadas.

Como para ratificar su cercanía con el gobierno, a mediados de diciembre, la dirigencia de Comcipo llamó a un cabildo por la “unidad nacional”, como respuesta a los organizados en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando en defensa de su demanda de autonomía. Señalaban,

con la autoridad que nos otorga el haber sido el germen de la nacionalidad y el fundamento económico central del país, se llama a los comités cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando a no dejarse utilizar por la oligarquía que busca mantener sus privilegios logrados en los gobiernos neoliberales.²⁸

De esta forma se colocaban explícitamente en línea con el MAS y en oposición a las autonomías departamentales.

Esta posición no era compartida por todos los actores regionales. De hecho, en las últimas horas del día del cabildo los empresarios se manifestaron en respaldo a la propuesta autonómica. Durante la vigilia, Carlos Wille, presidente de la Federación de Empresarios Privados y dueño de la Cervecería Nacional Potosí, manifestó que era “el inicio de una lucha por el respeto a las leyes y la defensa de los principios fundamentales de la democracia”.²⁹ Paralelamente, una sensación de abandono se empezaba a instalar. El sentimiento de que Potosí no recibía nada a cambio de sus riquezas volvía a aparecer en la población.

La directiva de Comcipo, con Gutiérrez a la cabeza, nunca llamó a una huelga cívica y aceptó la postergación a las peticiones. A pesar de su proclamada defensa del cerro Rico, su apoyo al incremento de impuestos a la minería y su respaldo a las múltiples demandas de mejores condiciones de vida para el departamento, esto nunca se tradujo en acciones colectivas de protesta.

²⁸ *El Potosí*, “Comcipo y la COD llaman a un cabildo por la unidad”, 13 de enero de 2006.

²⁹ *El Potosí*, “Los dos polos del conflicto también se manifiestan en la Villa Imperial”, 16 de diciembre de 2006.

En abril de 2008, Gutiérrez terminó su gestión en medio de fuertes críticas por su postura afín al MAS. Dejaba pendientes varias demandas como el traslado de la sede de la Comibol, la transferencia del río Yura, la recuperación de las aguas del Silala –que fluían a territorio chileno sin que se pagara por ello–, el pavimentado de la ruta Tarija-Potosí, la consolidación de la fábrica de cemento, la recuperación de los recursos del salar de Uyuni y una postura definida respecto de las autonomías.

Los indicadores económicos no podían ser peores. La diversificación prometida por Morales estaba lejos. Para 2010, el 41,3 % del producto departamental estaba concentrado en la minería, a mucha distancia del 4,3 % de participación de las industrias manufactureras y del 1,9 % de la actividad turística (Ferruffino, Eróstegui y Gavincha 2011, 44). Las cifras reflejaban la absoluta desarticulación de la minería con los demás sectores, ya que es una actividad de enclave. La industria manufacturera representaba solo el 3 % de todo el país, además de que producía casi exclusivamente para el mercado potosino. En 2009, Potosí solo había recibido el 6,4 % de la inversión pública para salud y seguridad social del total nacional y el 5,5 % para saneamiento básico (60).

La reconfiguración política en Potosí

En la ciudad de Potosí se presentaban cambios políticos que ponían en riesgo el dominio del MAS. Emergió Alianza Social (AS), liderada por el alcalde René Joaquino Cabrera, partido que tuvo un buen desempeño en las elecciones constituyentes de 2006, en las que obtuvo cinco asambleístas, frente a 16 del MAS, dos del Movimiento Originario Popular (MOP) y uno de Podemos.

En el cónclave constituyente, AS se opuso al MAS. Apoyó la demanda de que los artículos de la nueva Carta Magna fueran aprobados por dos tercios de votos. Respaldó al comité cívico de Chuquisaca en su demanda de retornar los poderes Ejecutivo y Legislativo a Sucre, lo que derivó en la paralización de la AC (Flores 2012).

Más adelante, para las elecciones presidenciales de 2009, AS logró el 13,4 % de los votos en el departamento, con un fuerte respaldo en la ciudad de Potosí, donde obtuvo 33 186 votos, frente a 62 318 del MAS.

Pocos meses después se realizaron las elecciones municipales. Los resultados fueron ampliamente favorables para AS, que ganó con el 51,97 %, frente al MAS, que consiguió un 33,63 %. A pesar de los recursos desplegados en la campaña electoral y el apoyo del aparato gubernamental a favor de César Navarro, candidato oficialista, las urnas favorecieron a AS: René Joaquino había conservado su espacio político con pocos recursos propagandísticos pero con el aval de su gestión como alcalde.

El MAS y su candidato, César Navarro, presentaron una lista de concejales compuesta por cooperativistas, micro y pequeños empresarios, dirigentes del magisterio y el transporte. Su propuesta central era implementar un gabinete social de consulta, coordinación y definición de las políticas municipales. Por su parte, AS utilizaba sus obras como garantía de su futura gestión: el pavimento rígido en zonas marginales, la nueva terminal de buses, la refacción de la catedral, el parque Tinkuy, el Teatro Potosino, el centro de salud Pailaviri, el césped sintético de la cancha Santa Bárbara, la iluminación de la mayoría de los distritos, la construcción y refacción de varios colegios. Joaquino proponía construir un segundo anillo de circunvalación, implementar un plan estratégico para seguridad ciudadana, edificar mercados modelos y mejorar el centro histórico de la ciudad para potenciar el turismo.

A pesar de que se presagiaba una gestión edil libre de turbulencias, pocos meses después de que Joaquino fue posesionado, la Fiscalía Departamental inició un juicio en su contra por la compra de autos usados en 2005. El monto ascendía a los 800 000 bolivianos.

El juicio se desarrolló en medio de un denso ambiente de tensión y polémica. Mientras transcurría, los seguidores de Joaquino realizaban numerosas marchas y vigiliadas en el frontis del Poder Judicial demandando que se respetara “el voto del pueblo”. Los voceros del MAS y los propios jueces señalaban que solo se aplicaba la ley para sancionar las irregularidades de quienes habían adquirido autos usados. En un momento del proceso, los jueces denunciaron acoso psicológico por parte de los seguidores de Joaquino, ya que habían colocado una serie de objetos propios de la brujería andina.³⁰

³⁰ *Correo del Sur*, “El juicio a René Joaquino inicia en medio de acusaciones e insultos”, 13 de julio de 2010. <https://bit.ly/35TIGoR>

Finalmente, conforme a la nueva Ley de Gobiernos Municipales, cuyo artículo 48 indicaba que los alcaldes podían ser suspendidos a solicitud de la Fiscalía, el conflicto pasó al Concejo Municipal para que procediera a la suspensión bajo conminación de proceso en caso de incumplimiento.

Sin embargo, el Concejo no pudo reunirse: una multitud aglomerada en la puerta del salón de deliberaciones impidió el ingreso de los legisladores municipales. Una seguidora de Joaquino señalaba, “hemos tomado la Alcaldía. No nos vamos a mover de aquí, vamos a estar hasta las últimas consecuencias. Si nos quieren sacar, nos van a sacar muertos de aquí. Queremos respeto a nuestro voto. Eso es lo que queremos” (CIAC 2010). En agosto de 2010, Joaquino fue suspendido de sus funciones; así llegó a su fin uno de los liderazgos regionales más sólidos de las últimas décadas en el departamento. La falta de conocimiento de los procesos administrativos y la utilización de la justicia con fines políticos derrumbaron a René Joaquino Cabrera. El municipio entró en una etapa de ingobernabilidad, corrupción e ineficiencia.

El profundo cambio en la dirección de Comcipo y las huelgas de 2010 y 2015

Las elecciones para renovar el directorio de Comcipo estuvieron precedidas por fuertes críticas a la gestión de Gutiérrez. Un representante de la Federación de Juntas Vecinales (Feduve) afirmaba,

El enemigo no es Comcipo, sino ese famoso Locoto (apodo de Gutiérrez) porque no ha hecho nada por Potosí, y lo que deberíamos buscar es sacarlo de ahí porque lo único que hace es dañar nuestra región [...]; nunca nos ha dado satisfacciones de progreso desde Comcipo y eso sí es repudiable.³¹

A lo largo de su gestión, Gutiérrez nunca llevó a cabo una sola medida de presión, a pesar de tener sobradas razones para hacerlo. Su gestión se concentró en tratar de afectar los intereses de los cooperativistas y

³¹ *El Potosí*, “Surgen críticas de la ciudadanía a dirigencia cívica”, 28 de junio de 2008.

se distrajo con el conflicto suscitado en la Universidad Tomás Frías a raíz del incremento de salarios de los docentes, dejando en el olvido los asuntos regionales.

El 22 de agosto de 2008 se llevaron a cabo las elecciones para la directiva de Comcipo, donde resultó ganador, con 94 votos de 169 posibles, un frente auspiciado por los sectores sindicales y el MAS. Enrique Leytón, de la COD, fue elegido nuevo presidente en medio del profundo malestar de varias juntas vecinales que no pudieron votar a pesar de que habían solicitado su afiliación a la institución cívica.

La nueva directiva siguió los pasos de la anterior: ratificó las conocidas demandas de nacionalización de la minería, el incremento de impuestos a la actividad y la prohibición de la explotación del cerro en ciertas áreas, pero sin asumir medidas de presión que de verdad obligaran al gobierno a atenderlas y no solo a postergarlas, como era lo usual. Incluso algunos miembros de la directiva de Comcipo publicaron una carta en la que hacían conocer su apoyo al MAS y a Evo Morales.³²

Sin embargo, la noche del 14 de abril de 2009 la luna de miel entre el gobierno y Comcipo llegó a su fin. Un consejo consultivo decidió suspender a Enrique Leytón, su presidente, por considerarlo afín al MAS (él había conseguido un cargo en un proyecto de la Comibol) y sustituirlo por Celestino Condori Mamani, por entonces vocal de la entidad cívica.³³

Condori había alcanzado notoriedad por su participación como dirigente estudiantil en un largo conflicto en la Universidad Tomás Frías en torno a un incremento de los salarios de los docentes. En un momento de la disputa, amenazó con inmolarse con dinamita en la plaza de Potosí, motivo por el cual fue conocido como "Pikachuri", en alusión al minero que perdió la vida en las inmediaciones del Parlamento en La Paz, precisamente por explotar una carga de dinamita que llevaba pegada al cuerpo. Condori estudió Administración de Empresas y provenía de los estratos populares de la ciudad.

El cambio de actitud hacia el gobierno por parte de los miembros de Comcipo fue inmediato. El 18 de abril de 2009 un consejo consultivo

³² *El Potosí*, "La crisis azota a la entidad cívica", 20 de junio de 2010.

³³ *El Potosí*, "Organizaciones suspenden al presidente de Comcipo", 15 de abril de 2009.

de la entidad cívica decretó un paro de 48 horas con bloqueo de calles y caminos por la recuperación de las aguas del Silala, la construcción de una fábrica de cemento y la sesión de las acciones de las plantas hidroeléctricas.³⁴

En marzo de 2010 se retomaron las medidas de presión, esta vez para que se anulara un Decreto Supremo sobre el litio que los cívicos calificaban de centralista porque fijaba la sede de la Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE) en La Paz.³⁵

Como no hubo respuestas concretas de parte del gobierno, las huelgas cívicas se sucedieron en cascada. A la demanda de preservación del cerro, se añadieron los pedidos de renuncia del presidente de la Comibol, la construcción de un aeropuerto, una fábrica de cemento y el camino entre Tarija y Potosí. Los paros fueron respaldados de manera militante por parte de la población potosina, que sentía que su región no estaba aprovechando el momento de bonanza minera y temía que, nuevamente, se quedara sin nada. Los datos eran claros: el gobierno no había logrado incrementar los impuestos a la minería, no puso límites a la explotación del cerro y no había diversificado la economía ni generado empleo que no estuviera relacionado directamente con la minería. Si bien como producto de la bonanza la Gobernación recibió recursos como nunca antes, estos no guardaban relación con las cifras millonarias de las exportaciones.

Tampoco había señales de que los inversionistas estuviesen interesados en otras fases de la minería aparte de la extractiva. Si bien se calculaba que la inversión extranjera en Potosí llegaba a más de USD 1000 millones, eso no tenía efecto en la diversificación productiva y, por tanto, en la mejora de las condiciones de desarrollo de la región. Las grandes ganancias de las empresas extranjeras y de los cooperativistas no se reinvertían en la región. La población aseguraba que los mineros preferían construir casas e inaugurar emprendimientos en otros departamentos, en Santa Cruz o en la vecina ciudad de Sucre.

En suma, existía un profundo malestar que nacía a partir de la idea de que Potosí estaba siendo engañada por el gobierno y saqueada por las empresas mineras, lo que legitimó el discurso radical los dirigentes

³⁴ *El Potosí*, "Comcipo lanza paro de 48 horas por pliego regional", 18 de abril de 2009.

³⁵ *El Potosí*, "Anulan DS del litio", 21 de marzo de 2010.

cívicos y llevó a respaldar sus acciones. A esto se sumó la suspensión de René Joaquino como alcalde. La gente entendió que no se había respetado su voto; estaba claro que su enjuiciamiento tenía móviles políticos. El gobierno —ya completamente embarcado en una lógica centralista— tenía la necesidad de sacar del medio a un político que daba señales de independencia y de desafío al poder central. El MAS había intentado ganarle una contienda electoral a Joaquino; ante su fracaso, optó por politizar la justicia y expulsarlo de la Alcaldía a las malas.

A mediados de 2010, las condiciones para un conflicto de gran magnitud estaban completamente dadas. Primero, se había reinstalado la idea de saqueo. Segundo, la directiva del Comcipo había cambiado de manera radical; al frente de la entidad cívica se encontraban personajes del mundo popular, pero no ligados orgánicamente a la COD. Tercero, el gobierno se había mostrado soberbio y sordo ante las demandas potosinas.

En julio de 2010, los directivos de la entidad cívica pidieron reunirse con el gobierno para que atendiera las añejas demandas del departamento. Lo hizo bajo amenaza de huelga, puesto que los funcionarios enviados desde La Paz nunca dieron respuestas concretas. En esta ocasión el gobierno tampoco se manifestó. En un contexto que anticipaba una movilización, pobladores de Coroma llegaron a la ciudad de Potosí; tenían un problema de límites territoriales, más precisamente en torno al cerro Pahua (que, se decía, era rico en caliza y uranio).

La dirigencia de Comcipo acogió la demanda de Coroma y apoyó su lucha, a la que interpretó como una defensa del territorio potosino. Al día siguiente, la directiva de la entidad declaró un paro de 48 horas y convocó a una marcha que tuvo una asistencia multitudinaria. Se plantearon 11 demandas, muchas de ellas de vieja data: consolidar las reformas a la Ley de Autonomías, poner en funcionamiento a Karachipampa, mitigar el deterioro del cerro Rico, construir una fábrica de cemento en Coroma, industrializar el salar de Uyuni, concluir los trabajos de la carretera sur (entre Tarija y Potosí), construir un aeropuerto internacional, solucionar el conflicto de límites entre Coroma y Quillacas, transferir las plantas hidroeléctricas a la Gobernación de Potosí y solucionar el problema de las aguas del río Silala. Cuando el paro finalizó, se decidió radicalizar las medidas, dar un plazo de 48 horas al gobierno para que

solucionara las demandas y exigir a los ministros que llegaran a la ciudad de Potosí. También se anunció una marcha hacia la sede de gobierno en La Paz.³⁶ Los ministros anunciaron que no arribarían a Potosí mientras no se levantara las medidas de presión, lo que no hizo más que agravar el conflicto.³⁷

El 29 de julio se inició la huelga general indefinida. El gobierno ratificó que los ministros no dialogarían sin que, previamente, se levantasen las medidas. La nota del Ministerio de la Presidencia enviada al gobernador Félix Gonzales señalaba: “El gobierno nacional aclara que no habrá diálogo bajo un ámbito de presión y ninguna autoridad nacional se hará presente en Potosí mientras sigan las medidas de hecho adoptadas, y se instalará la mesa de diálogo una vez levantadas todas las medidas de presión”.³⁸

Para descalificar a la manifestación, el gobierno —a través de Óscar Coca, ministro de la Presidencia, y Sacha Llorenti, ministro del Interior— denunció que esta tenía móviles políticos que buscaba desestabilizar a Morales. Se afirmó que los potosinos estaban manipulados por AS, el partido opositor, y por el propio exalcalde René Joaquina, que quería evitar su enjuiciamiento y salida de la Alcaldía.³⁹

Estas declaraciones encendieron los ánimos y dieron más fuerza al movimiento. Los cooperativistas mineros, quienes no solo estaban al margen, sino que se oponían a las demandas —entre ellas, evitar la explotación del cerro Rico—, se sumaron al movimiento señalando que expresaba las demandas del pueblo potosino.

La postura gubernamental de no negociar en las condiciones planteadas por los cívicos ocasionó fisuras en el interior del MAS. El propio gobernador y los asambleístas departamentales y parlamentarios del partido, como Eduardo Maldonado, se sumaron a la exigencia de que un equipo de ministros llegara a Potosí e iniciaron una huelga de hambre pidiendo que se diera inicio a la negociación.

Pronto, la huelga se amplió a otras provincias; se incorporaron los habitantes de Betanzos, Vitichi, Cotagaita y Tupiza. Los empresarios también se sumaron a la movilización: entregaron dos lotes de frazadas y

³⁶ *El Potosí*, “Potosinos alistan marcha a La Paz por sus demandas”, 20 de julio de 2010.

³⁷ *El Potosí*, “Potosí radicaliza presión ante la negativa gubernamental”, 30 de julio de 2010.

³⁸ *El Potosí*, “Potosinos van a la huelga general cuestionando al gobierno central”, 31 de julio de 2010.

³⁹ *El Potosí*, “Gobierno echa gasolina al paro de los potosinos”, 3 de agosto de 2010.

varias arrobas de té, café, coca y pan a los coromeños, quienes fueron definidos por Jaime Uzquiano, presidente de la Federación de Empresarios Privados, como “los héroes de la lucha reivindicativa”.⁴⁰ Mientras tanto, los asambleístas departamentales Paulino Lima (MAS), Juana Cabrera (AS) y Elizabeth Soto (AS) ayunaban. Eduardo Maldonado, senador por el MAS; Juan Carlos Cejas, Hugo García, diputados por el MAS, y David Cortes, por AS, hacían lo mismo en La Paz.

Tras varios días de movilización, la situación empeoró: 120 piquetes reunieron a más de 1000 personas que ayunaban tanto en la ciudad como en las provincias; entre ellas, no solo se encontraban autoridades oficialistas, sino también trabajadoras sexuales de la zona de San Roque. Se hablaba de radicalizar las medidas y paralizar el aparato productivo; de hecho, los cooperativistas actuaron así con la empresa Manquiri. Se pensaba bloquear la línea férrea de puerto Antofagasta para afectar al centro minero de San Cristóbal. Además, se decía que varias toneladas de harina estaban siendo retenidas.

Finalmente, el 9 de agosto, una asamblea de Comcipo aceptó dialogar acerca del tema de Coroma en Sucre y los demás puntos en Potosí; desde el gobierno, se mantenía la posición de negociar siempre y cuando se levantaran las medidas de presión. El 10 de agosto, el inicio de diálogo en Sucre no dio mayores frutos, pues, si bien los cívicos y el gobernador estuvieron en la ciudad, los ministros no acudieron a Potosí para resolver los demás puntos, y la comisión tuvo que regresar. Condori, presidente de Comcipo, señalaba, “los ministros de Evo diseñaron una estrategia para enfrentar el conflicto por la vía del cansancio, la provocación de parte de sectores campesinos y la amenaza de juicios”.⁴¹

A 12 días del inicio de la huelga, una resolución de la asamblea del Comcipo indicó que “manteniendo la huelga general, el ayuno voluntario y el bloqueo de caminos se viajará a Sucre para dialogar con Evo Morales y su equipo de trabajo”.⁴²

Luego del intento de negociación en la ciudad de Sucre, entre amenazas de retorno de la comisión del Comité Cívico a Potosí, el 15 de agosto, seis mesas de diálogo se instalaron en la Gobernación de Chuquisaca, en

⁴⁰ *El Potosí*, “Solidaridad crece”, 3 de agosto de 2010.

⁴¹ *El Potosí*, “Potosí rompe relaciones con las autoridades nacionales”, 11 de agosto de 2010.

⁴² *El Potosí*, “Potosí pide dialogar los seis puntos en Sucre”, 12 de agosto de 2010.

Sucre, para solucionar las demandas. Tras horas de discusión, se llegó a acuerdos generales en cinco de los seis puntos planteados (solo el tema de caminos quedó pendiente de negociación):

1. Con respecto al conflicto de límites entre Potosí y Oruro, se indicó que se tramitaría una ley de unidades territoriales y se crearía una comisión para trabajar en la conciliación de límites.
2. Sobre la demanda de puesta en marcha del complejo metalúrgico de Karachipampa, se acordó que se presentaría un cronograma de operaciones.
3. En relación con la preservación de la estructura del cerro Rico de Potosí, se mencionó que se crearía un organismo técnico con participación de los cooperativistas.
4. Con respecto a la instalación de la fábrica de cemento, el gobierno se comprometió a construir fábricas en Potosí y Oruro cuando concluyeran los estudios.
5. En cuanto al aeropuerto, se designó a la Gobernación para que realizara los estudios correspondientes (Flores 2011).

En resumen, esta acción colectiva no obtuvo resultados concretos, más allá de la instalación de comisiones y la realización de estudios; es decir, solo se logró postergar la atención a las demandas. A pesar de ello, la población estaba contenta, sentía que su dignidad había quedado intacta y la delegación de Comcipo volvió a Potosí, donde sus integrantes fueron recibidos como héroes.⁴³

Como señala Guisela Derpic (citada en Flores 2011, 105), exprefecta de Potosí,

en el momento de recibir a los miembros de la comisión (que retornaban de Sucre luego de la reunión con los ministros), todos varones, pero los salen a recibir, y les besan, les ponen la señal de la cruz, y les bendicen y les ovacionan porque al final de cuentas lo que encarnaban esos líderes era simple y llanamente la voluntad de un pueblo digno, que pese a todo, y cuando digo pese a todo, incluso a los términos de convenio que se firma, cumplieron la consigna de no arrodillarse.

⁴³ *El Potosí*, "Potosí recupera su unidad con el paro", 17 de agosto de 2010.

De esta manera culminó uno de los episodios más relevantes de la historia de Potosí. El movimiento cívico había cambiado de liderazgo; sin perder su origen popular, era menos permeable al discurso de izquierda y de clases. La movilización se había desarrollado en un contexto en el que primaba el miedo a que se reprodujera el saqueo de Potosí, la ausencia de políticas claras para el desarrollo y el desconocimiento de la voluntad popular con la expulsión de su alcalde.

Cinco años después estalló otro conflicto de similares características. El 25 de junio de 2015, Jhonny Llally, presidente de Comcipo, taxista de oficio y exdirigente del transporte, lideró una marcha a la ciudad de La Paz para presentar un pliego petitorio de 26 puntos al presidente Evo Morales. En apoyo a la marcha, el 6 de julio en Potosí se inició un paro general e indefinido con el objetivo de masificar la marcha y bloquear todas las calles y los accesos a la ciudad. Estas medidas no gozaban del apoyo de la COD ni de la Fedecomín, a esas alturas plenamente articuladas al gobierno del MAS.

Tras 11 días de caminata, la marcha llegó a la ciudad de La Paz y fue duramente reprimida durante su intento de ingresar a la plaza Murillo. El 9 de julio la acción de las fuerzas del orden alcanzó niveles reprochables, puesto que la policía “golpeó a varios de los marchistas, los arrastró por el suelo y luego los detuvo”.⁴⁴ Esto encendió los ánimos de los marchistas y de la población potosina que, en respuesta, radicalizaron su posición negándose a negociar solo con los ministros y exigieron ser recibidos por Evo Morales.

Tras nueve días de huelga, la dirigencia de Comcipo determinó enviar a 500 universitarios a La Paz para reforzar las movilizaciones y ratificar la huelga indefinida. A esas alturas, ya se presentaban problemas de aprovisionamiento, centenares de turistas varados en la ciudad y enfermos que eran trasladados en carretillas hasta los centros médicos para recibir tratamiento ante el férreo bloqueo callejero. El gobierno denunciaba actos vandálicos contra las casas de diputados del MAS, gobernador y alcalde con piedras y bombas molotov.⁴⁵

⁴⁴ *Página Siete*, “Policía reprimió violentamente a cívicos potosinos en centro paceño”, 10 de julio de 2015. <https://bit.ly/2UA3nUq>

⁴⁵ *Página Siete*, “Comcipo esperará a Evo, el MAS repudia sus actos vandálicos”, 15 de julio de 2015. <https://bit.ly/3vW4M4H>

La movilización dio un giro favorable para los cívicos cuando el 18 de julio Fedecomín se sumó a la protesta y envió a centenares de trabajadores cooperativistas a La Paz. En un clima de aguda desconfianza, se intentó iniciar un diálogo entre Comcipo y varios ministros; empero, no prosperó porque se dio un enfrentamiento en el que los marchistas hicieron detonar cartuchos de dinamita ante la represión policial.

Finalmente, el 24 de julio se inició un diálogo en el que se acordó revisar el cumplimiento del pliego de 2010 y la delegación potosina hizo conocer cada una de sus demandas. Las respuestas del gobierno siempre fueron las mismas; todas se enfocaban en la falta de estudios de factibilidad, la ratificación del cumplimiento de varios acuerdos y su ausencia de responsabilidad en torno a algunos problemas que, según ellos, debían ser resueltos por la Gobernación o la Alcaldía municipal.

El 28 de julio el gobierno dio por concluida la negociación y, aunque una multitudinaria marcha en Potosí de 200 000 personas ratificó el paro, los manifestantes decidieron regresar a la ciudad, otra vez con las manos vacías, solo con las promesas del gobierno de mejorar la atención al departamento. Es decir, se repitieron los resultados de la movilización de 2010.

El 30 de julio, 29 buses llegaron a Potosí; transportaban a los cientos de marchistas que habían luchado en La Paz, pernoctado en coliseos deportivos y se habían alimentado con un cotidiano ají de fideo y un refresco de *mokochinchi*⁴⁶ preparado por familias de residentes potosinos en La Paz. Entre ellos se encontraban las 52 personas que habían sido detenidas por la policía como producto de los enfrentamientos. La población les dio un recibimiento de héroes. La caravana de buses, en cuyas ventanas ondeaban banderas potosinas, recibió el aplauso de miles de ciudadanos que demostraban su apoyo y agradecimiento, y expresaban su repudio al gobierno del MAS. Quien lideraba la celebrada delegación era Jhonny Llally, presidente de Comcipo. En su discurso, el cívico señaló que Potosí no había perdido nada, que había ganado en dignidad, que “los *ispis*⁴⁷ le habían ganado a los tiburones”.⁴⁸

⁴⁶ Bebida refrescante elaborada a base de durazno deshidratado.

⁴⁷ Pez pequeño que vive en los lagos andinos de Bolivia.

⁴⁸ *Correo del Sur*, “Jhonny Llally, el impulsor de un diálogo que marcó historia”, 17 de diciembre de 2015. <https://bit.ly/3wWtXs>

El 1 de agosto, un consejo consultivo de Comcipo declaró un cuarto intermedio en una huelga que había llegado a los 27 días. Así acabó la protesta más larga de la historia de lucha regional potosina, con mucho sentimiento de unión y de repudio a la indiferencia del gobierno, aunque no se lograron resultados concretos. La huelga de los 19 días de 2010 y la de los 27 días de 2015 no fueron dirigidas por fuerzas sindicales y de izquierda, lo que quizá, en el futuro, pueda dar lugar a reflexionar acerca de otras características de la periferia potosina.

El rol del actor principal para constituir una periferia pasiva

Los partidos políticos, que habían sido la apuesta para mediar entre el Estado y la sociedad, fueron relevados por los sindicatos campesinos agrupados en torno a la Federación Única de Trabajadores campesinos de Bolivia y los movimientos urbanos. El centro mantuvo una relación clientelar con estos actores. Tal vínculo involucró empleos, recursos y proyectos a cambio de respaldo político y electoral. Esto fue posible por los grandes recursos que recibió el Estado como producto del alza de precios de los *commodities*. Morales consolidó esta relación a través del mecanismo Evo Cumple y se mostró como el líder que llevó progreso a las regiones.

En Potosí, las alianzas entre el centro y la periferia tuvieron como base a los sectores campesinos agrupados en la Confederación Sindical de Campesinos de Potosí y a los cooperativistas mineros agrupados en Fedecomín. Los primeros alcanzaron presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la Gobernación, en la Asamblea Legislativa Departamental, en varias alcaldías y en los consejos municipales. También coparon los cargos en la administración pública, donde la pertenencia a una organización social ligada al MAS era carta de presentación.

En el caso de los cooperativistas mineros, lograron curules en el Poder Legislativo y cargos en ministerios y viceministerios. Fueron beneficiados con una serie de ventajas como un régimen de pago de impuestos especial, el arrendamiento de espacios mineros a costos ínfimos y se les permitió –pese a la normativa boliviana– arrendar espacios mineros a empresas trasnacionales. Estos acuerdos no estuvieron ligados con una estrategia de desarrollo departamental y tampoco fueron consultados a los actores de la sociedad civil.

Paralelamente, el gobierno del MAS buscó anular a los actores que desafiaron su poder territorial a través del debilitamiento económico de las gobernaciones y alcaldías, la anulación de los liderazgos locales y el socavamiento de la propuesta de autonomías departamentales. En Potosí se anuló el liderazgo del alcalde René Joaquino, primero sacándolo de la Alcaldía (2010) y luego promoviendo su candidatura a senador por el MAS en 2014.

Santa Cruz y su propuesta de autonomías departamentales sufrió un debilitamiento con la nueva Constitución de 2009, que apostó por las autonomías indígenas. Sus líderes, tanto partidarios como cívicos, fueron perseguidos por el aparato judicial al punto de que algunos salieron fuera de Bolivia o enfrentaron juicios. La élite económica cruceña dejó de lado sus ambiciones políticas y pactó con el MAS para mantener sus niveles de ganancia y crecimiento. De todos modos, la fuerza del regionalismo cruceño hizo que el MAS no pudiera tomar las principales instituciones del Departamento como la Gobernación y la Alcaldía.

El esquema clientelar que el centro estableció en Potosí con sindicatos campesinos y con cooperativas mineras dejó por fuera a varios actores potosinos. Fueron marginadas entidades como las juntas de vecinos, los gremiales, los transportistas y otras organizaciones. En 2010, sus allegados tomaron la directiva de Comcipo y desde ahí articularon oposición al MAS enarbolando las demandas de Potosí largamente postergadas. En 2010 y en 2015 Comcipo organizó y lideró largas huelgas que, pese a su duración y radicalidad, no tuvieron mayor repercusión en la atención estatal hacia el departamento.

Conclusiones

Al estudiar el Estado boliviano desde el enfoque centro-periferia se puede constatar su debilidad ya que, para lograr gobernabilidad, ha tenido que pactar su estatalidad con los diversos actores con poder. Esto contradice los postulados teóricos que sostienen que el Estado, en su implantación territorial, tiende a suprimir los poderes de los principales actores de la periferia o llegar a un acuerdo institucional de distribución del poder territorial. En Estados débiles, la base del pacto es el reparto del producto de la venta de materias primas entre los diversos actores con poder. Se configura un esquema clientelar a gran escala.

Esto ratifica la idea de que el Estado no es una entidad todopoderosa; en realidad, este entabla batallas con otros actores. Empero una cosa es que las negociaciones se realicen con base en reglas informales y otra es que se den con base en una institucionalidad, Parlamento y partidos políticos. En el caso boliviano queda claro que la política circula y se define en espacios institucionales solamente por breves lapsos; en la mayor parte se desarrolla por fuera de ellos. Entre 1985 y 2005 hubo un intento notable por superar este tipo de relación mediante la vigencia de un sistema de partidos; sin embargo, fue un fracaso.

Esto tiene importantes consecuencias. Por una parte, las políticas son diseñadas en función de los intereses de los actores más relevantes y no en función de las necesidades de la población. Al no existir un sistema de partidos institucionalizado que pueda agregar y canalizar las demandas de los distintos sectores, las políticas públicas no responden

a lógicas de largo plazo. Más bien están pensadas para satisfacer al actor con poder y de esta manera asegurar gobernabilidad. Por otra parte, este esquema lógicamente genera déficits de representación. Buena parte de la gente no es escuchada por el Estado. Esto deriva en protestas masivas y radicales. En este esquema, las relaciones centro-periferia están dadas entre los sucesivos gobiernos y los actores con poder de cada departamento. El tipo de actor que está en la periferia determinará el desarrollo de su región.

Uno de los desafíos de este trabajo era entender cómo una región que tiene todas las condiciones para activar un clivaje territorial no puede hacerlo. A la luz de la evidencia empírica presentada, se puede afirmar que Potosí no ha podido configurar un clivaje centro-periferia por las características sociales e ideológicas de su actor más importante: el proletariado minero que, aglutinado en torno a la FSTMB y la COB, es profundamente nacionalista y de izquierda. A este actor no le interesa construir esquemas políticos territoriales (en realidad, el regionalismo le parece una maldición), sino defender sus intereses de clase en el marco de un proyecto de construcción nacional. En esa medida Potosí, no puede pensarse como región, sino como nación. Comcipo, si bien maneja un discurso apolítico, en realidad canaliza notablemente los intereses de los sectores obreros y de izquierda del departamento. Esto ratifica la idea de que para la existencia de un clivaje no solo es suficiente una división social, sino que esta debe estar articulada y expresada de manera coherente por su actor más poderoso. En Potosí, hasta el año 2010, los actores sindicales dieron sentido a las movilizaciones y las utilizaron para dar fuerza a sus objetivos de clase y de izquierda.

Cuando la idea de construcción de la nación es compartida por el actor más poderoso de la periferia, el centro fácilmente puede establecer su dominio político y territorial. De hecho, la periferia entrega sus recursos naturales al centro estatal guiada por la idea de que lo hace en beneficio de un bien mayor: la nación. Cuando la idea de nación de la periferia entra en contradicción con la del centro estatal, se realizan protestas regionalistas para defenderla. Esto se analizó en el tercer capítulo. Comcipo, bajo el mando del sindicato aglutinado en la COD, organizó protestas que buscaban detener la aplicación del modelo neoliberal, esgrimiendo el discurso de defensa de la región.

La comparación con el caso cruceño nos ha permitido comprobar que, para que se desarrolle la región, no solo hace falta que el Estado establezca pactos con el actor más relevante de la periferia. Esta es una condición necesaria, pero no suficiente. Hace falta que la orientación política de ese actor esté anclada al territorio. Si el actor regional tiene poder, pero su referencia no es territorial, es imposible que surja regionalismo. Entre 1952 y 1985 el territorio potosino alojó al proletariado minero, que tiene un relevante poder político. No obstante, dada su orientación de clase y nacionalista, este actor no se vincula con los intereses territoriales más que de manera instrumental.

Entre 1985 y la segunda década del siglo XX, desde la implantación del modelo neoliberal, emergió el minero cooperativista, capitalistas de origen indígena que han copado el espacio político y territorial dejado por los mineros de la Comibol. Estos empresarios acumularon tal poder político que lograron presionar al Estado para que ampliara sus concesiones mineras, les favoreciera con subvenciones y les entregara varios bienes inmuebles que antes pertenecían a la Comibol. Sin embargo, ellos no tienen ligazón con el territorio y sus intereses, ni pueden liderar las luchas regionales.

Estos empresarios tienen su residencia en Potosí, con frecuencia invierten sus ganancias en la ciudad y son relevantes para la economía local; sin embargo, no están articulados a Comcipo de manera orgánica. Participan en la entidad mientras esta garantiza sus intereses y se alejan de ella, e incluso la atacan, cuando ocurre lo contrario. En realidad, no les interesa activar un clivaje territorial, sino establecer acuerdos y pactos con los actores del centro estatal, de quienes dependen y con quienes tienen una relación de acercamiento, alianza y tensión.

Los cooperativistas apoyaron al MAS en su camino hacia el poder entre 2002 y 2006, y lograron posicionar representantes en el legislativo en las elecciones de 2005. Pero cuando el gobierno del MAS intentó controlar el espacio minero aplicando leyes medioambientales e impositivas, los cooperativistas realizaron acciones que detuvieron estas iniciativas estatales.

La base del discurso cívico que configura la identidad regional es que, en el pasado, Potosí entregó sus recursos al Estado pero no recibió nada a cambio, siempre estuvo sometida a una explotación sin retribución. La

periferia configura un regionalismo de departamentos pobres, que fueron abandonados en el proceso de modernización económica y que en el presente piden una reorientación de las políticas estatales. Se trata de un regionalismo estatalista que, en realidad, reafirma el poder del centro al no cuestionar su control sobre las riquezas mineras de la periferia y reforzar la idea de que esos recursos son nacionales, nunca departamentales. Existe una poderosa identidad local, pero esta no puede dejar de lado el imaginario nacional.

La noción de periferia pasiva no implica que la región no protagonice y participe en movilizaciones; de hecho, ha organizado muchas. Empero, estas acciones no están articuladas a un proyecto con base territorial, porque los actores que las promueven las usan según sus intereses sindicales, desconectados de una lógica territorial. La identidad regional potosina, muy poderosa, puede activarse sin que ello implique un cambio en la distribución territorial del poder. En los hechos, este tema no está en la agenda de las demandas potosinas, es más, se rechaza todo regionalismo y a veces se organizan movilizaciones, paradójicamente, para respaldar al centralismo. Por ello, sus largas y sufridas manifestaciones no son una muestra de su poder territorial, sino de su debilidad, porque el corolario siempre es el mismo: promesas y acuerdos de los diferentes gobiernos que el tiempo termina por diluir.

Santa Cruz, caso de periferia activa en este libro, tuvo un decurso totalmente distinto a Potosí. Este departamento ha logrado establecer un clivaje centro-periferia mediante la creación del Comité Pro Intereses de Santa Cruz. Además, ha desarrollado una narrativa de identidad muy diferente al de las regiones del occidente del país y ha utilizado sus recursos hidrocarburiíferos como mecanismo de chantaje al centro para lograr sus demandas (uno de sus logros es haber conseguido el 11 % de regalías por la explotación petrolera).

A diferencia de Potosí, la élite empresarial cruceña lidera la lucha por el territorio y, en definitiva, activa un clivaje centro-periferia cuyos intereses se relacionan estrechamente con el departamento. Sus demandas son concretas y siempre están articuladas con la búsqueda de un cambio en la distribución de poder territorial mediante la descentralización, la elección de las autoridades locales y el federalismo. Por ello, es posible pensar que en el momento en que la élite económica y social más poderosa de Potosí,

los cooperativistas mineros, fortalezca el poder territorial de la periferia potosina, podría darse un cambio en el destino de una región azotada por la pobreza y la marginalidad.

Estas conclusiones sobre el caso Potosí pueden ser generalizadas a un contexto latinoamericano por dos razones fundamentales. En primer lugar, la mayoría de los Estados en América Latina son Estados débiles. Por ello, analizar las prácticas de pactar la estatalidad con los grupos de poder local permite entender la dinámica centro-periferia. En segundo lugar, en este libro se establece una condición fundamental para que una periferia deje de ser pasiva y mejore la distribución territorial del poder. Hace falta que el actor periférico con poder tenga referencia territorial, es decir, que sus intereses estén vinculados con el desarrollo de la región. No basta que dicho actor cuente con recursos apetecidos por el centro estatal y que tenga una identidad regional fuerte. Como se ha establecido en esta obra, estos elementos son necesarios, pero no suficientes.

Referencias

- ABCP (Asociación Boliviana de Ciencia Política). 2012. *La calidad de la democracia en Bolivia, percepción y evaluación de sus actores*. La Paz: ABCP / Kondar Adenauer Stiftung.
- Absi, Pascale. 2005. *Los ministros del diablo: el trabajo y sus representaciones en las minas de Potosí*. La Paz: IFEA / PIEB.
- Agirakis, Helena. 2012. “Regionalismo y mitos ideológicos como dispositivos de poder para la construcción del imaginario de la autonomía departamental”. En *Ensayos sobre autonomías en Bolivia*, editado por Claudia Peña, 61-86. La Paz: FES / ILDIS.
- Alba, Armando. (1943) 2001. *Imagen de Potosí*. Potosí: Zulver.
- Alessandro, Martín. 2009. “Clivajes sociales, estrategias de los actores y sistema de partidos: la competencia política en la Ciudad de Buenos Aires (1995-2005)”. *Revista de la Sociedad Argentina de Análisis Político* 3 (3): 581-614.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=387136362003>
- Almaráz, Sergio. 1985. *Réquiem para una república*. La Paz: Los Amigos del Libro.
- Andersen, Lykke, Boris Branisa y Stefano Canelas. 2016. *El ABC del desarrollo en Bolivia*. La Paz: INESAD.
- Anderson, Benedict. 1993. *Comunidades Imaginadas, reflexiones sobre el uso y difusión del nacionalismo*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

- Arce, Roberto. 2003. *Desarrollo económico e histórico de la minería en Bolivia*. Cochabamba: Plural Editores.
- Archondo, Rafael. 1997. *3 años de participación popular. Memoria de un proceso*. La Paz: Ministerio de Desarrollo Humano.
- Arguedas, Alcides. 1982. *Pueblo enfermo*. La Paz: Los Amigos del Libro.
- Arzáns de Orsúa y Vela, Bartolomé. 1975. *Historia de la Villa Imperial de Potosí*. La Paz: Biblioteca del Sesquicentenario de la República.
- AS (Alianza Social). 2004. “Programa de gobierno”.
https://eju.tv/index_files/1/AS.pdf
- Assies, Willem, y Ton Salman. 2003. “La democracia boliviana: Entre la consolidación, la profundización y la incertidumbre. Un análisis contextualizado de los resultados de las elecciones de 2002 en Bolivia”. *Estudios atacameños*, 25: 79-101.
<https://doi.org/10.4067/S0718-10432003002500005>
- Avilés, Denis. 2010. *Descentralización y transformación de las relaciones de poder local. El caso de ocho municipios de Chuquisaca*. Sucre: Fundación Tierra.
- Ayo, Diego. 1999. *Los desafíos de la participación popular*. La Paz: CEBEM.
 — 2011. *Democratizando la democracia, una mirada a la participación popular en los albores de la Bolivia de las autonomías*. La Paz: PNUD / IDEA.
- Barnadas, Joseph. 2002. *Diccionario histórico de Bolivia*. Sucre: Grupo de Estudios Históricos.
- Barragán, Rossana. 2009. “Hegemonías y ejemonías: las relaciones entre el Estado central y las regiones (Bolivia, 1825-1952)”. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, 3: 39-51.
- 2015. “El Estado pactante: pensando en la fortaleza de la sociedad organizada”. *Tinkazos* 18 (37): 101-112.
http://www.scielo.org.bo/pdf/rbcst/v18n37/v18n37_a08.pdf
- 2017. “Los Kajchas y los proyectos de industria y nación en Bolivia (1935-1944)”. *Mundos do trabalho* 9 (18): 25-48.
<https://doi.org/10.5007/1984-9222.2017v9n18p25>
- Bedregal, Guillermo. 1959. *La nacionalización minera y la responsabilidad del sindicalismo*. La Paz: Comibol.
- Bendix, Reinhard. 1970. *Max Weber*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

- Bohan L., Mervin. 1942. "Informe de la Misión Económica de los Estados Unidos a Bolivia". <https://www.bivica.org/file/view/id/1399>
- Botta, Patricia. 2016. "Italia entre las páginas del Quijote". En *El Quijote de 1615. Dobleces, inversiones, paradojas, desbordamientos e imposibles*, editado por Antonio Cortijo, Gustavo Illades y Francisco Ramírez, 32-48. Santa Bárbara: Universidad de California. <https://bit.ly/3Dcywir>
- Blanca, Rodrigo. 2010. *Impacto de la minería en el Perú y alternativas al desarrollo*. Lima: Agencia Andaluza para la Cooperación al Desarrollo.
- Blanes, José. 1999. *La descentralización en Bolivia, avances y retos actuales*. La Paz: CEBEM.
- 2014. *La revuelta de las periferias. Movimientos regionales y autonomías políticas en Bolivia y Ecuador*. Quito: FLACSO Ecuador.
- Burbano de Lara, Felipe. 2014. *La revuelta de las periferias. Movimientos regionales y autonomías políticas en Bolivia y Ecuador*. Quito: FLACSO Ecuador.
- Burke, Melvin. 1973. *Estudios críticos sobre la economía boliviana*. La Paz: Los Amigos del Libro.
- 1987. "The Corporación Minera de Bolivia (Comibol) and the Triangular Plan: A Case Study in Dependency". *Latin American Caribbean Studies*, 4. <http://sites.alleggheny.edu/latinamericanstudies/latin-american-issues/volume-4/>
- Cajías, Magdalena. 2015. "La revolución nacional: actores sociales y políticos en alianza y disputa". En *Bolivia su historia*, 19-93. T.6. La Paz: Coordinadora de Historia.
- Calderón, Fernando. 1982. *La política en las calles*. Cochabamba: CERES.
- Calderón, Fernando, y Eduardo Gamarra. 2003. "Crisis, inflexión y reforma del sistema de partidos en Bolivia". *Colombia Internacional* 58 (julio-diciembre): 90-123. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81205805>
- Calderón, Fernando, y Mario Dos Santos. 1987. "Entre el pacto progresivo y el orden impuesto". En *Democracia a la deriva*, compilado por René Mayorga, 107-116. La Paz: PNUD / CLACSO / CERES.
- Calderón, Fernando, y Roberto Laserna. 1983. *El poder de las regiones*. Cochabamba: CERES.

- Capoche, Luis. 1959. "Relación general de la Villa Imperial de Potosí". *Biblioteca de autores españoles*, colección de Manuel Rivadeneira. Madrid: Atlas.
- Ceppi, Natalia. 2016. "Los hidrocarburos en el Gobierno de Evo Morales: extractivismo nacionalista con presencia extranjera". *Revista Civilizar* 16 (30): 175-190. <https://doi.org/10.22518/16578953.542>
- CIAC (Centro de Investigación y Desarrollo Campesino). 2010. "Genete evita la suspensión del Alcalde Joaquino". <https://bit.ly/38nszoh>
- Conaghan, Catherine. 2015. "Surveil and Sanction: The Return of the State and Societal Regulation in Ecuador". *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 98: 7-27. <http://www.jstor.org/stable/43279244>
- Condarco, Ramiro. 1965. *Zárate, el "remible" Willka*. La Paz: Talleres Gráficos Bolivianos.
- Contreras, Manuel. 1989. "Medio siglo de minería mediana en Bolivia 1939-1989". En Manuel Contreras Napoleón Pacheco, *Medio siglo de minería mediana en Bolivia 1939-1989*. La Paz: Biblioteca Minera de Bolivia.
- Cordero, Sofia. 2018. *La plurinacionalidad desde abajo. Autogobierno indígena en Bolivia y Ecuador*. Quito: FLACSO Ecuador / PNUD.
- Córdova, Eduardo, Marlene Choque y Benjamín Santisteban. 2009. "Los caminos del cambio: transformaciones en el sistema político bolivianos, 2003-2008. En *Poder y cambio en Bolivia 2003-2007*, editado por Roberto Laserna, 61-114. La Paz: PIEB.
- Corporación Latinobarómetro. 2008. *Informe 2008*. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro. <https://bit.ly/3qQ2R0E>
- 2013. *Informe 2013*. Santiago de Chile: SIDA / CAF / IBD / CEI. <https://bit.ly/3dahINR>
- Cortez, Enrique. 2001. *El discurso de la participación popular como forma de dominio estatal*. Sucre: Proyecto Sucre Ciudad Universitaria.
- Cruz Rodríguez, Edwin. 2010. "Los movimientos indígenas y la cuestión nacional en Bolivia y Ecuador: Una genealogía del estado plurinacional". *Análisis Político* 23 (70): 125-152. <https://bit.ly/3vUxzq7>
- Derpic, Gisela. 2011. *590 días de travesía prefectural*. Cochabamba: Kipus.
- Devisscher, Tahia. 2008. *Cinco siglos de acumulación de costos socio – ambientales: La actividad minera en Bolivia*. La Paz: PNUD.

- Del Granado, Hugo. 2014. "Los dilemas del sector hidrocarburífero". En *Bolivia encrucijadas en el siglo XXI, visiones e ideas para una agenda de país*, editado por Henry Oporto, 249-216. La Paz: Plural Editores.
- Dirección General de Estadísticas y Censos. 1955. *Censo demográfico de 1950*. La Paz: Argote.
- Dunkerley, James. 1987. *Rebelión en las venas, la lucha política en Bolivia 1952-1982*. La Paz: Quipus.
- Eaton Kent. 2013. "Recentralization and the Left Turn in Latin America: Diverging Outcomes in Bolivia, Ecuador, and Venezuela". *Comparative Political Studies* 47 (8): 1130-1157.
<https://doi.org/10.1177/0010414013488562>
- Ernst, Tanja. 2012. "Herencia colonial y política actual: desigualdad social y cambio en Bolivia. En *El primer gobierno de Evo Morales: un balance retrospectivo*, editado por Tanja Ernst y Stefan Schmalz, 223-250. La Paz: Plural Editores.
- Espinoza, Jorge. 2010. *Minería boliviana, su realidad*. La Paz: Plural Editores.
- Espinoza, María F. 1998. "La Amazonía ecuatoriana: colonia interna". *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, 5: 28-34.
<https://doi.org/10.17141/iconos.5.1998.604>
- Ferrufino, Rubén, Rodolfo Eróstegui y Marco Gavincha. 2011. *Potosí, el cerro nuestro de cada día*. La Paz: LABOR.
- Field, Thomas C. 2014. *Minas, Balas y gringos. Bolivia y la alianza para el progreso en la era Kennedy*. La Paz: CIS.
- 2016. *Minas, balas y gringos. Bolivia y la alianza para el progreso en la era Kennedy*. La Paz: Centro de Investigaciones Sociales.
- Flores Franz. 2011. "19 días y 500 noches en la política potosina, dispositivos identitarios, fisuras sociales y movimientos regionales (2005-2010)". *Tinkazos* 14 (30): 105-126.
- 2012. "Élites, identidades colectivas y movilización social. El conflicto por la capitalía de Sucre en 2007". *Surgiendo* 1, editado por Edgar Íñiguez, 27-46. Sucre: Investiga Sur / PIEB.
- Francovich, Guillermo. 1980. *Los mitos profundos de Bolivia*. La Paz: Los Amigos del Libro.
- Fundación Milenio. 2012. *Potosí y su alta dependencia de la minería*. La Paz: Fundación Milenio.

- García Linera, Álvaro. 2003. "La crisis de Estado". *Tinkazos. Revista Boliviana de Ciencias Sociales*, 14: 35-44.
- 2014. *La condición obrera en Bolivia*. La Paz: Plural Editores.
- Galeano, Eduardo. 2004. *Las venas abiertas de América Latina*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Gibson, Edward. 2007. "Control de límites: Autoritarismo subnacional en países democráticos". *Desarrollo Económico* 47 (186): 163-191. <http://www.jstor.org/stable/30037145>
- Gray Molina, George. 1997. *Construyendo políticas públicas en Bolivia*. La Paz: UDAPSO
- Gray Molina, George, Ernesto Pérez y Ernesto Yáñez. 1999. *La economía política de las reformas institucionales en Bolivia*. Nueva York: BID.
- Guevara, Walter. 1946. *Manifiesto a los campesinos de Ayopaya*. Cochabamba: S.P.I.C.
- 1952. *Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto*. La Paz: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
- 1954. *Plan inmediato de política económica del gobierno de la Revolución Nacional*. La Paz: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
- Hanke, Lewis. 1959. "Prologo y notas a la relación general de la Villa imperial de Potosí de Luis Capoche". *Biblioteca de autores españoles*, colección de Manuel Rivadeneira. Madrid: Atlas.
- Hobsbawn, Eric. 2009. "Nacionalismo y nacionalidad en América Latina". En *Repensando la Subalternidad Miradas críticas desde / sobre América Latina*, compilado por Pablo Sandoval, 311-326. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Honorable Cámara de Diputados. 1952. "Anuario de leyes y decretos". INE (Instituto Nacional de Estadística). 2008. "Indicadores de derechos humanos". Base de datos. <http://ddhh.ine.gob.bo/ddhh2016/onu/>
- 2012. *Censo nacional de población y vivienda. Características de la población*. La Paz: INE. <https://bit.ly/3qnUGIw>
- Íñiguez, Edgar. 2008. *Ideología, discurso y poder*. Sucre: USFX.
- Klein, Herbert. 2008. *Historia de Bolivia*. La Paz: G.U.M.
- Kriesi, Haspeter. 1998. "The Transformation of Cleavage Politics The 1997 Stein Rokkan lecture". *European Journal of Political Research*, 33: 165-185. <https://doi.org/10.1023/A:1006861430369>

- Kwon, Nam. 2015. “La problemática transición boliviana hacia la época postneoliberal: el caso de la economía comunitaria”. *Revista de Estudios Sociales*, 54. <https://doi.org/10.7440/res54.2015.02>
- Kymlicka, Will, y Christine Straehle. 2001. *Cosmopolitismo, Estado Nación y nacionalismo de las minorías: un análisis crítico de la literatura reciente*. México D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas / UNAM.
- Laserna, Roberto. 1987. “Descentralización y reforma del Estado”. En *Democracia a la deriva*, compilado por René Mayorga, 373-394. La Paz: CLACSO / CERES.
- Lavaud, Jean-Pierre. 1998. *El embrollo boliviano, turbulencias sociales y desplazamientos políticos 1952-1982*. Lima: IFEA / CESU / HISBOL.
- 2007. “¿Un futuro político hipotecado?”. *Nueva Sociedad* 209 (mayo-junio). <https://nuso.org/articulo/un-futuro-politico-hipotecado/>
- Lazarte, Jorge, 1993. *Bolivia, certezas e incertidumbres de la democracia*. Cochabamba: ILDIS.
- Lechín, Juan. 1952. “Los revolucionarios no murieron en vano. Discurso de Juan Lechín Ministro de minas y petróleo en el acto de posesión de la comisión encargada de estudiar la nacionalización de las minas”. En *La nacionalización de las minas, decretos*. La Paz: Ministerio de Prensa
- López, Víctor, Fernando Espíndola, Juan Calles y Janette Ulloa. 2013. *Amazonía ecuatoriana bajo presión*. Quito: Ecociencia.
- Madrid, Emilio, y Natalia Camacho. 2003. *Negociación y toma de decisiones para comunidades mineras de Potosí*. La Paz: CEPROMIN.
- Maiguashca, Juan. 1983. “La cuestión regional en la historia ecuatoriana (1830-1972)”. En *Nueva historia del Ecuador*, editado por Enrique Ayala Mora, 175-226. Quito: Grijalbo.
- Malloy, James. 1970. *El MNR boliviano: estudio de un movimiento popular nacionalista en América Latina*. Pittsburgh: University of Pittsburgh.
- 1989. *Bolivia, la revolución inconclusa*. La Paz: CERES.
- Mann, Michael. 1997. *Las fuentes del poder social*. T. 2. Madrid: Alianza Editorial.
- 2004a. “El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados”. *Relaciones internacionales*, 5: 1-43. <https://bit.ly/3zXMNhi>

- Mann, Michael. 2004b. "La crisis del Estado-nación en América Latina". *Desarrollo Económico* 44 (174): 179-198.
<http://www.jstor.org/stable/3456035>
- Mansilla, Hugo Celso Felipe. 1994. *La empresa privada y el proceso de democratización*. La Paz: Fundación Milenio.
- Mayorga, René. 1991. "Empate histórico y debilidad constructiva: la crisis del proceso de democratización" (1978-1990). En *¿De la anomia política al orden democrático?*, compilado por René Mayorga, 19-56: La Paz. Cebem.
- Mayorga Ugarte, Fernando. 1985. *El discurso del nacionalismo revolucionario*. Cochabamba: CIDRE.
- 2009. *Antinomias, el azaroso camino de la reforma política*. Cochabamba: CESU / UMSS.
- 2011. *Dilemas, ensayos sobre democracia intercultural y Estado plurinacional*. La Paz: CESU / UMSS / Plural.
- Mazzuca, Sebastián. 2021. *Latecomer State Formation. Political Geography and Capacity Failure in Latin America*. New Haven: Yale University Press.
- Mendieta, Wilson. 1988. *Potosí patrimonio de la humanidad*. Potosí: El Siglo.
- Mesa, Carlos. 1997. "Bolivia. Frente a un nuevo Estado". *Revista Nueva sociedad*: 6-15. <https://bit.ly/2YrS7eI>
- Michard, Jocelyn. 2008. *Cooperativas mineras en Bolivia: Formas de organización, producción y comercialización*. La Paz: Centro de Documentación e Información Bolivia / CEDIB.
- Migdal, Joel. 2008. "Estudiar el Estado". *Revista Académica de Relaciones Internacionales*, 8: 1-41.
- 2011. *Estados débiles, Estados fuertes*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Ministerio de Comunicación. 2015. "Bolivia digna y soberana".
<https://bit.ly/3xPngFd>
- Ministerio de Minería y Metalurgia. 2016. *Dossier estadísticas del sector minero metalúrgico. 1980-2015*. La Paz: Ministerio de Minería y Metalurgia. <https://bit.ly/3gQBVDJ>
- Miranda, Carlos. 2005. "Cincuenta años de legislación petrolera en Bolivia". *TinKazos*, 1: 9-30. <https://bit.ly/3u78ABf>

- Mitre, Antonio. 1981. *Los patriarcas de la plata*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Montenegro, Carlos. 1943. *Nacionalismo y coloniaje*. La Paz: Autonomía.
- Morales, Juan Antonio. 2012. *La política económica boliviana 1982-2010*. La Paz: Plural / UCB.
- Morales, Juan Antonio, y José Luis Evia. 1995. *Minería y crecimiento económico en Bolivia*. La Paz: IISEC.
- Morales, Juan Antonio, y Justo Espejo. 1994. *La minería y los hidrocarburos en Bolivia*. La Paz: Universidad Católica Boliviana.
- O'Donnell, Guillermo. 2004. "Acerca del Estado en América Latina contemporánea. Diez tesis para la discusión". PNUD / Universidad de Notre Dame. <https://bit.ly/38LqFyc>
- OEP (Órgano Electoral Plurinacional). 2021. "Atlas Electoral Plurinacional". Base de datos. <https://bit.ly/35NiXye>
- Pachano, Simón. 2006. "El peso de lo institucional: auge y caída del modelo boliviano". *América Latina Hoy*, 43: 15-30. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30804301>
- Paredes, Maritza. 2014. "La dependencia de extractivos en Bolivia y la persistencia de la baja capacidad del Estado". En *Los desafíos de la minería y el petróleo para el desarrollo, lecciones de África y Latinoamérica*, coordinado por José Carlos Orihuela, Rosemary Thorp, Stefania Battistelli, Yvan Guichaoua y Maritza Paredes, 133-174. Lima: PUCP.
- Parekh, Bhikhu. 2000. "El etnocentrismo del discurso nacionalista". En *La invención de la nación. Lecturas de la identidad de Herder a Homi Bhabha*, compilado por Álvaro Fernández Bravo, 91-120. Buenos Aires: Manantial.
- Paz Estenssoro, Víctor. 1953. *Mensaje del Presidente Constitucional de la República de Bolivia a su pueblo*. La Paz: S.I.P.I.C.
- 1956. *Mensaje del presidente de la república Dr. Víctor Paz al H. Congreso nacional*. La Paz: Presidencia de la República.
- Pentland, Joseph. 1975. *Informe sobre Bolivia*. Potosí: Banco Central de Bolivia.
- Peña, Claudia, y Alejandra Boschetti. 2008. *Desafiar el mito cambia-colla, interculturalidad, poder y resistencia en el Oriente boliviano*. La Paz: UNIR.

- Peña, Claudia, y Nelson Jordán. 2006. *Ser cruceño en octubre*. La Paz: PIEB.
- Peñaranda, Raúl. 2014. *Control remoto. De cómo el gobierno de Evo Morales creó una red de medios paraestatales y un plan para acosar a la prensa independiente*. La Paz: s/d.
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2005. *La economía más allá del gas*. La Paz: PNUD.
- 2015. *El nuevo rostro de Bolivia*. La Paz: PNUD.
- Quiroga, María Virginia, y María Florencia Pagliarone. 2014. “Populismo, Estado y movimientos sociales. Posibles articulaciones en los contextos recientes de Argentina y Bolivia”, *Colombia Internacional* 82 (septiembre-diciembre): 191-219. <https://bit.ly/3h6kOTY>
- Radcliffe, Sarah, y Sallie Westwood. 1999. *Rehaciendo la nación. Lugar, identidad y política en América Latina*. Quito: Abya-Yala.
- Radhuber, Isabella M. 2010. “Rediseñando el Estado: un análisis a partir de la política hidrocarburífera en Bolivia”. *Umbrales*, 20: 105-126. <https://bit.ly/3MW6wnK>
- Renan, Ernest. 2000. “¿Qué es una nación?”. En *La invención de la nación*, editado por Álvaro Fernández, 53-66. Buenos Aires: Manantial.
- Rivera, Silvia. 2010. *Oprimidos pero no vencidos*. La Paz: La Mirada Salvaje.
- Roca, José Luis. 1980. *Fisonomía del regionalismo boliviano*. La Paz: Los Amigos del Libro.
- Rodríguez López, Fernando, Guillermo Guzmán Prudencio, Bianca de Marchi Moyano y Diego Escalante Pacheco. 2022. *Efectos de la minería en el desarrollo económico, social y ambiental del Estado Plurinacional de Bolivia*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Rokkan, Stein, y Derek Urwin. 1982. *The Politics of Territorial Identity*. Londres: Sage.
- Romero, Salvador. 1998. *Geografía electoral de Bolivia*. La Paz: Fundemos.
- Santamaría, Daniel J. 1973. “Potosí entre la plata y el estaño”. *Revista Geográfica*, 79: 71-115. <http://www.jstor.org/stable/41888508>
- Salman, Tom. 2013. “El Estado, los movimientos sociales y el ciudadano de a pie”. *América Latina Hoy*, 65: 141-160. <https://doi.org/10.14201/alh201365141160>
- Sandoval, Isaac. 2003. *Historia de Santa Cruz*. Santa Cruz: Sirena.

- Saracho, Julio. 1947. *Guía de Potosí, información sintética del comercio, banca e industria*. Oruro: Noticias S.A.
- Schavelzon, Salvador. 2012. *El nacimiento del Estado plurinacional de Bolivia, etnografía de una Asamblea Constituyente*. La Paz: CLACSO.
- 2015. *Plurinacionalidad y Vivir Bien/Buen Vivir Dos conceptos leídos desde Bolivia y Ecuador post-constituyentes*. Quito: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Schilling-Vacaflor, Almut. 2008. “Identidades indígenas y demandas político-jurídicas de la CSUTCB y el CONAMAQ en la Constituyente boliviana”. *Tinkazos* 11 (23/24): 149-170.
- Schwarz, Vivian, 2006. “¿Por qué confiamos en las instituciones? El caso boliviano”. En *La cultura política de los bolivianos: Aproximaciones cuantitativas*, editado por Mitchell A. Seligson y Daniel Moreno, 17-42. Cochabamba: LAPOP.
- Sivak, Martín. 2007. *Santa Cruz: una tesis*. La Paz: Plural.
- Skocpol, Theda. 1995. “El Estado regresa al primer plano: Estrategias de análisis en la investigación actual”. En *Instituciones Políticas y Sociedad. Lecturas Introductorias*, editado por Romeo Grompone, 91-130. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Smith, Anthony. 2004. *Nacionalismo, teoría, ideología, historia*. Madrid: Alianza Editorial.
- Soruco, Ximena. 2011. *La ciudad de los cholos*. Lima: Institutito Francés de Estudios Andinos / Programa de Investigación Estratégica en Bolivia.
- Soruco, Ximena, Wilfredo Plata y Gustavo Medeiros. 2008. *Los barones del oriente. El poder en Santa Cruz, ayer y hoy*. Santa Cruz: Fundación Tierra.
- Svampa, Maristella. 2011. “Minería y neoextractivismo latinoamericano”. Documento de trabajo. <https://bit.ly/3xTV8kb>
- Tapia, Luis. 2002. *La condición multisocietal. Multiculturalidad, pluralismo, modernidad*. La Paz: Muela del Diablo.
- 2011. *El Estado de derecho como tiranía*. La Paz: CIDES / UMSA.
- Torcal, Mariano, y Scott Mainwaring. 2009. “El conflicto democracia/ autoritarismo y sus bases sociales en Chile, 1973-1995: un ejemplo de redefinición política de un *cleavage*”. *Reis* 1 (103): 51-82. https://reis.cis.es//REIS/PDF/REIS_103_041167997229504.pdf
- Torrico Terán, Mario. 2006. “¿Qué ocurrió realmente en Bolivia?”. *Perfiles latinoamericanos* 13 (28): 231-261. <https://bit.ly/3wk6Bfw>

- UDAPE (Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas). 2006. *Informe económico y social. Primer semestre 2006 y perspectivas*. La Paz: UDAPE.
- Ugglá, Fredrik. 2009. “Bolivia: Un Año de Vivir Peligrosamente”. *Revista de Ciencia Política* 29 (2): 247-273. <https://bit.ly/3z1ASBe>
- Varela, Consuelo. 2000. “La Villa Imperial de Potosí. La Babilonia Americana”. *Revista del CSIC*, 133-148.
- Vergara, Alberto. 2015. *La danza hostil. Poderes subnacionales y Estado central en Bolivia y Perú (1952-2012)*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Viaña, José Enrique. (1948) 2016. *Cuando vibraba la entraña de plata: crónica novelada del siglo XVII*. La Paz: CIS.
- Weisbrot, Mark, Rebecca Ray y Jake Johnston. 2010. “Bolivia: La economía bajo el gobierno de Morales”. *Ensayos de Economía*, 36: 69-96. <https://bit.ly/2SpXmZD>
- Whitehead, Laurence. 1973. “Poder nacional y poder local, el caso de Santa Cruz de la Sierra”. Fotocopia, documento inédito.
- Zagalsky, Paula. 2017. “Trabajo indígena, conflictos y justicia en la Villa Imperial de Potosí y su Cerro Rico, una aproximación. Virreinato del Perú, siglos XVI-XVII”. *Historia y Justicia*, 9: 11-45. <https://journals.openedition.org/rhj/1122>
- Zavaleta, René. 1963. “Soberanía significa industria pesada”. En *Estado nacional o pueblo de pastores*, 7-26. La Paz: Burilo.
- 2011. “Bolivia, el desarrollo de la conciencia nacional”. En *Obras completas*. T.1., 121-210. La Paz: Plural Editores.
- Zegada, María. 2007. *En nombre de las autonomías, crisis estatal y procesos discursivos en Bolivia*. La Paz: PIEB.
- Zondag, Cornelius. 1968. *La economía boliviana, (1952-1964). La revolución y sus consecuencias*. La Paz: Los Amigos del Libro.
- Zuazo, Moira. 2009. “¿Cómo nació el MAS? La ruralización de la política en Bolivia”. La Paz: Friedrich Ebert Stiftung.
- 2016. *La reconfiguración del Estado en Bolivia*. La Paz: Friedrich Ebert Stiftung.



Desde Potosí, en Bolivia, han fluido las riquezas mineras hacia la metrópoli –durante la Colonia– y hacia el Estado central –en la República– sin que esta tierra pródiga logre salir de la marginalidad. Franz Flores se pregunta por qué el departamento de Potosí no ha logrado constituir un proyecto regional fuerte, como sí ha sucedido en Santa Cruz.

El autor propone una reflexión sobre el carácter del Estado y las relaciones centro-periferia en tres momentos entre 1952 y 2015: el ciclo nacionalista de mediados del siglo XX; el período neoliberal entre 1985 y 2006, y los sucesivos gobiernos de Evo Morales. Flores repasa las largas y sufridas manifestaciones de la población en demanda de asignaciones comparables con el aporte de Potosí a la economía boliviana. El corolario es siempre el mismo, nos dice el autor: promesas que se diluyen en el tiempo.

Seis décadas en busca de mejores días para Potosí terminan en un escenario con un nuevo protagonista: los cooperativistas, mineros de origen indígena cuya labor extractiva por cuenta propia se remonta a la Colonia. ¿Por qué este poderoso actor no pudo liderar las demandas potosinas y muestra tantas contradicciones a la hora de enarbolar la bandera potosina ante el gobierno de Morales? Aquí se encuentra una clave mediante la cual Franz Flores explica la debilidad del proyecto regional.

Esta obra, rica en estampas sobre Bolivia, es de especial relevancia en el ámbito de los estudios políticos para quienes analizan las regiones y los regionalismos.